CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

Sesión del Pleno

celebrada el miércoles, 23 de octubre de 2002

ORDEN DEL DÍA:

Primero

Preguntas:

- De D. FRANCISCO FUENTES GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos por los que la Norma de calidad para el jamón ibérico, paleta ibérica y caña de lomo ibérico elaborados en España, de 5 octubre de 2001, no tiene aplicación total y efectiva hasta abril del año 2003. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000937).
- De D. ÁNGEL ANTONIO FRANCO GUTIEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la grave situación de Mercalicante, participada en el 48 por ciento por la empresa Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A. (MERCASA). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000938).
- De D. VICENTE LILIANO FERRER ROSELLÓ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno con respecto a la norma definitiva firmada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, que autoriza de nuevo las importaciones de clementinas procedentes de España. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000944).

- De D. FERNANDO CARLOS RODRÍGUEZ PÉREZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno ante la apertura de la destilación de alcohol de uso de boca para la campaña 2002-2003. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000947).
- De D. JOSÉ IGNACIO PÉREZ SÁENZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el Gobierno ha formalizado en el presente año, con posterioridad al proceso de traspaso a las Comunidades Autónomas de las funciones del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), algún convenio en el que se contempla la financiación de inversiones hospitalarias. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000933).
- De D. FRANCISCO BELLA GALÁN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Ministerio de Medio Ambiente que la forma de hacer participar a los agentes sociales en las políticas medioambientales se resuelve con la última modificación del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000915).
- De D. FRANCISCO JAVIER SANZ CARRAMIÑANA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha prevista por el Gobierno para poner en marcha la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000916).
- De D. JOAN SABATÉ BORRÀS, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre el caudal medio en las estaciones de aforo de Flix y Tortosa, en la provincia de Tarragona, durante los meses de enero a septiembre de 2002. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000930).
- De D. JOAN LERMA BLASCO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones que el Ministerio de Medio Ambiente ha llevado a cabo del Plan Global frente a inundaciones en la Ribera del Júcar. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000935).
- De D. DIEGO MIGUEL ASENSIO MARTÍNEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha prevista por el Gobierno para iniciar las obras en el pantano de Cuevas del Almanzora (Almería), para que se puedan celebrar las pruebas correspondientes a la subselección de Cuevas del Almanzora de los XV Juegos del Mediterráneo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000936).
- De D. ÓSCAR LLANOS VERA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las principales líneas de actuación que contempla el programa de Protección y mejora del medio natural. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000943).
- De D. JAVIER SOPEÑA VELASCO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las líneas del Plan Forestal Español. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000945).
- De D. RICARDO CLEMENTE DOÑATE CATALÁN, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación de las actuaciones de saneamiento y depuración de las aguas, recogidas en el Anexo de Inversiones del Plan Hidrológico Nacional (PHN). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000946).
- De Dña MARÍA ANTONIA MARTÍNEZ GARCÍA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la correcta aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000932).
- De D. FRANCISCO GRANERO GRANADOS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actuaciones que está desarrollando el Ministerio de Justicia para mejorar la atención especializada en las oficinas de asistencia a las víctimas de delitos violentos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000942).
- De D. ALONSO ARROYO HODGSON, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las actuaciones del Gobierno con respecto a la gestión coordinada e integrada de las fronteras exteriores de la Unión Europea para el control de la inmigración ilegal. (Publicada en el «Boletín Oficial de

- las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000926).
- De D. FROILÁN GERMÁN RODRÍGUEZ DÍAZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las principales acciones para el año 2003 que contempla el Plan de Seguridad para el Archipiélago Canario. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000927).
 - De Dña. MARÍA DEL MAR AGÜERO RUANO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno en relación al estado actual de la implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000941).
 - De D. ARTURO GONZÁLEZ LÓPEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos del retraso en el cobro de las prestaciones y subsidios por desempleo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000913).
 - De D. JOSÉ CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la valoración del Gobierno en relación con los efectos negativos que se pueden producir en el medio rural por la aplicación, a partir del 1 de noviembre, de los nuevos criterios de regulación de las bajas en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000922).
 - De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre el seguimiento que realiza el Gobierno de los trabajos de la Convención sobre el futuro de la Unión Europea tendentes a conseguir que se avance en materia de igualdad de género. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000923).
 - De Dña. INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las actuaciones del Gobierno ante las autoridades turcas para la resolución de la situación que afecta al menor Burak Kalemci y su madre Inés Nieto. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000928).
 - De D. JORDI XUCLÀ I COSTA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre el calendario que contempla el Gobierno para la realización y finalización de las obras de construcción de la nueva sede de la biblioteca pública del Estado (BPE) en Girona. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000924).
 - De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la respuesta del Gobierno a los investigadores que se han declarado «objetores científicos» en relación a los proyectos destinados a la investigación con fines militares. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000929).
 - De D. CARLES JOSEP BONET I REVÉS, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las medidas que adoptará el Gobierno para evitar la repetición del colapso aéreo provocado por la inundación del centro de control de Gavà (Barcelona), ocurrido el pasado día 9 de octubre. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000931).
 - De D. LUIS ÁNGEL LAGO LAGE, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición que el Gobierno ha transmitido al Presidente de la Junta de Galicia, en relación con el acuerdo adoptado por su Parlamento sobre el desarrollo del Estado de las Autonomías y el reforzamiento del autogobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000934).
 - De D. MANUEL CÁMARA FERNÁNDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la aplicación de los planes directores de los aeropuertos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y, especialmente, en el caso del aeropuerto de Ibiza. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 680/000939).

Segundo

Interpelaciones:

- De D. FRANCISCO FUENTES GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 670/000160).
- De D. JOSÉ ANTONIO ALONSO GARCÍA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia de seguridad en el trabajo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 670/000161).
- De D. VICTORIANO RÍOS PÉREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre los planes del Gobierno para localizar y detener a los extranjeros que, tras caducar su permiso de estancia en el país, prolongan su permanencia en él, así como sobre las medidas previstas para controlar las situaciones irregulares derivadas de la inmigración. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 517, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente 670/000159).

Tercero

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

- De la Comisión de Sanidad y Consumo en relación con la Proposición de Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III A, número 11, de fecha 21 de octubre de 2002). (Número de expediente S. 622/000010). (Número de expediente C. D. 124/000002).

Cuarto

Elección de miembros del Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE):

- Elección de un miembro del Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE). (Número de expediente 729/000001).

Quinto

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados (Continuación):

- De la Comisión de Economía, Comercio y Turismo en relación con el Proyecto de Ley de medidas de reforma del sistema financiero. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 86, de fecha 11 de octubre de 2002). (Número de expediente S. 621/000086). (Número de expediente C. D. 121/000069).
- De la Comisión de Infraestructuras en relación con la Proposición de Ley de creación del Colegio de Prácticos de Puerto. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 7, de fecha 4 de octubre de 2002). (Número de expediente S. 624/000006). (Número de expediente C. D. 122/000190).

SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.

PREGUNTAS **Página**
6354

De D. FRANCISCO FUENTES GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos por los que la Norma de calidad para el jamón ibérico, paleta ibérica y caña de lomo ibérico

elaborados en España, de 5 octubre de 2001, no tiene aplicación total y efectiva hasta abril del año 2003 **Página**
6354

El señor Fuentes Gallardo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Fuente Gallardo. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).

De D. ÁNGEL ANTONIO FRANCO GUTIEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el informe de la Comisión de

	Página
lista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la grave situación de Mercalicante, participada en el 48 por ciento por la empresa Mercados Centrales de Abastecimiento, S. A. (MERCASA)	6355
<i>El señor Franco Gutiez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Franco Gutiez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).</i>	
	Página
De D. VICENTE LILIANO FERRER ROSELLÓ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno con respecto a la norma definitiva firmada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, que autoriza de nuevo las importaciones de clementinas procedentes de España	6357
<i>El señor Ferrer Roselló formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).</i>	
	Página
De D. FERNANDO CARLOS RODRÍGUEZ PÉREZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno ante la apertura de la destilación de alcohol de uso de boca para la campaña 2002-2003	6358
<i>El señor Rodríguez Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).</i>	
	Página
De D. JOSÉ IGNACIO PÉREZ SÁENZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el Gobierno ha formalizado en el presente año, con posterioridad al proceso de traspaso a las Comunidades Autónomas de las funciones del Instituto Nacional de la Salud (INSA-LUD), algún convenio en el que se contempla la financiación de inversiones hospitalarias	6359
<i>El señor Pérez Sáenz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Pastor Julián). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Pérez Sáenz. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Pastor Julián).</i>	

	Página
De D. FRANCISCO BELLA GALÁN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Ministerio de Medio Ambiente que la forma de hacer participar a los agentes sociales en las políticas medioambientales se resuelve con la última modificación del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA)	6360
<i>El señor Bella Galán formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Bella Galán. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).</i>	
	Página
De D. FRANCISCO JAVIER SANZ CARRAMIÑANA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha prevista por el Gobierno para poner en marcha la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible	6361
<i>El señor Sanz Carramiñana formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou) En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Sanz Carramiñana. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).</i>	
	Página
De D. JOAN SABATÉ BORRÀS, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre el caudal medio en las estaciones de aforo de Flix y Tortosa, en la provincia de Tarragona, durante los meses de enero a septiembre de 2002	6363
<i>El señor Sabaté Borràs formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou) En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Sabaté Borràs. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).</i>	
	Página
De D. JOAN LERMA BLASCO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones que el Ministerio de Medio Ambiente ha llevado a cabo del Plan Global frente a inundaciones en la Ribera del Júcar	6364
<i>El señor Lerma Blasco formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Lerma Blasco. En turno de dúp-</i>	

plica, lo hace el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).

Página

De D. DIEGO MIGUEL ASENSIO MARTÍNEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha prevista por el Gobierno para iniciar las obras en el pantano de Cuevas del Almanzora (Almería), para que se puedan celebrar las pruebas correspondientes a la subse de Cuevas del Almanzora de los XV Juegos del Mediterráneo

6365

El señor Asensio Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Asensio Martínez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).

Página

De D. ÓSCAR LLANOS VERA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las principales líneas de actuación que contempla el programa de Protección y mejora del medio natural

6366

El señor Llanos Vera formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).

Página

De D. JAVIER SOPEÑA VELASCO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las líneas del Plan Forestal Español

6367

El señor Sopena Velasco formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).

Página

De D. RICARDO CLEMENTE DOÑATE CATALÁN, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación de las actuaciones de saneamiento y depuración de las aguas, recogidas en el Anexo de Inversiones del Plan Hidrológico Nacional (PHN)

6368

El señor Doñate Catalán formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).

Página

De Dña MARÍA ANTONIA MARTÍNEZ GARCÍA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que va a adop-

Página

tar el Gobierno para garantizar la correcta aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores

6369

La señora Martínez García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Justicia (Michavila Núñez). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Martínez García. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia (Michavila Núñez).

Página

De D. FRANCISCO GRANERO GRANADOS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actuaciones que está desarrollando el Ministerio de Justicia para mejorar la atención especializada en las oficinas de asistencia a las víctimas de delitos violentos

6370

El señor Granero Granados formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Justicia (Michavila Núñez).

Página

De D. ALONSO ARROYO HODGSON, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las actuaciones del Gobierno con respecto a la gestión coordinada e integrada de las fronteras exteriores de la Unión Europea para el control de la inmigración ilegal

6371

El señor Arroyo Hodgson formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arroyo Hodgson. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua).

Página

De D. FROILÁN GERMÁN RODRÍGUEZ DÍAZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las principales acciones para el año 2003 que contempla el Plan de Seguridad para el Archipiélago Canario

6373

El señor Rodríguez Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rodríguez Díaz. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua).

Página

De Dña. MARÍA DEL MAR AGÜERO RUANO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración

Página

del Gobierno en relación al estado actual de la implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) 6374

La señora Agüero Ruano formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua).

Página

De D. ARTURO GONZÁLEZ LÓPEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos del retraso en el cobro de las prestaciones y subsidios por desempleo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León 6375

El señor González López formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Zaplana Hernández-Soro). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor González López. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Zaplana Hernández-Soro).

Página

De D. JOSÉ CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la valoración del Gobierno en relación con los efectos negativos que se pueden producir en el medio rural por la aplicación, a partir del 1 de noviembre, de los nuevos criterios de regulación de las bajas en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) 6376

El señor Cabrero Palomares formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Zaplana Hernández-Soro). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cabrero Palomares. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Zaplana Hernández-Soro).

Página

De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre el seguimiento que realiza el Gobierno de los trabajos de la Convención sobre el futuro de la Unión Europea tendentes a conseguir que se avance en materia de igualdad de género 6378

El señor Varela i Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Zaplana Hernández-Soro). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Varela i Serra.

Página

De Dña. INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las actuaciones del Gobierno ante las autoridades turcas para la resolución de la situación que afecta al menor Burak Kalemci y su madre Inés Nieto 6379

La señora Loroño Ormaechea formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Zaplana Hernández-Soro). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Loroño Ormaechea.

De D. JORDI XUCLÀ I COSTA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre el calendario que contempla el Gobierno para la realización y finalización de las obras de construcción de la nueva sede de la biblioteca pública del Estado (BPE) en Girona.

Esta pregunta ha sido aplazada.

De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la respuesta del Gobierno a los investigadores que se han declarado «objetores científicos» en relación a los proyectos destinados a la investigación con fines militares.

Esta pregunta ha sido aplazada.

De D. CARLES JOSEP BONET I REVÉS, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las medidas que adoptará el Gobierno para evitar la repetición del colapso aéreo provocado por la inundación del centro de control de Gavà (Barcelona), ocurrido el pasado día 9 de octubre.

Esta pregunta ha sido aplazada.

De D. LUIS ÁNGEL LAGO LAGE, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición que el Gobierno ha transmitido al Presidente de la Junta de Galicia, en relación con el acuerdo adoptado por su Parlamento sobre el desarrollo del Estado de las Autonomías y el reforzamiento del autogobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Esta pregunta ha sido aplazada.

De D. MANUEL CÁMARA FERNÁNDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la aplicación de los planes directores de los aeropuertos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y, especialmente, en el caso del aeropuerto de Ibiza.

Esta pregunta ha sido aplazada.

INTERPELACIONES Página
6380

De D. FRANCISCO FUENTES GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 6380

El señor Fuentes Gallardo realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Zaplana Hernández-Soro). Vuelve a intervenir el señor interpellante. Cierra el debate el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Zaplana Hernández-Soro).

De D. JOSÉ ANTONIO ALONSO GARCÍA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia de seguridad en el trabajo 6384

El señor Alonso García realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Zaplana Hernández-Soro). Vuelve a intervenir el señor interpellante. Cierra el debate el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Zaplana Hernández-Soro).

De D. VICTORIANO RÍOS PÉREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre los planes del Gobierno para localizar y detener a los extranjeros que, tras caducar su permiso de estancia en el país, prolongan su permanencia en él, así como sobre las medidas previstas para controlar las situaciones irregulares derivadas de la inmigración ... 6391

El señor Rodríguez Díaz realiza la interpelación en nombre del señor Ríos Pérez. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua). Vuelve a intervenir el señor Rodríguez Díaz, en nombre del interpellante. Cierra el debate el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua).

Se suspende la sesión a las catorce horas.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.

Página

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 6397

Página

De la Comisión de Sanidad y Consumo en relación con la Proposición de Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica 6397

La señora López Garnica, Presidenta de la Comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate del articulado.

La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 12 a 15 y retira la número 16. El señor Quintana González, el Grupo Mixto, defiende la enmienda número 27. La señora Loroño Ormaechea defiende las enmiendas números 2, 3, 8 y 9, retirando las números 5, 6, 7, 10 y 11, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Espasa i Oliver defiende las enmiendas números 18, 20, 25 y 26, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Cardona i Vila defiende las enmiendas números 30, 31, 34, 36, 37 y 41, retirando la número 43, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor López Carvajal defiende la enmienda número 29, del Grupo Socialista. La señora Gámez Mata consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto; el señor Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; la señora Loroño Ormaechea, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y los señores Espasa i Oliver, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; López Carvajal, por el Grupo Socialista, y Antón Rueda, por el Grupo Popular.

Se rechazan las enmiendas números 12 a 15, del Grupo Mixto, señora De Boneta y Piedra, por 19 votos a favor, 195 en contra y 3 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 27, del Grupo Mixto, señor Quintana González, por 87 votos a favor y 130 en contra.

Se rechaza la enmienda número 3, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 26 votos a favor, 130 en contra y 61 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 2, 8 y 9, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 30 votos a favor, 131 en contra y 56 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 25, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 87 votos a favor, 129 en contra y 1 abstención.

Se rechaza la enmienda número 26, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 84 votos a favor, 130 en contra y 3 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 30, 31 y 36, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 27 votos a favor, 130 en contra y 59 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 41, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 86 votos a favor, 130 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 34 y 37, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 31 votos a favor, 131 en contra y 56 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 29, del Grupo Socialista, por 86 votos a favor, 131 en contra y 1 abstención.

Se aprueba la disposición adicional primera del dictamen por 135 votos a favor, 27 en contra y 56 abstenciones.

Se aprueba el resto del dictamen por 216 votos a favor y 2 abstenciones.

El señor Presidente anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.

Página

ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA (RTVE)..... 6413

Página

Elección de un miembro del Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) 6413

Tras la votación por papeletas, queda elegido miembro del Consejo de Administración del Ente Público RTVE don Jorge Bethencourt González, con 213 votos, habiéndose producido 2 votos nulos.

Página

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) 6413

Página

De la Comisión de Economía, Comercio y Turismo en relación con el Proyecto de

Página

Ley de medidas de reforma del sistema financiero 6413

El señor Seguí Díaz, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 1. La señora Aroz Ibáñez defiende la propuesta de veto número 2, así como las enmiendas números 74 a 92, 94 a 123 y 125 a 129, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Bru Parrá defiende la propuesta de veto número 3, así como las enmiendas del Grupo Socialista números 130 a 197 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la Disposición Transitoria Undécima, así como por las enmiendas transaccionales en Comisión que se apoyaban en las números 225, 228, 229, 251, 253, 264 y 279 del Grupo Popular. El señor Sánchez Sánchez-Seco consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; la señora Morales Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; el señor Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; la señora Aroz Ibáñez, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, y los señores Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bru Parrá, por el Grupo Socialista, y Sánchez Sánchez-Seco, por el Grupo Popular.

Se procede a votar.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Mixto, señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, por 62 votos a favor, 135 en contra y 7 abstenciones.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 61 votos a favor, 136 en contra y 8 abstenciones.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo Socialista, por 61 votos a favor, 137 en contra y 8 abstenciones.

Comienza el debate del articulado.

El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas números 4 a 8, 10 a 12, 14 a 18, 20 a 26, 28 a 31, 33 a 40 y 42 a 48, retirando las números 9, 13, 19, 27, 32, 41, 49 y 50. La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas números 66 a 73, del señor Quintana González, del mismo grupo parlamentario, y defiende las números 1 a 3. La señora Morales Rodríguez defiende las enmiendas números 51 a 56, el Grupo de Se-

nadores de Coalición Canaria. El señor Albistur Marin defiende las enmiendas números 57 a 65, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 198 a 204, 206 y 208 a 218, retirando la número 207, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Sánchez Sánchez-Seco consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Morales Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, y los señores Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Sánchez-Seco, por el Grupo Popular.

Se procede a votar.

Se rechaza la enmienda número 12, del Grupo Mixto, señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, por 10 votos a favor, 184 en contra y 10 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 14, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 37, 46 y 48, del Grupo Mixto, señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, por 9 votos a favor, 127 en contra y 68 abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 67 votos a favor, 126 en contra y 10 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 1 a 3, del Grupo Mixto, señoras De Boneta y Piedra, por 9 votos a favor, 124 en contra y 70 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 66 a 73, del Grupo Mixto, señor Quintana González, por 69 votos a favor, 125 en contra y 10 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 57, 59 a 63 y 65, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 78 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención.

Se rechaza la enmienda número 64, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 79 votos a favor y 124 en contra.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 79 votos a favor y 125 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 74 a 92, 94 a 123 y 125 a 129, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 69 votos a favor, 125 en contra y 10 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 51 a 56, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 12 votos a favor, 122 en contra y 66 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 198 a 200, 202 a 204, 208 a 210, 216 y 218, del Grupo Catalán en el Senado

de Convergència i Unió, por 79 votos a favor y 125 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 206, 211, 212 y 214, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 15 votos a favor, 185 en contra y 4 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 215 y 217, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 15 votos a favor, 128 en contra y 61 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 130 a 197, del Grupo Socialista, por 69 votos a favor, 125 en contra y 10 abstenciones.

Se rechaza la enmienda del Grupo Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la Disposición Transitoria Undécima, así como por las enmiendas transaccionales en Comisión que se apoyaban en las números 225, 228, 229, 251, 253, 264 y 279 del Grupo Popular, por 68 votos a favor, 125 en contra y 11 abstenciones.

Se aprueba una propuesta de modificación del dictamen relativa al artículo 11 de la Ley de Auditoría de Cuentas, firmada por todos los grupos parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.

Se aprueba una propuesta de modificación del dictamen, que se apoya en la enmienda número 201, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 203 votos a favor y 1 abstención.

Se aprueba una propuesta de modificación del dictamen, que se apoya en la enmienda número 213, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 200 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

Se aprueba el texto del dictamen, con las modificaciones introducidas, por 135 votos a favor y 69 en contra.

El señor Presidente anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.

Página

De la Comisión de Infraestructuras en relación con la Proposición de Ley de creación del Colegio de Prácticos de Puerto 6440

Se inicia el debate del articulado.

El señor Ayllón Oliva defiende las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Socialista. El señor Martínez Oblanca consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarria Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vas-

cos; Bonet i Revés, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Ayllón Oliva, por el Grupo Socialista, y Martínez Oblanca, por el Grupo Popular.

Se procede a votar.

Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Socialista, por 67 votos a favor y 126 en contra

Se aprueba el texto del dictamen por 191 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

El señor Presidente anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.

Se suspende la sesión a las veintidós horas y cuarenta minutos.

Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

PREGUNTAS:

— DE DON FRANCISCO FUENTES GALLARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE LA NORMA DE CALIDAD PARA EL JAMÓN IBÉRICO, PALETA IBÉRICA Y CAÑA DE LOMO IBÉRICO ELABORADOS EN ESPAÑA, DE 5 DE OCTUBRE DE 2001, NO TIENE APLICACIÓN TOTAL Y EFECTIVA HASTA ABRIL DEL AÑO 2003 (680/000937).

El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día. Pregunta del excelentísimo señor don Francisco Fuentes Gallardo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos por los que la Norma de calidad para el jamón ibérico, paleta ibérica y caña de lomo ibérico no tiene aplicación total y efectiva hasta abril del año 2003.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el senador Fuentes Gallardo.

El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor Presidente.

Señor ministro, en octubre de 2001 se publica un real decreto por el que se pretende clarificar y ordenar la producción y el mercado de los productos del cerdo ibérico, y en estos objetivos estamos de acuerdo. Este real decreto de octubre del año pasado ha entrado en vigor el presente mes de octubre de 2002, es decir, un año más tarde. Además su Ministerio tiene un plazo de seis meses, hasta abril de 2003, para desarrollarlo mediante una orden que establezca los requisitos para la condición de ibéricos puros; y todavía más, establece un plazo hasta abril de 2004 para que aquellas reproductoras que no sean de raza ibérica pura sean eliminadas. Desde nuestro punto de vista son demasiados plazos, señor Ministro, y por eso le formulo la pregunta que figura en el orden del día.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Muchas gracias, señor Presidente, y mi felicitación por sus nuevas responsabilidades.

Señorías, el pasado 15 de octubre entró en vigor el Real Decreto 1083/2001 y su Anexo, que es donde se recoge la norma de calidad para el jamón ibérico, la paleta ibérica y la caña de lomo ibérico elaborados en España. Como conoce usted, se aprobó el pasado 5 de octubre de 2001 y en su disposición final tercera se establecía que la norma entraría en vigor al año de su publicación; pero es cierto que

la disposición transitoria primera del real decreto establece un período de adaptación, abriendo un período transitorio de 18 meses a contar desde la entrada en vigor del real decreto —por lo tanto hasta el 15 de abril de 2004—, durante el cual los animales procedentes del cruce de reproductoras que no son de raza ibérica y de machos ibéricos puros serán autorizados para el suministro de piezas con destino a la elaboración de productos ibéricos.

Comprendo que su señoría —y yo puedo compartir esa aspiración— querría que se impusiera una norma de calidad de la noche a la mañana, pero el hecho de establecer un período transitorio como el referido es práctica habitual en normas sobre esta materia y no supone retraso de su aplicación efectiva, sino que da solución al problema de los animales nacidos antes de la entrada en vigor y, por lo tanto, para los productos resultantes de ellos. Lógicamente, no se podría exigir el cumplimiento de la norma con carácter retroactivo ya que ello supondría sacar de la circulación una enorme cantidad de animales e impediríamos comercializar productos que ya estaban en secadero o en la distribución, generando un problema de enorme magnitud.

Yo creo que es preferible no crear situaciones traumáticas y de imposible cumplimiento al pasar de una situación de falta absoluta de regulación —porque el problema que había en esta área era que no había ninguna regulación y sí intereses comerciales muy contradictorios— a la actual, en la que tendremos unas reglas precisas que van a garantizar la leal competencia en el mercado.

Es cierto que se ha establecido una fecha lo que supone que, por lo menos, tendremos una fecha clara a partir de la cual podremos proteger algo tan fundamental como los productos del cerdo ibérico.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Para turno de réplica, tiene la palabra el senador Fuentes Gallardo.

El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿qué entiende un ciudadano o un consumidor por productos de cerdo ibérico? Entiende que son productos procedentes del cruce de hembras ibéricas puras con sementales ibéricos puros.

Como usted ha señalado, han establecido un plazo hasta 2004, pero los jamones tienen la mala costumbre de tardar dos años en curarse; es decir, que hasta el año 2006 se van a vender jamones ibéricos sin ser ibéricos puros, y ese plazo es ya mucho más preocupante.

En esta situación hay ganadores y perdedores, hay gente que se ve favorecida y otros que salen perjudicados. ¿Quiénes se van a ver favorecidos? Se van a beneficiar los grandes industriales del cerdo blanco o del cerdo cruzado, algunas comunidades autónomas que van a hacerse un hueco en el mercado con el nombre de ibérico, sin serlo realmente, e incluso algunos criados de forma intensiva, como usted sabe perfectamente.

¿Quiénes van a resultar perjudicados? Los ganaderos e industriales que se dedican exclusivamente al ibérico puro,

porque se van a encontrar con que hasta el año 2006 sus productos van a convivir, bajo la denominación de ibérico, con productos que realmente no lo son; perderán las comunidades autónomas de Castilla y León, Extremadura y Andalucía, y también perderán los consumidores, que van a adquirir productos pensando que son ibéricos puros sin serlo.

Es verdad que es una problemática complicada. Nunca he defendido ni defenderé que, de la noche a la mañana, esto se ponga en vigor; solamente le pido que reflexione sobre los plazos y dialogue con las comunidades autónomas más afectadas por este problema.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor senador.

En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Agricultura.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Gracias, señor Presidente.

Nosotros hemos dialogado con todas las comunidades autónomas, singularmente con las autoridades responsables del comercio, que van a ser las que tengan que vigilar todo lo relativo a la comercialización.

En cualquier caso, le quiero decir que en este país no había ninguna norma y los consumidores podían pensar lo que quisieran, pero se etiquetaba como ibérico lo que no lo era; sin embargo, a partir del momento en que este Gobierno ha tomado las riendas, vamos a tener reglas claras, con la colaboración de todas las comunidades autónomas de cualquier signo político. Esto es lo importante y también que tengamos de límite hasta el 15 de abril de 2004 para los reproductores, así como que para los productos que se van a comercializar establezcamos una normativa muy estricta, que fije los límites de comercialización de «stocks» que ya están en curación en el 15 de abril de 2004 para los lomos y, para los jamones y paletas, hasta el 16 de octubre de 2005, teniendo en cuenta todos los procesos de curación y todos los procesos de comercialización. Sin embargo, una vez pasadas esas dos fechas claves, 15 de abril de 2004 y 16 de octubre...

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

— DE DON ÁNGEL ANTONIO FRANCO GUTIEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LA GRAVE SITUACIÓN DE MERCALICANTE, PARTICIPADA EN EL 48 POR CIENTO POR LA EMPRESA MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO, S.A. (MERCASA) (680/000938).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Ángel Antonio Franco Gutiez, del Grupo Par-

lamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la grave situación de Mercalicante.

Tiene la palabra el senador Franco Gutiez.

El señor FRANCO GUTIEZ: Mantengo la pregunta en los mismos términos.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Gracias, señor Presidente.

El Gobierno va a tomar todas las medidas que sean necesarias a través de Mercasa, para garantizar el normal funcionamiento de Mercalicante.

El señor PRESIDENTE: En turno de réplica, tiene la palabra el senador Franco Gutiez.

El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero ilustrar a la Cámara sobre qué es lo que significa esta pregunta, porque detrás de la misma se esconde el mayor escándalo financiero de la historia de la ciudad de Alicante.

Mercasa participa en esta empresa con un 48 por ciento y, el Ayuntamiento de Alicante, con el 51 por ciento. ¿Cuál es la función de Mercasa? Sencillamente, la consecución de precios más baratos en la distribución mayorista de frutas, hortalizas, pescados y carnes. ¿Qué pretendían los señores que en este momento gobiernan la empresa? La modernización y dinamización de la misma. ¿Qué decisiones toman de forma inmediata? Cesar al gerente en el año 1998, y vaciar de todo contenido al Consejo de Administración, creando una comisión ejecutiva compuesta exclusivamente por miembros del Partido Popular y de Mercasa. ¿Cómo comienzan a modernizar esta empresa? Ponen en funcionamiento una nave de frigoconservación, así como varias naves para el almacenamiento de productos congelados, a petición de la empresa Logística Alicantina de Frío. Esto lo presupuestan en 5.800.000 euros y el coste final sobrepasa los siete millones de euros. Es decir, un 30 por ciento más; tomen nota, la organizadora Necso.

El señor Ministro inaugura estas naves en diciembre del año 2000, y no se alquilan a LAF, sino a tres empresas interpuestas Intermac, Intercon e Inver, por 20 millones de pesetas. Estas tres empresas interpuestas se las alquilan a LAF por 58 millones, embolsándose, por consiguiente, 38 millones de pesetas. Como se tarda en hacer la nave, a estas empresas se les indemniza con 43 millones de pesetas. Se rescata una concesión de una de ellas por 51 millones de pesetas. Total, una absoluta ruina en la nave que usted inaugura, señor Ministro, y un beneficio extra para este conjunto de clientes.

Seguimos modernizando: mercado electrónico virtual, SIME, Sistema de Interconexión del Mercado Electrónico de Materias Primas; es decir, lo que yo definiría como la bolsa de las lechugas. Se hace un contrato con la empresa SIME, se le adelantan 152 millones de pesetas y se contrata el desarrollo de todo este sistema con la misma empresa, que sigue contando con la participación intelectual. Construyeron una nave por 350 millones, en fin, otro escándalo de 600 millones de pesetas. Hay juegos en bolsa, gastos en comidas, aumentos desorbitados de gastos de personal, estafa a mayoristas, patrocinio de «rallies»: total, más de 1.000 millones de pérdidas, quiebra de la empresa, pérdidas para los ciudadanos y ganancias para algunos, que dicen que esto es un engaño, que pasaban por allí y que no tienen ninguna responsabilidad.

Yo pregunto al Ministro qué pasa con esta Comisión Ejecutiva, que ya he dicho por quién está compuesta. ¿Apoya el señor Ministro la creación de una comisión de investigación en esta operación? ¿Van a personarse ustedes en la causa para defender los intereses de los ciudadanos españoles estafados en esta situación? ¿Va a solicitar usted la dimisión de su consejero por Mercasa en la Comisión Ejecutiva y del presidente del Consejo de Administración, señor Díaz Alperi, alcalde de Alicante? ¿Apoya a la administración judicial de la empresa mientras se sustancian las responsabilidades de la Comisión Ejecutiva de dicha empresa? ¿Por qué no fue Mercasa la encargada de promocionar el mercado electrónico? ¿Van a facilitar el dinero para que responda por la presunta malversación de caudales públicos su representante en esta empresa en el Consejo de Administración? ¿Le parece bien que siempre construya la empresa Necso en Alicante y en todos los sitios? ¿Qué opina usted sobre que hubiese sido Mercasa la que hubiera impulsado el mercado electrónico de verduras; es decir, la llamada bolsa de las verduras? Es decir, señor Ministro, es un auténtico escándalo financiero, político y social.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor senador.

En turno de dúplica tiene la palabra el señor ministro de Agricultura.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Muchas gracias, señor Presidente.

No quiera usted construir un escándalo financiero con las irregularidades de un director gerente, que están ya en fase de investigación judicial. El Gobierno ya ha tomado todas las medidas en este asunto. Cuando tuvo conocimiento a través de la empresa nacional Mercasa de la situación creada en la unidad alimentaria de Mercalicante, por actuaciones presuntamente delictivas llevadas a cabo por el director gerente de la sociedad, ha hecho varias actuaciones. Ha propuesto, a través de los representantes correspondientes, a su participación accionarial del 48,3 por ciento del capital de Mercalicante, una primera ampliación de capital, que se va a proponer en la reunión del día 24 de octubre que va a celebrar la Junta

General de Accionistas de la sociedad por un valor de 1.866.105 euros. Y está prevista la segunda ampliación de capital, según evolucionen los resultados de la cuenta de explotación del período 2002, hasta un máximo de cuatro millones de euros. Y esta decisión se realiza tras examinar los estados financieros de 2001 y del intermedio a junio de 2002. Con ello el Gobierno quiere garantizar la estabilidad financiera y laboral de la sociedad y la prestación del servicio público de abastecimiento, siempre en actuación conjunta con su accionista mayoritario, el Ayuntamiento de Alicante. Nuestra primera preocupación es que los ciudadanos de Alicante tengan abastecimientos normales, que es la obligación del Gobierno.

En segundo lugar, detectadas anomalías financieras presuntamente hechas por un ciudadano, el gerente, que además no estaban reflejadas en una auditoría anual que hacía una firma habitual llamada MPC; concretamente durante el primer trimestre del año 2002 se detectaron incrementos de endeudamiento y, como consecuencia, desfases en la financiación adicional del Plan de Expansión de Mercalicante acordado en 1999. Debido a estas anomalías, Mercasa ha encargado un nuevo informe de revisión diagnóstico de la gestión de la dirección correspondiente a los años 2000, 2001 y hasta el 30 de junio de 2002 a una firma auditora nacional. Mientras tanto se detectaron hechos graves y de presunto carácter delictivo, por lo que el Consejo de Administración, primero, despidió disciplinariamente al director gerente en el Consejo de fecha 29 de julio y, además, se ha interpuesto una querrela presentada por el propio Consejo de Administración de Mercalicante no sólo contra el ex director gerente, sino contra varios representantes empresariales relacionados contractualmente con la unidad alimentaria. Presuntamente el director gerente y algunos representantes empresariales realizaron actuaciones que pudieran ser delictivas.

Dicha querrela ha sido admitida a trámite en el juzgado de instrucción número 4 de Alicante. Por otro lado, el juzgado de instrucción número 1 de la misma ciudad ha instruido un proceso sumarial tras recibir el informe de auditoría remitido por el Consejo de Administración de Mercalicante al fiscal provincial. Finalmente, dicho Consejo de Administración ha denunciado a la firma auditora que venía trabajando habitualmente para esta sociedad ante el Instituto de Censores Auditores de Cuentas, como paso previo a la exigencia de otras responsabilidades. Por tanto, se ha saneado la sociedad, se han exigido todas las responsabilidades penales, y en sede judicial se van a poner de manifiesto quiénes son responsables de las mismas, y también se han trasladado las denuncias a la firma auditora que no detectó las irregularidades en la sociedad.

Creo, pues, que el Gobierno ha actuado intachablemente a través de Mercasa y que va a garantizar el normal funcionamiento de esta compañía.

Muchas gracias. (*Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

— DE DON VICENTE LILIANO FERRER ROSELLÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA NORMA DEFINITIVA FIRMADA POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, QUE AUTORIZA DE NUEVO LAS IMPORTACIONES DE CLEMENTINAS PROCEDENTES DE ESPAÑA (680/000944).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Vicente Liliano Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno con respecto a la norma definitiva firmada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, que autoriza de nuevo las importaciones de clementinas procedentes de España.

Tiene la palabra el senador Ferrer Roselló.

El señor FERRER ROSELLÓ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, los valencianos nos habríamos tomado con filosofía, no exenta de cierta sorna, el hecho de que los poderosos «lobbies» agrícolas de los Estados Unidos estuvieran dispuestos a no jugar limpio, a hacer trampas, con tal de no competir con nosotros. Sin embargo, su señoría sabe que esa es una actitud absolutamente injusta; los valencianos somos humildes labradores para estas cosas.

El problema es que, a su vez, el Gobierno federal, la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Agricultura, parecían especialmente sensibles a los argumentos de estos «lobbies». Eso hacía, a nuestro juicio, absolutamente imprescindible una acción decidida por parte del Gobierno de nuestra nación, así como el que se lograra un acuerdo del tenor del obtenido. Debo decir que en nuestra opinión la acción del ministro ha sido indudablemente eficaz, por lo que no puedo dejar de manifestar que dicho acuerdo nos hace felices en Valencia.

Por tanto, quisiera saber cómo valora el señor Ministro el acuerdo logrado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Ferrer Roselló.

Tiene la palabra el señor ministro de Agricultura.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Gracias, señor Presidente.

Señorías, el Gobierno valora de forma muy positiva la firma de la norma definitiva por la que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA, autoriza de nuevo las importaciones de clementinas procedentes de España.

Esta norma, firmada el pasado 15 de octubre, y que entró en vigor al día siguiente, ha permitido la reapertura de fronteras desde que éstas fueran interrumpidas el pasado 5 de diciembre, alegando razones fitosanitarias.

Con esta norma se dota de un nuevo marco que va a ofrecer una mayor seguridad jurídica y va a garantizar que las partidas de clementinas españolas lleguen a los Estados Unidos en las mejores condiciones higiénico-sanitarias.

Por tanto, desde el Gobierno valoramos especialmente el acuerdo alcanzado, porque hemos trabajado intensamente y en muchos ámbitos para conseguir la reapertura de las fronteras, utilizando en todo momento la negociación y el diálogo.

Como digo, la línea de trabajo se ha basado en el diálogo, que ha sido precisamente la que este ministro ha mantenido en todo momento, y ha demostrado ser la estrategia más rápida para conseguir volver a la situación anterior.

Otra vía demandada por otros sectores, pidiendo que entabláramos una disputa comercial con los Estados Unidos en el seno de la Organización Mundial de Comercio, habría supuesto, en el mejor de los casos, la pérdida de ese mercado, y por ello ese escenario sólo se contempló como alternativa en el supuesto de que fracasaran las negociaciones.

Las negociaciones se han desarrollado en los ámbitos técnico, comercial y político, utilizando no sólo el cauce bilateral España-Estados Unidos, sino el de la propia Unión Europea. Esta negociación entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el organismo responsable de la sanidad vegetal en los Estados Unidos, el APHIS, ha sido larga y compleja, pero al fin hemos podido establecer conjuntamente las pautas para el control en las áreas de producción citrícola destinadas a la exportación a ese país.

Desde el Gobierno valoramos el esfuerzo realizado por las administraciones autonómicas productoras (Valencia, Andalucía, Cataluña y Murcia), así como por el sector productor, las cooperativas y los exportadores, para poner en marcha esta campaña en tiempo récord y adaptarse a la nueva normativa vigente.

Este asunto ha sido considerado en todo momento por el Gobierno de la mayor importancia, ya que estamos ante un sector estratégico de nuestras exportaciones agrarias y ante un mercado estrella con un crecimiento potencial de primera magnitud. Así, empezamos las exportaciones a los Estados Unidos en el período 1984-85; en los años noventa estábamos en las 4.000 toneladas; en 1998, en 35.000 toneladas, y en la última campaña completa se alcanzaron las 50.000 toneladas. Por tanto, este es un mercado en el que las previsiones son llegar casi a 100.000 toneladas. En consecuencia, repito, el Gobierno valora muy positivamente el acuerdo, no sólo desde el punto de vista económico, sino porque considero que hemos hecho un trabajo armónico entre el sector productor, los gobiernos autonómicos y el Gobierno de la nación para resolver este grave problema planteado a nuestras exportaciones.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

— DE DON FERNANDO CARLOS RODRÍGUEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA APERTURA DE LA DESTILACIÓN DE ALCOHOL DE USO DE BOCA PARA LA CAMPAÑA 2002-2003 (680/000947).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Fernando Carlos Rodríguez Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno ante la apertura de la destilación de alcohol de uso de boca para la campaña 2002-2003.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Pérez.

El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, el artículo 29 de la nueva OCM del vino aprobada en julio de 1999 contemplaba la destilación vínica como un capítulo más del balance vitivinícola, aunque no como una vía de eliminación de excedentes. Fue desarrollado por el Reglamento 1623/2000 de la Comisión, ahora recientemente modificado, el cual posibilita ya la apertura de la destilación de alcohol para usos de boca correspondiente a la campaña 2002-2003.

En España, donde existe un fuerte mercado de destilación, algo que no ocurre, por ejemplo, en otros países como Francia e Italia, con mayores producciones de vinos de mesa, este nuevo Reglamento tiene extraordinaria importancia por su incidencia en la regulación del mercado del alcohol vínico, tanto en lo que se refiere a la aceptación de contratos presentados por las destilerías, como a los tramos para su presentación. Por este motivo, señor ministro, le pregunto cómo valora usted esta apertura de destilación de alcohol de uso de boca para esta campaña 2002-2003.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Muchas gracias, señor Presidente.

Agradezco a su señoría la pregunta que formula, pues me permite clarificar la aplicación de una importante medida para el sector vitivinícola que pasa por dificultades de comercialización de la producción como consecuencia de un desequilibrio entre oferta y demanda.

En la pasada campaña 2001-2002 fueron destilados en España, dentro del marco de la destilación de uso de boca, un total de 6,9 millones de hectolitros, que representan el 57,7 por ciento de la cantidad destilada en el conjunto de la Unión Europea, cuando la producción de

vino de mesa española es sólo el 21 por ciento de la producción comunitaria. Al tratarse de una destilación voluntaria estas cifras reflejan que en nuestro país hay sector utilizador muy importante, destinándose a la elaboración de «brandy» y vinos de licor que tienen garantizado su abastecimiento mediante esta destilación. En España destilamos un volumen de vino que equivale al que producen 175.000 hectáreas de viñedo, el 15 por ciento del viñedo español.

En la pasada campaña se plantearon problemas al establecerse tres tramos para la destilación de uso de boca, lo cual obligó a los destiladores a trabajar en los meses finales de campaña, donde las mermas de fabricación por causa de las temperaturas son elevadas y no permiten la fabricación de alcohol con vinos jóvenes con los que se obtienen alcoholes de mayor calidad. Después de prolongados debates, el Comité de Gestión de Vinos, en su pasada reunión de 24 de septiembre, ha logrado una solución satisfactoria, adoptándose un reglamento que posibilita la apertura de la destilación para uso de boca para la presente campaña 2002-2003. De esta forma las ofertas para destilación se presentan en un solo tramo desde el presente mes de octubre hasta el 30 de diciembre de 2002, y se ha conseguido la posibilidad de destinar anticipadamente hasta un 35 por ciento de la cantidad que figura en el contrato a partir de la presentación del mismo. La fecha en la que conoceremos la cantidad definitiva que se puede destilar será antes del día 1 de febrero de 2003.

De este acuerdo hay elementos muy importantes para mantener la tendencia positiva de las cotizaciones actuales del mercado de vino. Por un lado, se abre un solo período de contratación en vez de los tres tramos de la pasada campaña; se adelanta en dos meses la fecha de inicio de la destilación, y por tanto, de la retirada de vino del mercado, y esta retirada de un volumen importante al principio de la campaña se hace en una época clave para la formación de precios en el mercado, y además, permite un abastecimiento de alcohol para atender con holgura la campaña navideña, que es el período de mayor utilización del mismo.

Por otra parte, la posibilidad de almacenar alcohol vínico por parte de los destiladores con una prima comunitaria importante permite constituir «stocks» estratégicos. Esta reserva sirve para garantizar un suministro regular de alcohol de las características necesarias para elaborar productos de calidad sin recurrir a importaciones de productos cuya calidad en muchos casos no llega a los niveles exigidos por nuestros utilizadores.

En conclusión, el Gobierno considera que los mecanismos que han sido establecidos para destilar el alcohol de uso de boca en esta campaña van a contribuir a un desarrollo normal de la campaña vitivinícola y a disponer de un adecuado abastecimiento en materia prima para la industria de los transformados «brandys» y vinos de licor.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

— DE DON JOSÉ IGNACIO PÉREZ SÁENZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO HA FORMALIZADO EN EL PRESENTE AÑO, CON POSTERIORIDAD AL PROCESO DE TRASPASO A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INSALUD), ALGÚN CONVENIO EN EL QUE SE CONTEMPLA LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES HOSPITALARIAS (680/000933).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don José Ignacio Pérez Sáenz, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el Gobierno ha formalizado en el presente año, con posterioridad al proceso de traspaso a las comunidades autónomas de las funciones del Insalud, algún convenio en el que se contempla la financiación de inversiones hospitalarias.

Para formular la pregunta tiene la palabra el senador Pérez Sáenz.

El señor PÉREZ SÁENZ: Gracias, señor presidente. Reciba usted mis felicitaciones. Usted va a comprender perfectamente el sentido de mi pregunta.

Señora Ministra, con esta pregunta pretendo averiguar si ha habido un trato desigual con las comunidades autónomas, si ha habido discriminación en el traspaso de los servicios sanitarios a las comunidades autónomas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad.

La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Presidente. Felicitaciones por su nombramiento.

Señoría, voy a dar contestación a su pregunta. Como usted bien sabe, el único convenio formalizado entre el Gobierno y una comunidad autónoma que contemple la financiación de inversiones hospitalarias es el suscrito el pasado día 27 de agosto del presente año con la Comunidad de Cantabria. Me gustaría subrayar que históricamente el Hospital Marqués de Valdecilla ha contado con servicios pioneros de alta cualificación profesional y tecnológica, así como con una avanzada infraestructura hospitalaria, siendo siempre punto de referencia en España en lo que a tecnología y profesionalidad se refiere.

Señoría, la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Cantabria incluye una referencia singular al compromiso de garantizar la continuidad del Hospital Marqués de Valdecilla como centro de referencia nacional, posibilitando así que mantenga e incremente su alto nivel de actualización asistencial, docente, científica y tecnológica en el futuro. La labor asistencial de Valdecilla en áreas como trasplante de órganos, tejidos o cardiología es de sobra conocida por todos nosotros, hasta el punto de que a este hospital acuden pacientes de todo el territorio nacional, principalmente de las Comunidades Autónomas de Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Asturias y Navarra.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.

Tiene la palabra, en turno de réplica, el senador Pérez Sáenz.

El señor PÉREZ SÁENZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, la pregunta era si ha existido discriminación, y la respuesta ha sido que sí ha existido discriminación. (*Denegaciones en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) En su respuesta, señora Ministra, exactamente lo que se ha dicho es que ha habido un trato diferente, debido a que en el Estatuto de Cantabria existe una disposición adicional. ¿No es así, señora Ministra? La disposición adicional —y usted lo sabe, porque tiene conocimientos suficientes— lo único que hace es indicar que se debe velar por que el Hospital Marqués de Valdecilla sea un centro de referencia nacional. Bien, ¿y qué? No dice más, y eso de que se desprende que debe haber un trato especial no lo dice la disposición adicional; es una percha, es una excusa, señora Ministra, y me parece que además es una indecencia; no es que sea una indecencia hacer un convenio con Cantabria, sino hacerlo sólo con Cantabria y no con otras Comunidades Autónomas.

Señora Ministra, en el debate de las transferencias, en el que participé con la señora ministra de Sanidad y con el ministro de Hacienda actual, se dejaron claras dos cosas: ninguna negociación diferente con ninguna comunidad autónoma, ninguna; todas iguales, y se insistió en ello hasta la saciedad; y además, ningún convenio de inversiones con las comunidades autónomas; es más, se dijo —y es muy importante que lo sepan ustedes— que en caso de existir algún convenio con comunidades autónomas, el sistema quedaba roto. Y esto no lo dijo el Grupo Parlamentario Socialista, sino que lo dijeron los ministros, aquí, en las sesiones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, pero también se dijo a las comunidades autónomas, y por escrito. Lo voy a leer: Les reitero el criterio del ministerio de no poder atender, mediante un convenio, a ninguna situación. Dicha tesis es uniforme para todas las comunidades autónomas, y en todas existen inversiones singulares que deben financiarse con cargo a los ingresos generales, por lo que hacer un tratamiento singular implicaría romper el modelo de traspaso de sanidad. Eso lo dice el secretario de Estado de Hacienda.

Por tanto, han roto el sistema de traspasos sanitarios, y han cometido un error mayor, que es...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

El señor PÉREZ SÁENZ: Termino, señor Presidente. Que es crear un agravio entre comunidades autónomas, y por lo tanto cometer una deslealtad institucional.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor senador.

En turno de dúplica, tiene la palabra la señora ministra de Sanidad.

La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Gracias, señor Presidente.

Señoría, esto ni es desigualdad ni es trato diferente a los iguales que somos todos los españoles. Le voy a dar unos datos. El 50 por ciento de los pacientes trasplantados en los siete meses del año 2002 proceden de La Rioja, de Castilla y León, de Navarra y del País Vasco.

En el área del corazón el 24 por ciento de los enfermos atendidos proceden de las comunidades autónomas de La Rioja, País Vasco, Castilla y León. En Cirugía torácica el 18 por ciento de los pacientes son de La Rioja, el 12 por ciento de Palencia y el seis por ciento de León.

Señoría, éstos son los datos. Uno puede decir las palabras que quiera, los datos son los que dicen si trata uno de forma igual o desigual a los iguales. Y le voy a decir más, tras el derrumbamiento de la fachada del edificio de Valdecilla en noviembre de 1999 el Gobierno se comprometió a garantizar el buen funcionamiento del Hospital Marqués de Valdecilla, preservando los niveles de desarrollo asistencial y de investigación que hasta ahora ha venido teniendo dicho hospital.

Este compromiso estuvo presente en las negociaciones de las transferencias sanitarias que se materializaron cerrándose en diciembre y quedando pactado el convenio para la financiación del Plan Director de Valdecilla que —como usted sabe— tenía tres fases: de emergencia, de urgencia y de adecuación, con un coste de 205.842,746 euros. Y le voy a decir más, en la Ley General de Sanidad, en su artículo 15, se establece que el Ministerio de Sanidad acreditará servicios de referencia a los cuales podrán acceder todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud, siempre y cuando hayan sido superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de los servicios especializados.

Culminadas las transferencias, señoría, el Ministerio tiene la firme voluntad de acreditar servicios de referencia dentro del Sistema Nacional de Salud en los supuestos de patologías que precisen una alta complejidad tecnológica. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.

¿Tienen sus señorías inconveniente en alterar el orden del día en ausencia del Ministro de Justicia? (*Pausa.*) Gracias.

— DE DON FRANCISCO BELLA GALÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI CONSIDERA EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE QUE LA FORMA DE HACER PARTICIPAR A LOS AGENTES SOCIALES EN LAS POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES SE RESUELVE CON LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE (CAMA) (680/000915).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Francisco Bella Galán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Ministerio de Medio Ambiente que la forma de hacer participar a los agentes sociales en las políticas medioambientales se resuelve con la última modificación del Consejo Asesor de Medio Ambiente.

Tiene la palabra el senador Bella Galán.

El señor BELLA GALÁN: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, en la Cumbre de Johannesburgo usted se ha permitido decir en su discurso —y le leo textualmente— que resulta prioritario fomentar la participación de la sociedad civil en los procesos de desarrollo sostenible en todas sus etapas. Y continúa: Los responsables políticos en nuestros respectivos países debemos ser capaces de reflejar los intereses legítimos de la sociedad civil en nuestra propuestas e inspirar confianza en nuestra capacidad de compromiso y visión de futuro. Tenemos que mostrar nuestro firme compromiso con el desarrollo sostenible, de forma que impregne nuestras decisiones políticas para su efectiva consecución.

Hace ya dos años y medio también en su primera comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente de este Senado usted dedicó amplias parrafadas al tema de la participación. Han transcurrido dos años y medio, el Consejo Asesor de Medio Ambiente aún no se ha reunido, de ahí que le formule esta pregunta. ¿Considera el Ministerio de Medio Ambiente y, por tanto, este Ministro, que la forma de hacer participar a los agentes sociales en las políticas medioambientales se resuelve con la última modificación que ha hecho del Consejo Asesor de Medio Ambiente? Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.

El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, desde que asumí la responsabilidad al frente del Ministerio hubo un acuerdo entre todos los sectores para modificar la constitución del Consejo con el fin de hacerlo operativo. Había coincidencia absoluta en su inoperatividad. Y hemos llegado a una nueva formulación que ha sido la que ha intentado dar satisfacción a las aspiraciones de todos los sectores representados.

Es difícil contentar siempre a todo el mundo, no obstante creo que se ha conseguido un cierto equilibrio. Pero hay una cuestión que me parece muy importante: el hecho de que estuviéramos todos de acuerdo en que había que modificar el Consejo no quiere decir que no hayamos tenido otros mecanismos de interlocución con los agentes sociales, económicos y de las organizaciones no gubernamentales. En este sentido le recuerdo todas las reuniones del Consejo Nacional del Agua donde están representadas estas organizaciones, incluso las hemos incluido en la permanente, por su propia petición, en el Consejo Nacional del Clima, en el Consejo Nacional de Bosques, en la tramitación de la estrategia de desarrollo sostenible, en los

distintos organismos y patronatos de todos los parques nacionales, etcétera. Es decir, hemos intentado —creo que es incuestionable— que pudiera existir ese proceso de participación y ahora hemos conseguido una modificación que guarda un cierto equilibrio y que puede ser un buen órgano para poder tener esa vía de interlocución.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

En turno de réplica, tiene la palabra el senador Bella Galán.

El señor BELLA GALÁN: Gracias, señor Presidente.

Indudablemente, buscar una mayor agilidad, garantizar el cumplimiento de los propios fines del consejo asesor, dotarle de una estructura, etcétera, todo ese tipo de argumentos están bien siempre y cuando se hubiese reunido desde hace dos años y medio, cosa que no se ha hecho. Es decir, es difícil constatar que el consejo no ha funcionado operativamente si no se ha reunido con la última modificación que ya hizo un Gobierno del Partido Popular, o sea, hay dos modificaciones del Partido Popular.

En cualquier caso, lo sorprendente de todo esto, señor Ministro, es que cuando las ONGs presentes en este consejo están pidiendo reuniones —incluso han recurrido al Defensor del Pueblo— para que el consejo asesor se reúna, la modificación lo que hace es que le sacan del consejo, con lo cual ya no van a volver a pedir que se reúna puesto que ya no está. O cuando están argumentando que realmente tenían un foro de participación, ahora con este nuevo decreto, fuera foro; ya se dijo fuera fuero, ahora fuera foro, y se quita el foro de en medio y con ello esas voces en parte disonantes.

Considero que no se puede llamar a la participación a quienes ahora mismo le están pidiendo a usted una rectificación. En definitiva, hay una falta de sensibilidad respecto a lo que es establecer cauces de participación por parte de este Gobierno. Hay una diferencia tremenda con los países europeos —en el año 1996 teníamos una diferencia menor y ahora la hemos aumentado muchísimo— y estamos percibiendo una clara marcha atrás en lo que se refiere al diálogo sustantivo.

Esta tónica general contradice toda una serie de compromisos tanto a nivel interno, como pudieran ser las recomendaciones internacionales, incluso los acuerdos y compromisos que ya adquirimos en la agenda XXI de la cumbre de Río o el propio convenio de las Naciones Unidas de Aarhus en Dinamarca, ratificado por las Cortes Generales en el año 2001.

El consejo, como digo, ha tenido dos modificaciones: Una fue en el año 1996 para adaptarlo al ministerio de Medio Ambiente, donde sus miembros pasaban de 36 a 42. Es decir, ustedes aumentaron el número de miembros. Aquello parece que no funcionó muy bien y se hizo otra siguiente modificación, ya en el año 1997, donde pasaban de 42 a 45; es decir, volvieron a aumentarlo.

Ese consejo no se ha reunido y ahora hacen una modificación y pasan a 17...

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor senador.

En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Medio Ambiente.

El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias.

Señorías, brevemente, debo decir que me parece que hay un error. Es decir, ha habido consenso en que había que modificar este consejo, pero lo que quiero que quede claro es que usted no me podrá citar ninguna cuestión importante donde no haya existido un procedimiento para negociar o dar a conocer nuestros proyectos a estos interlocutores, es decir —usted lo sabe perfectamente—, su presencia en el Consejo Nacional del Agua, en el Consejo Nacional del Bosque, en todos y cada uno de los organismos para conseguir ese debate, mientras se negociaba, una remodelación de ese consejo puesto que había acuerdo. Lo importante es que participemos de este consejo.

En este momento, discutir una cuestión de número sinceramente no es trascendental, porque usted sabe que, además, los datos que usted ha dado no son los correctos. Había 6 representantes, ahora hay 2; había 45, ahora hay 14. Es igual. Ahora bien, había que dar participación a las organizaciones sindicales que han aceptado participar, a los empresarios y también a todas las organizaciones profesionales con implantación en el sector agrario, a todos los productores pesqueros con implantación en el sector marítimo pesquero, a todos los consejos de consumidores y usuarios, a todas las asociaciones de cooperativas y de sociedades. También era importante introducir a expertos y a la Federación Española de Municipios para lograr que esta representación fuera plural y pudiera participar todo el mundo...

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

— DE DON FRANCISCO JAVIER SANZ CARRAMIÑANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA PONER EN MARCHA LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE DESARROLLO SOSTENIBLE (680/000916).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Francisco Javier Sanz Carramiñana, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha prevista por el Gobierno para poner en marcha la estrategia española de desarrollo sostenible.

Tiene la palabra el senador Sanz Carramiñana.

El señor SANZ CARRAMIÑANA: Muchas gracias, señor Presidente.

Felicitaciones por su nombramiento.

Sí me gustaría que fuera un poquito más generoso en cuanto a los tiempos.

Señor Ministro, usted conoce perfectamente la pregunta, por lo que, sin más dilaciones, espero la respuesta. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Medio Ambiente.

El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias.

La intención es, cumpliendo, naturalmente, los plazos establecidos, poder poner en marcha inmediatamente la estrategia que hayamos conseguido y que ese proceso que hemos abierto de debate y de consenso social dé sus frutos y podamos conseguir ese ejercicio de planificación que queremos llevar a cabo con la participación más amplia posible de toda la sociedad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Sanz Carramiñana.

El señor SANZ CARRAMIÑANA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, usted conoce que el modelo de desarrollo sostenible se basa fundamentalmente en un sistema que garantiza el desarrollo económico y social al tiempo que protege el medio ambiente.

En la Cumbre de Río se abordó una lista de indicadores que midieran el desarrollo sostenible. Bajo estas directrices, Naciones Unidas trabajó sobre unos cien indicadores, que, como usted bien conoce, eran de todo tipo: social, medioambiental, institucional. La Comunidad Europea fijó como objetivo a finales de los años 80 el desarrollo sostenible o, lo que es lo mismo, la integración de todas sus políticas en el parámetro de sostenibilidad medioambiental. Posteriormente, el Tratado de Maastricht convirtió dicho objetivo en tarea o misión a cumplir por todos los Estados miembros de la Unión. Por su parte, en junio de 2001, el Consejo de Europa acordó una estrategia y compromiso político referente al desarrollo sostenible. Más tarde, la Cumbre de Barcelona, celebrada durante los días 15 y 16 de marzo del año 2002, precisamente bajo la presidencia española, se refirió a dicha estrategia como parte de los preparativos de la reciente Cumbre de Johannesburgo y se presentó la estrategia española de desarrollo sostenible. Dicha estrategia se basa teóricamente en el estímulo del crecimiento económico respetando el medio ambiente.

Señor Ministro, no pongo en duda que la literatura es coherente con los objetivos de la Unión Europea. Sin embargo, los hechos ponen en evidencia que en estos momentos estamos muy lejos de alcanzar los objetivos perseguidos.

Usted sabe muy bien, mejor que yo, que las diferentes fases de la estrategia española de desarrollo sostenible son: la elaboración del documento —creo que hasta ahora únicamente se ha elaborado un borrador—, la consulta a Comunidades Autónomas y el Consejo Económico y Social —sin conclusiones, con muchas posiciones críticas sobre su borrador—, la recogida de la opinión ciudadana —diálogo social cero, pues actúa, como acostumbra el Gobierno al que pertenece, sin diálogo y por decreto, respecto de lo que recuerdo la frase de un compañero suyo que reciente-

mente le acompañaba junto al escaño sobre su Plan Hidrológico Nacional—, y, por último, la aprobación de la estrategia por parte del Gobierno.

Espero que en su intervención diga a esta Cámara los plazos que maneja el Gobierno.

Para finalizar, señor Presidente, y concluyendo, señor Ministro: falta de interés por parte del Gobierno —no hay que más que observar la ausencia del Presidente Aznar en la Cumbre de Johannesburgo—, falta de sensibilidad en cuanto a la participación social, al no incluir a ninguna ONG en la delegación oficial. Recuérdese que el Consejo Asesor de Medio Ambiente no se reúne desde el año 1997 y se ha reestructurado por decreto.

En definitiva, señor Ministro, su paso por el Ministerio va a suponer una hipoteca muy difícil de amortizar si no corrige con urgencia su rumbo errático.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno de réplica, tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.

El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, no he entendido muy bien lo que usted me ha querido preguntar, sinceramente, porque, además de que usted está equivocado en los datos, no se ha aprobado ninguna estrategia.

Cumpliendo los plazos establecidos en la Cumbre de Río, anticipadamente a lo que han hecho otros países —y le emplazo a que me diga cuáles son los países de la Unión Europea que tienen procesos más adelantados y cuáles son, con Gobiernos además claramente de izquierdas, los que todavía tienen estos procesos mucho más atrasados que el Gobierno de España, y le emplazo sobre todo a que hagamos un ejercicio de aportación positiva en el momento en que nos encontramos—, nosotros hemos abierto ese debate, porque queremos elaborar esa estrategia, porque creemos que España necesita una estrategia de desarrollo sostenible. Y en el momento en que abrimos un debate y una participación y presentamos un borrador para abrir ese debate y para poder contar con su participación, y además les emplazamos a que hagan esas aportaciones, creo que intentar crear polémicas estériles, politizadas y además con escaso eco y sobre todo con muy poco rigor no nos conducen a nada positivo, más bien al contrario. Le invito a que me dé aquí su opinión. Por ejemplo, las organizaciones ecologistas han contestado con una propuesta a nuestro borrador. Le he pedido a usted tres veces, y ahora lo vuelvo a hacer, que, si no tiene inconveniente, venga aquí y me diga, por ejemplo, si está o no de acuerdo con estas propuestas de los ecologistas, para aportar algo, para enriquecer el debate y para que yo conozca cuál es su aportación a esa estrategia. Al fin y al cabo, es una estrategia que va a superar a los gobiernos, porque es a 25 años, pero es importante que todos aportemos algo y mantengamos este debate. Por supuesto, espero contar con su ayuda si es posible, pero una ayuda positiva, con acciones y con aportaciones al borrador que ahora está sobre la mesa y a todo

el proceso que, durante este año, estamos manteniendo de interlocución con todos los sectores de la sociedad que puedan aportar algo a este debate.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

— DE DON JOAN SABATÉ BORRÀS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE EL CAUDAL MEDIO EN LAS ESTACIONES DE AFORO DE FLIX Y TORTOSA, EN LA PROVINCIA DE TARRAGONA, DURANTE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2002 (680/000930).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Joan Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre el caudal medio en las estaciones de aforo de Flix y Tortosa, en la provincia de Tarragona, durante los meses de enero a septiembre de 2002.

Tiene la palabra el Senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor Presidente. Yo también le doy la enhorabuena por su elección como Presidente de esta Cámara.

Doy por formulada la pregunta en sus justos términos. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro de Medio Ambiente.

El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, Presidente.

Señoría, los caudales medios registrados en Tortosa y en Flix de enero a septiembre de 2002 han sido 133,3 y 147,4 metros cúbicos por segundo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

En turno de réplica, tiene la palabra el senador Sabaté Borràs.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor Presidente.

Más allá de alguna pequeña discrepancia en los datos de que dispongo en cuanto al caudal medio en Tortosa, entre octubre de 2001 y septiembre de 2002, que sería de 128 metros cúbicos por segundo, pero en cualquier caso la discrepancia es pequeña, supongo que no se le escapa, señor Ministro, que nos encontramos con un caudal muy inferior al que prevén las medias de la Ley del Plan Hidrológico Nacional; un caudal que, de mantenerse, si se procede a trasvasar los 33 metros cúbicos por segundo previstos en el Plan Hidrológico Nacional, prácticamente no se llega al caudal ecológico que prevé la propia ley. Estaríamos, por supuesto, muy por debajo de los 300 metros cúbicos por segundo que buena parte de la comunidad científica reco-

mienda como caudal mínimo necesario para mantener las condiciones ecológicas de la cuenca.

No sé tampoco, señor Ministro, si su ministerio es consciente de la realidad biológica del río Ebro, con una serie de situaciones que se han producido recientemente y que se han ido incrementando, como es la extensión de plagas como la del mejillón cebra o la proliferación de algas que, sin duda, tiene una relación directa con los escasos caudales, que están alarmando de una manera importante a las poblaciones que viven a lo largo de la cuenca del Ebro, lo cual acaba configurando una situación en verdad preocupante y que, como usted sabe, viene enormemente agravada por la preocupación, porque si se procede a la detracción de esos caudales previstos en el Plan Hidrológico Nacional, la situación empeoraría sensiblemente.

Mi pregunta sigue planeando en el aire en el sentido de si son conscientes, señor Ministro, de que estos caudales decrecientes han llevado a una situación que, posiblemente, no sea la que se recogía en los datos que fundamentaron y sostuvieron todo el cálculo que se hizo para la elaboración de la Ley del Plan Hidrológico Nacional.

Gracias, señor Ministro. Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

En turno de réplica, tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.

El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, Presidente.

Usted acaba de introducir octubre de 2001, y su pregunta se refería a enero y septiembre de 2002. Yo le he dado los datos de estos últimos meses.

Naturalmente que somos conscientes de eso. Creo que gracias sobre todo a las enmiendas que se fueron introduciendo en la tramitación del Plan Hidrológico Nacional en estas Cámaras se garantiza precisamente que las cautelas que se establecen son las que tienen que garantizar la solución de estas situaciones a las que usted hace referencia. Yo también vuelvo a insistirle en situaciones que ya existían antes del Plan Hidrológico Nacional. Precisamente gracias a ese Plan todos tenemos la responsabilidad y la oportunidad de solucionar los problemas que ya había en el delta del Ebro. Y quiero recordarle una vez más las cautelas medioambientales que se establecen en el Plan Hidrológico Nacional para hacer esas transferencias, cautelas que se contienen en la Ley del PHN, por ejemplo: No se efectuará ninguna derivación mientras no circule por el río en los puntos de toma un caudal superior al mínimo ambiental fijado en el plan hidrológico de cuenca... (Por cierto, los datos del mínimo medioambiental del plan hidrológico de cuenca son los que se cifran en el plan y fueron aprobados por unanimidad por todas las fuerzas políticas, y no coinciden con los que su señoría ha dicho. Yo creo que estas cosas deben estudiarse con seriedad.) Y sigue diciendo: ... por el conjunto de tomas y transferencias sólo podrá derivarse un caudal total igual al circulante por el río que exceda a la suma anteriormente citada. Los embalses y los sistemas hidráulicos de la cuenca del Ebro no se verán obligados a efectuar ningún desembalse con des-

tino a favorecer los trasvases desde el bajo Ebro. La capacidad de regulación de los embalses de Mequinenza, Ribarroja y Flix —esto es muy importante, le ayudo con ello a que reflexionemos conjuntamente— será también empleada —hoy no se puede utilizar— para ajustarse a los requerimientos medioambientales de caudales ecológicos, incluidos los que precise el delta del Ebro.

Esto es lo que dice la Ley; éstas son las cautelas que se han de cumplir y que son prioritarias ante todo lo demás. Si no se cumplen estas cautelas la Ley no autoriza a hacer esos trasvases ni esas transferencias. Por lógica tenemos que cumplir la ley; es la que se aprobó en las Cámaras. Por otra parte, creo que ésta es una gran oportunidad para intentar resolver ese problema que, insisto, es previo a la aprobación de esta ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

— DE DON JOAN LERMA BLASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE HA LLEVADO A CABO DEL PLAN GLOBAL FRENTE A INUNDACIONES EN LA RIBERA DEL JÚCAR (680/000935).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Joan Lerma Blasco, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones que el Ministerio de Medio Ambiente ha llevado a cabo del Plan global frente a inundaciones en la ribera del Júcar.

Tiene la palabra el senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias.

Como el señor Ministro conoce, el Júcar es un río peligroso por sus enormes variaciones de caudal, y precisamente cuando llegan estas fechas a todos los habitantes de la zona les entra una enorme inquietud —en el mes de octubre suelen producirse las mayores inundaciones y justamente ahora se cumplen veinte años de la más grande de las últimas décadas.

¿Está previsto solucionar esa cuestión? ¿Tienen previsto las correspondientes administraciones y ministerios un plan de actuación para paliar esas riadas? Señor Ministro, ¿cómo van las actuaciones de ese Plan?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro de Medio Ambiente.

El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, comparto totalmente con usted su análisis. Tiene usted toda la razón.

Efectivamente, el Plan global frente a las inundaciones de la ribera del Júcar comprende actuaciones de estructura de laminación, acondicionamiento de cauces, cartografía de riesgo, actuaciones en protección civil y ordenación te-

rritorial. En laminación se ha realizado la memoria de impacto ambiental de las presas de Estubeny, Montesa y Marquesada. Ante la heterogeneidad presentada por las distintas memorias de impacto ambiental el Ministerio ha redactado la guía para la evaluación ambiental de estas administraciones hidráulicas, a la que deberán adecuarse estas memorias cuyo modelo deberá seguir todo el estudio ambiental.

Con el programa de acondicionamiento de cauces se está haciendo lo siguiente: el acondicionamiento del río Júcar entre Carcagente y la autopista A-7, que en estos momentos está encomendado al Centro de Estudios de Experimentación de Obras Públicas, de acuerdo con un convenio que acabamos de firmar, la realización de estos estudios adicionales. Para la mejora del drenaje del marjal sur del río Júcar se encuentra en preparación la memoria resumen de impacto ambiental. Para el plan sistemático de mantenimiento y capacidad de desagüe del cauce del río Júcar y otros barrancos se ha firmado el convenio entre la Confederación y el Consorcio medioambiental de la ribera con una inversión prevista entre los años 2002 y 2007 que financia el Ministerio de Medio Ambiente de 850.000 euros. Para la mejora ambiental paisajística de las riberas del río Júcar, de acuerdo con el convenio firmado, se está invirtiendo ya un millón 584.000 euros entre los años 2002 y 2007.

En el Programa de cartografía de riesgo en la ribera del Júcar, el CEDEX ya ha finalizado el estudio de las distintas actuaciones con un presupuesto de 781.000 euros, habiéndose presentado los resultados en la jornada técnica celebrada en abril de 2002.

En cuanto al Programa de actuaciones de protección civil, en abril de 2002 ya adjudicamos la realización de las normas de explotación y planes de emergencia en las presas de Forata, Escalona, Bellús y Tous, así como su coordinación, con un presupuesto de 1.460.460 euros y un plazo de ejecución de 16 meses.

En cuanto al Programa de ordenación territorial, en este momento ya está encargada la delimitación de la zona de policía del dominio hidráulico al CEDEX, por lo que espero su inmediata culminación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

En turno de réplica, tiene la palabra el senador Lerma Blasco.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor Presidente.

Muchas gracias, señor Ministro, por su respuesta. Quiero decirle que, efectivamente, los planes están bien hechos. Es difícil buscar soluciones cuando están implicadas tantas administraciones y entiendo perfectamente la situación.

Dicho esto, quiero decir también —como apuntaba antes— que estos días se cumple el veinte aniversario de las inundaciones del año 1982. Acabaron con la vida de 25 personas directamente, aunque hubo muchas más afectadas, y se llevaron por delante miles, por no decir cientos de miles,

de millones de pesetas en riqueza, que todavía ahora, después de veinte años, estamos intentando recuperar.

El señor Ministro sabe perfectamente, igual que yo, que en los planes anunciados por el ministerio y por las diversas administraciones —especialmente la actuación en las tres presas de laminación que era necesario hacer, además de las tres que ya se han hecho— estaba previsto que las obras entraran en ejecución este mismo año. Es verdad que se han hecho actuaciones, como usted mismo ha planteado, pero me permito decirle al señor Ministro que interrogué adecuadamente a los responsables de la actuación porque tengo la impresión de que se están durmiendo un poco con respecto a sus previsiones y, como sabe el señor Ministro, las consecuencias pueden ser fatales para toda la zona en cuestión.

Le doy las gracias, una vez más, por su actuación. Pero he de insistir en que alguna de las actuaciones están un poco ralentizadas, y es usted el que debería impulsarlas.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Medio Ambiente por tiempo de treinta segundos.

El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, le agradezco sus palabras. No se preocupe, que vamos a seguir la ejecución de estas obras porque compartimos esa sensibilidad. Sepa que la actuación del ministerio va a ser diligente en la ejecución de las mismas.

Muchas gracias.

— DE DON DIEGO MIGUEL ASENSIO MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA INICIAR LAS OBRAS EN EL PANTANO DE CUEVAS DE ALMANZORA (ALMERÍA), PARA QUE SE PUEDAN CELEBRAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA SUBSEDE DE CUEVAS DE ALMANZORA DE LOS XV JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO (680/000936).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Pregunta del excelentísimo señor don Diego Miguel Asensio Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha prevista por el Gobierno para iniciar las obras en el pantano de Cuevas de Almanzora (Almería), para que se puedan celebrar las pruebas correspondientes a la subsede de Cuevas de Almanzora de los XV Juegos del Mediterráneo.

Tiene la palabra el senador Asensio Martínez.

El señor ASENSIO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Permítame que, aun a riesgo de ser reiterativo, le felicite en este momento y le desee los mejores y mayores logros como presidente y máximo representante de esta Cá-

mara. Es deseo de este senador y de su grupo parlamentario que así sea hasta el 2004, cuando habrá un nuevo reparto de suertes. Suerte.

Señor Ministro, el 28 de abril de 1999 la ciudad de Almería fue designada en Túnez sede de la XV edición de los Juegos Mediterráneos por el Comité Olímpico Internacional, que se celebrarán durante la segunda semana de junio del año 2005.

En aquel momento la ciudad se comprometió a disponer de una serie de infraestructuras para garantizar el éxito de este evento al que están convocados deportistas de todos los países bañados por el Mediterráneo. Como suele ocurrir en eventos de este tipo, Almería, al igual que otras ciudades, incluyó en su candidatura otros municipios en calidad de subse-des, donde se disputarán distintas pruebas deportivas.

Ése fue el motivo por el que se designó la localidad de Cuevas del Almanzora como subsede para la celebración de las competiciones de remo y piragüismo, aprovechando la existencia en su término municipal de un pantano.

El año pasado, los miembros del comité organizador de los Juegos del Mediterráneo efectuaron una visita a la presa, al pantano, en la que pudieron comprobar que el proyecto de adecuación de su entorno para la celebración de dichas pruebas no ha comenzado a ejecutarse. El proyecto consiste, como usted sabe muy bien, en el encauzamiento del río a lo largo de más de un kilómetro desde la presa de Cuevas hacia el mar. Este canal de 1.000 metros de longitud tendrá 105 metros de anchura y acogerá 13 calles. La inversión prevista es de 10,8 millones de euros y en ella se incluye la creación de dos plataformas sobre el canal y la aplicación de un tratamiento ambiental del entorno.

A la visita efectuada por el comité organizador acudieron también los presidentes de las federaciones nacional e internacional de piragüismo y de remo, además de técnicos de distintas administraciones, entre ellas la Confederación Hidrográfica del Sur, así como representantes del comité organizador. La visita permitió también determinar que era ése el lugar idóneo, aguas abajo de la presa, por sus características, tanto desde el punto de vista deportivo, como económico, técnico y medioambiental.

Como consecuencia de esta jornada de trabajo, el 30 de mayo del 2001, el comité organizador remitió una carta a su Ministerio en la que recordaba el compromiso adquirido en su día de adecuar el pantano para la celebración de dichas pruebas. Al comité organizador le consta que el Ministerio de Medio Ambiente dispone de un proyecto denominado «Cuenco amortiguador y tratamiento de márgenes, aguas abajo de la presa de Cuevas del Almanzora» que, por más señas, lleva la clave administrativa 06140132/2111, aunque a fecha de 30 de mayo de 2001 el comité organizador no tenía conocimiento de que hubiese consignación presupuestaria.

Con estos antecedentes, el presidente del comité organizador, organismo integrado por toda la administración, incluido el Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español, solicitó al Ministerio que adoptara las medidas que considerara oportunas para incluir la consig-

nación presupuestaria suficiente en los presupuestos del año 2002.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor ASENSIO MARTÍNEZ: En la última reunión se decidió instarle a que cuanto antes hiciera esto, ya que es necesario. Hay otras obras que son competencia de la Diputación Provincial, y si usted no termina la de su Ministerio, difícilmente ellos la van a poder realizar. Por ello le pregunto si se van a iniciar las obras dentro de este trimestre en el que estamos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor ministro de Medio Ambiente.

El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, lo primero que quiero que quede claro de mi respuesta es que la celebración de estos juegos ha contado siempre con el respaldo y la participación del Gobierno de España, y naturalmente éste es uno de los proyectos necesarios para que se puedan desarrollar con el éxito que todos deseamos estos XV Juegos del Mediterráneo, no le quepa ninguna duda.

Ahora bien, este proyecto ha tenido que adaptarse y modificarse precisamente para cambiar los usos que requerían la celebración de estas actividades lúdicas, que no eran las inicialmente previstas, y le puedo dejar constancia de que desde el Ministerio se está ejecutando y desarrollando este proyecto y que nuestra intención es tenerlo finalizado en plazo para que se puedan desarrollar sin dificultad las actividades que quieren realizarse.

El proyecto está en estos momentos en la fase final. Se ha redactado, está pendiente de aprobación técnica y cuando la tengamos procederemos a su licitación, adjudicación e inicio inmediato. Por tanto, no le quepa ninguna duda a su señoría de que los asuntos se están desarrollando en plazo y, naturalmente, con el cumplimiento de las fases administrativas que requiere un proyecto de estas características.

Sentado esto, y sin levantar ninguna polémica, señoría, yo no puedo dejar de recordarle a usted que este proyecto se va a hacer porque está en el Plan Hidrológico Nacional; Plan Hidrológico Nacional que usted no votó favorablemente. Además de este proyecto hay muchos otros en los que se intenta solucionar los problemas, no sólo éste del agua que sufre Almería y en el que encontramos ciertas contradicciones. No es mi ánimo levantar ninguna polémica. Simplemente quiero recordarle que la obra fue declarada de interés general del Estado; que gracias a esa declaración se va a poder ejecutar ese proyecto; ello gracias al Plan Hidrológico Nacional y puede usted tener constancia de nuestra voluntad y del compromiso de realizar este proyecto.

Gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Señorías, creo que es bueno que seamos flexibles pero ello debe ser compatible con el rigor debido.

Señor senador, ha consumido exactamente tres minutos cuarenta segundos. De manera absolutamente excepcional vamos a concederle quince segundos para réplica si considera fundamental esta intervención; en caso contrario, le rogaría que no la hiciera.

Tiene su señoría quince segundos.

El señor ASENSIO MARTÍNEZ : Muchas gracias por su benevolencia, señor Presidente. Necesito menos de quince segundos.

Señor Ministro, me parece estupendo que esta obra figure dentro de las obras del Plan Hidrológico Nacional. Este Plan es una ley aprobada por las Cortes Generales. Ejecútela usted cuanto antes porque Almería va a ser el espejo de España en el mundo en el año 2005. Y ahora es usted el espejo para que Almería en 2005 sea el espejo de España. Ejecute, pues, la obra.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En turno de dúplica, tiene la palabra el señor Ministro.

El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señor Presidente.

También necesito menos de quince segundos. Simplemente déjeme decir que me llama la atención que me reclame una obra a la que usted ha votado en contra. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

— DE DON ÓSCAR LLANOS VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE CONTEMPLA EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL (680/000943).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Óscar Llanos, sobre las principales líneas de actuación que contempla el programa de Protección y mejora del medio natural.

Tiene la palabra el senador Llanos Vera.

El señor LLANOS VERA: Muchas gracias, señor Presidente.

Al igual que mis compañeros senadores que me han precedido en el uso de la palabra quiero darle mi más sincera felicitación por su elección como presidente de esta Cámara y le deseo lo mejor para esta su nueva legislatura. (*El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.*)

Señor Vicepresidente, señor Ministro, el pasado día 19 de julio del presente el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que se formalizan los compromisos financieros para la distribución territorial de las subvenciones a

las comunidades autónomas del programa de Protección y mejora del medio natural.

La citada financiación fue acordada previamente por el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en la Comisión nacional de Protección de la Naturaleza y posteriormente ratificada la distribución territorial por la Conferencia sectorial de Medio Ambiente.

Señor ministro, como usted sabe, la cuantía de dicha subvención ascendía a 29 millones 636.630 euros. Mi pregunta señor ministro es la siguiente: ¿Cuáles son las principales líneas de actuación que contempla el programa de Protección y mejora del medio natural?

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Llanos.

Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.

El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, los objetivos efectivamente son los expresados a través de los grandes proyectos de protección, conservación, restauración y mejora de los recursos naturales con criterios de desarrollo sostenible.

Hemos previsto las siguientes líneas de actuación en este programa: En primer lugar, articular una política de conservación de la biodiversidad de forma genérica sobre la totalidad del territorio nacional en cooperación con las comunidades autónomas, como las administraciones gestoras del territorio y del resto de las instituciones, entidades y agentes socioeconómicos en el marco de la estrategia nacional para el uso y la conservación de la biodiversidad.

En segundo lugar, estructurar y ordenar el sector forestal español de manera global y unitaria a través del Plan forestal español con criterios de desarrollo sostenible en un marco de intervención que fomente y favorezca el desarrollo forestal en España. Para ello se incorporan agentes públicos y privados a la gestión abarcando la totalidad del ciclo forestal en sus aspectos globales y multifuncionales, ecológicos, económicos, productivos y sociales, incluso culturales, como parte de un paisaje natural y de una forma tradicional de uso de los recursos forestales.

En tercer lugar, desarrollar un programa de acción nacional contra la desertización como compromiso y necesidad de aplicar en España el convenio de lucha contra la desertización establecido en Naciones Unidas en el año 1994 y ratificado en España en 1996 como consecuencia de los procesos de degradación.

En cuarto lugar, gestionar de manera rigurosa y ordenada la Red Estatal de Parques Nacionales. El ministerio destinará más de 128 millones de euros en el año 2003 a proteger la diversidad biológica existente en esos parques.

Y la última línea de intervención es la de impulsar una política de educación ambiental basada en la difusión, divulgación y participación pública de las líneas anteriores entre toda la población.

El presupuesto total asciende a 260 millones de euros, lo que supone un incremento cercano al 7 por ciento con respecto al año anterior.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor ministro de Medio Ambiente.

— DE DON JAVIER SOPEÑA VELASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS LÍNEAS DEL PLAN FORESTAL ESPAÑOL (680/000945).

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Siguiendo pregunta, del excelentísimo señor don Javier Sopena Velasco, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las líneas del Plan Forestal Español.

Tiene la palabra el senador Sopena Velasco.

El señor SOPEÑA VELASCO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, teniendo en cuenta que para avanzar al ritmo deseado en las políticas de desarrollo sostenible puestas en práctica por el Gobierno de la nación es imprescindible una gestión medioambiental correcta de nuestros bosques; dada, por otra parte, la necesidad inaplazable de continuar con acciones tendentes a intensificar la protección del territorio ante la acción de los procesos erosivos, la degradación del suelo, la restauración de la cubierta vegetal, el incremento de la fijación de carbono por parte de la biomasa forestal y otras muchas más acciones que sin duda deben estar incluidas en el contenido de un plan forestal, y a la vista de que el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Forestal Español, con una financiación prevista de 2.200 millones de euros para los próximos siete años, quisiera, señor Ministro, que informara a esta Cámara sobre cuáles son, en general, las líneas maestras del Plan Forestal Español.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Sopena.

Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.

El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, Presidente.

Señoría, más del 70 por ciento de la superficie española propuesta para Red Natura 2000 está compuesta por territorios forestales y, por tanto, la conservación de la diversidad biológica española depende en gran medida de la protección de esta superficie.

El Plan Forestal Español responde a esta preocupación de protección y a la aplicación de la política forestal del Gobierno de España. En su elaboración se ha tenido en cuenta el marco internacional, el europeo, así como los referentes nacionales y autonómicos —es decir, la estrategia forestal española del año 1999 y todos

los planes forestales de todas las comunidades autónomas.

El Plan Forestal se aprueba, efectivamente, el 5 de julio del año 2002 e incluye más de 150 medidas, entre las que podemos destacar: restaurar y mejorar la cubierta vegetal arbolada en un total de 3.800.000 hectáreas; se harán trabajos de silvicultura para mejorar la biodiversidad forestal en 1.400.000 hectáreas, así como tratamientos selvícolas de prevención contra incendios en 2.000.000 de hectáreas; se crearán nuevas estadísticas forestales, como son el inventario nacional de erosión de suelos, el anuario de inversiones forestales y el informe forestal español; se impulsará la planificación territorial de los recursos forestales a través de los planes de ordenación de recursos forestales a escala comarcal; se reforzará la vigilancia y prevención de los incendios forestales; se fomentarán y promocionarán los productos forestales.

Con estas medidas para mejorar los espacios forestales los árboles por habitante se duplicarán en treinta años, pasando de 125 a 250, y en el período de siete años —que es el de ejecución del plan, no de la estrategia— cada uno de los españoles contaremos con veinte árboles más de promedio por habitante. Otro de los beneficios será el incremento del efecto sumidero de las masas forestales en la estrategia de lucha frente al cambio climático; se van a almacenar 60 millones de toneladas con ese efecto sumidero de CO₂, y esto sin duda forma parte de esa estrategia.

Por lo tanto, lo que se lanza es una reforma en la política forestal española cuyo objetivo principal es preservar nuestros montes en colaboración con las comunidades autónomas y hacer de éstos un factor de creación de empleo y riqueza, especialmente en el ámbito rural.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro.

— DE DON RICARDO CLEMENTE DOÑATE CATALÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LAS AGUAS, RECOGIDAS EN EL ANEXO DE INVERSIONES DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL (PHN) (680/000946).

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Siguiendo pregunta, del excelentísimo señor don Ricardo Clemente Doñate Catalán, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación de las actuaciones de saneamiento y depuración de las aguas, recogidas en el Anexo de Inversiones del Plan Hidrológico Nacional.

Tiene la palabra el senador Doñate.

El señor DOÑATE CATALÁN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, una buena parte de los ciudadanos y, en especial, los de mi comunidad autónoma, la de Ara-

gón, lo único que identifican —o han conseguido que así sea— en relación con el Plan Hidrológico Nacional es que, en su caso, pueden contemplarse los trasvases de cuenca; para nada les interesan los ejes básicos que se prevén, así como las importantes inversiones que implica.

Por ello, y además de lo previsto en los diferentes ejes básicos que en su momento puedan dar lugar a otras preguntas parlamentarias, hoy le pediría que, tal como figura la pregunta leída por el señor Presidente, nos informe de la situación en que se encuentran las actuaciones en materia de tratamiento y depuración de las aguas, recogidas en el Anexo de Inversiones del Plan Hidrológico Nacional.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Doñate.

Tiene la palabra el señor ministro de Medio Ambiente.

El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señor presidente.

Señoría, efectivamente el Gobierno ha asumido el firme compromiso de hacer frente a algunos déficit históricos en determinadas zonas de España y, por ello, se están llevando a cabo los trabajos y los trámites necesarios para que todas las medidas recogidas en el Plan se conviertan en realidades en los plazos previstos, en aplicación de lo previsto en los planes hidrológicos de las distintas cuencas hidrográficas, con incorporación de nuevas actuaciones que se han considerado necesarias en el proceso de gestión del plan.

En el Anexo de Inversiones se recogen aquellas que están destinadas precisamente a mejorar el uso y la gestión del agua, que es algo prioritario en este caso, por un importe de 18.843 millones de euros que se desarrollarán a través de distintos ejes. En relación con el abastecimiento, el saneamiento y la depuración hemos invertido, hasta ahora, 2.605 millones de euros, lo que supone un 44,3 por ciento. Como siempre hemos mantenido, se ha dado prioridad a las medidas que establecían los planes hidrológicos de cuenca, en este caso de proyectos de abastecimiento, proyectos de saneamiento, depuración, reutilización de las aguas, medidas de ahorro y modernización de regadíos. Efectivamente, para mejorar la calidad de las aguas llevamos ya invertidos —un año después de la aprobación del Plan—, esos 2.605 millones de euros, que suponen que ya están en marcha un 44,3 por ciento de la totalidad de los proyectos.

En términos generales, puede afirmarse que a fecha de hoy están en marcha el 40 por ciento de las actuaciones recogidas en el Anexo de Inversiones y, por tanto, en este momento se está desarrollando un nivel de inversión de alrededor de 7.500 millones de euros.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor ministro de Medio Ambiente.

— DE DOÑA MARÍA ANTONIA MARTÍNEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES (680/000932).

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señorías, pasamos ahora al grupo de preguntas que le corresponde contestar al señor ministro de Justicia.

En primer lugar, pregunta de la excelentísima señora doña María Antonia Martínez García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la correcta aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Tiene la palabra la senadora Martínez García.

La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, faltan menos de tres meses para que, cumplida la moratoria, entre en vigor para determinados delitos esta ley, en lo que afecta a los jóvenes de entre 18 y 21 años.

El Defensor del Pueblo ha puesto de manifiesto en su informe las graves deficiencias existentes en relación con el primer año de aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores. Además, y es lo más preocupante, señor ministro, transcurridos casi dos años de vigencia de la ley, el Gobierno sigue sin asumir un compromiso de financiación con las comunidades autónomas para su aplicación.

Éstas son las razones que me han llevado a formular al señor ministro la pregunta en los términos que ha expresado el señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Martínez.

Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Muchas gracias, señor Presidente.

Gracias, señora senadora, por la oportunidad que me brinda de hablar en esta Cámara de una ley que, sin duda, es una gran conquista ética de nuestra sociedad democrática.

Estamos hablando de una ley que estaba pendiente desde el momento en que hicimos la Constitución, en el año 1978, y que recoge lo que estaba pidiendo Naciones Unidas, porque a los infractores menores de dieciocho años no les quedaban más alternativas que la impunidad —y, en consecuencia, el seguir delinquiendo— o bien, la cárcel. Ésa era la única alternativa que nuestra democracia, hasta que aprobó esta ley, daba a los jóvenes. Esa única alternativa hacía que nuestros jóvenes, desgraciadamente, cuando ingresaban en la cárcel con menos de 18 años, en más de un 80 por ciento de los casos se convirtieran normalmente en

carne de presidio. Nuestra democracia tardó en hacerlo, pero lo hizo, afortunadamente con una mayoría política, la del Partido Popular, con una mayoría de diálogo porque esa ley se aprobó mediante el diálogo, y es una ley que tienen cosas que se pueden reformar, pero que en su conjunto está siendo muy beneficiosa para todos estos menores.

De ella se han beneficiado 7.482 menores, en lugar de tener que ir a la cárcel, 2.119 de ellos han ingresado en centros de internamiento. No en prisión, sino en centros de internamiento, donde se les está dando una reeducación. Se ha establecido por primera vez algo tan resocializador e importante como las medidas de trabajo en beneficio de la comunidad, sin precedentes, que se han aplicado a 1.710 jóvenes, y se ha concedido la libertad vigilada a 3.653.

Quiero agradecer el Informe del Defensor del Pueblo porque es un magnífico trabajo que hace recomendaciones a 17 instancias, a todas y cada una de las comunidades autónomas, porque así como en materia de Justicia sólo siete tienen competencias, en materia de menores todas y cada una de las comunidades autónomas son las que tienen responsabilidad por decisión de las Cámaras, porque quiero recordar que fue una ley aprobada por las Cámaras.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia ha hecho sus propios deberes y de ello les doy cuenta. Ha ampliado la planta de fiscales en un número sin precedentes. Sabe usted que el trabajo fundamental corresponde ahora a los fiscales. Se han creado 224 nuevas plazas de fiscales en dos años, a las que se añade la cobertura de 120 plazas, antes no cubiertas por profesionales, lo cual suma 344 nuevas plazas cubiertas por fiscales profesionales en dos años, es decir, un 25 por ciento de incremento de la planta en dos años, que sumado al incremento de los años anteriores supone un 30 por ciento más de plazas de fiscales. A su vez, se les ha especializado en atención al menor.

Se ha cubierto la planta de magistrados, con un aumento del 25 por ciento. Y, sobre todo, hay un dato esencial. Como usted sabe, en los juicios de menores el impulso y la instrucción corresponde al Ministerio Fiscal y la última decisión la tiene la primera instancia. Pues bien, en estos momentos de los 588 jueces no profesionales que había, hoy todas y cada una de estas plazas están cubiertas por jueces profesionales. Se ha formado al personal especializado...

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor ministro de Justicia.

Tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, no dejo de reconocer los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Justicia y el Gobierno en la aplicación de esta ley. El breve tiempo de que dispongo hace que no me sume a esos reconocimientos que usted mismo se hace. Yo he venido a preguntarle qué es lo que va a hacer de aquí en adelante, no sólo lo que ya está hecho, que ya he dicho que reconozco.

Señor Ministro, la ONU exige más cosas que las que usted ha mencionado aquí. En un informe que ha hecho re-

cientemente sobre la aplicación de esta ley en España, exige que se pongan los medios necesarios para que se pueda aplicar.

Al Grupo Parlamentario Socialista no le han sorprendido en absoluto las graves deficiencias que el Defensor del Pueblo ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, porque ya las venían denunciando las propias comunidades y todos los grupos parlamentarios desde el año 1999, un año antes de la entrada en vigor de la ley. Por tanto, no nos causa extrañeza que sigan faltando más juzgados, más jueces, más fiscales y centros de internamiento. Lo que a estas alturas nos parece muy grave, porque como digo faltan tres meses para la entrada en vigor de esa moratoria, es que el Gobierno siga sin asumir el compromiso que adquirió en dos comisiones sectoriales con las comunidades autónomas, para hacer una valoración del importe que implica para las mismas la implantación de esta ley y, además, llevarlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Quiero recordar al señor Ministro que en la reunión de octubre de 2000 en Sevilla, las comunidades autónomas que sí tienen competencias en materia de justicia, y todas las tienen en materia de menores, apoyaron la moratoria de la ley para jóvenes de 18 a 21 años hasta tanto se dilucidara el sistema de financiación. Me alegro, aunque la verdad es que tenía mayores esperanzas, de que sea el ministro de Justicia el que conteste a esta pregunta, porque pensaba que había un cambio de actitud y que Justicia iba a asumir su responsabilidad en cuanto al cumplimiento de la ley y respecto a esas competencias que el Gobierno de España comparte con las comunidades autónomas, pero no es así, no le veo esa actitud.

Por tanto, creo que es urgente que se proceda a esa valoración para la implantación de la ley. Tanto las comunidades autónomas como el Ministerio están haciendo un gran esfuerzo en ese sentido, pero ese esfuerzo debe ser complementado de mutuo acuerdo entre las comunidades autónomas y el Gobierno para elevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera dicha valoración y determinar cómo se va a financiar la ley, si verdaderamente queremos asumir con rigor las obligaciones que de la misma se derivan para las comunidades autónomas y el Gobierno de España.

Hasta que entró en vigor esta ley el Gobierno de España era, y lo sigue siendo, porque la Constitución es inalterable, el responsable de la política penal de jóvenes y mayores —ésta es muy especial—, y he manifestado que sean las comunidades autónomas las que apliquen trece nuevas medidas imponiendo nuevas obligaciones, dentro de la legitimidad, como usted ha dicho, que posee el Legislativo para imponérselas. Pero el Estado debe empezar a asumir los costes de las nuevas obligaciones que está imponiendo en las comunidades autónomas. Y, desde luego, señor Ministro, el Grupo Socialista va a seguir, iniciativa tras iniciativa, intentando que sea posible crear un ámbito de consenso y encuentro entre el Gobierno y las comunidades autónomas tanto para esta ley como para otras. Pero en el caso de ésta, por su importancia, y compartiendo completamente la referencia que ha hecho el ministro, solicitamos que se convoque con urgencia a las comunidades autóno-

mas y al mismo tiempo que el Gobierno de España sigue esforzándose en cumplir y asumir...

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Martínez. Concluyó su tiempo.

Señor Ministro, tampoco tiene usted tiempo. Le concedo veinte segundos.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Muchas gracias por su generosidad, señor Presidente.

Voy a aprovechar bien ese tiempo. Primero, para agradecer a la señora senadora el tono de su intervención. Segundo, para anunciarle que en el mes de noviembre se remitirá, después de haberse acordado por todas las comunidades autónomas, y con un magnífico esfuerzo por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el reglamento de desarrollo de la ley del menor. Y tercero, para anunciarle que es deseo del Gobierno que la ley del menor, que es buena para los menores, se aplique sólo a éstos, de acuerdo con la petición unánime de las comunidades autónomas. Me parece que esa iniciativa es muy oportuna, y espero que las Cámaras la aprueben. Eso es algo de sentido común, señoría, ha sido solicitado por las comunidades autónomas, y al Gobierno le parece razonable.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor ministro de Justicia.

— DON FRANCISCO GRANERO GRANADOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE ESTÁ DESARROLLANDO EL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN LAS OFICINAS DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS (680/000942).

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pregunta del excelentísimo señor don Francisco Granero Granados, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actuaciones que está desarrollando el Ministerio de Justicia para mejorar la atención especializada en las oficinas de asistencia a las víctimas de delitos violentos.

Tiene la palabra el senador Granero Granados.

El señor GRANERO GRANADOS: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, hace apenas unas horas usted comparecía a petición propia ante la Comisión de Justicia de esta Cámara. En su amplia intervención trazaba las líneas maestras de lo que debe ser una política de la Justicia al servicio de los ciudadanos en un plano de igualdad, justicia que ha parecido descolgada en los últimos años —en eso coincidimos todos— del espectacular proceso de modernización que vive España en nuestros días. Señalaba usted con acierto que aquélla no ha seguido el ritmo de ac-

tualización de otros servicios públicos. Sería ocioso jerarquizar las causas, porque están en la mente de todos: la carencia de medios y la insuficiente financiación. Y no sólo eso; también decía usted que era un problema de métodos de trabajo, de hábitos y de inercias. A todo lo anterior sumémosle las nuevas exigencias de una sociedad cada vez más dinámica y compleja.

En tal estado de cosas, a partir del Pacto de Estado por la Justicia, impulsado —es incuestionable— por el Gobierno y la colaboración y participación de casi todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento, y fruto de dicho pacto, cabe significar que por primera vez en nuestra más reciente historia se delimita con claridad la delicada frontera entre la política y la justicia, un modelo que trasciende intereses coyunturales y excluyentes y se basa en soluciones integrales y perdurables.

Por otra parte, en los últimos tiempos estamos asistiendo a una serie de delitos violentos y en algún caso novedosos —el tráfico de inmigrantes—, como la violencia doméstica y las agresiones sexuales, que generan no sólo alarma social, sino además el daño psicológico de las víctimas en su entorno.

Desde una perspectiva global, la pretensión política del Estado, como indica la ley, debe acercarse al problema social y comunitario en que el delito consiste para prevenirlo, pero además para reparar en lo posible el daño padecido por la víctima. En muchas ocasiones el abandono social de éstas a su suerte tras el delito, la falta de apoyo psicológico, la misma intervención en el proceso, las presiones a que se ven sometidas, la necesidad de revivir el delito a través del juicio, o los riesgos que genera su participación en el mismo, producen efectos tan dolorosos para las víctimas como los que se derivan del propio delito.

Siendo así, y teniendo la Justicia una dimensión eminentemente social, exclusiva e inexcusable de servicio público estatal, le pregunto: ¿Señor ministro, qué actuaciones está desarrollando el Ministerio de Justicia para mejorar la atención especializada a las víctimas de delitos violentos?

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Gracias, señor Presidente, y gracias también a usted, señoría, tanto por el tono como por el contenido de su pregunta, que sin duda es extraordinariamente importante.

Efectivamente creo que asistimos a unos momentos en los que se está trabajando conjuntamente en la modernización de nuestra Justicia por parte de todos los que protagonizan ese servicio a los ciudadanos: jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, personal al servicio de la Administración de Justicia y comunidades autónomas con competencias transferidas. Ese esfuerzo de modernización tiene también un gran protagonismo en el cambio de dinámica de nuestro Derecho sancionador.

El Derecho sancionador, señoría, no persigue sólo evitar el delito y sancionar el ya cometido, sino que también

tiene que contar con una visión de protección y apoyo a las víctimas. En este sentido, tanto lo suscrito en el Pacto de Estado como la propia Carta de los Derechos del Ciudadano ante la Administración de Justicia constituyen un paso extraordinariamente novedoso. Hoy el Derecho debe estar sobre todo con los más débiles, y los más débiles son las víctimas, que constituyen un esfuerzo esencial por parte de todos los demócratas cuando hablamos de terrorismo, pero que también deben serlo de respecto de las víctimas del resto de los delitos.

En materia sancionadora el Plan de Lucha contra la Delincuencia puesto en marcha por el Gobierno atiende especialmente a las víctimas más débiles, los menores, y en ese sentido a la represión de los abusos sexuales de menores; a los inmigrantes, y en ese sentido a la represión más contundente y eficaz para quienes trafican ilegalmente con los seres humanos, y también a las víctimas de la violencia, y singularmente de la violencia doméstica.

Creo que nuestra sociedad, nuestro Estado de Derecho ha dado un paso adelante importantísimo. Desgraciadamente la violencia doméstica existe desde que el ser humano es ser humano, pero hoy afortunadamente, desde que se puso en marcha el I Plan de Igualdad de la Mujer, el Estado de Derecho permite a las víctimas superar la doble violencia que hasta ese momento sufrían. Hasta hace tan solo unos años estas víctimas tenían que soportar una doble violencia: la salvaje agresión en su propio domicilio y el hecho de que el Estado no les amparara, al tiempo que la sociedad les obligaba en muchas ocasiones a tragarse las lágrimas y a soportar una losa de silencio que muchas veces las llevaba a ser enterradas en vida.

Hoy afortunadamente nuestro Estado de Derecho permite que cualquier víctima se sienta acogida por el mismo. Considero que en este punto hemos avanzado mucho gracias —y así hay que recordarlo— al I Plan de Igualdad de la Mujer, para cuya existencia en nuestro país tuvo que venir un gobierno de centro. Todavía hay mucho camino que recorrer...

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro. Su tiempo ha finalizado.

— DE DON ALONSO ARROYO HODGSON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA GESTIÓN COORDINADA E INTEGRADA DE LAS FRONTERAS EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL CONTROL DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL (680/000926).

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pregunta del excelentísimo señor don Alonso Arroyo Hodgson, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las actuaciones del Gobierno con respecto a la gestión coordinada e integrada de las fronteras exteriores de la Unión Europea para el control de la inmigración ilegal.

Tiene la palabra el senador Arroyo Hodgson.

El señor ARROYO HODGSON: Gracias, señor Presidente.

Buenos días, señor Ministro, señorías. En las conclusiones del pasado Consejo Europeo de Sevilla, celebrado los días 21 y 22 de junio de 2002, se incluyó un apartado relativo a la puesta en marcha progresiva de una gestión coordinada e integrada de las fronteras exteriores para controlar la inmigración ilegal. En dicho documento se solicita al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que cada uno, dentro del marco de sus competencias, lleven a la práctica las siguientes medidas: la puesta en práctica, antes de final de año de 2002, de operaciones conjuntas en la fronteras exteriores, al parecer una de ellas serían las Islas Canarias; la puesta en práctica inmediata de proyectos piloto abiertos a todos los Estados miembros interesados, y finalmente la creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración de los Estados miembros, así como otras tantas tareas para antes del mes de junio de 2003 que se relacionan en la introducción de la pregunta presentada por escrito en el Registro General de la Cámara y que, por tanto, no considero necesario enumerar.

Por todo ello, señor Ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué actuaciones se han realizado por parte del Gobierno para la puesta en marcha progresiva de la gestión coordinada de las fronteras exteriores de la Unión Europea para controlar la inmigración ilegal?

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Arroyo Hodgson.

Tiene la palabra el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Gracias, señor Presidente.

Señoría, efectivamente, el Consejo Europeo de Sevilla marca una serie de responsabilidades que han de tener los distintos países de la Unión Europea para establecer un plan de gestión de las fronteras exteriores con la finalidad de que se lleven a cabo un conjunto de medidas antes de finalizar este año y otras antes de junio de 2003.

Desde entonces, el Comité Estratégico de Asilo, Inmigración y Fronteras ha venido trabajando para examinar una serie de proyectos sobre la gestión de fronteras exteriores y España ha previsto su participación concretamente en nueve de ellos.

A la vista de estos proyectos, la Presidencia danesa presentó en el último Consejo de Ministros de Justicia e Interior, que celebramos los pasados días 14 y 15 de octubre, un documento que recoge la totalidad de las iniciativas en marcha, estableciendo los plazos para su ejecución y el orden de prioridades en relación con ese plan. Estos proyectos están abiertos a la participación de los distintos países.

Los proyectos iniciados son operaciones conjuntas en las fronteras exteriores —ahora me referiré a ello por la importancia que tienen—, que contemplan la creación de la red de funcionarios de enlace de inmigración en todos y cada uno de los Estados miembros, la elaboración de un modelo común de análisis de riesgos y la fijación de un tronco común de formación para los guardias de fronteras.

En relación al primero de ellos, las operaciones conjuntas en las fronteras exteriores, hay que citar, en primer lugar, los proyectos de fronteras marítimas. Esta iniciativa se aprobó el pasado 26 de septiembre y la dirigen España, Grecia, Reino Unido e Italia. Consiste en una combinación de cuatro operaciones diferentes en el Mediterráneo, dos de las cuales se van a iniciar en el presente año, y se van a centrar en el control de puertos y en los controles en alta mar que —como decía— ya han sido presentadas en España.

La primera de ellas se denomina «Ulises» y tiene como objetivo controlar la inmigración ilegal por vía marítima especialmente desde África y, por tanto, tiene una repercusión muy importante para las Islas Canarias.

La segunda, la denominada «Operación Río» tiene como objetivo el control en especial de los puertos y la evaluación de los riesgos de la inmigración ilegal en la Unión Europea.

Estas dos operaciones serán coordinadas por España y siguen abiertas a todos los miembros de la Unión Europea que quieran participar. Además, hay otras dos operaciones. Una se realizará antes de finalizar junio de 2003 y la cuarta, que se va a desarrollar de forma continua y estable, se centrará en la cooperación con los países de tránsito y los países de origen.

La primera de ellas es la operación «Visa» que se llevará a cabo en los aeropuertos internacionales, y la operación de fronteras terrestres orientales, que se aprobó el pasado 26 de septiembre, será dirigida por Grecia.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor ministro del Interior.

En turno de réplica, tiene la palabra el senador Arroyo.

El señor ARROYO HODGSON: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, gracias por su información que es novedosa, importante e interesante. Simplemente quiero decirle que usted, en contestación a una pregunta del senador Froilán Rodríguez, dijo que España —y leo el «Diario de Sesiones»— está apostando por una inmigración legal y, por tanto, como país de acogida debe seguir siéndolo para aquellos inmigrantes que vienen a trabajar, a convivir con nosotros y, por consiguiente, ha de poder garantizarse la integración. Estoy extractando lo que considero más importante. Añadía que la estrategia respecto de la inmigración ilegal debe ser la repatriación, es decir, la expulsión y la devolución al territorio desde el que han entrado en España de manera ilegal. La política del Gobierno es: inmigración legal, sí; inmigración ilegal, no.

Tengo la información del Consejo de Ministros celebrado en Luxemburgo los pasados días 14 y 15 al que usted asistió. Ese acuerdo entre España, Grecia, Italia y el Reino Unido consistente en que participen patrulleras conjuntas de la Guardia Civil es muy interesante, y por cierto, yo me atrevo a hacer una sugerencia. En la Cumbre de Sevilla y en la Presidencia danesa se dice que es interesante involucrar mediante acuerdos a países terceros. Quizás no

estaría de más estudiar la posible participación de marroquíes en las patrulleras comunitarias que van a vigilar las fronteras exteriores de la Unión Europea en el sur del sur, en las Islas Canarias.

España es un país de acogida y nosotros también decimos sí a la inmigración legal, sí a la solidaridad, sí a la cooperación al desarrollo, pero no a la inmigración ilegal, no a la inmigración descontrolada.

En Canarias existe una gran preocupación y una gran desazón por la inmigración ilegal marroquí y subsahariana y la inmigración debida a los que entran como turistas y prolongan su estancia no superior a tres meses...

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Arroyo Hodgson. Ha terminado su tiempo.

Señor ministro del Interior, le quedan cinco segundos.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Panagua): Gracias.

Cinco segundos para mostrar la conformidad con lo que decía el señor senador. La política de inmigración tiene que ser, en primer lugar, una política europea. Cuando está entrando en Canarias un inmigrante ilegal está entrando en Europa y, por tanto la política de inmigración ilegal tiene que ser una política conjunta y cada vez más dirigida con toda firmeza a que su objetivo sea la devolución de la persona al país del que salió ilegalmente. Respecto a los que llegan legalmente, hagamos todos los esfuerzos para que se integren desde el punto de vista laboral y de la educación a la hora de convivir en España, con todos los derechos, al igual que hace el resto de los españoles.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor ministro del Interior.

— DE DON FROILÁN GERMÁN RODRÍGUEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LAS PRINCIPALES ACCIONES PARA EL AÑO 2003 QUE CONTEMPLA EL PLAN DE SEGURIDAD PARA EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO (680/000927).

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Siguiendo pregunta, del excelentísimo señor don Froilán Germán Rodríguez Díaz, del Grupo Parlamentario de senadores de Coalición Canaria, sobre las principales acciones para el año 2003 que contempla el Plan de Seguridad para el archipiélago canario.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Díaz.

El señor RODRÍGUEZ DÍAZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, en el año 1997, atendiendo a determinadas particularidades del archipiélago que aconsejaban un singular tratamiento, el Ministerio del Interior puso en marcha el Plan de Seguridad Integral para Canarias, plan que en principio tenía como fecha de caducidad el año

2000 y una inversión global en las cuatro anualidades de más de 42 millones de euros.

Sin embargo, teniendo en cuenta que no se habían cumplido todos los objetivos planteados en un principio y a petición del Gobierno de Canarias, se decidió prorrogar dicho plan, con el que se pretende reducir los índices de delincuencia de las islas al tiempo que atender las especificidades y coyunturas que actualmente se plantean en el archipiélago, como, por ejemplo, el aumento del flujo migratorio irregular.

En el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, que actualmente se está debatiendo en las Cortes Generales, figura en las cuentas de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior una partida de 3.005.060 euros para la financiación del Plan de Seguridad del Archipiélago Canario.

Por todo ello, se formula la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las principales acciones que contempla para el año 2003 el Plan de Seguridad para el archipiélago canario? Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Rodríguez Díaz.

Tiene la palabra el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Panagua): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, efectivamente, entre las políticas estructurales de la Secretaría de Estado de Seguridad que recogen los presupuestos para 2003 aparece un año más el Plan de Seguridad para el Archipiélago Canario. Esta partida, que, como usted bien ha dicho, viene dotándose de manera continua, para el año 2003 aparece con 3.005.060 euros.

Este plan, señoría, es el reconocimiento por parte del Gobierno de determinados aspectos propios de la singularidad del archipiélago y de sus repercusiones en materia de seguridad e inmigración, reconocimiento que se viene plasmando en inversiones en personal, en medios materiales y en la construcción y rehabilitación de comisarías y cuarteles que ha supuesto un importante esfuerzo inversor y al que también habría que añadir la implantación y puesta en funcionamiento del sistema integrado de vigilancia exterior en las islas Canarias.

Entre las principales actuaciones que se van a acometer en el marco de este Plan integral de seguridad para Canarias con los presupuestos de este año, en el ámbito de la Dirección General de la Guardia Civil se va a destinar un total de 1.502.530 euros para las siguientes inversiones —voy a citar sólo las más importantes—: obras en el acuartelamiento de Corralejo y Yaiza y, en cuanto a las partidas de automoción, se van a adquirir vehículos uniformados y especiales y material auxiliar, mobiliarios y enseres para servicios de abastecimiento y armamento y material auxiliar para estos servicios y para el equipamiento policial, así como distinto material informático.

En el ámbito de la Dirección General de la Policía, se van a invertir 1.500.000 euros el próximo año en obras en infraestructuras, que se centran fundamentalmente en las obras de rehabilitación de la comisaría de policía de Santa

Cruz de La Palma —la segunda anualidad—, la impermeabilización de la comisaría de la policía de Maspalomas, una nueva comisaría de policía de Arrecife, la urbanización en la comisaría de policía de Telde y la reforma del servicio de automoción de la jefatura superior de policía de Las Palmas, además de otras inversiones en medios materiales como automoción y mobiliario para todas estas obras y las que se han realizado con cargo a los presupuestos de años anteriores, cuyo mobiliario y dotación hay que completar. Todo ello sin perjuicio de otras inversiones que corresponden a esa comunidad autónoma con cargo a partidas generales en los presupuestos del Ministerio del Interior para 2003, como es la del SIVE, a la que antes hacía referencia.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor ministro del Interior.

Tiene la palabra el senador don Froilán Germán Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ DÍAZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, le agradezco las cifras y la información que nos ha suministrado, pero nos preocupa que, a pesar de la situación específica de Canarias, esa inversión sea bastante inferior a la que ha tenido lugar durante los cuatro años anteriores de este plan especial que ha supuesto una media de más de 10 millones de euros, y estamos viendo que ahora esta media queda en torno a los 3 millones.

Consideramos que, tanto la inversión para la Dirección General de la Policía como para la Guardia Civil, 1,5 millones en infraestructuras son insuficientes, sobre todo teniendo en cuenta dos aspectos importantes. Primero, que no se pueden emplear —y de hecho por eso está este plan específico— los criterios continentales, por denominarlos de alguna manera, sino que el fraccionamiento territorial implica que, a veces, islas con una población relativamente escasa requieran inversiones en infraestructuras más allá de lo que una simple lectura por el número de población podría indicar.

Por otro lado, el crecimiento turístico e inmigratorio, así como la situación en algunas de las principales ciudades del archipiélago, requiere mantener ese esfuerzo inversor, que tenemos que reconocer que ha hecho el Gobierno en los cuatro años anteriores de vigencia del plan, por lo menos entre 1997 y 2000, pero también requiere que ese esfuerzo, esta tensión no disminuya porque, si no, esos indicadores que relativamente han ido mejorando en estos últimos años —digo relativamente porque algunos siguen siendo algo preocupantes— pueden invertir esa tendencia.

Por lo tanto, vaya desde aquí nuestro reconocimiento al esfuerzo realizado, recordando que aún queda mucho por hacer, manteniendo esa tensión que mencionaba por parte del Ministerio para los asuntos específicos que Canarias plantea en materia de seguridad.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador don Froilán Rodríguez.

Tiene la palabra el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Pania-gua): Gracias, señor Presidente.

Señoría, el plan que he expresado es exclusivamente el específico de Canarias, que viene siendo una cantidad homogénea en 2000, 2001, 2002, y ahora se repite para 2003. Además, en el SIVE hay inversiones muy importantes.

Este año, en este proyecto tan fundamental para Canarias se van a invertir 1.670 millones más que en el anterior, por lo tanto, se van a superar los 27.000 millones en un proyecto de una gran envergadura. (*El señor Presidente ocupa la Presidencia.*) También para las dotaciones generales, como son el plan de seguridad de los cuarteles y la mejora de infraestructura de los mismos que, como es un plan global, no entra dentro del específico de Canarias, aunque lógicamente afecta a los acuartelamientos y a las comisarías de la comunidad...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro

— DE DOÑA MARÍA DEL MAR AGÜERO RUANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN AL ESTADO ACTUAL DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE VIGILANCIA EXTERIOR (SIVE) (680/000941).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora doña María del Mar Agüero sobre la valoración del Gobierno en relación al estado actual de la implantación del sistema integrado de vigilancia exterior.

Tiene la palabra la senadora Agüero Ruano.

La señora AGÜERO RUANO: Gracias, señor Presidente. Enhorabuena por su nombramiento, y espero vernos muchos años, usted ahí y yo aquí. (*Risas.*)

Señor Ministro, cuando el Ministerio del Interior puso en marcha el Sistema Integral de Vigilancia Exterior pensábamos—y seguimos considerándolo— que este proyecto de alta tecnología con radares y cámaras de visión nocturna y diurna permitiría detectar embarcaciones que se acercasen a cualquier punto de la costa andaluza y así la Guardia Civil podría interceptar las pateras con inmigrantes ilegales o con drogas. Con ello se trataría de garantizar la seguridad de nuestras costas y de detener las mafias que trafican con drogas y con personas.

Estamos seguros de que el SIVE además puede acabar con algo más importante, como es la dinámica de tragedias humanas, que nadie debe de permitir, procedentes del país vecino, ante la desidia de las autoridades marroquíes para combatir la inmigración ilegal. Pero, señor ministro, en unas recientes declaraciones de representantes del Partido Socialista andaluz, siguiendo el discurso trazado por el presidente de la Junta de Andalucía, se habla del absoluto fracaso del Sistema de Vigilancia Exterior y su más que deficiente eficacia y operatividad. Sostienen los socialistas que desde la puesta en marcha de este Sistema, el pasado 18 de agosto, más de mil inmigrantes han sido intercepta-

dos en las playas andaluzas, lo que, según ellos, confirma la ineficacia y nula capacidad para acometer con acierto el fenómeno de la inmigración, porque, según el presidente andaluz, el problema de la inmigración no se soluciona con los controles electrónicos, ya que una vez que se detecta la patera, no se puede devolver a Marruecos.

Como comprenderá, señor Ministro, estas manifestaciones me han dejado un poco traspuesta y sobre todo por venir de quien vienen, porque creemos firmemente que es imprescindible acometer este plan, y deseamos que en breve se puedan poner en marcha equipos SIVE, como el que en estos momentos está en Algeciras, en todas las provincias costeras andaluzas. Por ello le pregunto, ¿qué valoración hace el Gobierno del estado actual de implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior?

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Muchas gracias, señor Presidente. Me sumo a las felicitaciones que ha realizado la señora senadora a la Presidencia.

El sistema SIVE es uno de los proyectos más importantes, ambiciosos y modernos que se ha implantado en el conjunto de la Unión Europea para el control integral de las fronteras, con un esfuerzo presupuestario sin precedentes para controlar la responsabilidad que tiene España respecto a sus fronteras exteriores, vía marítima, con el sur de Europa. Éste es un sistema que está comenzando su andadura y, por tanto, difícilmente se puede hablar con razón de fracaso de un sistema que acaba de comenzar a implantarse, y que lo hará en los próximos años de manera paulatina, tal y como contestaba en la respuesta a la pregunta anterior.

Este sistema lo que consigue es detectar la casi totalidad de las embarcaciones que se acercan hacia nuestras costas; lógicamente, no es un sistema para devolverlas, sino para detenerlas y, por tanto, poner a disposición de la Justicia, a los que trafican con seres humanos, detener a los inmigrantes ilegales y comenzar el proceso de devolución y de repatriación —como ya este año estamos haciendo, y que luego tendré oportunidad de decir— que asciende ya a más de 50.000 personas en los siete primeros meses del año. Pero, además, sirve para otra cosa muy importante —y es un grave error decir que no es útil—: para salvar cientos de vidas humanas todos los meses por la Guardia Civil.

Cuando a través del Sistema se detectan las embarcaciones que están en dificultades, que están zozobrando, que se están hundiendo, llega nuestra Guardia Civil y salva estas vidas humanas, poner en cuestión un sistema que consigue unos efectos humanitarios de esta trascendencia, pero también de lucha contra la inmigración ilegal, es un gravísimo error, pero vamos a continuar con esta responsabilidad que tenemos, no sólo con España, sino con el conjunto de la Unión Europea, de proteger nuestras fronteras y detectar a todos aquellos que quieren entrar de manera ilegal, para posteriormente ser devueltos a través de los procedimientos legales, que parece que a algunos se les olvida.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

En turno de réplica, ¿desea intervenir la senadora Agüero? (*Pausa.*)

Gracias, señoría.

— DE DON ARTURO GONZÁLEZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS MOTIVOS DEL RETRASO EN EL COBRO DE LAS PRESTACIONES Y SUBSIDIOS POR DESEMPLEO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN (680/000913).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Arturo González López, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos del retraso en el cobro de las prestaciones y subsidios por desempleo en la comunidad autónoma de Castilla y León.

Tiene la palabra el senador González López.

El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, creo que conoce usted la situación que se está produciendo en la comunidad autónoma de Castilla y León en cuanto al retraso en el pago de las prestaciones y subsidios por desempleo. A la desgracia de quedarse sin trabajo, se les suma ahora a los parados la demora y el retraso en el cobro de lo que realmente les corresponde. Por eso le formulo esta pregunta en los términos que ha expresado la Presidencia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Gracias, señor Presidente.

Señoría, según los datos que constan en estos momentos en el Ministerio no existe tal retraso, y el procedimiento que se está siguiendo cumple lo establecido en el artículo 228.1 de la Ley General de la Seguridad Social.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

En turno de réplica, tiene la palabra el senador González López.

El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, sus datos y los míos no son iguales. Le pongo el ejemplo de mi provincia, Segovia, donde los índices de demora, que antes estaban en una semana, en estos momentos están en 28 días, y hay algunas provincias de Castilla y León donde están peor, como es el caso de Valladolid, donde están en 37 días, o en León, donde están

en 38. Esto significa que algunos de los parados tardan más de dos meses en cobrar la prestación que legalmente les corresponde. Antes se hacía en el mismo mes en que se tramitaba.

Pienso que esto es debido, fundamentalmente, a la falta de previsión que han tenido ustedes a la hora de establecer las transferencias. Han hecho unas transferencias de personal con los pies. No han tenido en cuenta la cantidad tan grande de personal que había que trasvasar, y lo que han hecho ha sido vestir a un santo para desnudar a otro. Han dejado las plantillas bajo mínimos, las no transferidas y las de aquellos que se encargan de los pagos a los desempleados. En algunas provincias incluso se han quedado sin personal administrativo porque se han transferido todos los auxiliares. Es comprensible que tuvieran prisa en ser transferidos porque ganan más y, además, tienen más posibilidades de promoción. Sin embargo, su Ministerio tiene que seguir garantizando este servicio con eficacia a todos los ciudadanos y a todos los colectivos, pero fundamentalmente a los más débiles, como es el caso de estos ciudadanos.

Señor Ministro, si un desempleado del que depende una familia tiene que esperar dos meses a cobrar la prestación que legalmente le corresponde y que no es ningún regalo, está claro que el sistema de cobertura que ustedes gestionan y aplican falla estrepitosamente, y desde luego no falla por la falta de honestidad ni por el pillaje de los parados, sino que falla por la incompetencia y la inoperancia de su Ministerio. Luchen ustedes contra el paro, luchen ustedes contra la precariedad en el empleo y luchen contra la siniestralidad laboral, pero dejen ustedes de maltratar a los empleados y faciliten ustedes el cobro de las prestaciones, porque para la mayoría de las familias es la única renta que tienen.

Viendo el trato que se está dando a los parados, uno tiene la sensación de que el Gobierno ha equivocado el objetivo y, en vez de estar luchando contra el paro, como es su obligación, está luchando contra los desempleados, como si ellos fueran los causantes del aumento del paro. La situación puede empeorar, porque la estación da para ello, y por eso le ruego que se ponga manos a la obra.

Además, es una gran paradoja que quien tiene que velar por completar las plantillas y por paliar el desempleo tenga la suya sin completar y en una situación de precariedad. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

En turno de réplica, tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Gracias, señor Presidente.

Señoría, ya le he dicho que el artículo 228.1 de la Ley General de la Seguridad Social establece un plazo para el reconocimiento o la denegación de la prestación de 15 días hábiles, y tengo que afirmar de manera rotunda que ese plazo está siendo escrupulosamente respetado en la comunidad autónoma de Castilla y León. Según los datos que obran en el Ministerio de Trabajo y que son absolutamente fiables, la media de demora en el reconocimiento de las

prestaciones ha sido, en el período enero-septiembre de este mismo año, de 18,3 días naturales. Le recuerdo que la Ley General de la Seguridad Social habla de días hábiles. Y ha tenido este período de demora de media en un año en el que, como usted ha dicho, se han realizado las transferencias de las políticas activas de empleo, proceso que no se le escapa a su señoría que requiere adaptación y ajustes en tiempos y en medios personales. Luego, después de ese proceso nos podemos sentir especialmente satisfechos de que la demora siga en estos momentos dentro de los plazos establecidos en la ley. Lógicamente, yo no estoy satisfecho con ese período de demora por más legal que sea y por más establecido que esté. Quiero agilizar en todo lo posible el reconocimiento y el cobro de las prestaciones por desempleo, y para ello vamos a dotar de un nuevo impulso las políticas activas de empleo, las políticas de intermediación y formación, que van destinadas a los desempleados, como su señoría bien sabe, para que éstos puedan dejar de serlo.

Comparto el interés que su señoría manifiesta en esta Cámara a la hora de preocuparse por el subsidio —ya he dicho que me parece bien—, pero yo invitaría a sus señorías y al resto del Grupo Parlamentario Socialista a que también se preocuparan por cómo esas personas que están en el paro pueden dejarlo para poder conseguir un puesto de trabajo. Eso es lo fundamental, y a ello nos hemos dedicado en estos últimos años con algún éxito, como su señoría reconocerá, en función de los resultados obtenidos. Pero no contentos con eso, en los presupuestos que para el próximo ejercicio se están debatiendo en este momento en el Congreso de los Diputados, hemos destinado más recursos humanos y materiales para las oficinas de empleo, a las que se van a incorporar dentro de poco cerca de 5.000 nuevos trabajadores para poder atender estos servicios públicos de empleo desde una atención mucho más personalizada y buscando, lógicamente, la mayor agilidad posible.

Creo sinceramente que los avances en las políticas de empleo han sido muy notorios en los últimos años, y en esa dirección vamos a seguir trabajando. Además, después de haber hecho todo el proceso de transferencias, con el que creo que su señoría estará de acuerdo porque es un instrumento más que tiene en estos momentos la comunidad autónoma de Castilla y León para poder defender a sus trabajadores, después de haber realizado ese período de transferencias...

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

— DE DON JOSÉ CABRERO PALOMARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LOS EFECTOS NEGATIVOS QUE SE PUEDEN PRODUCIR EN EL MEDIO RURAL POR LA APLICACIÓN, A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE, DE LOS NUEVOS CRITERIOS DE REGULACIÓN DE LAS BAJAS EN EL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (REASS) (680/000922).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don José Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la valoración del Gobierno en relación con los efectos negativos que se pueden producir en el medio rural por la aplicación, a partir del 1 de noviembre, de los nuevos criterios de regulación de las bajas en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS).

Tiene la palabra el senador Cabrero Palomares.

El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, el decreto que modifica el derecho de prestaciones por desempleo ha tenido ya efectos muy negativos en Andalucía y en Extremadura. En el proceso de diálogo que ha seguido su Gobierno con los sindicatos no se ha puesto encima de la mesa precisamente la restitución del derecho al subsidio de desempleo agrícola. Además, recientemente la Tesorería General de la Seguridad Social ha enviado una comunicación a cada uno de los trabajadores eventuales por cuenta ajena en la que se comunica toda una serie de medidas que endurecen las condiciones para mantener el alta en el Régimen Especial Agrario.

Señor Ministro, esto tendrá unos efectos tremendamente negativos en el medio rural, sobre todo en Andalucía y en Extremadura. Le pedimos que anuncie aquí que en ese diálogo necesario con los sindicatos se restituirá el derecho al subsidio de desempleo agrícola en Andalucía y en Extremadura. Y también le pedimos, señor Ministro, que se paralicen, que no se pongan en marcha a partir del 1 de noviembre, como se dice en esa comunicación, esas medidas que tanto endurecen las condiciones para mantenerse en alta en el Régimen Especial Agrario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Muchas gracias, señor Presidente.

Su señoría sabe perfectamente que la aplicación del decreto no produce ningún efecto negativo sino todo lo contrario, es decir, produce mejoras sustanciales. Por tanto, es una gran irresponsabilidad que su señoría traiga a la Cámara la pregunta en esos términos. Estoy seguro de que su señoría lo sabe. Sabiéndolo es una gran irresponsabilidad, pero aún sería peor que no lo supiera.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

En turno de réplica tiene la palabra el senador Cabrero Palomares.

El señor CABRERO PALOMARES: Señor Ministro, como he dicho, en términos de derecho al subsidio de desempleo hay ya 5.000 personas en Andalucía a las que se les ha denegado ese subsidio a causa del «decretazo».

Y con respecto a la comunicación de la Tesorería General de la Seguridad Social, voy a poner el ejemplo de una

mujer de 63 años que lleve 13 años cotizando. Cuando tenga 65 años, es decir, cuando llegue a la edad de jubilación, como no puede declarar jornadas reales porque no ha ido nunca a la campaña de recolección de la aceituna en cualquier pueblo de Andalucía, por poner ese ejemplo, esa persona no tendrá cotizados los 15 años necesarios y tendrá un gran problema para el cobro de su pensión de jubilación.

Usted conoce eso y lo quiere ocultar, pero es tremendamente grave. Como esa casuística, puedo citarle miles y miles más que afectan, sobre todo, a las trabajadoras del medio rural de Andalucía, Extremadura, las dos Castillas y Murcia. Cientos de miles de personas se verán afectadas por eso, y usted tendrá que explicar por qué sigue sometiendo a los trabajadores y trabajadoras del medio rural de Andalucía a esa presión psicológica permanente. ¿Por qué siguen ustedes manteniendo una actitud de total negligencia y de fuerte presión ante la gente de Andalucía? Usted tendrá que explicar eso.

Hoy no comparten el decreto que regula la modificación de prestaciones del desempleo agrario ni la comunicación enviada a los trabajadores eventuales por cuenta ajena ni los sindicatos, ni los trabajadores, ni los empresarios, que también tienen muchísimas dificultades a la hora de cumplir sus obligaciones en materia de altas en la Seguridad Social.

¿Cómo pueden seguir hacia adelante con esas medidas que cada vez provocan más rechazo a su partido y a su Gobierno en Andalucía? Parece que el enemigo lo tienen en casa, lo digo por la Presidenta del PP en Andalucía y senadora en esta Cámara, la señora Teófila.

Nosotros, señor Ministro, le pedimos prudencia, diálogo, negociación con los sindicatos y acuerdos que permitan mejorar las condiciones de los trabajadores en cuanto a contratación y empleo. Queremos trabajo para el medio rural de Andalucía y, si no lo consigue, señor Ministro, no rompa derechos fundamentales de los hombres y mujeres de Andalucía como el derecho de prestación al desempleo.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Trabajo.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, entienda lo que voy a decirle con todo el respeto. No sé si la falta de veracidad de todas sus afirmaciones es producto de la ignorancia o de la mala intención. Se lo digo sinceramente, porque su señoría debe saber lo que voy a contar a continuación.

El Real Decreto al que su señoría hace referencia, de 24 de mayo, modifica los mecanismos de afiliación de altas y bajas de los trabajadores del Régimen Especial Agrario. Ese decreto tiene su origen en un acuerdo para la mejora y desarrollo del sistema de protección social firmado por el Gobierno, Comisiones Obreras, la CEOE y CEPYME, y

posteriormente ha sido apoyado en su desarrollo por los agentes sociales en el marco de la Comisión de seguimiento del acuerdo.

Habría observado su señoría, y no se le escapará, que ni una sola organización sindical, ni una sola, ha criticado en estos momentos este decreto. Su señoría no encontrará ni una declaración en contra porque lo han fomentado las organizaciones sindicales, que nos han pedido que reguláramos esta cuestión, como tampoco encontrará —y reto a su señoría— ni una sola organización sindical que avale las tesis de su señoría.

Al amparo de una circular explicativa, mejor o peor redactada, el Grupo de Izquierda Unida ha querido, como siempre, sacar beneficio de un debate confundiendo y engañando a la opinión pública. Lo que se hace con ese decreto es justo lo contrario, ensanchar los derechos y las prestaciones de los trabajadores agrarios. Su señoría debería saberlo porque todavía es más preocupante su ignorancia a que esté haciendo demagogia con su pregunta, que tiene fácil contestación.

El único objetivo del decreto es garantizar que el trabajador esté de alta durante todo el desempeño de su actividad laboral, lo que permite garantizar más plenamente su protección social y sus prestaciones futuras. Ahora, señoría, la baja por la situación de actividad ininterrumpida es de 3 meses y con el decreto se amplía a 6 meses. Luego, ha ganado el trabajador, a petición del Gobierno y con el consenso de las centrales sindicales, en sus prestaciones y garantías futuras.

Por tanto, no es más que una gran demagogia traer aquí una cuestión sabiendo que las organizaciones sindicales están de acuerdo, porque lo han suscrito, e intentando engañar a la opinión pública y a los trabajadores agrarios. Es, simplemente, una muestra de irresponsabilidad. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

— DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE EL SEGUIMIENTO QUE REALIZA EL GOBIERNO DE LOS TRABAJOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL FUTURO DE LA UNIÓN EUROPEA TENDENTES A CONSEGUIR QUE SE AVANCE EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO (680/000923).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre el seguimiento que realiza el Gobierno de los trabajos de la Convención sobre el futuro de la Unión Europea tendentes a conseguir que se avance en materia de igualdad de género.

Tiene la palabra el senador Varela i Serra.

El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, a principios de este mes una representación de la Comisión Mixta Congreso-Senado de los De-

rechos de la Mujer fuimos a Bruselas, al Parlamento Europeo, a una reunión de la Comisión de Derechos de la Mujer y pudimos percibir una desazón y un pesimismo de los diversos grupos que hablaron sobre si en los futuros trabajos de la Convención se avanzaría o no sobre la igualdad de los derechos de la mujer en toda Europa. Había pesimismo con la representación paritaria en la Convención, que no es culpa del Gobierno, sino de una decisión que se tomó en el Parlamento.

Me gustaría que me diera información sobre los trabajos que se están haciendo, porque interesa ver si se va a avanzar o no, porque, insisto, había una considerable preocupación, y me gustaría conocer la respuesta del Gobierno sobre esta cuestión.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Muchas gracias, señor Presidente.

Comparto plenamente la preocupación de su señoría en la dirección de que se logre un mayor y más efectivo avance en la igualdad de género en el seno de la Unión Europea, porque sabe su señoría que es un problema que nos afecta a todos, especialmente a todos los países de la Unión Europea que tenemos una voluntad inequívoca de trabajar en esa dirección pero que tenemos que acertar en las políticas que pongamos en funcionamiento en los próximos tiempos.

El Instituto de la Mujer está participando activamente en los trabajos del Comité consultivo para la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres de la Comisión Europea, en el seno del cual, como su señoría sabe, se ha creado un grupo de trabajo que ha realizado diversas aportaciones a la Convención para que las tenga en cuenta; concretamente, en un documento que se ha aprobado el pasado mes de octubre el Comité consultivo ha destacado la necesidad de dotar al principio de igualdad de género del mismo «status» jurídico que otras políticas que en estos momentos están en vigor en la Unión y ha realizado, entre otras, las siguientes propuestas concretas que entiende que se deben de contemplar en el futuro marco constitucional de la Unión.

Las propuestas son las siguientes: el futuro tratado constitucional de la Unión debe reafirmar el objetivo de igualdad entre hombres y mujeres y debe estar comprendido en la futura Constitución europea; el tratado debería incluir un título independiente sobre igualdad de género que garantice el respeto a lo ya alcanzado y fortalezca la base política y legal de la misma; también se establece que el nuevo tratado debería edificar la igualdad de género sobre los cimientos de lo ya establecido en la Carta de los Derechos Fundamentales.

El actual artículo 29 del Tratado de la Unión debería ser modificado para contemplar expresamente la explotación sexual y la violencia contra las mujeres en una Unión que

garantice a los ciudadanos altos niveles de seguridad. Otro apartado habla de que para alcanzar la democracia paritaria, la participación equilibrada de mujeres y hombres debería establecerse como objetivo para todas las instituciones comunitarias, y un último punto es el que se refiere a que el nuevo tratado, que se está en estos momentos negociando, debería incidir en el papel del diálogo civil y la participación de asociaciones de mujeres en el mismo.

Todos éstos son objetivos que comparte plenamente el Gobierno de España, que forman parte esencial de nuestras políticas nacionales, las que estamos haciendo en nuestro país, y que vamos a luchar activamente por que se puedan incorporar a este nuevo marco jurídico de la Unión Europea.

Los trabajos que estamos desarrollando en nuestro país son sobradamente conocidos por su señoría y lo que estamos intentando es que, lógicamente, esta línea de actuación política, esta voluntad inequívoca del Gobierno también podamos defenderla en las instituciones europeas y que el nuevo marco constitucional europeo salga ya con un reflejo inequívoco de unas políticas de igualdad de género.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

En turno de réplica, tiene la palabra el senador Varela i Serra.

El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señor Ministro.

Agradezco sus explicaciones y espero a que el Gobierno siga vigilante para que esos objetivos se concreten realmente en los futuros tratados. Por nuestra parte, como parlamentarios también haremos el seguimiento del Gobierno y de las discusiones en la Comisión Mixta Congreso-Senado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

— DE DOÑA INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO ANTE LAS AUTORIDADES TURCAS PARA LA RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN QUE AFECTA AL MENOR BURAK KALEMCI Y SU MADRE INÉS NIETO (680/000928).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la excelentísima señora doña Inmaculada Loroño Ormaechea, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las actuaciones del Gobierno ante las autoridades turcas para la resolución de la situación que afecta al menor Burak Kalemci y su madre Inés Nieto.

Tiene la palabra la senadora Loroño.

La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, en la línea de la cortesía parlamentaria que ha presidido esta Cámara, quiero darle la enhorabuena por su nombramiento y trasladar al señor Ministro la pregunta en los términos formulados desde la Presidencia.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Muchas gracias, señor Presidente.

Muchísimas gracias, señoría, por la formulación de la pregunta, es una cuestión que nos interesa a todos y, desde luego, espero que comprenda mi representación hoy en lugar de la Ministra de Asuntos Exteriores, que no ha podido asistir a este Pleno debido a compromisos ineludibles que había contraído con anterioridad. Pero sí me ha facilitado toda la información para que se la pueda ofrecer a su señoría.

El caso de este niño ha tenido un seguimiento intenso y permanente por parte de las autoridades judiciales españolas desde que el menor fue secuestrado por su padre en Rentería el 18 de enero del pasado año. Presumiblemente —porque no se puede afirmar de forma categórica— fue trasladado por su padre a Turquía, si bien, como he dicho a su señoría, no existe constancia de su entrada por la frontera porque probablemente el viaje se realizó en carretera por automóvil sin que exista control policial.

Poco tiempo después del secuestro, Interpol extendió orden internacional de búsqueda y captura contra el padre por los presuntos delitos de detención ilegal y de coacciones, aunque por desgracia, señoría, la denuncia no ha prosperado en Turquía, ya que su Derecho Penal interno no configura como delito la actuación del padre.

Por su parte, el Ministerio de Justicia español, en el marco de lo previsto en el Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores, remitió al Ministerio de Justicia turco solicitud de retorno del niño. Según el Ministerio de Justicia turco el niño no ha sido localizado y ni siquiera existe constancia de su ingreso en Turquía. Nos encontramos ante una situación muy lamentable, sin duda propiciada también por la mentalidad social dominante en Turquía que tiende a favorecer por cualquier medio que un menor sea educado en un ambiente y en un marco familiar islámico.

Ante esta situación, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de España en Ankara han realizado numerosas gestiones para presionar a las autoridades locales responsables. Concretamente, nuestra Embajada en Turquía ha prestado apoyo y asistencia en todo momento a la madre del niño en sus viajes al país, el último de ellos fue en este mismo mes de octubre.

Asimismo, la Ministra de Asuntos Exteriores se ha dirigido por carta a su homólogo turco el pasado 16 de octubre solicitándole una intervención más activa de la policía para localizar al niño e instándole a una pronta solución del problema. Esta misma petición fue transmitida personalmente el día siguiente, 17 de octubre, por el embajador de España

en Ankara al Subsecretario turco del Ministerio de Asuntos Exteriores.

No le quepa duda a su señoría de que el Gobierno de España va a hacer todo lo posible para esclarecer la situación que afecta al menor y confiamos en encontrar la misma disposición por parte del Gobierno de Turquía. En cualquier caso, insisto, no le quepa duda de que vamos a poner todos los medios a nuestro alcance para esclarecer esta situación e intentar con éxito el retorno del niño a España.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. En turno de réplica, tiene la palabra la senadora Loroño.

La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, le agradezco su extensa explicación a la pregunta formulada por esta senadora, así como su respuesta en nombre del Gobierno aunque, como bien ha dicho, podría corresponder a Asuntos Exteriores; incluso diría más, es una cuestión que afecta también a su Ministerio desde el marco que supone una nueva forma de violencia que se ejerce sobre la mujer en muchos casos y, por otra parte, a los Ministerios de Justicia e Interior.

Señor Ministro, quiero decirle que Turquía es un país que ha suscrito el Convenio de La Haya que regula los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. En ese sentido, en nuestro caso, corresponde al Ministerio de Justicia como autoridad central en el marco de dicho Convenio de La Haya, que también hemos suscrito, trasladar a la autoridad central turca la documentación pertinente y exigirle que cumpla con los mecanismos planteados en dicho Convenio.

Los hechos son que la Corte de Justicia de Ankara en su momento reconoció la patria potestad de Burak, el menor, a su madre Inés Nieto. También se cursó orden a través de la Interpol de búsqueda del padre y del menor, orden que no tiene efecto en Turquía como bien ha comentado usted, señor Ministro. Por otro lado, se da la paradoja de que la madre de Burak, acompañada por personal de la embajada —también hay que reconocer la labor y la tarea que está desarrollando en este caso la Embajada de España en Turquía—, ha estado buscando a su hijo con grandes dificultades en los distintos centros escolares. El hecho es que en estos momentos incluso se ha cursado una orden ministerial que le impide consultar los anuarios escolares en ese ánimo y en ese intento de localizar a su hijo en alguno de los centros escolares del país. También en este caso ha mediado la embajada y se ha dirigido a las autoridades para que lo vuelvan a autorizar y, por tanto, garanticen la búsqueda del menor.

Señor Ministro, creemos que se está cometiendo un grave incumplimiento del Convenio de La Haya suscrito por Turquía y al que Turquía se ha adherido. En ese sentido, señor Ministro, mi pregunta es: ¿qué nivel de implicación tiene voluntad de asumir el Gobierno para mediar ante la autoridad central turca y ayudar así a Inés Nieto y a su hijo a que regresen, en concreto a Rentería? Lo que le pido en nombre de mi grupo es que se exija al Gobierno turco que cumpla con los convenios que suscribe, porque

además creo que el marco de dicho convenio obliga a España a exigir a la autoridad turca el cumplimiento de lo que ha aprobado y a lo que se ha adherido, que es el Convenio de La Haya que regula los aspectos civiles sobre sustracción ilícita de menores.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

INTERPELACIONES:

— DE DON FRANCISCO FUENTES GALLARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD) (670/000160).

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Interpelaciones. Interpelación del excelentísimo señor don Francisco Fuentes sobre la política del Gobierno en relación con la Ayuda Oficial al Desarrollo.

Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador interpelante.

El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ya sé que reglamentariamente puede contestar cualquier miembro del Gobierno a las interpelaciones, pero en este caso hay una peculiaridad especial por las muchas controversias a las que se ha prestado la situación de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Cuando se estableció en la Ley de Cooperación hubo mucho debate sobre dónde tenía que estar, quién era el último responsable, si Economía o Exteriores, y se consiguió que fuese el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por eso ahora, aunque reglamentariamente sé que usted puede contestar, no dejo de manifestar mi sorpresa por la ausencia de la Ministra de Asuntos Exteriores. Pero vamos a lo sustancial.

Unos meses antes de ganar el Partido Popular las elecciones de 1996, las primeras, la señorita Loyola de Palacio (*Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular*.) firmó un acuerdo —la señorita Loyola de Palacio, no la Ministra, la que está en la Unión Europea— como representante del Partido Popular con las ONG y con la Plataforma del 0,7. En ese acuerdo firmado se comprometía a conseguir en la legislatura de 1996 a 2000 el 0,7 por ciento del Producto Interior Bruto para la Ayuda Oficial al Desarrollo. No recuerdo exactamente si fue en 1997 o en 1998, su grupo en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Cooperación, presenta una iniciativa cuando ve que eso ya es difícil de conseguir, y la iniciativa consiste en instar al Gobierno a que en el horizonte del año 2000 se consiga el 0,7. ¡Cuán lejano estamos viendo ese horizonte del que hablaba el portavoz de su grupo! Y quiero recordarle que cuando ustedes llegan al Gobierno en el año 1996, en datos de 1995 lo que se dedicaba a Ayuda Oficial al Desarrollo era el 0,24 del producto interior bruto, y en el año 2000 —que es el último dato oficial, después hablare-

mos de 2001— la Ayuda Oficial al Desarrollo ha supuesto el 0,22 del producto interior bruto, es decir, dos centésimas menos de lo que ustedes se encontraron a pesar de los compromisos que firmaron con las Organizaciones No Gubernamentales. Ante este dato, ustedes responden con cifras absolutas; señalar la cantidad absoluta que se dedicaba a cooperación en los años 1994-1995 y la comparan con las cifras absolutas que se dedican hoy. En eso tienen razón, las cifras absolutas han aumentado, pero los compromisos que ustedes han firmado a nivel internacional no hablan de cifras absolutas sino de lo que se llama el esfuerzo de solidaridad: a mayor riqueza, mayor tanto por ciento para dedicar a la ayuda a los países más pobres.

Tanto es así que, en la Cumbre de Barcelona, ustedes no pusieron en el papel las cantidades absolutas que había que dedicar a cooperación sino que lo que ustedes firmaron —y España ocupaba la Presidencia de la Unión Europea— es que en el año 2006 habrá que conseguir, como mínimo, el 0,33 por ciento del PIB para ayuda oficial al desarrollo, que el mínimo europeo debe ser 0,36, y con una media del 0,39 por ciento. Eso es lo que ustedes han firmado, porque los compromisos asumidos por todos los países en el CAD y en los organismos internacionales no citan cantidades sino que, en función de la riqueza, se fijan los tantos por ciento que se van a destinar a la ayuda a otros países.

Hoy mismo, las ONG han dicho al Gobierno que para conseguir los objetivos marcados en la Cumbre de Barcelona, que ustedes firmaron, serían necesarios 250 millones de euros más de los que figuran en los presupuestos para el año 2003. No es que lo diga yo, eso es lo que han declarado hoy las ONG en los medios de comunicación.

Sin embargo, señor ministro, no es solamente una cuestión de cantidades, también se aprecia una falta extraordinaria de diálogo con las ONG. Antes, eran las ONG las que elegían a sus representantes en el Consejo de Cooperación; eran ellos los que, a través de votaciones, elegían las personas que les iban a representar. La ley establece ahora que los representantes de las ONG en el Consejo de Cooperación son seis, pero de esas seis, ustedes escogen a cuatro, de manera que las ONG sólo pueden elegir a dos de sus representantes. No deja de ser sorprendente que el Gobierno escoja a determinadas ONG; sería más razonable que fueran ellas mismas las que eligiesen a sus representantes y, por ello, han criticado la actitud del Gobierno.

Por otro lado, no sólo se aprecia una falta de diálogo, sino problemas relativos a la calidad de las ayudas. Ustedes han firmado unos compromisos internacionales que suponen que el 20 por ciento del total de la ayuda oficial al desarrollo debe dedicarse a sectores sociales básicos, es decir, educación y sanidad. ¿Sabe cuánto dedican ustedes? El 8,3 por ciento, frente al 20 por ciento al que se habían comprometido y, además, no dedican el 0,15 por ciento a los países menos adelantados.

Aunque no es oficial —puesto que no ha sido remitido a la Cámara—, voy a citar los datos correspondientes al año 2001, que es el último sobre el que tenemos cifras concretas. En este sentido, según los datos que ustedes han remitido a las ONG, el Gobierno ha destinado en el año 2001

el 0,3 por ciento del PIB a la ayuda oficial al desarrollo, mientras que en el año 2000 se había destinado el 0,22 por ciento. La verdad es que es un salto espectacular pero, ¿qué hay detrás de ese salto? Yo se lo voy a explicar para que comprenda el problema, señor ministro, aunque creo que usted también lo sabe, o se lo habrán dejado escrito. Ese aumento tan espectacular obedece a una operación estrictamente coyuntural: Guatemala debía al Banco Exterior de España 637 millones de dólares por una empresa de celulosa que nunca se puso en funcionamiento; Nicaragua tenía una deuda con Guatemala de 506 millones de dólares y, ¿qué es lo que ha hecho España? Ha hecho que Guatemala reconozca la deuda que tiene con España, a cambio de que condone la deuda de Nicaragua, y esa condonación de deuda supone el 0,09 por ciento del PIB. Si no se hubiese computado esa condonación de deuda —y no digo que esté mal computada—, la ayuda oficial al desarrollo en el año 2001 hubiese sido del 0,21 por ciento. Ustedes tienen razón en computar esa condonación —y yo estoy de acuerdo— pero, a efectos políticos, si usted quiere citar el 0,3 por ciento como un aumento espectacular, debería comprometerse a que todos los años se condonara el equivalente al 0,09 por ciento de deuda porque, de otra manera, será un fuego de artificio. Y el año que viene estaremos aquí con esos datos, si no han condonado la deuda a otros países, porque no cumplirán los objetivos que ustedes mismos han marcado.

Éstos son, de forma sucinta, los motivos de nuestra interpelación, que abarca tres aspectos; la cantidad, cuánto se dedica a ayuda oficial al desarrollo —hoy, en el año 2000, menos que en 1995; en el 2001, si apartamos la condonación de deuda, menos que en 1995 y menos que en el 2000—; la falta de diálogo con las ONG, y no lo digo yo, sino que ustedes tienen conocimiento de ello por sus declaraciones públicas, y la falta de calidad de la ayuda. Por esos tres motivos es por lo que hemos interpelado al Gobierno sobre su política de ayuda oficial al desarrollo y de cooperación.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Con la venia, señor Presidente.

Señorías, señor Fuentes, debo empezar manifestando que es para mí un motivo de satisfacción tener la oportunidad de contestar esta mañana a esta interpelación en sustitución de la Ministra de Asuntos Exteriores, porque estoy convencido de que el Gobierno puede estar muy orgulloso de su compromiso con la cooperación al desarrollo.

Señoría, en 1995, el último año de Gobierno socialista, el total de recursos destinados por España a la ayuda oficial al desarrollo fue de 167.000 millones de pesetas. En el año 2003 vamos a alcanzar la cifra de 2.058 millones de euros, esto es, 342.000 millones de pesetas, lo que significa que en sólo ocho años habremos más que duplicado la

cantidad destinada por España a cooperación al desarrollo. Las cifras de todos estos años reflejan evidentemente un crecimiento constante de nuestro esfuerzo presupuestario en este ámbito.

Con respecto al año 2002 la dotación prevista para el año 2003 supone un incremento del 18 por ciento. Y si nos fijamos únicamente en la aportación de la Administración General del Estado, en el año 2003 será de 1.771 millones de euros, lo que supone un aumento respecto del año 2002 superior al 20 por ciento, concretamente, señoría, del 22,85 por ciento.

Y para tener una imagen adecuada de lo que supone el esfuerzo de España en cooperación al desarrollo, baste decir que con lo que la Administración General del Estado va a destinar a programas de desarrollo en los países necesitados, en el próximo ejercicio presupuestario 2003 se podrían construir en nuestro país 1.500 colegios de infantil y primaria, o 740 institutos y centros de formación profesional, o 250 hospitales generales. Y no se trata, como su señoría bien sabe, únicamente de cifras. Pueden recorrerse diferentes zonas de los países de Iberoamérica, del norte de África o de otras regiones del planeta, para constatar la eficacia y el alcance social de los programas de cooperación que llevan a cabo la Agencia Española de Cooperación Internacional o las distintas organizaciones no gubernamentales.

Por lo que se refiere al porcentaje de nuestro producto interior bruto dedicado a cooperación al desarrollo, sabrá su señoría, aunque en el texto escrito de su interpelación no aparece esta cifra y se refiere usted únicamente al dato del año 2000, que en el año 2001 España ha alcanzado por primera vez la cifra del 0,30 por ciento. Hemos crecido de manera acelerada hasta igualar a la media de los países de la OCDE en nuestra aportación a los programas al desarrollo. Nos encontramos ya, señorías, muy por encima de los porcentajes que destinan a la cooperación al desarrollo algunos otros países de nuestro entorno, como Estados Unidos, Italia o el Reino Unido, y en niveles similares en estos momentos a Alemania o a Austria. Este incremento, que no tiene comparación con ningún otro país donante, que más bien han tendido en los últimos tiempos a disminuir sus porcentajes de ayuda, ha supuesto un esfuerzo considerable para los gobiernos de España, y ha significado también un desafío para los actores públicos y privados que intervienen en la ejecución de la cooperación.

Sus señorías son conscientes de que existe un límite al progreso en el crecimiento de la ayuda, que es el que marca la eficacia en la ejecución de la misma. No hubiera sido, pues, prudente impulsar mayores porcentajes de crecimiento de la ayuda, ya que sin duda ello hubiera repercutido negativamente en la calidad de nuestra cooperación. Por tanto, pienso que el balance de la política del Gobierno en materia de cooperación al desarrollo ha de ser muy satisfactorio, aunque, desde luego, es voluntad del Gobierno seguir avanzando en este campo, como hemos manifestado reiteradamente.

La globalización económica y la creciente apertura del comercio internacional reclaman un mayor esfuerzo por promover la competitividad y la cohesión de los países

menos desarrollados, pues de lo contrario podría producirse un ensanchamiento de la brecha que separa a los países ricos de los países pobres, brecha que hoy ya es clamorosa.

Por ello, el Gobierno de España fue precisamente el principal impulsor del acuerdo adoptado durante el pasado mes de marzo por el Consejo Europeo de Barcelona, al que su señoría ha hecho referencia, Consejo que fija la meta de que la media de la ayuda oficial al desarrollo de los Estados miembros de la Unión Europea alcance el 0,39 por ciento del producto interior bruto en el año 2006, lo que supone un incremento en los recursos para el desarrollo de aproximadamente 8.000 millones de euros adicionales cada año. Este es un compromiso que la Unión Europea adquirió solemnemente ante la comunidad internacional en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la financiación al desarrollo, celebrada en Monterrey unos días después del Consejo Europeo de Barcelona.

En estos momentos la Unión Europea está liderando la solidaridad de la sociedad internacional y ha demostrado su voluntad política de intervenir a favor de la causa del desarrollo de manera esforzada y generosa. Para lograr el objetivo fijado por el Consejo Europeo de Barcelona, los países que todavía se encuentran por debajo de la media europea, que se ha situado en el año 2000 en el 0,33 por ciento, se han comprometido a alcanzar esa cifra en el año 2006. Ese es el caso de España, señorías, que se encuentra ligeramente por debajo de la media europea, aunque hay que recordar que hace no tantos años España no era un país donante sino receptor de ayudas oficiales al desarrollo.

Pues bien, señor Fuentes, le aseguro que vamos a cumplir el compromiso que hemos contraído con la Unión Europea, e incluso que lo vamos a hacer antes de la fecha prevista. Así, en el año 2003, la aportación de las diversas administraciones públicas españolas va a suponer un 0,28 por ciento de nuestro producto interior bruto, y el porcentaje continuará mejorando en los próximos años porque el Gobierno tiene el compromiso de seguir incrementando los recursos destinados a la cooperación al desarrollo, como está previsto en el Plan director de cooperación española 2001-2004, vigente en estos momentos.

Por tanto, señorías, no hagamos de esta materia un motivo de disputa partidista. Pienso que todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en los objetivos que se deben alcanzar y en la necesidad de lograrlos con la mayor urgencia posible. Sin duda vamos por el buen camino, y lo único que tenemos que hacer es continuar recorriéndolo.

Y permítanme que concluya con una reflexión. Sin duda en España deben aumentar los recursos públicos destinados a la cooperación al desarrollo, pero no seríamos justos ni objetivos si olvidáramos que a los recursos públicos se suma la contribución libre y voluntaria de los ciudadanos y las entidades de la sociedad civil, contribución que en España es mucho más generosa que en otros países de nuestro entorno. Por poner algún ejemplo les diré que España es el tercer país del mundo donante a la UNICEF si se añade la aportación del Estado a las contribuciones que hacen libremente los ciudadanos. Y les daré algún otro. Con motivo de los terremotos acaecidos en El Salvador en 2001, en la cuenta bancaria abierta por el Ministerio de

Asuntos Exteriores para colaborar en las tareas de ayuda humanitaria se recaudaron 2.000 millones de pesetas, correspondientes a las aportaciones de más de 200.000 personas. Asimismo, las quince organizaciones no gubernamentales dedicadas a la ayuda al desarrollo más importantes de España recibieron en concepto de donativos privados más de 133.000 millones de pesetas en el período 1996-99. Pienso que ésta es una senda en la que también debemos seguir avanzando. La cooperación con los países menos desarrollados no puede ser considerada únicamente una responsabilidad de los Poderes públicos, es un compromiso que se debe asumir, y que en España se ha comenzado a hacer de forma muy satisfactoria, por parte de la entera sociedad civil.

Hemos de impulsar la toma de conciencia acerca de la necesidad de movilizar recursos para el desarrollo por parte de los ciudadanos, de las empresas y de todas las instituciones de la sociedad civil, y de esta forma, sin duda, señorita, podremos alcanzar más eficaz y rápidamente el objetivo de promover el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida en los países menos favorecidos.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra el senador interpelante.

El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor Presidente.

Quisiera concretar algo de lo que usted ha dicho sobre el hecho de que es cierto que hubo una época en la que España recibía fondos. En 1982 España recibía fondos de solidaridad de otros países. Insisto, en 1982 —alguna cara de sorpresa puede haber aquí— España no era un país donante de solidaridad, sino receptor de la misma. Y digo esto porque creo que hay que poner las cosas en su sitio. Cuando el PSOE llegó al gobierno, España recibía la solidaridad del resto de los países europeos; éramos, pues, un país poco desarrollado y receptor de fondos de solidaridad. Tal y como usted ha reconocido, en el año 1995 se consiguió el 0,24 por ciento que, como toda cifra, es discutible y probablemente insatisfactoria para todos, pero digo esto para acotar bien el esfuerzo de solidaridad que ha hecho este país desde 1982.

No pretendo ser peyorativo, pero usted representa al Gobierno y quienes llevamos más tiempo aquí tenemos la ventaja de conocer algunos puntos que por su ocupación usted desconoce. Pero, insisto, ésta no es ninguna crítica.

Le vuelvo a repetir que ustedes ni en Barcelona ni en cualquier otro foro internacional hablan de cantidades absolutas. Le he reconocido que las cantidades absolutas han aumentado, y quien negase este extremo sería un necio, pues basta con acudir a los presupuestos. Lo que yo le digo es que el compromiso político de los gobiernos europeos no habla de cantidades, sino que dicen que quien es rico debe dedicar un tanto por ciento de su riqueza a la solidaridad, tanto por ciento de la riqueza que no han cumplido ustedes. Y eso es simplemente lo que yo le estoy diciendo.

Ustedes ostentando la Presidencia de España en la Cumbre de Barcelona dijeron que había que conseguir que

en el año 2006 se dedique como mínimo se dedique el 0,36 por ciento de la riqueza de cada país a ayuda al desarrollo, y una media del 0,39 por ciento. Nosotros, que siempre sacamos pecho diciendo que no sólo estamos en la media, sino entre los primeros, deberíamos al menos procurar estar en esa media en cuanto a la ayuda oficial al desarrollo se refiere en el año 2006, es decir, en ese 0,39 por ciento.

Yo no me invento los datos, señor Ministro. En este comunicado del día 5 de diciembre del año 2001 de la coordinadora de las ONG se dice que las ONG de desarrollo suspenden al Gobierno español. La credibilidad que se quiera dar a este comunicado depende de cada uno, pero no se trata de una ONG cualquiera, sino de la coordinadora de todas ellas.

Usted debe tener conocimiento de algunos datos para no decir determinadas cosas. El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) está formado por 22 países. Según datos del año 2000, España ocupa el puesto número 19 de esos 22 países en cuanto a volumen de ayuda oficial al desarrollo.

No me ha contestado al tema de que existe una recomendación firmada por el Gobierno español que dice que el 20 por ciento del total de la ayuda debe destinarse a servicios de educación y sanidad, y están dedicando el 8.

Por otra parte, está esa cuestión del 0,3 por ciento del año 2001. Le he dicho el porqué y también le he dicho que hacen bien en computar la condonación de la deuda a Guatemala, pero para que ese dato sea cierto políticamente ustedes van a tener que comprometerse a condonar todos los años el 0,1 por ciento del PIB a países que tengan deuda con nosotros, que los hay. El año que viene estaremos aquí por estas mismas fechas y si no han condonado deuda se verá quién ha hecho la trampa. Si siguen ustedes condonando deuda significará que tienen razón, pero si no lo hacen es que la razón la tengo yo.

Les doy un dato: si condonamos la deuda a Guatemala la AOD en el año 2001 es del 0,21 por ciento.

¿Sabe usted cuál es el primer país que recibe fondos de ayuda de España? China, y no creo yo que sea uno de los que tengan más necesidades, que las tiene, pero ése es su puesto en el ranking mundial. ¿Sabe cuál es el tercero? Indonesia y el cuarto Marruecos. Lo digo para que tengamos una idea de los países que reciben ayuda española.

Dice usted que hay que creer la decisión del Gobierno de cumplir los compromisos de la Cumbre de Barcelona. Permítame que sea un poco escéptico a la vista del compromiso que dejó de cumplir su compañera Loyola de Palacio. Pero aun así, si lo cumplen, por mí encantado. Pero entenderá que un cierto grado de escepticismo tenga derecho a tener cuando hay un documento que está en su poder, pues es público, firmado por Loyola de Palacio con las ONG que habla de alcanzar el 0,7 en el 2000; es una barbaridad, pues ya nadie exige el 0,7 de golpe, eso es verdad, pero ustedes lo firmaron. Y en vez de decir que eso es imposible de conseguir, presentar una iniciativa para decir que será viable en el horizonte del 2000. En el fondo, en esto hay controversia política y no es malo que la haya dentro de ciertos límites, porque es verdad que en estos campos es muy fácil deslizarse en la demagogia, sobre todo si se está en la oposición. Yo he procurado no desli-

zarme. Espero haberlo conseguido, porque le he dado unos datos que para mí no son satisfactorios, y seguro que para usted tampoco.

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya finalizando, por favor.

El señor FUENTES GALLARDO: Termino en seguida, señor Presidente.

Hay una cosa en la que estaremos todos de acuerdo: el bienestar de los hombres no se puede construir sobre la desgracia de otros hombres. Así de sencillo. Este mundo hoy es más desigual, hay más injusticia y más desigualdades en conjunto que hace 30, 40, 50 u 80 años. Es infinitamente más desigual.

Muchas veces tratamos los problemas de forma superficial, como la inmigración ilegal y otros temas, y el hambre y la miseria de mucha gente tienen su origen en ellos. Y no es que yo esté en plan de moralina, ésta es una reflexión política. No se puede construir el bienestar de millones de personas sobre el hambre, la miseria y la muerte de centenares o miles de millones de personas, como está pasando en la humanidad, y eso se puede conseguir aumentando la ayuda oficial al desarrollo.

Gracias, señor Presidente. *(Aplausos.)*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Gracias, señor Presidente.

Señorías, luego entraré brevísimamente en la reflexión sobre las cantidades absolutas que hacía su señoría. Año 2002, presupuesto, 284.000 millones, lo que significa el 0,25 del PIB. Año 2003, 342.000 millones, lo que significa el 0,28 del PIB. El esfuerzo del Gobierno de España es evidente y su señoría no lo podrá negar. Pero podemos compararlo con otros países de nuestro entorno, como le decía anteriormente.

Estados Unidos dedica a la cooperación al desarrollo el 0,10 por ciento del PIB de su país; Italia, el 0,15; Reino Unido, el 0,23; Alemania, el 0,26; Austria, el 0,26; España, en el 2003 el 0,28. Estar a la cabeza de todos esos países no parece que sea un dato como para estar insatisfechos.

Dice su señoría: naturalmente que aumentan las cifras y las cantidades absolutas, pero hay que fijar el compromiso en cantidades absolutas. Parece mucho más lógico, mucho más justo y mucho más razonable exigir un porcentaje de los niveles de bienestar de cada país en función de la cooperación al desarrollo. No vamos a medir cantidades absolutas porque lógicamente ahí se estarían generando grandes dificultades y grandes desigualdades a la hora de contribuir a la cooperación al desarrollo. España tiene que contribuir en función de sus propias posibilidades, igual que los demás países tienen que contribuir en función de las suyas.

En función de esas posibilidades, en función de nuestra renta, teniendo en cuenta que nosotros tenemos 14.000 dólares y Estados Unidos, por ejemplo, 30.000, nuestra contribución a la cooperación al desarrollo es muy superior a la del citado país.

Nosotros hemos propiciado el acuerdo de Barcelona. Hemos sido nosotros los que lo hemos puesto encima de la mesa, y hemos sido nosotros, el Gobierno de España, los que hemos llevado la iniciativa para que los demás países suscribieran ese acuerdo; luego decir que quien ha sido el impulsor, quien lo ha puesto encima de la mesa y quien ha propiciado el acuerdo es quien pretende incumplirlo o quien no podrá cumplirlo parece, simplemente, a priori, una contradicción importante. Todo lo contrario. El esfuerzo de cooperación internacional que está haciendo España en estos momentos es muy superior al de cualquier otro país de Europa.

No le puedo contestar en este momento porque no tengo el dato cierto sobre si la cooperación se está realizando más en unos países que en otros. No me preocupa, señoría. El hambre y las necesidades hay que atenderlas allí donde estén, y ojalá pudiéramos llegar a todos los lugares del planeta pero, desgraciadamente, no podemos. Me imagino que son criterios absolutamente objetivos, no solamente de la Agencia de Cooperación Española, sino de las organizaciones no gubernamentales, para atender a aquellas personas que más lo necesitan.

Muchas gracias. *(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

— DE DON JOSÉ ANTONIO ALONSO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (670/000161).

El señor PRESIDENTE: Interpelación de don José Antonio Alonso García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia de seguridad en el trabajo.

Para exponer la interpelación tiene la palabra el senador interpellante.

El señor ALONSO GARCÍA: Muchas gracias, señor Presidente.

Sean mis primeras palabras para desearle éxito en la gestión del cargo para el que acaba de ser elegido.

Señor Presidente, señor Ministro, señorías, sería mi deseo iniciar esta interpelación teniendo un expreso reconocimiento a la solución política que ustedes dieron al denominado decretazo, pero habida cuenta que el vehículo de maniobra política que utiliza el Gobierno parece ser que no dispone de marcha atrás, sino de correcciones técnicas, eso me ahorra este expreso reconocimiento que me hubiese gustado realizar.

Si bien, señor Ministro, usted ha sido sensible a los efectos de la huelga del 20 de junio y a las movilizaciones

que se dieron con posterioridad a la huelga, yo creo que esa sensibilización ha sido parcial o, en todo caso, incompleta, habida cuenta que les queda una importante asignatura pendiente, como es el subsidio agrario. Probablemente me diga que el subsidio agrario no forma parte del discurso o no forma parte de esta interpelación; sin embargo, por las razones que le voy a exponer, sí creo que forma parte de la misma.

En primera instancia, estamos en la Cámara de representación de los territorios de España, y entiendo yo, señor Ministro, que el subsidio agrario forma parte de la España plural, ya que es un hecho diferenciado y las comunidades autónomas, que son sujeto paciente del subsidio agrario, no cabe duda que recogen esa pluralidad; las dos comunidades autónomas donde está circunscrito el ámbito del subsidio más quisieran disponer de un sistema productivo industrial y no depender de este tipo de subvenciones. Dicho sea de paso, este colectivo tan denostado recibe un nivel de subvención infinitamente inferior a países que son marco de referencia para su Gobierno, como los Estados Unidos, y como mecanismo de fijación de la población nos parece que la posición del Gobierno está siendo extremadamente raquítica y cicatera con este colectivo.

La otra razón, sin duda alguna, es el lugar que ocupa en la siniestralidad el colectivo de agricultores de este país. Señor Ministro, quizá esta interpelación que ahora le planteamos se pueda advertir como extemporánea después de la reunión que usted mantuvo con las organizaciones sindicales el 14 de octubre, pero no, puesto que interpreto que todo debate que vaya orientado a buscar soluciones al problema que nos ocupa no es un debate estéril. Además, señor Ministro, el 20 de febrero de este mismo año mi grupo planteó una interpelación sobre esta misma materia a su antecesor en el cargo. En aquel entonces no planteamos moción consecuencia de interpelación por un acto de responsabilidad política que pretendía que la moción consecuencia de interpelación no fuese un elemento que pudiese dificultar el entendimiento final a la hora de confeccionar el informe que tiene que elaborar la Comisión especial creada en el Senado. Advertimos a su grupo que la intención de no presentar la moción consecuencia de interpelación obedecía sólo y exclusivamente a esa cultura de responsabilidad, a esa cultura de consenso, de buscar acuerdo para el informe final.

Sin embargo, sin tener en cuenta usted los trabajos de la Comisión, sin haber comparecido en el seno de la misma —he consultado la agenda del Senado y no hay previsión alguna de que usted vaya a comparecer en la Comisión Especial para la prevención de los riesgos laborales constituida en el Senado—, nos sorprende con un programa a realizar antes del 31 de diciembre para su puesta en práctica a partir de enero de 2003, del que no tenemos más conocimiento que aquello que aparece en los medios de comunicación, porque ni a la Cámara ni a la Comisión constituida al efecto el Ministerio de Trabajo tuvo la deferencia de remitir cuál era el programa, cuáles eran las propuestas que se iban a plantear a las organizaciones sindicales, al objeto de desarrollarlas desde el momento presente hasta el día 31 de diciembre de este año.

Señor Ministro, la razón que nos anima a presentar esta interpelación no es otra que el estado de alarma social que se genera con el incremento, principalmente, de los accidentes mortales —ligeramente por debajo del 11 por ciento— y el incremento de los accidentes habidos en el sector de la construcción —si mal no recuerdo, un 9 o un 10 por ciento—. Así pues —como digo—, la alarma social que se genera en torno a los accidentes mortales y el incremento de accidentes que se produce en el sector de la construcción son las razones que nos animan a plantear esta interpelación.

Desde el año 1996 el incremento de los accidentes de trabajo, ha aumentado considerablemente. Era de 663.271 cuando ustedes accedieron al Gobierno, y en el primer semestre del año 2001 se situaba la cifra en 958.493. Por tanto, entendemos que es un dato relevante, que genera una importante alarma social, como pudimos observar, por una parte, por la iniciativa que usted tuvo con las organizaciones sindicales y, por otra, por todo lo que aparece en los medios de comunicación.

Señor Ministro, respecto a la valoración sobre la siniestralidad en nuestro país dispongo de un informe. En él se afirma que en España se produce el 20 por ciento de los accidentes laborales de la Unión Europea (958.493, como antes apuntaba). Por ello, aparece en las estadísticas de Eurostat con el índice más elevado de siniestralidad laboral de toda la Unión Europea, con 7.600 accidentes por cada 100.000 empleados, cifra que casi dobla a la media comunitaria, o, expresado en otros términos, el 7,6 por ciento de los trabajadores ha sido víctima de un accidente de trabajo, frente al 4,1 por ciento del resto de los países de la Unión Europea.

Como factor fundamental que influye en el riesgo de siniestros temporales destaca la temporalidad. Según un registro reciente de la Tesorería de la Seguridad Social, más allá del 80 por ciento de los nuevos contratos inscritos en los últimos años son temporales y sólo el 58 por ciento de los afiliados tiene contrato indefinido. Así, la incidencia es dos veces más alta entre los asalariados con contrato temporal que entre quienes tienen un contrato indefinido.

Otro factor añadido es la carencia formativa sobre seguridad e higiene en el trabajo. En España, el 48 por ciento de los centros de trabajo no ofrece una información sobre seguridad laboral al inicio del contrato ni al cambiarse el trabajador de actividad, frente al 32 por ciento del resto de los países de la Unión Europea. Estas cifras revelan que el riesgo de sufrir un accidente laboral se reduce con la edad en todos los Estados miembros; por el contrario, la incidencia en los accidentes mortales tiende a aumentar a medida que los trabajadores envejecen. Estos datos varían en función de la actividad económica, del tamaño de la empresa y del sexo de los trabajadores. La incidencia de los accidentes es más elevada en el sector de la construcción, seguido del agrícola y del de transporte. La mayoría de los accidentes laborales ocurrió en empresas de entre diez y cuarenta y nueve empleados. La probabilidad de tener un accidente es tres veces mayor para los hombres que para las mujeres, y en el caso de accidentes mortales es del orden de nueve veces mayor. Ello es debido a que los hom-

bres ejercen más profesiones de alto riesgo o porque sus acciones implican situaciones de mayor riesgo.

Además, las condiciones de trabajo no son satisfactorias. Según la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, organismo independiente con sede en Dublín, en su última encuesta, elaborada en el año 2000, ha constatado que las condiciones físicas en el trabajo no han mejorado: la proporción de personas expuestas a intensos ruidos (29 por ciento), inhalando humos (23 por ciento), en posturas dolorosas (47 por ciento), con movimientos repetitivos (57 por ciento), manejando cargas pesadas (37 por ciento), etcétera, no ha variado prácticamente desde la encuesta precedente, del año 1995. Además revela que los problemas relacionados con la salud, ritmos de trabajo y tiempos de trabajo continúan aumentando en Europa. Esta evidencia, junto a los resultados de otras estadísticas y estudios, subraya firmemente la necesidad de implantar programas más rigurosos de prevención de accidentes. Volver a casa sano y salvo del trabajo es un derecho humano básico. Nadie debería morir o lesionarse en accidentes laborales. Son muchas las personas que se despiden para ir al trabajo y ya no regresan nunca. Sin embargo, detrás de las estadísticas se oculta el verdadero coste de los accidentes laborales. El dolor y el sufrimiento de los trabajadores y sus familias, la tragedia de unas vidas destrozadas y, en última instancia, los costes de la siniestralidad laboral recaen en todos los ciudadanos, tanto contribuyentes como consumidores.

La cuestión es: ¿Estamos realmente dispuestos a seguir pagando este precio tan alto? Se trata fundamentalmente de una cuestión de voluntad política, ya que los datos económicos hablan por sí mismos. Una prevención de accidentes más eficaz no sólo reduciría los costes, sino que relanzaría la productividad. Por todo ello, el reto político es convertir a Europa, y por supuesto a España, en un lugar donde se pueda trabajar más seguro.

Estas palabras no son mías, señor Ministro. Estas palabras no son de ningún socialista. Estas palabras son de un profesor de su comunidad autónoma, que se llama don Vicente Castelló Roselló, profesor de la Universidad Jaume I. Yo suscribo íntegramente las palabras del profesor Castelló.

Señor Ministro, la valoración que hacemos de las propuestas que usted realizó a las organizaciones sindicales es positiva, créame. Hacemos una valoración positiva del contenido de las propuestas. Propone incidir en la mejora de la información sobre los accidentes y sus causas, fomentan los planes de choque —que ya se vienen realizando sobre las empresas de mayor siniestralidad, una mayor coordinación entre las administraciones implicadas, actuaciones específicas sobre las empresas de más de 1.000 trabajadores, aumento de recursos y de personal en las inspecciones de trabajo y reforma de la normativa sobre la regulación de la subcontratación.

Pero señor Ministro, incluso haciendo una valoración positiva de sus propuestas, no nos podemos quedar exclusivamente ahí. Tienen que ir con medidas de acompañamiento en las que se pueda percibir la consignación presupuestaria suficiente para poder llevar a cabo las medidas

que usted propone, y hasta la fecha no conocemos con cargo a qué partidas y en qué cuantía se van a desarrollar todas estas iniciativas.

Además, señor Ministro, entiendo que no nos podemos quedar ahí exclusivamente. Haciendo una valoración positiva de esto que usted propone, entendemos que el Plan Nacional de Formación, la continuidad de la Fundación Nacional para la Prevención de Riesgos Laborales, el desarrollo del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el cumplimiento del artículo 54, la incorporación del delegado sectorial o territorial, que también lo contempla la ley, y las experiencias que tenemos en aquellas comunidades autónomas y aquellos sectores de actividad en donde están funcionando los delegados territoriales de prevención de riesgos laborales son elementos beneficiosos, redundan de forma muy positiva en lo que es la prevención de riesgos laborales.

Señor Ministro, siendo sus propuestas importantes —y que valoramos positivamente—, le proponemos otras adicionales con el fin de compensar las consecuencias perniciosas que se derivan de la reforma laboral de 2001, que es la gran asignatura pendiente del Gobierno del Partido Popular.

En el año 1997 su Gobierno no tenía mayoría absoluta. En el año 1997 ustedes se instalaron en la cultura del acuerdo, en la cultura del diálogo, y firmaron con los agentes sociales y económicos —actuaron de notarios— el Acuerdo para la estabilidad en el empleo y la negociación colectiva. Fue un gran acuerdo y dio sus frutos. Sin embargo, nada más obtener ustedes la mayoría absoluta, la primera iniciativa que llevan a la práctica es legislar en una dirección que en absoluto colabora para dar solución a uno de los problemas más graves que tenemos en nuestro país.

Tanto el informe del profesor Castelló como los informes de Eurostat decían que solamente en España se produce el 20 por ciento de los accidentes de la Unión Europea.

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya concluyendo.

El señor ALONSO GARCÍA: Concluyo, señor Presidente.

Según los datos de Eurostat, el costo de los accidentes de trabajo en el conjunto de la Unión Europea (incluyendo en primer lugar el costo en vidas humanas y después las situaciones invalidantes y las enfermedades profesionales, en una palabra, el costo humano, que es lo que tenemos que atender con una especial dedicación) se sitúa en torno al 4 por ciento del PIB. Puesto que en España hay un porcentaje de accidentes muy superior al que se produce en el seno de la Unión Europea, el porcentaje del PIB que tenemos que dedicar a dar una solución finalista a las consecuencias que se derivan de los accidentes de trabajo tiene que estar bastante por encima de ese 4 por ciento del PIB.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Trabajo.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Alonso, ya sabe que he asumido recientemente la responsabilidad de la cartera de Trabajo y Asuntos Sociales y, por lo tanto, no me he sometido a muchas sesiones de control. Lógicamente me adaptaré a la tradición de la Cámara, sin ningún género de dudas.

Me ha sorprendido, y lo tengo que decir, que su señoría, en la interpelación, mezcle cuestiones que nada tienen que ver unas con otras, probablemente para manifestar, con algún argumento que no encontraba en el motivo concreto de la interpelación, su desconcierto —que es como yo lo califico— después del buen clima de relación que tiene el Gobierno y que mantiene en las últimas fechas con los agentes sociales. Nos ha hablado de la reforma, de la huelga del subsidio agrario; ha perdido un tiempo importante de su intervención en estas cuestiones.

Yo solo quiero hacer una aclaración, porque su señoría también ha hecho referencia a que no he tenido a bien venir a esta Cámara. Tenía mi cita concertada para ayer por la mañana y, con muy buen criterio, los servicios de esta Casa, dado que por la tarde se elegía al presidente de la Cámara, dijeron que era mejor aplazarlo. Yo vendré a esta Cámara cada vez que se me solicite, y en esta ocasión era yo el que había solicitado poder comparecer para hablar de todas estas cuestiones.

Lo que yo noto es un cierto malestar en sus señorías, no sólo en usted, por esa buena relación que existe en estos momentos con los agentes sociales. Durante mucho tiempo, sobre todo en los últimos meses, han estado acusando al Gobierno de que era inflexible, que no hacía ejercicios de acercamiento, que no buscaba posturas de encuentro; decían que ustedes estaban deseosos de que eso se produjera, y cuando se produce, manifiestan un malestar absurdo.

Entrando en lo concreto, en aquello por lo que su señoría me ha interpelado esta mañana y que es lo que me trae aquí, parece como si su señoría no hubiera tenido ocasión de oír, de leer o de conocer las declaraciones de los representantes sindicales tras la reunión que mantuvimos el pasado 14 de octubre en la Mesa de diálogo social sobre prevención y riesgos laborales. Porque le recuerdo que los responsables de salud laboral de UGT y de Comisiones Obreras y los secretarios generales de dichos sindicatos valoraron muchísimo la voluntad política del Gobierno de avanzar en nuevas medidas eficaces en la lucha contra la siniestralidad, que pusimos encima de la mesa en esa reunión.

La reunión concluyó con una agenda de trabajo, señoría, bien definida, que prevé un conjunto de temas, a algunos de los cuales ha hecho referencia en su intervención, acerca de los que vamos a seguir conversando —ya lo estamos haciendo estos días—, con el propósito establecido en esa reunión de alcanzar acuerdos sobre las diversas cuestiones antes de que finalice este año. Me parece que es un plazo absolutamente razonable, yo diría que es un plazo arriesgado, pero al que todos nos hemos comprometido para poder llegar a acuerdos importantes. Hemos empe-

zado a trabajar de forma inmediata. En estos momentos están teniendo lugar reuniones de los agentes sociales con los altos cargos del Ministerio para concretar los diversos aspectos tratados en la mesa del pasado día 14, a la que hacía referencia.

Pues bien, su señoría no comparte esa voluntad de acercamiento y quiere establecer permanentemente una confrontación que desde luego no existe en estos momentos entre los agentes sociales y el Gobierno. Con todos los respetos, señoría, lo que creo que ocurre es que los agentes sociales han desautorizado toda una estrategia de su partido y de su grupo. Habían montado una estrategia, y probablemente cuando hablaban de otoño caliente —más los grupos parlamentarios y los partidos políticos que los sindicatos— estaban pensando en una estrategia con la que ahora ya no pueden continuar y que, en cierta medida, los ha dejado un tanto descolocados.

La voluntad del Gobierno ha sido siempre la misma: la de hablar, la de dialogar, la de buscar puntos de encuentro. Lo que pasa es que el Gobierno tiene que gobernar, y bien que lo saben los gobiernos socialistas, que, por gobernar con razón o sin ella —porque nadie puede estar nunca en posesión de toda la verdad y de toda la razón—, propiciaron unas cuantas huelgas generales, todas ellas sin acuerdo y sin negociación con los agentes sociales. Por tanto, su señoría debe saber perfectamente que hay momentos en que no se trata de mayorías absolutas o de minorías, sino de que al Gobierno le corresponde la responsabilidad de tomar decisiones, y las tiene que tomar. Pero en este caso, la única vez que no ha concertado una reforma con los agentes sociales no ha parado de propiciar puntos de encuentro para que esa reforma pudiera encontrarlos y que, lógicamente, se pudiera hacer por consenso, y en estos momentos los agentes sociales aplauden ese ejercicio de responsabilidad del Gobierno y, sin duda alguna, también aplauden que hayamos llegado a acuerdos importantes en un tema tan conflictivo, que iba a generar tanta tensión, y del que sus señorías están hablando desde el pasado mes de julio, porque probablemente también era la continuación de esa estrategia la siniestralidad laboral.

Señoría, de lo que se trata es de resolver los problemas que tienen los ciudadanos. Lo que ustedes quieren muchas veces es traer una serie de temas para que parezca que les preocupan, pero cuando después se buscan soluciones se apartan de ellas porque eso ya no responde a su interés electoral. Sin embargo, la situación de España en estos momentos precisamente es la que es, desde el punto de vista de su diferencial de crecimiento con respecto al resto de países de la Unión Europea, por las políticas de reforma que el Gobierno ha emprendido en los últimos tiempos, todas ellas criticadas y censuradas por el Partido Socialista y por su grupo parlamentario.

Voy a entrar en la cuestión que me trae aquí esta mañana. Refiriéndome tan sólo al último año, le diré, señoría, que las cifras muestran cómo en el período que va de enero a julio de este año, en comparación con el mismo período del año anterior, el número absoluto de accidentes laborales —la siniestralidad total— ha disminuido un 3,2 por ciento, un dato absolutamente oficial que no discute nadie,

tampoco las centrales sindicales. La siniestralidad total ha disminuido en un 3,2 por ciento. Y el índice de incidencia, que es el que relaciona el número de accidentes ocurridos por cada 100.000 trabajadores ocupados, un dato que refleja mejor la realidad puesto que tiene en cuenta la población ocupada, ha disminuido en un 6,3 por ciento. Si bien es cierto que el primer semestre de este año ofrece datos negativos —su señoría los conoce— al aumentar la siniestralidad grave y mortal —eso lo hemos reconocido siempre—, no es menos cierto que esos mismos datos indican una disminución de la accidentalidad leve, que supone más del 98,5 por ciento del total de accidentes ocurridos en nuestro país.

Estas cifras son así, pero en cualquier caso no nos pueden llevar a ningún tipo de conformismo ni a producirnos ninguna satisfacción. Con independencia de que podamos manejar los porcentajes que le acabo de referir a su señoría, hay que seguir trabajando. Desde 1996 venimos haciéndolo, y hay que decir que las acciones emprendidas por el Gobierno en el ámbito de la prevención de riesgos laborales han sido importantísimas. Le citaré algunas: puesta en marcha de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Fundación para la Prevención de Fiesgos Laborales; desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; promoción de los planes de choque para las empresas con mayores índices de siniestralidad, a que ha hecho referencia su señoría; impulso del Plan de Acción contra la Siniestralidad Laboral aprobado en 1998; acuerdos alcanzados con la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo para el desarrollo de planes generales de actuación dirigidos principalmente a las pequeñas y medianas empresas y la puesta en marcha del Comité Mixto Ministerio de Trabajo-Comunidades Autónomas, que son, señoría, las administraciones públicas con competencias en esta materia.

Y ya que su señoría ha querido leerme las opiniones de un profesor de la Universidad Jaume I de la Comunidad Valenciana, concretamente del señor Castelló, también debe saber que en una comunidad que tan bien conozco, como es la Comunidad Valenciana, se han cosechado los mejores resultados, reconocido por los agentes sociales, en los últimos tiempos, como seguramente ya sabe su señoría. Sin embargo, no han tenido la misma suerte otras comunidades autónomas, por ejemplo, la de Asturias, a la que también le vendría muy bien conocer la posición y la opinión de tan prestigiosos profesores universitarios.

Señoría, en el Gobierno somos muy conscientes de que la lucha contra la siniestralidad laboral es una responsabilidad que tiene que ser compartida por empresarios, trabajadores y administraciones públicas; pero le digo más, también debe ser compartida por el conjunto de la sociedad. Por ello, las actuaciones desarrolladas por el Gobierno desde 1996 abordan la seguridad en el empleo desde una perspectiva absolutamente integral y global que incluye medidas de actuación en ámbitos tan diversos como la formación, la prevención, la inspección, el control del cumplimiento de la normativa o la investigación de los accidentes de trabajo. Y así, por ejemplo, el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que sabe su señoría que

actúa en coordinación con países y agencias de la Unión Europea, desarrolla una labor fundamental en campos tales como la investigación, imprescindible para determinar las áreas prioritarias de actuación, o el fomento de la cultura preventiva, que mediante campañas de sensibilización pretende concienciar al conjunto de la sociedad sobre la importancia de este problema.

En el ámbito de la inspección y del control del cumplimiento de la normativa de prevención, y por referirme tan sólo a las actuaciones desarrolladas en los primeros seis meses de este año, conviene recordar que la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha levantado cerca de 15.000 actas de infracción, lo que significa un 11,87 por ciento más con respecto al mismo período del año pasado.

Como otra muestra más de la acción del Gobierno en esta materia, se debe recordar el encargo hecho por el presidente del Gobierno al presidente del Consejo Económico y Social para la realización de un estudio—diagnóstico de la labor preventiva y de los mecanismos que pudieran contribuir a su mejora, por lo que el presidente manifestó su sensibilidad mucho antes. Ese estudio ya existe y sus conclusiones se presentaron en un documento conocido como Informe Durán, que sigue siendo la referencia de buena parte de las actuaciones que se vienen desarrollando en estos momentos por el Gobierno.

Evidentemente, la Mesa del día 14, a la que me he referido, tenía la pretensión de seguir adelante con este esfuerzo y de hacerlo en colaboración y desde el diálogo con los agentes sociales. Es la primera vez, señoría, que un ministro preside esa Mesa —fíjese el grado de implicación— asumiendo el riesgo político que conlleva esa decisión. Repito que he querido implicarme directamente —e insisto en que es la primera vez que sucede— en la dirección de esos trabajos y agradezco que los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras correspondieran a mi iniciativa personal con su presencia en la Mesa de diálogo, dándole la mayor importancia que se le podía dar.

En esa Mesa planteé cinco objetivos inmediatos y prioritarios y, como le he referido ya a su señoría, el compromiso es poder concluir el acuerdo antes de finalizar el año. Esos cinco objetivos son los siguientes:

En primer lugar, mejorar los sistemas de información disponibles actualmente de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a través de la implantación de un nuevo modelo de partes de accidentes que permita, concretamente, un conocimiento inmediato de los accidentes mortales y, sobre todo, de sus causas.

En segundo lugar, impulsar un plan de choque contra la siniestralidad, que comprende a su vez tres actuaciones muy concretas. La primera de ellas sería intensificar el Plan de actuación preferente en las empresas con mayor siniestralidad, pues —como ustedes saben— el 40 por ciento de los accidentes laborales se acumula en tan sólo el 3 por ciento de las empresas. Este plan ya se ha venido desarrollando en los últimos años, pero precisa de una mejor coordinación entre todas las administraciones para permitir una mejor evaluación y seguimiento del mismo. La segunda consistiría en impulsar actuaciones específicas so-

bre las empresas que ocupan directa o indirectamente, es decir incluyendo actividades externalizadas o subcontratadas a más de mil trabajadores. La tercera sería impulsar actuaciones específicas en el sector de la construcción.

El tercer objetivo que se propone el Gobierno es incrementar la dotación de medios humanos en la inspección de trabajo.

El cuarto objetivo parte de la voluntad de abordar las oportunas modificaciones normativas en el régimen de subcontratación y externalización de actividades.

Finalmente, el quinto objetivo es modificar la tarifa de las primas del seguro obligatorio de accidentes de trabajo para ajustarla a la peligrosidad real de las actividades que se desarrollan y para establecer un sistema de bonificaciones y recargos en dichas primas en función del índice de siniestralidad de cada empresa.

En estas cuestiones concretas estamos trabajando en estos momentos. Lógicamente, como en esta materia deseamos el máximo compromiso con todas las administraciones implicadas y consideramos que las comunidades autónomas tienen muchísimo que decir, el diálogo que hemos iniciado con los interlocutores sociales se va a extender inmediatamente a las comunidades autónomas. Pretendemos establecer de este modo líneas de actuación que, a ser posible, sean conjuntas y consensuadas.

Señorías, he resumido el tremendo esfuerzo que el Gobierno viene realizando y he manifestado su voluntad de seguir haciéndolo de forma inmediata. Insisto en que la estrategia de su señoría es muy mala, en el sentido de buscar aquí la confrontación con el Gobierno. Los ciudadanos no la entienden porque saben que las competencias son compartidas y que es un problema social que nos incumbe absolutamente a todos.

Como última reflexión, señoría, lamento que el cambio de clima la instauración no sé si del diálogo social pero al menos de una relación intensa sobre todas las cuestiones que en el ámbito laboral y en el ámbito de empleo afectan a los trabajadores de este país, les pueda molestar a sus señorías.

El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, vaya terminando.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Concluyo, señor Presidente.

No esperaba el aplauso, no esperaba la satisfacción, pero al menos esperaba el silencio, porque es una medida muy oportuna, cuando, lógicamente, todo lo que se ha diseñado, todo lo que se ha pronosticado se viene abajo en función de un acuerdo entre los agentes sociales y el Gobierno. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador interpelante.

El señor ALONSO GARCÍA: Señor Ministro, quien dice estar seguro de lo que dice jamás necesita manipular

el mensaje del contrario, y usted ha estado manipulando mi mensaje, porque he empleado un tono positivo en el estilo, en la forma y en el contenido. He realizado una valoración positiva de las iniciativas que usted presentó ante las organizaciones sindicales, y usted viene aquí inventando una estrategia de confrontación que en absoluto se puede desprender a lo largo de toda mi intervención, porque estrategias de confrontación, señor Ministro, son aquellas que se derivan de los gobiernos que pagaban las huelgas cuando se convocaba contra el Partido Socialista. Esa es estrategia de confrontación, señor Ministro. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

Señor Ministro, habla usted de la responsabilidad del Gobierno, y le he dicho que valoramos positivamente su iniciativa, pero aún no nos ha aclarado con cargo a qué partida presupuestaria y de qué presupuesto van a disponer todas esas medidas que usted nos anuncia en la Cámara. Anuncie usted con cargo a qué partida y qué cantidad; no nos lo diga hoy, díganoslo a lo largo de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.

Yo creo, señor Ministro, que usted hace un juicio de valor sobre la intencionalidad que nos asiste cuando traemos distintos temas a la Cámara. Yo venía con ánimo de construir, pero de lo que no cabe duda es que de las palabras, de la exposición, de la provocación en la que usted se ha instalado a lo largo de toda su exposición, desde luego no se construye absolutamente nada, se destruye.

He hecho un alarde sobre el informe Durán, espero que haya leído el artículo que recientemente escribió el propio Durán diciendo que el Gobierno del Partido Popular en absoluto había tenido en cuenta ninguna de las propuestas que él había indicado en el informe.

Señor Ministro, yo le he preguntado hasta cuándo iban a mantener la perniciosa incidencia de la reforma laboral del año 2001, y a eso usted no me ha dicho ni una sola palabra, porque aquí ya habíamos advertido hace apenas un año de las consecuencias que se iban a derivar de esa reforma, y el Partido Popular, cuando legisla, lejos de colaborar de forma decidida para dar solución a los problemas lo pone siempre peor; por tanto, no legislen. En el acuerdo de 1997 ustedes sólo tuvieron que actuar como notarios y sólo tuvieron que adecuar la norma para el acuerdo alcanzado entre agentes sociales y económicos, y fue un buen acuerdo, que este grupo parlamentario valoró, y cuando haya iniciativas políticas, soluciones que den respuesta a las necesidades de los agentes sociales y que tengan aquiescencia de las organizaciones económicas, tenga por seguro que no encontrará en nosotros, como nunca encontró, rechazo de ninguna naturaleza.

En el año 2001 ustedes legislaron, y las consecuencias de la legislación son los accidentes que ahora estamos analizando y debatiendo. Ya lo habíamos advertido. Y mire por dónde, habida cuenta de que también se desprende de la reforma de 2001, está en ciernes al menos la amenaza de que ustedes pueden legislar sobre la reforma de la negociación colectiva, instrumento interesantísimo que tiene incidencia en todo lo que es el marco de relaciones laborales y de relaciones industriales. Y la gran lección que los

agentes económicos y sociales dieron a este país fue el acuerdo interconfederal de negociación colectiva del año 1991, basado en dos variables: productividad y estabilidad en el empleo. Eso es combatir el espíritu de la reforma del año 2001 y están de acuerdo en que la negociación colectiva gire en torno a esas dos variables.

Señor Ministro, ¿qué ocurre en España? Teniendo un crecimiento económico, un ciclo expansivo no conocido jamás en la historia reciente de nuestro país, con un crecimiento importante del empleo —ante el que hay que hacer un reconocimiento expreso—, sin embargo, con un crecimiento económico importantísimo, creciendo el empleo, nos alejamos ocho puntos de la productividad del resto de los países de la Unión Europea.

¿Qué está pasando? Que en el momento en que tengamos que hacer frente a una recesión económica, habida cuenta que el empleo que se genera no está basado ni en la innovación, ni en la investigación, ni en el desarrollo, sino que compite en torno a dos variables, que son jornadas de trabajo y salarios, inmediatamente la variable que se va a resentir es la fuerza de trabajo, y probablemente —ojalá no lo veamos nadie— retornemos a cifras de desempleo muy elevadas. No cabe duda que esto pone de manifiesto que todo el empleo que se genera en España es de muy baja calidad y de muy poco valor añadido.

Señor Ministro, el único elemento que integra a la persona, hombre o mujer, en el cuerpo social, es el trabajo.

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya concluyendo.

El señor ALONSO GARCÍA: Concluyo, señor Presidente.

Decía que el trabajo es lo único que le da signo de pertenencia, y al margen de eso no hay más que exclusión social. Por lo tanto, que todas nuestras iniciativas, que todos nuestros esfuerzos, los de ustedes y los nuestros, vayan dirigidos exclusivamente a dar calidad, a dar seguridad y a dar estabilidad dentro de ese cuerpo social.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Señor Presidente, señorías, agradezco todo lo que pueda tener de tono positivo su intervención, pero en el ejercicio y en el ánimo de libertad y de sinceridad con el que debo expresarme en esta Cámara le he dicho al principio que, lógicamente, su señoría ha planteado y ha seguido planteando en este último turno cuestiones que nada tenían que ver con la interpelación. A mí me da exactamente igual, porque son materias conocidas por mí y, desde luego, no seré yo el que me asuste ni el que me retraiga ante ningún tipo de debate. Lo que le he dicho y reitero a su señoría es que muy pocos argumentos debe de tener en la cuestión específica que nos traía esta mañana para abor-

dar otros temas y no centrarnos en algo de tantísimo interés, de tanta importancia y de tanta repercusión social como es la siniestralidad.

Le he hablado de eso y le he dado alguna pincelada en mi contestación a algunos de los argumentos esgrimidos por su señoría. Y sigo pensando, y lo digo con el máximo respeto —pero como lo pienso lo debo decir—, que sus señorías se han quedado un tanto descolocados con la relación de diálogo existente en estos momentos con los agentes sociales. Y sigo pensando —y si me equivoco lo lamento mucho— que están en una situación de búsqueda de confrontación, cuando hoy no existe por parte de los agentes sociales con el Gobierno ni del Gobierno con los agentes sociales, sino todo lo contrario, porque las únicas declaraciones que se escuchan con frecuencia últimamente son precisamente de las formaciones políticas de oposición, pero no de las organizaciones sindicales ni del Gobierno, que estamos intentando atemperar un clima delicado, que estamos abandonando en este momento y entrar en una relación que me parece que es perfectamente provechosa y positiva para nuestro país.

No no sé si alguien habrá pagado huelgas. Le puedo asegurar que yo, ninguna. Yo no he participado en la financiación de ningún tipo de huelga, y me imagino que ni el Partido Popular ni ninguno de sus militantes lo habrá hecho.

Lo que reconoce su señoría es algo tan evidente y tan obvio que en ocasiones no lo utilizamos en los debates, y es que el Gobierno socialista emprendió una serie de reformas —me imagino que algunas con más sentido que otras a tenor de los resultados, pero no vamos a entrar en eso— que propiciaron un clima de crispación social como nunca se ha vuelto a producir en este país. Y no hicieron nada por reconducir esa situación cuando se produjo. No sé si a su señoría le molestó la actuación del Partido Popular en aquel momento —que ni siquiera recuerdo— de confrontación importante y grave entre los gobiernos socialistas y los agentes sociales, pero le puedo decir que me ha sorprendido que aquellos que censuraban y criticaban con dureza a las organizaciones sindicales y las acusaban de deslealtad, de ir en contra de los intereses generales de España, etcétera, estuvieran aplaudiendo en la concentración celebrada en Madrid simplemente porque lo que había cambiado era el Gobierno. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) No voy a discutir con nadie. Sólo hay que repasar las hemerotecas que están llenas de declaraciones de destacadísimos personajes y dirigentes del Grupo Parlamentario Socialista.

En cualquier caso, hoy hemos venido a hablar de otra cosa. Pero su señoría me ha preguntado cuándo pienso retirar la reforma. Pues mire, nunca. No tengo empacho en contestar esta cuestión. Nunca la vamos a retirar y mucho menos cuando los agentes sociales afirman que esta reforma empieza a satisfacerles y que es buena. ¿Por qué vamos a retirarla? (*Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio por favor.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): El otro día leí en un medio de comunicación importante que los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras habían compartido una cena con los secretarios generales de los Partidos Socialista e Izquierda Unida y según esta información — bien informada normalmente de la actuación de la oposición—, se quejaban ante dichos secretarios generales de que se hubiera restablecido el clima de diálogo social. Probablemente, como su señoría acaba de manifestar, sea una gran preocupación de la oposición (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) y, por tanto, estén intentando por todos los medios forzar una situación. (*El señor Romero Calero: ¡Jamás! ¡Jamás!— Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego respeten el turno de palabra y guarden silencio.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Entrando en lo concreto, he de decir que hay una cosa que me preocupa. Su señoría ha dicho —y así constará en el «Diario de Sesiones»— que la reforma de 2001 es la causa de los accidentes de trabajo. Pues dígaselo usted a las organizaciones sindicales y a la patronal, que suscribieron la reforma con el Gobierno. Su señoría está haciendo responsable de los accidentes de trabajo a UGT, a Comisiones Obreras y también a la CEOE, a todos los que firmaron esos acuerdos. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) Después su señoría afirma que hemos crecido, pero no todo el mundo reconoce que hemos crecido. También ha afirmado su señoría que hemos creado empleo, algo que nadie discute, y que vendrá la recesión, etcétera. Ya sabemos que hemos crecido, que hemos creado empleo y que no estamos en recesión. Lástima que el señor Montoro no lo hubiera sabido ayer para habérselo dicho en el Congreso de los Diputados al señor Zapatero que afirmaba justo lo contrario. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) Se pregunta usted qué nos va a ocurrir cuando vengan mal dadas. Pues cuando vengan mal dadas, que afortunadamente no han venido todavía por ese proceso de reforma que el Gobierno de España ha realizado, España estará en una situación mucho mejor de lo que ha estado nunca en una etapa de recesión. Es la primera vez que España es elogiada y admirada por el resto de países de la Unión Europea. Es la primera vez que estamos cosechando un gran prestigio internacional y es la primera vez que hemos conseguido que tantos parados que el Partido Socialista abocó a esa situación hayan encontrado empleo. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

Señor senador, le ruego guarde silencio. (*Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) Le llamo al orden.

— DE DON VICTORIANO RÍOS PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LOS PLANES DEL GOBIERNO PARA LOCALIZAR Y DETENER A LOS EXTRANJEROS QUE, TRAS CADUCAR SU PERMISO DE ESTANCIA EN EL PAÍS, PROLONGAN SU PERMANENCIA EN ÉL, ASÍ COMO SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA CONTROLAR LAS SITUACIONES IRREGULARES DERIVADAS DE LA INMIGRACIÓN (670/000159).

El señor PRESIDENTE: Interpelación del excelentísimo señor don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario de senadores de Coalición Canaria, sobre los planes del Gobierno para localizar y detener a los extranjeros que, tras caducar su permiso de estancia en el país, prolongan su permanencia en él.

Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador Rodríguez Díaz.

El señor RODRÍGUEZ DÍAZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, en el Pleno celebrado el pasado día 9 de octubre, ante una pregunta oral planteada por este senador sobre el mismo contenido de esta interpelación, el señor ministro de Justicia expuso de forma sucinta los aspectos fundamentales de la legislación que se aplica a aquellos extranjeros que permanecen en nuestro país más tiempo del permitido. Ya le anuncié en esa intervención que presentaríamos una interpelación, pues se trata de un problema que requiere un debate en profundidad, imposible de ahondar en el tiempo de una pregunta oral. Por lo tanto, señor ministro, considérese esta interpelación como una pregunta en la que tanto usted como el interpelante vamos a disponer del tiempo adecuado para profundizar en este asunto que tanto nos interesa.

No es nuestro objetivo —como se dice en expresión popular— sacarle los colores al Gobierno, sino saber qué está haciendo su Ministerio para conocer en profundidad y establecer mecanismos de control ante el fenómeno creciente de la inmigración irregular, que por una u otras razones nos preocupa a todos. Explicó durante su intervención que los extranjeros que vienen a España por razones de turismo están autorizados a permanecer en nuestro país por un plazo que no debe ser superior a tres meses, y además, en aplicación del Acuerdo de Schengen, una vez que los extranjeros entran por una frontera exterior de un Estado que aplica este convenio, pueden circular libremente en calidad de turistas durante tres meses por los distintos Estados. Una vez transcurrido ese tiempo se encuentran en nuestro país ilegalmente, por lo que corresponde la aplicación de las previsiones de la legalidad vigente y, tras el procedimiento oportuno, si se acredita que realmente carecen de autorización, son acusados de infracción grave que es sancionable con la expulsión del territorio español.

En el mencionado Pleno ofreció datos relativos a los extranjeros repatriados a sus países de origen —52.283 desde el 1 de enero hasta el 7 de octubre—, pero no precisó cifras concretas ni aproximadas del número total de inmi-

grantes que permanecen en España después de entrar en nuestro territorio en calidad de turistas. Tampoco nos indicó cómo ha ido evolucionando esa cifra en los últimos años, ni los países o zonas de origen. Sin embargo, a pesar de que no contemos con estadísticas específicas —que serían muy necesarias— es fácil aventurar que éstos representan el mayor porcentaje de inmigrantes irregulares frente a los que entran en nuestro país ilegalmente, principalmente a bordo de pateras procedentes de las costas del continente africano.

A pesar de que las noticias sobre la llegada de inmigrantes irregulares se centran fundamentalmente en estos casos en que lo hacen a bordo de pateras, lo cierto es que la mayoría de extranjeros que permanecen actualmente en nuestro país sin cumplir los requisitos que se les exigen han cruzado nuestras fronteras a través de aeropuertos, puertos, estaciones de trenes, etcétera. Muchos de ellos lo han hecho en calidad de turistas, prolongando su estancia más allá del tiempo establecido. El Gobierno ha reconocido en diferentes comparecencias que es muy difícil distinguir entre aquéllos que han sido detenidos tras su llegada a bordo de una patera y los que han sido detectados en situación irregular tras extinguirse su permiso de permanencia en España.

La situación es especialmente preocupante en Canarias, dado que confluyen ambos casos: la llegada masiva en los últimos meses de inmigrantes a bordo de pateras a través de las costas de las islas de Fuerteventura, Lanzarote y en menor medida Gran Canaria, y la creciente presencia de personas procedentes de diferentes países, especialmente del este europeo, de América y del Magreb, que continúan en nuestro territorio a pesar de que su situación no se ajusta a la legalidad vigente.

En el caso de Canarias, el crecimiento económico es el imán que atrae a la población inmigrante en busca de oportunidades que no encuentran en sus países de procedencia. Un estudio presentado recientemente por la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias revela que, de cada cien nuevas personas empadronadas en las islas, setenta proceden del exterior; de estos, un alto porcentaje corresponde a ciudadanos no comunitarios, especialmente latinoamericanos, que ya representan un importante peso en el ámbito demográfico de las islas, mientras que los inmigrantes africanos tan sólo constituyen el uno por ciento, puesto que su objetivo, tras recalar en las islas y si no son repatriados, es viajar a otros países de la Unión Europea.

El flujo migratorio en las islas se ha multiplicado por diez, entre el año 2000 y 2001, con 65.000 nuevas personas en este período de tiempo —un año— y que representan el 3,6 por ciento de la población total de Canarias.

Nos consta que el asunto que hoy planteamos nuevamente en el Senado ha sido analizado desde diferentes perspectivas por parte de su Gobierno y de la propia Unión Europea, que se han ido materializando paulatinamente, como es la ampliación del número de países a cuyos ciudadanos se les pide visado de entrada o las acciones encaminadas a blindar sus fronteras exteriores; medidas que tuvieron un carácter prioritario en la reciente Presidencia española de la Unión Europea.

En los debates celebrados en el seno de la Unión Europea se ha constatado, como comentaba anteriormente, que el goteo diario de llegada de pateras no resiste la comparación con el número de extranjeros que se cuelan por los aeropuertos y otras vías de entrada, como las que he citado anteriormente. Entran como teóricos turistas y sólo están obligados a llevar un mínimo de dinero, en torno a 1.030 euros, para sus gastos de estancia, lo que es un requisito relativamente fácil de cumplir ya que las mafias se encargan de facilitarlo. Una vez en España, y transcurrido el tiempo de estancia permitido, se convierten en inmigrantes irregulares en busca de trabajo, sobre todo en el mercado negro —la mayoría de las veces— y a la espera de obtener los ansiados papeles para la regularización de su situación. Así se explica que, en apenas dos años, el número de ecuatorianos residentes legales en España, por ejemplo, se haya multiplicado por más de cinco, llegando casi a 100.000.

Algo parecido sucede con los nacionales de Colombia que, de un número insignificante, han pasado a ser más de 50.000; crecimiento que, según fuentes de su Departamento, se ha ralentizado desde que la Unión Europea acordó exigir visado, por ejemplo, a los ciudadanos colombianos. La obtención de un visado no es fácil, hay que acreditar muchos requisitos ante la embajada española y eso restringe sensiblemente los canales de entrada.

Para la mayoría de países con más inmigrantes en España ya rige el visado. Marruecos, China, República Dominicana, Paquistán, Cuba, Perú y Argelia son países emisores de inmigración, frente a los que la Unión Europea se blindó, poniendo el máximo de trabas para que sus nacionales nos visiten, exigiendo visado.

En conclusión, tal como usted expuso en el Pleno del pasado día 9 de octubre, Coalición Canaria también apoya la inmigración legal y que se adopten todas las medidas para la integración social y laboral de estas personas, mientras que rechaza la irregular por las consecuencias que tiene, en primer lugar, para los propios afectados y por el entramado de mafias que se está lucrando con esta situación. Además, abogamos por impulsar la protección de los inmigrantes, una vez se encuentren en nuestro país, con las medidas sociales pertinentes y la remisión a sus naciones de origen en el caso de que no cumplan los requisitos, todo ello respetando las exigencias legales y humanitarias contempladas en las leyes y en los convenios internacionales.

Somos conscientes de que se trata de una política muy compleja, que requiere la puesta en marcha de un amplio dispositivo y que requerirá tiempo contar con un servicio realmente efectivo.

Por eso, con esta interpelación Coalición Canaria pretende conocer la cifra de que dispone su ministerio sobre este fenómeno, así como los mecanismos que se están impulsando en este sentido y las consecuencias que se derivarán de los mismos. Nos preocupa porque en territorios tan sensibles y limitados como Canarias, comienza a ser un problema que ya requiere de políticas rápidas y eficaces para evitar tener que lamentarnos en un futuro no muy lejano, y todo ello, repito, con el máximo respeto a los derechos humanos de estas personas.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

En nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, en primer lugar, quiero agradecer el tono y el contenido de su intervención. De las propuestas que ha formulado y de las reflexiones que ha realizado puede concluirse que compartimos fundamentalmente la política en materia de inmigración, como no podía ser de otra manera si de lo que se trata es de salvaguardar los intereses generales y no otro tipo de objetivos.

En la actualidad la política de inmigración es una política europea, un problema común, complejo, como ha dicho su señoría, y efectivamente son necesarios debates, pero como los que ha planteado su señoría, constructivos a la hora de plantear cómo podemos mejorar la situación en España, pero desde la perspectiva del conjunto de la Unión Europea.

Si me permite, realizaré unas reflexiones iniciales y comenzaré diciendo que la política de inmigración del Gobierno se asienta en esas consideraciones compartidas, como las que ha realizado su señoría, de que tanto España como Europa son y deben ser territorios de acogida. Para ello es absolutamente imprescindible que la inmigración sea legal, es decir, conforme a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, porque es la única forma de favorecer posibilidades reales de integración, fundamentalmente derivadas del trabajo y de la educación. Pues bien, si compartimos esta premisa, hemos de ser capaces de alcanzar un segundo acuerdo: es necesario firmeza en la lucha contra la inmigración ilegal y, especialmente, en la lucha contra la represión del tráfico ilícito de personas y en la lucha contra la explotación de seres humanos.

La inmigración ilegal o clandestina debe tener un tratamiento igual, es decir, el legalmente establecido, independientemente del origen de esa ilegalidad, sea de origen o sobrevenida, como el caso que plantea en concreto de los turistas, que tienen un permiso inicial para estar en España, pero transcurrido el tiempo legalmente establecido se convierte en situación ilegal. Con ello quiero decir que el Gobierno apuesta por un compromiso claro de lucha contra la inmigración ilegal en defensa de los intereses y de los derechos de los propios inmigrantes y, desde luego, del interés general de nuestra sociedad. La principal consecuencia desde este principio de actuación en caso de inmigración ilegal, insisto, debe ser la repatriación de todos aquellos que utilicen esta vía, así como la persecución y condena, en su caso, de todos aquellos que utilicen de manera delictiva este fenómeno para obtener ventajas ilícitas. Hemos de ser capaces de conjugar adecuadamente integración y lucha contra la inmigración ilegal promoviendo también medidas y actuaciones contra la discriminación, el racismo y la xenofobia.

En esta primera reflexión quiero incidir también en la necesidad de seguir coordinando nuestras políticas en el ámbito internacional y, como decía al comienzo, muy especialmente en el marco de la Unión Europea. Es cierto

que se ha avanzado mucho en los últimos tiempos en la consecución de una política común de asilo e inmigración, cuestión esta que se plantea como un verdadero reto para los Estados de la Unión en un espacio sin fronteras, como ya es el nuestro. Y en ello estamos trabajando ahora todos los Estados, tratando de adoptar una política común europea de inmigración desde un planteamiento serio y equilibrado, pero también desde la necesidad de llevar a cabo un control efectivo de las fronteras exteriores para luchar contra la inmigración ilegal.

Precisamente es en este campo concreto en el que se están dando pasos decisivos en los últimos días en el seno de la Unión con objeto de que haya un tratamiento de máxima dureza para las redes que trafican con seres humanos. Así, en el último Consejo de Ministros de Justicia e Interior, que celebramos la semana pasada, se han culminado los esfuerzos que ya impulsó la Presidencia española para la aprobación de una decisión marco que va a armonizar los delitos cometidos por personas que trafican con seres humanos, imponiendo en todo el ámbito de la Unión Europea que cuando menos las penas correspondientes a estas personas sean de un mínimo de ocho años en todos los Estados de la Unión.

A continuación voy a detallarle las principales medidas políticas que estamos desarrollando —insisto, tanto desde el Gobierno como en el ámbito de la Unión Europea— en materia de inmigración ilegal. En primer lugar se encuentra la repatriación de extranjeros en situación ilegal. Los datos demuestran que se ha hecho un esfuerzo considerable en lo que se refiere a expulsiones en sentido amplio o repatriaciones de extranjeros irregulares, siempre en aplicación de la ley de extranjería. Así, durante el año 2000 —ya tuve ocasión de comentarlo desde esta tribuna— se llevaron a cabo un total de 39.000 repatriaciones de extranjeros; en 2001 dichas repatriaciones estuvieron en torno a las 45.000, y en lo que llevamos de 2000 ya son alrededor de 53.000 las repatriaciones efectuadas.

Las causas de este aumento se deben fundamentalmente a la propia realidad de la inmigración, pero también han influido una serie de decisiones, por ejemplo, las sucesivas modificaciones normativas o la firma de convenios bilaterales con diversos Estados de origen, lo que está posibilitando la ejecución de un mayor número de resoluciones para la repatriación. En este sentido, al final de mi intervención le daré mi opinión sobre cómo deben ser los acuerdos sobre repatriaciones con los países con los que todavía no existe este tipo de convenios.

En segundo lugar están las actuaciones sobre los centros de internamiento de extranjeros. Como su señoría sabe, dichos centros son uno de los instrumentos básicos para conseguir la repatriación de los extranjeros que se encuentran en situación ilegal en España, además de proporcionar una asistencia humanitaria y sanitaria en las debidas condiciones para aquellos que han alcanzado de forma irregular o clandestina nuestro territorio. Precisamente para atender esas necesidades y el creciente fenómeno de la inmigración ilegal en determinadas zonas de nuestro territorio estamos trabajando en la apertura de nuevos centros, concretamente, en Madrid, Barcelona, Santa Cruz de

Tenerife y Algeciras. En el caso del centro de Santa Cruz de Tenerife, su señoría sabe perfectamente que tratamos de llevar a cabo esta labor con el mayor consenso posible de todas las instituciones de Tenerife así como del Gobierno canario. Por otro lado, queremos ampliar los centros ya existentes en Valencia, Murcia y Fuerteventura. Por ejemplo, contando con un presupuesto de tres millones 778.627 euros para el año 2002, hemos ampliado la capacidad de los centros de Las Palmas, hasta un total de 168 plazas, del Matorral, en Fuerteventura, hasta un total de 350 plazas, y de la terminal del aeropuerto de la misma isla, hasta un total de 425 plazas.

Quiero resaltar que los esfuerzos del Gobierno en esta línea de actuación se intensificarán durante el próximo año. Así lo hemos hecho en los presupuestos para 2003, previendo una cantidad de siete millones 256.021 euros para dicho fin, lo que supone nada menos que un 92 por ciento de incremento respecto del presupuesto del año 2002.

En tercer lugar se encuentran las unidades especializadas en la lucha contra las redes de inmigración y falsificación de documentos, conocidas como las UCRIF. Hay que decir que la dotación económica para este año de estas unidades especializadas es de más de tres millones de euros, en tanto que para el próximo año está previsto que ésta supere los tres millones 245.468 euros. Las UCRIF son unidades policiales específicas que tienen como objetivo la prevención y desarticulación de las redes dedicadas a la inmigración ilegal, la detección y persecución de conductas de explotación a extranjeros en el territorio nacional, sean de carácter laboral, sexual o de cualquier otro orden, y la captación, tratamiento, análisis y explotación de cuanta información se genera en este campo, tanto a nivel nacional como internacional, absolutamente esencial para luego poder establecer una política policial eficaz y relevante, en especial respecto de materias como la que su señoría ha planteado sobre quienes acceden vía turismo y posteriormente permanecen en España de forma ilegal.

Estas unidades, como sin duda su señoría conoce, iniciaron su andadura el pasado año y queremos que a partir de ahora se consoliden plenamente por la eficacia de su trabajo mediante una adecuada dotación de los medios humanos y técnicos. Además de las 14 unidades territoriales, coordinadas todas ellas por la UCRIF central, existe una unidad dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Documentación en la Dirección General de la Policía. Asimismo, se están potenciando los mecanismos de colaboración y cooperación de estos servicios policiales con la Guardia Civil, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como las actuaciones para la persecución de delitos relativos a la inmigración.

Como muestra de esta línea de actuación existe una serie de datos especialmente significativos que pone de manifiesto la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta lucha contra la inmigración ilegal. En el año 2001 se desarticulaban 362 redes de traficantes de inmigrantes, deteniéndose a 1.223 personas responsables de estas organizaciones delictivas. En el año 2002, desde el día 1 de enero hasta el 16 de octubre, se han desarticulado nada menos que 565 redes, lo cual representa un incre-

mento en la eficacia policial de un 56 por ciento, y se han detenido —fíjese usted en la importancia de este dato— a 1.589 responsables, con un incremento de dicha eficacia, por tanto, del 30 por ciento respecto del año 2001.

En cuarto lugar existe otro aspecto relevante en ese diseño de la política de inmigración que no me gustaría dejar de citar, y es el control de las condiciones de trabajo, salarios y Seguridad Social de los trabajadores extranjeros para evitar discriminaciones y situaciones de ilegalidad o irregularidad. En este sentido vamos a insistir en una adecuada coordinación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en especial éstas, que específicamente se van a dedicar a este trabajo, y también con el Ministerio Fiscal y los órganos judiciales para luchar contra todas las actividades de tráfico ilegal de mano de obra extranjera. De nuevo su señoría podrá ver la importancia que tiene todo ello en materia de inmigrantes ilegales que proceden del turismo, que se incorporan a un puesto de trabajo y que a los tres meses devienen en una situación irregular en cuanto a su estancia en España.

La labor inspectora respecto de estas condiciones jurídicas y laborales de los trabajadores extranjeros se ha incrementado muy considerablemente. Así, durante el período de enero a agosto de 2002 ha aumentado un 26,84 por ciento el número de actuaciones respecto del mismo período del 2001 y un 14,19 por ciento el número de infracciones, y un 35 por ciento el número de infracciones.

En quinto lugar vamos a incrementar la red de funcionarios de enlace, tanto en países terceros de inmigración como entre los funcionarios de enlace situados en los servicios centrales de los Estados miembros.

Y, en sexto lugar, la negociación y firma de acuerdos de readmisión. Como usted conoce, ya tenemos acuerdos bilaterales de readmisión con Bulgaria, Estonia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Marruecos, Portugal, Eslovaquia, Rumania, Polonia y Nigeria, todos ellos en vigor.

Recientemente se ha firmado un acuerdo de readmisión con Argelia y se ha rubricado un acuerdo en esta materia con Suiza el 18 de septiembre de 2002.

Con estos acuerdos son múltiples los objetivos que pretendemos conseguir, la mejora de la cooperación entre los países firmantes, entre las partes contratantes, para una mejor aplicación de las disposiciones sobre migraciones; la lucha contra la inmigración ilegal tanto en origen como a la hora de la devolución y la posibilidad real de repatriar a los nacionales de una de las partes que residan ilegalmente en el territorio de otra; así como tratar a dichas personas con dignidad salvaguardando los derechos humanos.

En cualquier caso, estos acuerdos de readmisión tienen que ser cada vez más una responsabilidad del conjunto de la Unión Europea y que las negociaciones con estos países debe ser una responsabilidad no de cada uno de los Estados miembros, sino del conjunto de la Unión Europea porque su capacidad de negociación tanto desde el punto de vista político como su vinculación en la ayuda al desarrollo hace muy importante que sea en este marco de negociación donde se desarrolle.

Así lo ha propuesto España. Es una reflexión compartida por todos los Estados de la Unión Europea y en las

próximas semanas la Comisión hará una propuesta específica para llevar a cabo estos acuerdos de readmisión.

El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, vaya finalizando, por favor.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Pania-gua): Terminó, señor Presidente.

Finalizo diciéndole que usted me pidió el otro día, y hoy ha vuelto a insistir, un dato que —como usted comprenderá— es imposible dárselo desde un Gobierno, que es el número de inmigrantes clandestinos. Si el Gobierno le diera un dato oficial de emigrantes dejarían de convertirse en clandestinos para ser otro tipo de inmigración y, por tanto, ese dato oficialmente no podría darse porque pasarían de clandestinos a oficiales y yo no puedo, como usted comprenderá, facilitárselo.

Si quiere, en la siguiente intervención podemos dar los datos de turistas que han entrado —que seguro que usted conoce los relativos a Canarias y el número de repatriaciones que se han producido en función de cada una de las islas, pero no de la clandestinidad.

En cualquier caso, ésta es la política correcta y adecuada. No hay otra política posible según se entiende en el conjunto de la Unión Europea y lo que hay que hacer es sumar esfuerzos desde todas las instituciones para abordar un problema que va a tener el mundo en su conjunto, pero que Europa y España, cuando ocupó su Presidencia, sentó desde el primer momento las bases esenciales para una política coherente y eficaz en un problema tan complejo como es el de la inmigración y que, sin duda, si colaboramos podremos darle una mejor respuesta.

Gracias. *(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el senador interpelante.

El señor RODRÍGUEZ DÍAZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, le agradezco la información y los datos que ha podido facilitarnos. Sé que más allá de esos datos de las expulsiones que se han realizado en los últimos años es difícil ofrecer cifras concretas.

Usted ha dicho que no puede dármelas y yo lo entiendo. Me gustaría saber si no puede facilitármelas porque no es conveniente o no es conveniente hacerlas llegar a la opinión pública o porque no los tiene. Entendería las dos cosas, las dos posiciones, pero es peligroso que en los medios de comunicación se estén barajando cifras tan diferentes como aquellas que hablan de que cada año se quedan en nuestro país de esa forma irregular entre 100.000 y 500.000 personas procedentes de países no miembros de la Unión Europea. Por supuesto, nadie ha demostrado estas cifras, nadie ha ofrecido fuentes fidedignas de información y obedecen a cálculos absolutamente discutibles.

Incluso es mucho más difícil que usted me dé el desglose de esas cifras por años, como las relativas a las nacionalidades de origen, un dato que también es fundamen-

tal, o el relativo a las comunidades autónomas donde permanecen esos inmigrantes ilegales —y no me refiero a clandestinos, porque es evidente que si se dieran esas cifras ya no serían clandestinos, aunque sigan siendo ilegales—. Asimismo, respecto a las comunidades autónomas donde permanecen, para nosotros sería interesante conocer incluso el desglose no sólo por provincias sino por islas también, sobre todo por la repercusión social que estas situaciones producen en Canarias.

No obstante, quiero transmitir en esta parte de la intervención el mensaje sobre la necesidad de evitar el racismo y la xenofobia, aun cuando no se quiera denominar con estos términos, que muchas veces este tipo de debates suscita no sólo en la población en general sino entre distintas organizaciones sociales o políticas. Tendríamos que suscribir un pacto escrito o tácito entre las distintas fuerzas políticas para evitar que la discusión, el debate, la acción política en este sentido se convierta en arma arrojadiza o en un filón de demagogia permanente. Ello no es bueno no sólo para la situación de muchos inmigrantes sino para la propia sociedad española, incluso creo que es muy negativa para las propias organizaciones políticas o sociales emplear aquellos argumentos.

Como usted ha dicho muy bien, España —y yo subrayo Canarias— ha sido siempre territorio de acogida, en primer lugar, por principios éticos y humanos y, en segundo lugar, también ahora por necesidad. España, igual que la mayoría de los países de la Unión Europea, necesita personal —no digo mano de obra barata—, unas veces cualificado en determinadas especialidades y otras menos cualificado pero esta capacidad de acogida tenemos que administrarla bien, conocerla, integrarla en perfectas condiciones y debemos evitar —y usted lo ha señalado claramente— que el fenómeno de la inmigración devenga, como hoy mismo leíamos en algunas noticias de distintos periódicos, en situaciones de explotación laboral, que requieren, como usted bien ha expresado, de un control, de labores de inspección, así como en otros tipos de explotación que todos conocemos.

Por tanto, ese control de fronteras, como decía antes, respetando la legalidad y los convenios internacionales, tiene que centrarse —y usted ha ofrecido datos concretos— en las redes de inmigrantes, porque en el territorio continental de España los flujos llegan desde el Este, el Oeste y el Sur, pero en Canarias nos vienen desde el Este, el Oeste, el Sur y también el Norte. Y esto es algo que tenemos que valorar en su justa medida. Perdonen que repita un argumento que no, por manido, deja de ser cierto, el relativo a nuestro territorio, que implica una mayor sensibilidad, una mayor fragilidad de nuestras estructuras no sólo sociales y económicas sino también territoriales.

Por tanto, ese control, con todos los respetos y todas las condiciones que antes referíamos, es fundamental, salvaguardando —insisto— los derechos humanos, que son los mismos que tenemos nosotros como nacionales legales excepto el derecho a permanecer en nuestro país, porque no son tributarios de este derecho, y hacerlo de forma ilegal.

Por lo tanto, para ir terminando con esta segunda intervención —que tengo que reconocer públicamente que en

estos últimos meses ha experimentado un cambio sustancialmente positivo—, le pediría el aumento de la colaboración y de la información con las comunidades autónomas.

Nosotros compartimos ese deseo de sumar esfuerzos en esta tarea, pero para ello hace falta que las distintas administraciones, empezando por la administración del Estado...

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.

El señor RODRÍGUEZ DÍAZ : Muchas gracias, termino enseguida.

... hace falta que compartan con las comunidades autónomas, especialmente con la Comunidad Autónoma de Canarias, colaboración e información. Además, de cara a la opinión pública, que haya la máxima transparencia posible, porque ello propiciaría que con información consigamos un mayor nivel de educación y sensibilidad social ante este problema y evitemos cualquier tentación hacia el racismo, la xenofobia o la utilización demagógica de este problema socialmente tan importante y en otros aspectos, que yo creo que todos compartimos. Debemos desarrollar una cultura de consenso y de entendimiento generalizado entre todos los grupos sociales y políticos para hacer un uso adecuado de la información y de las políticas que se desarrollan en este terreno.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Gracias, señor Presidente.

Señoría, con respecto a la petición de las cifras, debo decirle que ninguno de los datos que se publican en España ni en el conjunto de Europa se puede decir que se aproximen a una realidad desde un punto de vista riguroso, porque es imposible precisamente por la propia definición de clandestinidad o de ilegalidad. Si alguien puede contar el número de inmigrantes ilegales que existen en un momento determinado, lo que tiene que hacer es detenerles y, por lo tanto, iniciar el expediente para aplicarles la ley de extranjería.

Pero no sólo por esto, sino porque, como usted conoce bien, una de las peculiaridades y características de la inmigración ilegal y también de las dificultades que tiene el conjunto de los Estados de Europa es la gran movilidad, porque se producen tránsitos en algunos momentos de días o incluso de horas. Uno de los grandes problemas sobre los que se está debatiendo es cómo se lucha contra la inmigración ilegal en los países de tránsito, porque precisamente ésa es una de sus características y peculiaridades.

De tal forma que, aunque fuésemos capaces de hacer una foto fija un día concreto, al día siguiente ya no tendría valor y no sería en absoluto riguroso. Y el mejor ejemplo es el que usted ha dado, que un día se publica que hay 100.000 y al día siguiente se dice que hay 500.000 o que la cifra está entre 100.000 y 500.0000.

En efecto, por definición es imposible dar una cifra y, además, no creo que debamos especular con cifras de estas características, porque generalmente a lo que conducen es a desenfocar el problema, a generar inquietudes que muchas veces no se ajustan a la propia realidad. Las cifras que no voy a repetir por no cansarles —están a disposición de sus señorías— son de la inmigración irregular detenida, sea en frontera, sea en puertos, sea en aeropuertos o sea en vía marítima, así como las repatriaciones que se han producido en cada uno de los años desde 1999 hasta ahora en Canarias o los residentes extranjeros —que seguro que usted también los tiene— que en estos momentos hay en las Islas Canarias.

Ésas son las cifras serias y rigurosas que podemos facilitar. Lo otro es imposible, serían especulaciones y, por lo tanto, creo que no debemos entrar en esa cuestión. Sin embargo, sí debemos entrar en la política que tenemos que llevar a cabo.

Es verdad —su señoría lo ha dicho—, que Canarias tiene unas peculiaridades sobre las que, como bien conoce, estamos trabajando de manera solidaria; esa solidaridad que se reclama del conjunto del Estado, del conjunto de España porque, como decíamos en la pregunta anterior, cuando un inmigrante ilegal está entrando en la costa de Canarias está entrando en España, está entrando en la Unión Europea.

Por tanto, tiene que ser una política de inmigración del conjunto del Estado, pero tenemos que ir mucho más allá, tiene que ser una política del conjunto de la Unión Europea, porque si no estaríamos yendo contra nuestros propios intereses. Los Estados que somos frontera del conjunto de la Unión Europea no podemos ser los responsables en exclusiva ni del control de las fronteras ni de la repatriación; no es justo ni es lógico que tengamos la responsabilidad exclusiva del control de las mismas; es verdad que una mayor incidencia sí es lógica y natural, por nuestra situación geográfica, pero no puede imputarse ni la responsabilidad ni los costos exclusivos a la hora de blindar esas fronteras ni de producir las repatriaciones, porque, con los datos que hemos estado manejando, todo el mundo puede comprender el enorme costo que supone para las arcas del Estado una política como ésta, y con la que estamos absolutamente de acuerdo.

Por eso, la definición de una política europea pasa por la solidaridad en toda Europa, como un problema común, porque lo es, ya que a veces territorios como Canarias se convierten, a veces, en lugares de destino, pero en muchas ocasiones en lugares de tránsito hacia el conjunto de la Unión Europea, de tal forma que tiene que haber responsabilidades compartidas en su ejecución, en las medidas operativas, pero también en las medidas financieras a la hora de elaborar y distribuir estos planes que, insisto, a diferencia de lo que ocurría no hace mucho tiempo, ahora ya existe una política, sabemos qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y la disposición de ejecutarla y de llevarla adelante.

Falta un tercer elemento que también su señoría ha mencionado, que es común y compartido: la política, sus responsabilidades y su ejecución, en los mensajes y también en las políticas concretas, de tal forma que seremos sin duda mucho más eficaces; no estaremos enviando un

mensaje equívoco y arriesgado si lo hacemos desde la cooperación, desde la colaboración, desde la aportación de experiencias, resultados y medidas positivas, a los que estamos absolutamente abiertos, para tratarlos e incorporarlos a este mismo tipo de política, además de a defenderlos como lo estamos haciendo en el conjunto de la Unión Europea, y así estaremos en la buena dirección a la hora de la defensa de los intereses...

El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, vaya finalizando, por favor.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Termino, señor Presidente.

Con ello estaremos en la buena dirección la hora de la defensa de los intereses generales, que sin duda alguna es lo que nos anima, y ha animado esta interpelación.

Nada más y muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señorías, se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde, en el nuevo hemiciclo.

Eran las catorce horas.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes.

Se reanuda la sesión.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

— DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY BÁSICA REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA (S. 622/000010) (C. D. 124/000002).

El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.

De la Comisión de Sanidad y Consumo en relación con la proposición de ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la presidenta de la Comisión, senadora López Garnica.

La señora LÓPEZ GARNICA: Muchas gracias, señor Presidente.

Felicidades.

Señorías, la iniciativa legislativa que se va a debatir nace en el Senado como una proposición de ley sobre los derechos de información concernientes a la salud y autonomía del paciente y la documentación clínica y fue formulada por los grupos parlamentarios Entesa Catalana de Progrés y Catalán en el Senado de Convergència i Unió, publicándose el día 8 de febrero de 2001.

Esta proposición se retiró el 27 de febrero de ese mismo año para dar paso a la iniciativa formulada por todos los grupos parlamentarios del Senado. En concreto, la nueva proposición de ley se publicó el día 1 de marzo de 2001, a la que no se presentaron proposiciones alternativas, y fue tomada en consideración por el Pleno del Senado el día 21 de marzo de 2001. Seguidamente, se remitió al Congreso de los Diputados para su tramitación, siendo aprobada por dicha Cámara, el pasado 27 de junio del presente año.

Tras su tramitación en el Congreso de los Diputados, la proposición de ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica tuvo entrada en el Senado el pasado día 27 de junio de 2002. La Mesa del Senado acordó su remisión a la Comisión de Sanidad y Consumo, abriéndose un plazo para la presentación de enmiendas hasta el 10 de septiembre del mismo año. Dicho plazo fue ampliado hasta el día 16 de septiembre. Finalizado el mismo, se presentaron 47 enmiendas.

La ponencia, reunida los días 10 y 16 de octubre de 2002, emitió el correspondiente informe, al cual, fruto del consenso, se incorporaron numerosas enmiendas y modificaciones. Por su parte, la Comisión de Sanidad y Consumo dictaminó el día 16 de octubre de 2002. Para su tramitación ante el pleno se han formulado cinco votos particulares, referidos a 27 enmiendas.

La proposición de ley regula una materia muy relevante para la ciudadanía, como es la autonomía del paciente y los derechos y obligaciones sobre documentación e información clínica novedosa en el Derecho español. No obstante, conviene tener en cuenta que al día de la fecha existen ya varias leyes de comunidades autónomas, que versan sobre esta materia.

Señorías, desde esta tribuna, y como presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo que ha estudiado y dictaminado esta proposición de ley, quiero felicitar y reconocer el trabajo realizado, tanto por su letrado, señor Peña, como por los ponentes de la ley, senadores Bellido Muñoz, Loroño Ormaechea, Rodríguez Díaz, en sustitución de Ríos Pérez, al que deseamos una pronta recuperación de su enfermedad, Espasa i Oliver, Cardona i Vila, López Carvajal, Catalá Pardo, Gómez Mata, en sustitución de Fernández-Delgado, y Antón Rueda.

El excelente trabajo de todos los ponentes, el ambiente de diálogo obtenido en la ponencia y el alto grado de consenso logrado, a pesar de las diferencias manifestadas, dado el importante contenido de la ley, son motivos suficientes para que la Comisión de Sanidad y Consumo —y creemos que la totalidad de la Cámara— esté orgullosa.

Señorías, en esta ocasión hay que reconocer públicamente que esta Cámara ha realizado una segunda lectura con mayúsculas.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Comienza el debate de la totalidad.

¿Turno a favor? (*Pausa.*)

¿Turno en contra? (*Pausa.*)

A continuación vamos a proceder al debate del articulado.

Tiene la palabra la senadora De Boneta para la defensa de las enmiendas números 12 a 16, del Grupo Parlamentario Mixto, formuladas originariamente por la citada senadora, y la enmienda número 27, formulada originariamente por el senador Quintana González.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Me voy a referir a las enmiendas números 12 a 16, presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, y originariamente de esta senadora de Eusko Alkartasuna. Mi compañero de Grupo defenderá la suya a continuación.

En relación a estas enmiendas, debo decir que han sido presentadas y mantenidas, fundamentalmente porque entendemos que era difícilmente reconocible la proposición, en relación con la original, a su vuelta del trámite del Congreso de los Diputados y presentada en el Senado, sin perjuicio de la nueva mejora que ha experimentado en su andadura por esta Cámara.

Creemos que, aunque esta ley presente avances respecto a la situación anterior, no ha desarrollado suficientemente algunos aspectos, no solamente en relación a la natural reserva de los datos de las historias clínicas, a los derechos de los pacientes a la información sobre lo relacionado con sus enfermedades y con sus posibles soluciones, sino también, a las, creo que llamadas, instrucciones o voluntades previas.

En este caso la proposición ha sido de alguna manera restringida, por lo que, planteando una actitud más garantista para los derechos de los pacientes, presentamos las enmiendas números 12, 13 y 14, referidas a adiciones a los artículos 11.2, 11.3 y 11.4, con la creación de un nuevo punto 4 bis y, por último, la enmienda número 15 al artículo 11.5 relativa a la modificación del Registro de Voluntades Anticipadas o Instrucciones Previas, que entendemos que debe residir en las comunidades autónomas, en caso de que éstas lo crean conveniente.

Por último, lo que perseguía la enmienda número 16, al artículo 16.7, tras el informe de la ponencia aprobado por la comisión, ha quedado recogido en el sentido de que «las comunidades autónomas regularán el procedimiento para que quede constancia del acceso a la historia clínica y de su uso».

Por lo tanto, señor Presidente, señorías, quiero dejar constancia de la retirada de dicha enmienda número 16 y del mantenimiento de las restantes, las números 12, 13, 14 y 15, porque entendemos que mejoran la proposición a efectos de que resulte más garantista para los derechos de los pacientes, sobre todo en aquello que se refiere a la

constancia fehaciente de las instrucciones previas o voluntades previas, tal como se establece en la proposición de ley.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda número 27, tiene la palabra el senador Quintana.

El señor QUINTANA GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Hemos presentado una única enmienda al artículo 9.4, que versa sobre los límites del consentimiento informado y del consentimiento por representación, porque consideramos regresiva la interpretación que hace de la intervención voluntaria del embarazo.

Estimamos, por tanto, que con esta referencia, obligando a obtenerlo a todas las menores hasta que alcancen la edad de 18 años, se está de hecho limitando el acceso de la menor a la propia interrupción voluntaria y, además, consideramos que la exigencia del consentimiento no debería interpretarse en este mismo articulado desde la misma perspectiva retórica en que se hace.

Situaciones recientes vividas en Galicia nos animaron a presentar esta enmienda por considerar que serviría para en un futuro solventar todas las vicisitudes a las que hubo que hacer frente. Ésa es nuestra propuesta y esa es nuestra enmienda.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por parte del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y para la defensa de las enmiendas 2, 3, 5 a 11, tiene la palabra la senadora Loroño.

La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, voy a defender las enmiendas que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos mantiene vivas para este turno de debate en pleno de la proposición de ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

En primer lugar, tengo que decir que en el trámite de ponencia, como bien decía la presidenta de la Comisión en su intervención a la hora de presentar el dictamen, se hizo un trabajo fructífero, un trabajo altamente positivo y en el que hay que reconocer la labor de los ponentes, como bien decía ella, pero fundamentalmente, la de los ponentes del Grupo Parlamentario Popular, el senador Antón y la senadora Gámez, que hicieron esfuerzos hasta alcanzar un consenso en aquellos aspectos que considero también fundamentales y de ahí que mantengamos enmiendas para este debate en Pleno.

Retiramos las enmiendas números 5 y 10, por entender que con la aceptación de la número 42 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y se recoge el espíritu que nosotros trasladábamos en ellas; la enmienda número 11, porque llegamos a transaccionar

un texto durante el trámite de ponencia que también recoge el espíritu que aquélla planteaba.

Las enmiendas números 6 y 7 tenían por objeto, o al menos estaba en el ánimo del grupo parlamentario, reflejar en el contenido de la proposición de ley el derecho de acceso a la historia clínica en un caso que no se preveía, que era recoger de alguna forma la posibilidad de que pueda haber acceso por parte de terceros, familiares o personas vinculadas al titular de la historia clínica, en el supuesto de que todavía éste no hubiera fallecido. Pero oídos los argumentos del profundo debate que mantuvimos en el seno de la ponencia, aunque entendemos que esto podría quedar recogido de alguna forma en aras de ese consenso y para evitar posibles fricciones en el seno de esta Cámara e incluso fricciones con el derecho a la intimidad del paciente, que era el fundamental que se argumentaba en el debate que sostuvimos en la ponencia, retiramos también las enmiendas números 6 y 7.

Mantenemos vivas, como grupo parlamentario, las enmiendas números 2, 3, 8 y 9.

La enmienda número 2 propone la supresión, en el artículo 11.3, de la referencia explícita que se hace a la «lex artis» por una razón muy sencilla, que ya argumentamos en el trámite de ponencia, que es que la «lex artis» se considera como parte del ordenamiento jurídico. Quizás en el trámite de ponencia, al suprimir o al matizar mediante la adición de una coma la separación del ordenamiento jurídico puede interpretarse en cierto modo por algunos miembros de esta Cámara que eso es válido. A juicio de nuestro grupo parlamentario no es válido, porque no podemos mezclar ni vincular al contenido de una ley lo que es la buena práctica clínica. Quizá compartamos más o menos este sentido y este cariz que queremos seguir manteniendo por entender, inclusive, que en el marco de esta ley que pretende, sobre todo, humanizar la relación médico-paciente, lo que no podemos hacer es cuestionar la buena práctica de los profesionales que conforman nuestro sistema sanitario. Discrepando de la opinión que se pueda tener al respecto, seguimos manteniendo la supresión explícita de la referencia a la «lex artis», que es lo que se pretende con nuestra enmienda número 2.

También mantenemos viva nuestra enmienda número 3, en la que planteamos una sustitución del punto 5 del artículo 11. A través de dicha enmienda planteamos que se busquen mecanismos ágiles y eficaces para lograr que esta ley funcione de forma efectiva y eficaz, es decir, que los cauces de información entre las distintas comunidades autónomas para poder informar sobre la existencia o no de instrucciones previas con respecto a una persona que puede ser atendida en distintos sistemas de salud pertenecientes a distintas comunidades autónomas se lleve a cabo a través de registros que se puedan crear por los servicios de salud de cada una de las comunidades autónomas y, por tanto, que se articulen los mecanismos de funcionamiento que garanticen ese intercambio fluido.

Lo que propone el texto original es que se cree el registro en el Ministerio, y lo que nosotros planteamos en nuestra enmienda es que se creen registros en los servicios de salud de las Comunidades Autónomas. Entendemos que el

ministerio tendrá que crear su registro, pero también que si queremos que esta ley sea efectiva y cumpla el objetivo y el fin primordial que tiene, que es garantizar la autonomía del paciente y los derechos y obligaciones en todo el entramado del Sistema Nacional de Salud, también las comunidades autónomas deben crear sus propios registros, aspecto este que en algunas comunidades autónomas ya se ha puesto en marcha.

Por último, mantenemos vivas las enmiendas números 8 y 9, fundamentalmente por el hecho que argumentábamos en la tramitación en ponencia, que es la definición que damos o la rúbrica bajo la cual contemplamos el artículo 21, en la cual hablamos del alta del paciente. En ese sentido, lo que queremos recalcar a través de estas enmiendas es precisamente las situaciones más habituales que se dan en los procesos de alta del paciente frente a la situación excepcional que contempla dicho artículo.

Únicamente se trata de acotar en sus justos términos lo que supone el alta del paciente y contemplar los aspectos recogidos en los puntos 1 y 2 del artículo 21 en cuanto a la situación excepcional a la que hace referencia dicho artículo.

Éstas son las enmiendas que vamos a mantener vivas para el transcurso del debate en este Pleno, concretamente las números 2, 3, 8 y 9 y esperemos que los posibles flecos o discrepancias que en estos momentos seguimos manteniendo los distintos grupos en esta Cámara puedan ir acortándose a lo largo de este debate. Sería bueno para todos que pudiéramos aprobar esta proposición de ley, que surgió precisamente en esta Cámara, por unanimidad.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Espasa para defender las enmiendas números 18, 20, 25 y 26.

El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor Presidente.

De nuestras enmiendas —son cuatro— voy a dar por defendidas todas menos la número 25, que es la que se refiere al ámbito competencial, en el que voy a centrar mi intervención.

De las enmiendas números 18 y 20 sólo voy a mencionar que mantener el texto como lo hace el Grupo mayoritario es una actitud, en nuestra opinión, de defensa médica innecesaria, de una cierta claudicación a presiones, seguramente, de los colegios de médicos y que desvirtúa el estuendo espíritu de la ley. Aquí quedan nuestros argumentos —no quiero ahondar sobre ellos— y las doy por defendidas.

A la hora de defender la enmienda número 25, la que hace referencia a la adicional primera, es decir, al aspecto competencial de la ley, he de decir lo siguiente. Ésta es, señorías, una ley, como se ha dicho, muy buena, positiva, una ley pionera, como lo fue la Ley de reproducción asistida en España. En ese sentido, como país, como Estado, vamos a convertirnos en uno de los primeros en regular temas de forma positiva tan detallada y tan brillantemente

como se hace en esta ley. En este aspecto debería declararme muy contento y satisfecho, como lo han hecho otras señorías, y en parte lo estoy.

Es una ley que, para decirlo muy brevemente, refuerza la autonomía del paciente, refuerza su derecho a la información, permite, por lo tanto, el derecho a rechazar tratamientos y puede conducir así, de forma digna, de forma autónoma y de forma voluntaria, la propia muerte del enfermo a través, antes, de las voluntades anticipadas y ahora mediante las instrucciones previas.

Es una ley que, como se dijo, nada tiene que ver ni con eutanasia ni con suicidio asistido. Es una ley mucho más amplia, mucho más ambiciosa y mucho más beneficiosa y positiva. Por todo ello, expreso mi satisfacción por el trabajo bien hecho de nuestro Grupo y de todos los grupos de esta Cámara y de las Cortes Generales. Pero a la vez, señorías, es una ley que nos ha disgustado, y más que disgustado nos ha decepcionado profundamente en la forma en que finalmente viene a esta Cámara.

Recuerden ustedes el «íter» de esta ley —ya se ha dicho y voy a ser muy breve—. Es una ley que, haciendo una especie de subgrupo territorial especial, los siete senadores designados por la Comunidad Autónoma de Cataluña, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y después todos los grupos parlamentarios de esta Cámara presentan al Senado. Por lo tanto, digamos que se trata del subgrupo territorial de Cataluña y, entre comillas si ustedes quieren, de toda la Cámara. ¿Por qué? Lo dijimos en una frase lapidaria. Considerábamos que lo que era bueno para Cataluña tenía que ser bueno para todos los españoles, o lo que era bueno para los ciudadanos de Cataluña debía ser bueno para todos los españoles.

¿Qué ha sucedido? En parte lo que queríamos, pero en parte, como decía, nos ha disgustado y nos ha decepcionado profundamente. ¿Por qué? Porque la ley en su parte nuclear, en su parte filosófica, en lo que se refiere a los aspectos éticos o morales, es la ley catalana. Por eso hemos de decir: es buena, es la nuestra, o sea, nos reconocemos en ella. Pero esta misma ley y lo que se le añade de documentación y gestión de la historia clínica es tan prolijo, tan exhaustivo, tan detallado, que han conseguido ustedes asfixiar el concepto de legislación básica. Han llegado ustedes a tal prolijidad que lo han asfixiado. Van ustedes a expulsar de la normativa vigente la ley catalana. Se va a producir prácticamente una expulsión de la ley catalana ya en vigor y desarrollada por diversos decretos —en Cataluña el registro ya está desarrollado por un decreto— de aprobarse esta ley de contenido básico —luego me referiré a esto— en los términos en que está en este momento, sin ninguna concesión por su parte al consenso. Nosotros estamos de acuerdo en que es una ley básica porque afecta al artículo 149.1.1ª y 16ª de la Constitución, pero también podría ser una ley básica sin que todos los artículos fuesen básicos, pero ni tan siquiera eso han querido ustedes. Ustedes han dicho aquello de: ¿No quieres caldo? Pues toma dos tazas. Básica y todos los artículos básicos. Había un punto de consenso hoy y lo habrá hasta el último momento: ley básica, sí, pero no todos sus artículos básicos. Ustedes no

quieren. ¡Pues allá ustedes! Pero ésta es la situación de esta Ley hoy.

Quizá sea innecesario recordarles, puesto que hay ilustres constitucionalistas en todo el abanico de la Cámara, también a este lado (*Señalando a los escaños de la derecha.*), que el Tribunal Constitucional ha declarado que lo que se considera norma básica lo es fundamentalmente por la materia, no por la forma. La forma avisa de lo que va a ser básico, pero después esta norma básica debe sustentarse en la propia materia, y, en nuestra opinión, muchas de las materias reguladas en esta ley, aunque tienen su anclaje en el artículo 149.1.1ª o en el artículo 149.1.16ª de la Constitución, por la forma tan prolija en que se desarrollan pierden materialidad. Estamos seguros de que si el árbitro supremo va a entrar ahí a producir la luz puesto que ustedes o nosotros no hemos sabido discernir lo básico de lo no básico —a nosotros nos parece necesario—, se va a encontrar con artículos que por razón de la materia nunca hubiesen tenido que declararse básicos.

Voy a poner solamente dos ejemplos en relación con mi argumentación. El primero se refiere al artículo 20, referente al informe de alta. Señorías, imagínense que se llega a regular como norma básica cuándo y cómo debe hacerse el informe de alta. Pues bien, la prueba del nueve de que lo que decimos es cierto está en la disposición transitoria única de la ley, que dice: este artículo 20 no entrará en vigor hasta tanto no se legisle lo que prevé la disposición reglamentaria de 1984. Es decir, ustedes han elevado a norma básica lo que era un decreto ministerial del año 1984, con lo cual debería haber seguido siendo cuestión de decretos u órdenes ministeriales sean del Ministerio de Sanidad o sean de las comunidades autónomas. Creo que una cuestión tan evidente como ésta me ahorra aducir otros ejemplos.

En relación con el artículo 17.4, se llega a dilucidar qué hospitales o qué centros sanitarios deben tener una unidad de admisión para clasificar las historias clínicas. Llegan ustedes a tal detalle procedimental en defensa de los derechos que se deben proteger —con los cuales no estamos en desacuerdo—, que por razones de exhaustividad y prolijidad agotan ustedes la capacidad legislativa y, sobre todo, invaden las competencias de las Comunidades Autónomas.

Por tanto, lo que va a suceder es lo que he anunciado antes. Un ámbito normativo ya ocupado por la Generalitat de Cataluña en desarrollo prudente del bloque constitucional que en este caso es Constitución Española y Ley General de Sanidad, ley que aportamos a esta Cámara para que se convirtiese en ley española, va a ser desplazado, asfixiado y probablemente expulsado del ámbito normativo de nuestro país. Es difícil pretender que exista lo que se llama una concurrencia perfecta de legislación en nuestro sistema. En todo caso, será la primera vez que convivan una norma básica y una norma autonómica, pero doctores tiene la Iglesia y ya nos lo dirán. Lo cierto es que las cosas están así.

Por todo ello, señorías, nosotros —y creo que no seremos los únicos— deberemos acudir al árbitro constitucional para que dilucide, mediante su superior dictamen, qué

preceptos son básicos y cuáles no por razón de la materia y no por razón de los derechos fundamentales en los que dice anclarse esta ley. Ya saben ustedes que compartimos su criterio, pero no será por razón de la materia sino por la forma prolija y exhaustiva en que se ha legislado.

Señorías del Grupo Parlamentario Popular, y me refiero sólo al Grupo Popular porque esas enmiendas competenciales van a ser votadas casi con toda seguridad por toda la Cámara excepto por ustedes, van a quedarse solos en esa convicción de que toda la norma es básica, todos los artículos son básicos y todos los incisos de todos los artículos son básicos.

Con esto, ustedes son desleales a ese subgrupo especial de Cataluña al que me he referido antes. Han quebrado esa lealtad constitucional que nosotros, con la mejor voluntad —no digo con ingenuidad sino con la mejor voluntad, porque creo que es la mejor expresión—, trajimos a esta Cámara.

Pero faltan ustedes también al pacto constitucional que mantiene vivo el espíritu de la transición y que se ha enriquecido con el gran bloque de constitucionalidad que hoy ya existe en nuestro país: innumerables leyes básicas y de bases, sentencias del Tribunal Constitucional, todos los estatutos, lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Hoy, al declarar toda esa ley básica, hacen una quiebra al espíritu de este bloque de constitucionalidad, y lo van a hacer sólo ustedes.

Todavía tienen tiempo de llegar al consenso en esta ley y de hacer una ley básica en la que no todos los artículos sean básicos. Tienen hasta el último segundo para rectificar y no quedarse solos en esta opción.

Termino, señor Presidente. Podría llegar a pensarse —desde luego, no lo hará el senador que les habla— que esto se debe a la perversidad del Estado, del Gobierno o de la arquitectura constitucional de nuestro país. En ningún caso, ésta es nuestra opinión. Sólo se debe —y sé que utilizo una palabra un poco gruesa— a la perversidad de una determinada mayoría, hoy la del Partido Popular, que aviva fuegos grandes —no éste— en otros territorios del Estado o pequeños allí donde puede como signo distintivo de una españolidad que, en ningún caso, es la de la Constitución Española sino que es, sencillamente, la españolidad de un partido; una españolidad que nosotros rechazamos, no por española, sino porque es de partido. *(Aplausos.)*

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espasa.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra para la defensa de sus enmiendas el senador Cardona.

El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, voy a defender las enmiendas que nuestro grupo ha presentado para este trámite en el Pleno, los números 30, 31, 34, 36, 37 y 41. Por si no me da tiempo a defender todas, empezaré por la más importante, la número 41, ya que las otras fueron debatidas suficientemente en el

trámite de Ponencia. Además, a efectos de los servicios de la Cámara, retiramos la número 43.

Presentamos la enmienda 41 a los efectos de modificar la redacción de la disposición adicional primera, sobre el carácter de ley de bases de toda la ley, que entendemos que es claramente incorrecta. Como ha hecho el senador Espasa, es necesario recordar el origen de esta proposición de ley, que, originariamente, fue presentada por los senadores catalanes y ya había sido aprobada por unanimidad a finales del año 2000 en el Parlament de Catalunya; es más, no sólo fue presentada por todos los grupos del Parlament de Catalunya sino que incluso fue redactada por todos ellos.

Aquella proposición de ley sobre los derechos de la información concernientes a la salud, a la autonomía del paciente y a la documentación clínica se tomó en consideración en esta Cámara y, luego, pasó al trámite parlamentario en el Congreso. Después de un año y medio, se nos devuelve como ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Además, en el trámite en el Congreso se le añaden nuevos apartados sobre documentación clínica, normas de autoorganización —como disposiciones sobre altas voluntarias y forzosas—, etcétera, y sobre todo es tan prolija que llega a términos más propios de desarrollo reglamentario que no de una ley, y menos de una ley con carácter de básica o ley de bases. Como ejemplo de ello podemos considerar la regulación del alta forzosa en centros sanitarios, sin discernir siquiera si es en los públicos o en los privados —y ello con carácter de ley básica—. Si se me permite la expresión, las Cortes Generales han configurado una gran obra en el trámite del Congreso, pero con unas incorporaciones que han originado ciertas deformidades.

En relación con ese carácter básico es menester dilucidar, como se hace en el informe del letrado de la Comisión de Sanidad, el concepto de lo básico, el concepto de desarrollo y la relación entre leyes básicas y las normas autonómicas de desarrollo en caso de conflicto. El concepto de lo básico, como coincide la doctrina, ofrece serios problemas de definición. Simplificando, se puede afirmar que las normas básicas en una materia son aquéllas que el legislador estatal considera como tales y lo sean realmente en cada momento histórico. La finalidad que persigue la Constitución al atribuir a los órdenes generales del Estado la competencia exclusiva para establecer las bases de la ordenación de una materia determinada sería el primer indicio del concepto de lo básico. La jurisprudencia y doctrina constitucional mantiene una línea constante al señalar que el objetivo es que tales bases tengan una regulación normativa uniforme y vigencia común en toda la nación, con lo cual se asegura, en aras de intereses generales superiores a los de cada comunidad autónoma, un denominador normativo a partir del cual cada comunidad podrá establecer las peculiaridades que le convengan —sentencias del Tribunal Constitucional 1/82, 44/82 y 32/8—. La legislación básica ha de incluir todas las normas necesarias para que una materia goce de una regulación uniforme en sus aspectos especiales y en la totalidad del territorio español. Ahora bien, como se ha encargado de sig-

nificar el supremo intérprete de la Constitución, tal legislación no puede en ningún caso vaciar de contenido las competencias de que puedan disfrutar las comunidades autónomas sobre la misma materia a través de sus leyes y reglamentos de desarrollo —sentencia del Tribunal Constitucional 147/91—, lo que se produciría si tal legislación básica fuera excesivamente minuciosa, detallada o agotadora —sentencia número 32/81—. Y esto es precisamente, a nuestro entender, lo que se ha producido, lo que ocurre precisamente en esta proposición de ley que estamos debatiendo.

El concepto de desarrollo significa que las comunidades autónomas gozan de la potestad normativa suficiente para regular la materia de que se trate, siempre que se respeten las determinaciones básicas estatales, naturalmente. La normativa básica aporta un marco en el cual es viable que la comunidad pueda actuar con libertad de configuración para realizar una política propia, la cual no tiene por qué ser o resultar idéntica a la del legislador estatal.

Finalmente, en el supuesto de conflicto pueden darse dos sistemas o dos situaciones: en primer lugar, si la ley estatal es anterior, la consecuencia será la nulidad de la normativa autonómica; en segundo lugar, si la ley básica estatal es posterior, el conflicto se resolverá con la posible derogación «*ipso iure*» de la normativa de desarrollo, como nos decía el letrado en este caso que era su posición.

Concluyendo, entendemos que buena parte de la proposición de ley tiene cobertura competencial en los títulos estatales sin mayor dificultad, incluso se podría fundamentar el carácter orgánico de alguno de estos preceptos.

La ampliación del concepto del ámbito básico que se producirá al aprobarse esta proposición de ley hará que buena parte de la ley catalana, así como otras, sea desplazable y llegue a ser inaplicable.

A pesar de esto, no toda la proposición puede juzgarse de la misma forma y hay una serie de cuestiones que la Generalitat, en este caso, puede desarrollar; cuestiones algunas que la ley intenta sustraer a las comunidades autónomas pero sin tener título para hacerlo.

En definitiva, se tendrá que reformular la ley catalana, al igual que otras, para que contengan los aspectos que la propia ley estatal permite desarrollar, y en cuanto a los casos en que la ley básica estatal se extralimite la última palabra la tendrá, cómo no, cuando se produzca el conflicto, el Tribunal Constitucional.

Podemos distinguir pues entre dos grupos de cuestiones: a) cuestiones que la ley catalana podrá regular con detalle partiendo de la ley básica estatal y b) cuestiones que la proposición de ley regula de manera demasiado detallada y que debería regular de manera principal pero no extralimitarse y dejar margen a la actuación de la ley catalana, como son la forma y el contenido de la información clínica que se ha de dar al paciente; los casos concretos de prestación del consentimiento por representante; los apartados y contenidos de la información que se le da al paciente; la gestión de la historia clínica, y finalmente también hay que recordar lo que se ha mencionado sobre el registro de documento de instrucciones previas que tendría que tener carácter autonómico.

En definitiva, señor Presidente, señorías, desde nuestra perspectiva hay algunos artículos y apartados que no han de tener tal carácter básico, como son el artículo 13, sobre el derecho a la información para la elección del médico y del centro; el artículo 15, sobre el contenido de la historia clínica de cada paciente; el artículo 17, que trata de la conservación de la documentación clínica en sus apartados 4, sobre la gestión y la custodia de la historia por parte de los centros, y, apartado 5, sobre la responsabilidad en dichos aspectos de aquellos profesionales que desarrollan su actividad de manera individual; también el artículo 19, sobre los derechos relacionados con la custodia de la historia clínica; el artículo 20, sobre el informe del alta; el artículo 21, al que antes me he referido, sobre el alta forzosa al paciente o el artículo 23, sobre las obligaciones profesionales de información técnica, estadística y administrativa.

Señor Presidente, señorías, de ustedes depende, miembros del grupo mayoritario, aunque estoy seguro de que las indicaciones que tienen es que es ley de bases porque para esto tienen la mayoría suficiente. Triste, pobre y poco racional justificación.

Muchas gracias. (*Aplausos.*)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador López Carvajal.

El señor LÓPEZ CARVAJAL: Muchas gracias, señor Presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista solamente mantiene un voto particular, la enmienda número 29, que hace referencia exactamente a la no derogación del artículo 61 de la Ley General de Sanidad.

Es cierto que este artículo que nosotros defendemos que no sea derogado está parcialmente recogido en el texto de la Ponencia que se nos presenta hoy, pero consideramos que hay al menos una parte del mismo, la que a continuación voy a dar lectura, cuya inclusión sería conveniente en el artículo 14, que es el que le corresponde. Y concretamente me refiero al artículo 61 cuando se afirma que en cada área de salud debe procurarse la máxima integración de la información relativa a cada paciente, por lo que el principio de historia clínica sanitaria, única para cada centro, deberá mantenerse al menos dentro de los límites de cada institución. Si bien es cierto que este principio intenta recogerse en el artículo 14 al señalar que se debe procurar la máxima integración de la historia clínica, al menos en el ámbito de cada centro, nosotros estimamos que esta redacción de alguna manera implica una cierta renuncia y explicaré brevemente por qué. El espíritu con el que fue redactado este artículo en la Ley General de Sanidad pretendía producir una comunicación fluida ente las historias clínicas que se generan en los centros hospitalarios y las que se manejan en los centros de atención primaria. Eso realmente no existe en la práctica, son muy pocos los casos en los que se demanda la historia clínica hospitalaria por el correspondiente médico del centro de atención primaria. Pero si dejamos recogido este principio no supone una re-

nuncia, y si lo quitamos creemos que prácticamente hemos renunciado a que ese tráfico —en el mejor sentido de la palabra— de la historia clínica que produce un beneficio para el paciente pueda seguir manteniéndose.

Por tanto, éste es el fundamento de nuestra enmienda, que admito públicamente que es de carácter menor, pero en todo caso seguimos deseando que sea posible incluirla, al menos en el espíritu en el que ha sido expuesta en el correspondiente artículo del texto que, a continuación, vamos a debatir.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para turno en contra tiene la palabra la senadora Gámez.

La señora GÁMEZ MATA: Muchas gracias, señor Presidente.

Hace unos meses tuve el placer de escuchar una magnífica conferencia del profesor Arsuaga que, como todos saben, es el codirector del Proyecto Atapuerca, y sostenía un principio interesante, que muchas veces no apreciamos en su realidad. El profesor Arsuaga comentaba en esa conferencia que la enfermedad es algo que no existe en la naturaleza, cuanto menos en un tiempo un poco prolongado. Si nos paramos a ver, efectivamente, cualquier animal que tiene una tara o enfermedad es inmediatamente depredado por sus congéneres, sin que el resto de los animales de su especie se inmuten. Es más, incluso seguramente pensarán que, afortunadamente, ese día no era el suyo. Es el hombre el primer animal que rompe este tremendo círculo de la vida y se pone a cuidar a sus congéneres.

Por lo tanto, la medicina es una de las actividades humanas que tiene mayor carga de humanidad. Pero esta ciencia que a lo largo de la historia se ha ido cargando de tanta humanidad, en algunos casos, gracias a la técnica y a la especialización, ha llegado a ser deshumana. Esa deshumanización que es llegar a la vida por la vida, en vez de lo que pretendían en un principio nuestros antepasados de la cueva, que era la vida para la vida, es lo que nos ha llevado a esta estupenda ley, una ley que pone las cosas en su sitio. ¿Y dónde está ese límite? Ese límite no lo puede poner el médico, sino que precisamente lo tiene que poner el que recibe los cuidados y el que va a ser sujeto de los mismos.

Una vez visto este principio filosófico, que es el que ha llevado a esta ley y con el consenso amplísimo de todos los grupos políticos, creo que las enmiendas a las que me voy a oponer son cuestión menuda respecto al poder filosófico y al poder tan humano que contiene toda esta ley. Las diferencias son, pues, muy pequeñas, y creo que poco empañarán —a pesar de algunas de las intervenciones que se han podido oír aquí— el espíritu de amplio consenso que existe sobre esta ley.

Empezaré diciendo que, aunque no es lo principal ni lo primero, el hecho de retirar todas las enmiendas que habíamos presentado es un paso dado por nuestro grupo. También quiero destacar el acuerdo al que se ha llegado por parte de todos los grupos en algo con lo que no contaba la ley y que ha sido muy enriquecedor. Me refiero a la redac-

ción de la disposición adicional tercera, en la que se garantiza el acceso a la información y la documentación para los pacientes con necesidades especiales, es decir, los discapacitados. Ésta era una demanda de sus asociaciones, y felizmente, y con el acuerdo de todos, repito, se ha incluido en la ley.

Por si el tiempo, que normalmente me juega malas pasadas, no me lo permitiera, paso a referirme directamente a aquello que ha creado más polémica y ha originado las más largas intervenciones. Me refiero al carácter básico o no de esta ley. Mi grupo considera que toda ella es básica, pero está claro que por lo menos 16 de los 23 artículos que contiene, así como todas las disposiciones adicionales, excepto la primera, y la disposición transitoria, han sido considerados básicos por todos nosotros. Por tanto, hay algunos importantes puntos de acuerdo. También el artículo 17 ha sido considerado en gran parte básico por todos los grupos. Y en cuanto a los artículos 4 y 14, sobre los que en su momento mantuvimos discrepancias, nuestro grupo propuso una serie de alternativas para la redacción de su texto tras las cuales se asumieran como básicos por parte del resto de los grupos.

Entre los artículos que los Grupos de Entesa y Convergència i Unió opinan que no deberían considerarse básicos están los que se refieren al derecho a la información para la elección de médico y de centro —mencionado por el senador Cardona—, al contenido de la historia clínica, en parte a la conservación de la documentación clínica, a los derechos relacionados con la custodia de la historia clínica, al informe de alta, al alta del paciente y a las obligaciones profesionales de información técnica, estadística y administrativa que tienen los médicos.

Creo que sólo el propio enunciado de alguno de estos artículos ya justifica que sean considerados básicos. Y como botón de muestra paso a leer el artículo 20, Informe de alta. Dice así: Todo paciente, familiar o persona vinculada a él, en su caso, tendrá el derecho a recibir del centro o servicio sanitario, una vez finalizado el proceso asistencial, un informe de alta con los contenidos mínimos que determina el artículo 3. Y continúa diciendo que las características, requisitos, etcétera, se determinarán por las administraciones sanitarias autonómicas.

Pues bien, no es que yo considere que recibir un informe de alta sea básico sólo para los españoles —y no me tengo que poner la peineta y ser la más española del mundo—, sino también para los nicaragüenses, los sudafricanos, o para los ciudadanos de cualquier otro país. Es decir, toda persona que salga de un hospital debe recibir un informe de alta, independientemente de que sean las comunidades autónomas las que deban decidir cómo se tiene que dar ese informe. La ley no lo indica.

En cuanto al artículo 19, indica que el paciente tiene derecho a que los centros sanitarios establezcan un mecanismo de custodia activa y diligente de las historias clínicas.

¿Es que los centros sanitarios no deben tener esos mecanismos? Y en la ley no se establece ese mecanismo, no se indica cómo debe ser esa custodia. Señorías, creo sinceramente que podemos discrepar. Además —vamos a decirlo claramente—, éste es el debate continuo, no ya del

Senado, sino de nuestra sociedad, una sociedad que ha pasado de un Estado centralista a un Estado autonómico en el que muchas competencias se han atribuido por parte del Estado central a las comunidades autónomas. Y eso crea conflicto, por lo que continuamente estamos debatiendo hasta dónde se llega y hasta dónde no se llega. Ése es el debate de todos los días, el que oímos continuamente en esta sala. ¿Y cómo se resuelve ese debate? Pues se resuelve como creo que se ha tratado de hacer en esta ley, intentando llegar al máximo posible desbrozando, cambiando y hablando, y donde ya no se puede llegar, aplicando lo que nos ha dado la democracia: la mayoría. Considero que en ese sentido hemos hecho un buen trabajo, tanto el grupo del Gobierno como, por supuesto, todos los grupos de la oposición, y quiero agradecer a todos desde esta tribuna ese grandísimo esfuerzo.

Voy a dar una respuesta a las pocas enmiendas defendidas que quedan para su tramitación en Pleno. Las enmiendas números 12, 13, 14 y 15 de la senadora De Boneta se han presentado al artículo 11. Siento que la senadora De Boneta no haya participado en la ponencia, y se lo digo con muchísimo cariño, con todo mi respeto y sintiéndolo principalmente por ella, pues creo que se lo hubiera pasado bien; hubiera visto una ley muy bonita, que afecta profundamente a la condición humana, y creo que hubiera disfrutado con todo ello. Pero el hecho de no haber estado en la ponencia le ha impedido conocer el espíritu profundo de la ley, y su espíritu, que es principalmente la relación humana y sencilla entre médico y paciente, es contrario a las enmiendas que presenta.

La enmienda número 13 redacta prácticamente las voluntades anticipadas, y considero que es mejor que cada cual las redacte según le convenga. La enmienda número 14 pretende salvaguardar una objeción de conciencia a la que no ha lugar pues, salvo que se suponga que hay médicos que se oponen a las voluntades de sus pacientes con instrucciones no contrarias ni al ordenamiento jurídico ni a la «lex artis», no tiene mucho sentido, pues son las únicas que contempla la ley. En cuanto a la enmienda número 15, que es similar a las presentadas por otros grupos, me referiré a ella conjuntamente con la de los mismos.

La enmienda número 27 ha sido presentada por el senador Quintana, y debo decirle, señoría, que tanto la interrupción voluntaria del embarazo, a la que alude su señoría, como el resto de los supuestos recogidos en el artículo 9.4 sobre ensayos clínicos y reproducción asistida, se rigen con carácter general por la mayoría de edad y por las disposiciones especiales que se pueden aplicar cuando esta circunstancia no existe. Regirse por interpretaciones a contrario que podría provocar esta ley en los tribunales al no incluir la referencia expresa a la interrupción voluntaria del embarazo podría dar lugar a que supuestos regulados para ejercer este derecho en la mayoría de edad quedasen sin base legal, y por tanto, sin regulación precisamente por no entrar dentro de un supuesto de una ley básica como ésta.

En cuanto a la «lex artis» —enmienda número 2 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que permanece para su tramitación en Pleno—, tal y como

sabe usted, senadora Loroño, fue algo enormemente debatido en la ponencia, donde hubo opiniones para todos los gustos. Nosotros presentamos una redacción alternativa, como usted misma ha reconocido, y tenía usted mucha razón, pues tal y como estaba la redacción original parecía que la «lex artis» formaba parte del ordenamiento jurídico, lo que constituía una imprecisión importante. Agradecemos muchísimo que haya puesto usted las cosas en su sitio, pero la justificación de su enmienda era precisamente ésta, aunque lo cierto es que tenía más carga de profundidad porque lo que en todo caso quería era que la «lex artis» desapareciera.

Pero es que podrían darse ciertas instrucciones previas que, sin ser contrarias al ordenamiento jurídico, fuesen extravagantes o excéntricas. Entendemos que no debemos permitir que esto ocurra, y ello quedaría salvaguardado con la referencia a la «lex artis», que es el código de conducta de los médicos, un código no escrito que impediría excentricidades o extravagancias en las últimas voluntades.

La enmienda número 3 —y con esto respondo a la número 15 de la senadora De Boneta y a la 34 de Convergència i Unió— se refiere a la creación de un registro nacional de instrucciones previas. Podemos entender que en comunidades donde este registro ya esté funcionando provoque ciertos conflictos que se cree un registro nacional. Pero el artículo está redactado de tal manera que deja suficiente libertad para que se haga el registro, siempre conjuntamente con las comunidades autónomas. El registro nacional no tiene por qué ser exhaustivo, pero a nadie se le escapa que para garantizar los derechos y las últimas voluntades de cada paciente español será más eficaz que ese registro sea para todo el territorio nacional y esté unificado. No creo que resulte más eficaz tener un registro en cada comunidad autónoma cuando todo el mundo sabe que los españoles nos movemos libremente por el territorio nacional y podemos caer enfermos o tener un accidente en cualquier comunidad. El artículo está lo suficientemente abierto para que las comunidades autónomas puedan tener un registro que a la vez se unifique en un registro nacional.

Por último, la enmienda número 29, del Grupo Parlamentario Socialista, a la disposición derogatoria única, se ha aceptado parcialmente puesto que finalmente no se derogó el apartado 4 del artículo 10 de la Ley General de Sanidad, pero no podemos aceptar que permanezca el artículo 61. Sinceramente, senador López Carvajal, lo que regula el artículo 61 de manera muy rudimentaria y primitiva —es normal, hace 20 años que se redactó la Ley General de Sanidad— es lo que de manera precisa y extensa regula esta ley de autonomía en lo que se refiere a la información clínica de cada paciente y en especial a la historia clínica. Proponer que existan criterios de unicidad en la historia clínica, al menos dentro de cada institución asistencial, cuando lo que hoy debatimos y aprobamos en esta ley es poner la historia clínica a disposición de la atención del paciente en todo el territorio español, me parece que son elementos del artículo 61 ampliamente superados. De aquella regulación rudimentaria que hablaba de que las historias estuvieran a disposición en toda el área de salud a

que estén a disposición en todo el territorio, por lo menos en los aspectos que en cada momento precise el paciente allí donde está siendo atendido, el camino recorrido es muy largo. Por lo tanto, en principio no encontramos argumentos para que usted mantenga la enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora De Boneta.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Tengo que agradecer con muchísima fuerza a la senadora Gámez el interés que tiene porque esta senadora, representante del Grupo Parlamentario Mixto y en este momento portavoz del mismo, se divierta. Le tengo que decir que me divierto muchísimo. Soy portavoz en cuatro ponencias, en cinco comisiones permanentes, en alguna de reciente creación... en fin, me divierto horrores, señora Gámez. No estoy, ni el Grupo Parlamentario Mixto está, en las ponencias en las cuales el Partido Popular entiende que el Grupo Parlamentario Mixto, o los grupos minoritarios no tienen que estar, y éste era uno de esos casos porque tampoco pertenezco a la comisión de referencia. No obstante, senadora Gámez, me he divertido mucho, he estudiado esta ley con verdadero interés y, sin perjuicio de que no pudiera asistir, conozco el informe de la ponencia y todo lo que se hizo en la misma.

No obstante, senadora Gámez, una vez contestada esta alusión personal, su discurso no nos ha convencido en absoluto —al menos al Grupo Parlamentario Mixto—, toda vez que ha hecho una alegación genérica o ha desarrollado una teoría sobre las características de la legislación básica, y entiendo, señoría, que hay sentencias, incluso del Tribunal Constitucional, que desde luego no van en la dirección de aquello que entiende usted que es básico. Usted entiende que es básico todo aquello que es común a todo el mundo y todo aquello que el Partido Popular entiende que es bueno para el Estado español en su conjunto, para el mundo o, por ejemplo, para los nicaragüenses, que creo que usted ha citado.

Lo básico es lo que está establecido y las competencias, señoría, no son algo que se otorgue a las comunidades autónomas, sino que éstas corresponden a las comunidades autónomas en virtud de sus estatutos, y las transferencias —que quizá sea a lo que usted se refería— constituyen el acto formal de concreción de esas competencias que corresponden a las comunidades autónomas.

Por lo tanto, señoría, sus argumentos para demostrar que es necesario que sean básicas todas aquellas cuestiones, con las que incluso podemos coincidir como concepto, no tiene nada que ver con aquello que corresponde legislar a los parlamentos autónomos.

En todo caso, el hecho de que exista un registro a nivel estatal no impide que existan y funcionen los registros de las comunidades autónomas para que den la información oportuna para la necesaria coordinación.

Por lo tanto, señoría, su argumentación no nos ha convencido. Entendemos perfectamente cuál era el espíritu de la proposición de ley que, como he señalado en mi primera intervención, casi no hemos podido reconocer cuando ha vuelto al Senado desde el Congreso, por los cambios sustanciales que ha sufrido.

En consecuencia, sin perjuicio de que esta ley pueda representar, en términos de concepto, no en términos de respeto a las competencias de las comunidades autónomas, un avance respecto de la situación anterior de los pacientes, entiendo que se ha perdido una oportunidad, primero, para reconocer quién y cómo debe legislar sobre estas cuestiones y, sobre todo, para reconocer unos derechos con un planteamiento progresista que, desde luego, no parece que su señoría haya captado. Lo que yo quería expresar en la enmienda planteada respecto a la objeción de conciencia es que este derecho no puede nunca impedir el derecho a la libertad de los pacientes y el derecho de éstos a la información y a todas las cuestiones que se plantean en la ley.

En consecuencia, por una parte hemos perdido la ocasión de mejorar esta proposición de ley y, por otra, de alguna manera vamos a impedir que se desarrollen leyes ya aprobadas —tal y como han manifestado algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra— tanto en la Generalitat de Catalunya, como en la propia comunidad foral de Navarra, en la cual difícilmente podrá progresar la ley aprobada cuando ésta se ponga en funcionamiento.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de senadores de Coalición Canaria, en turno de portavoces, tiene la palabra el senador don Froilán Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ DÍAZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, quiero comenzar mi intervención en este turno de portavoces haciendo una valoración global. Esta proposición de ley fue presentada —como ya se ha dicho— por parte del Grupo de Convergència i Unió, por tanto tiene su origen e inició su andadura en esta Cámara —cosa poco frecuente y a lo que últimamente no estamos acostumbrados.

Es verdad que la ley a lo largo de su tramitación por esta Cámara y sobre todo por el Congreso de los Diputados ha ido engordando —y lo digo entre comillas— aunque no hacemos una valoración negativa de este engorde de la ley, sino que creemos que se ha ido enriqueciendo. Además, no valoro tan negativamente como otros grupos las aportaciones que se hicieron en el Congreso de los Diputados. Y no sólo porque el Grupo de Coalición Canaria introdujera en el Congreso de los Diputados, con el consenso de todos los grupos, numerosas enmiendas, generalmente de adición, a esta ley, sino porque valorando el espíritu inicial de esta proposición de ley, que era dar cobertura legal al testamento vital de las personas, se han ido añadiendo y acumulando una serie de aspectos que nos parecen importan-

tes y que creo que no desvirtúan los referidos al testamento vital.

Está claro que el testamento vital y el consentimiento informado tienen que basarse en una capacidad de decisión, que no es tal si no se tiene suficiente información. Por tanto, la importancia de una buena historia clínica que obligue no sólo a la Sanidad pública, sino también a la privada, nos parece fundamental. Además, tanto en el debate en el Congreso de los Diputados como en esta segunda etapa en el Senado se han ido retirando aspectos que afectaban competencialmente a las comunidades autónomas, aunque luego citaré algunas excepciones que todos conocemos. Desde nuestro punto de vista esta ley supone un avance importante para los profesionales sanitarios, que van a tener más claras algunas cosas y van a contar con una salvaguarda jurídica de la que ahora mismo carecían. Con la mejor buena voluntad y el mejor saber hacer de los profesionales, se ha ido avanzado, aunque sin cobertura legal en muchos casos. Por tanto, valoramos globalmente la ley de forma positiva.

Por otro lado, apoyaremos varias de las enmiendas de los grupos enmendantes, porque creemos que enriquecen, mejoran o sintetizan mejor el texto de los diferentes artículos, especialmente en lo que se refiere a la salvaguarda de competencias de las comunidades autónomas. Asimismo apoyaremos otra enmienda relacionada con el carácter básico de determinados preceptos de la ley que nosotros compartimos con los grupos enmendantes.

Por último, valoramos positivamente la retirada de las enmiendas que el PP había presentado en su paso por el Senado en lo que se refiere al régimen sancionador, con las cuales el Grupo de Coalición Canaria no estaba en absoluto de acuerdo. Agradecemos y valoramos positivamente esa retirada.

En consecuencia, además de expresar el apoyo global a esta proposición de ley, quiero reconocer públicamente aquí el trabajo efectuado por todos los miembros de la Ponencia —y no lo digo por quien les habla, que se incorporó en el último momento y por causas que no le son gratas— así como el nivel de consenso y cooperación que ha existido en estos trabajos.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Loroño.

La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor Presidente.

Quisiera iniciar mi intervención en el turno de portavoces agradeciendo tanto al letrado de la Comisión como a los servicios de la Cámara la celeridad con que han elaborado los informes fruto de los arduos trabajos realizados por la ponencia. Creo que es importante reconocerlo porque dimos muy poco margen de tiempo para elaborar el informe que debía ser aprobado posteriormente en Comisión. De ahí que quiera iniciar mi intervención en este turno de portavoces reconociendo y agradeciendo ese trabajo.

Por otro lado, quiero matizar algunos aspectos que ha destacado la senadora Gámez en su turno en contra de las enmiendas que aún se mantienen vivas para su debate en este Pleno.

Senadora Gámez, dice usted que las enmiendas que se van a rechazar son cuestión menuda, que prácticamente no tienen importancia. Al menos yo por cuestión menuda entiendo algo prácticamente sin importancia o con una mínima importancia, pero la verdad es que lo que plantean las enmiendas número 25, de Entesa Catalana de Progrés, y número 41, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, no son cuestión menuda porque en ellas radica el que en estos momentos no vayamos a aprobar en esta Cámara esta proposición de ley por unanimidad; en ellas radican las discrepancias que pueda haber entre los distintos grupos de la Cámara. Porque entiendo que en la proposición de ley que estamos debatiendo hay aspectos que deben tener la consideración de básicos, hay otros que no la tienen y que, por tanto, deben ser regulados o reglamentados en su caso por las disposiciones o las normativas que adopten en el marco de su competencia las distintas comunidades autónomas. Existe una diferencia sustancial en ese sentido y, por tanto, entiendo que no es cuestión menuda la que en estos momentos prevalece para rechazar el conjunto de las enmiendas que se mantienen vivas. Éste es el elemento fundamental para que esta iniciativa sea aprobada por unanimidad.

Dicho esto, en el ámbito sanitario, las relaciones clínico-asistenciales, las relaciones médico-paciente constituyen un eje básico en la atención, en el entendimiento y en la confianza mutua que debe establecerse, y eso es lo que pretende esta proposición de ley, o, al menos, lo que pretendía esta proposición de ley cuando entró en esta Cámara a iniciativa de los senadores autonómicos catalanes, a la que nos sumamos el conjunto de grupos parlamentarios, porque, como todos saben, una iniciativa que en un principio estaba suscrita por dos grupos parlamentarios de esta Cámara posteriormente fue suscrita por el conjunto de los grupos del Senado.

En ese sentido, aunque en el trámite del Congreso se han introducido modificaciones que han podido mejorar el texto de la proposición, entendemos que una de las pocas proposiciones de ley que había sido iniciativa de esta Cámara se nos ha transformado en una proposición de ley del propio Congreso, que ha introducido modificaciones importantes, siendo la fundamental la de otorgar carácter básico al conjunto de la proposición de ley, e incluso se están vulnerando competencias en materia sanitaria que pueden ser asumidas desde el ámbito de las comunidades autónomas, competencias que en estos momentos han asumido la totalidad de las comunidades autónomas. *(El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.)*

Quiero resaltar sobre todo esta cuestión, porque la tramitación de esta proposición en el Congreso puede suponer, como decía antes, que una iniciativa de un Parlamento, el catalán, aprobada por unanimidad en dicha Cámara y trasladada a ésta de representación territorial con el objetivo de que pudiera servir de modelo positivo para el conjunto de las comunidades autónomas que hasta estos

momentos no habían hecho nada para regular una demanda social de voluntades anticipadas, de testamento vital y para garantizar el derecho a decidir personalmente sobre la actuación sanitaria en una situación individual de enfermedad, se plantee como básico, de obligado y estricto cumplimiento y se haga incluir de forma obligada en la regulación de esta materia por parte de las comunidades autónomas en los términos explicitados en la Ley.

Por ello, considero que de alguna forma nos hemos equivocado, y creo compartir este criterio con más de un miembro y más de un grupo parlamentario de esta Cámara. La proposición de ley no pretende regular ni legislar el derecho de protección de la salud recogido en el artículo 43 de la Constitución Española, sino garantizar el ejercicio de derechos consustanciales a la salud personal y la intervención del sistema sanitario en una situación personal de enfermedad, respetando su autonomía y sus decisiones personales.

Por eso también proponemos en nuestra enmienda que se omita la referencia a la «lex artis», porque no creo que ningún médico en su ejercicio profesional y en su buena práctica se sienta capaz de considerar, como ha dicho usted, que en instrucciones previas existan extravagancias que, aunque no vayan en contra del ordenamiento jurídico, pudieran ir en contra de las actuaciones personales.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): senadora Loroño, le ruego que concluya, por favor.

La señora LOROÑO ORMAECHEA: Creo que la «lex artis» opera como límite a la petición de tratamientos, pero no en la negativa a recibirlos. Por tanto, creo que nos estamos equivocando manteniendo dicha referencia en ese artículo concreto.

Concluyo diciendo que creo que cometemos un error si legislamos desde su consideración como un derecho fundamental, otorgándole carácter básico, porque el fin de esta proposición de ley no era ése, sino el de respetar la autonomía de una persona para decidir de qué forma quiere que actúe el sistema sanitario y los profesionales de la Sanidad en una situación de enfermedad personal.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora Loroño.

Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Espasa.

El señor ESPASA I OLIVER: Muchas gracias, señor Presidente.

Senadora Gámez, senador Antón Rueda, desde la cordialidad y el reconocimiento del esfuerzo que hicieron en la ponencia y que todos hemos reconocido y alabado, no voy a repetir los argumentos que he citado en mi intervención anterior, pero sí debo aportar otros para decirlo, no más alto, pero sí más claro, si puedo, y desde el mismo disgusto y decepción con el que hablaba antes.

Senadora Gámez, senador Antón Rueda, señores del Partido Popular, esta ley consta de 24 artículos y ustedes la

declaran toda ella básica, en un momento en que se han transferido las competencias de Sanidad a todas las comunidades autónomas. Piensen, reflexionen y comparen esta ley con la Ley General de Sanidad, la llamada ley del malogrado ministro Lluh —lógicamente, declarada norma básica—. Esta ley constaba de 113 artículos, de los cuales 25 no básicos, lo que ha permitido crear, desde el desarrollo legislativo y la capacidad autoorganizativa de las comunidades autónomas, 17 servicios de salud en España. Con su ley no se va a crear nada. Está todo asfixiado, está todo cerrado. Ustedes echan el cierre a todo. Una ley sobre un aspecto, como muy bien decía la senadora Loroño, que no es un derecho fundamental, sino derechos anejos a uno fundamental, el de la salud, que la declaran básica, no puede compararse con la Ley General de Sanidad, que tiene 25 artículos no básicos, declarados Derecho supletorio, y le recuerdo, senadora Gámez, que tratan de materias tan importantes como el área de salud, la organización de los hospitales, las altas, etcétera. Estas cosas son mucho más importantes, mucho más sustanciales que esta proposición de ley y, en cambio, se declaran no básicas en un contexto donde no había transferencias sanitarias. Señores del Partido Popular, vean ustedes hasta qué punto las mayorías pueden condicionar una visión u otra del bloque constitucional; hay mayorías que echan el cierre, hay mayorías que avivan fuegos, y ustedes avivan fuegos en determinadas nacionalidades, y en esta proposición de ley que aunque es un fuego pequeño, es fuego al fin y al cabo, otras mayorías no lo han hecho y espero que en el futuro no lo hagan. No quiero dar más argumentos. Aquí tengo la Ley General de Sanidad que, repito, con 110 artículos, 25 no básicos, ha permitido el desarrollo nada menos que de 17 servicios de salud con autoorganización distinta en relación de lo público y lo privado, respecto de las áreas sanitarias, respecto de la gestión de los centros sanitarios, respecto de mil y una cosa previstas en el bloque de constitucionalidad. Nos ponemos a hablar del derecho a la información del paciente, del derecho a rechazar tratamientos, del derecho a la muerte digna, y lo declaran ustedes exhaustivamente básico. Esto produciría risa, si no fuese un tema tan serio como es el del derecho a una muerte digna, el del derecho a rechazar tratamientos, el del derecho a la intimidad. Doy por retiradas las palabras sobre la risa, pero me ha llevado a ellas el ardor de la argumentación.

Para finalizar, y como prueba del nueve del espíritu del Partido Popular —para muestra vale un botón—, me voy a referir al artículo que la senadora Gámez ha vuelto a citar para exclamar: ¡No me va a decir usted que esto no es básico! ¿Quiere que se lo lea, senadora Gámez? ¿Quiere que le lea el gazapo en el que ha incurrido el Partido Popular, cuando en el artículo 20 afirma que la forma del alta se desarrollará reglamentariamente por las comunidades autónomas? Ésta es la concepción del Partido Popular de las comunidades autónomas: que son entes reglamentarios de la legislación básica del Estado. Pero esta no es la concepción del bloque de constitucionalidad, este no es el espíritu del pacto constitucional de 1978 que se ha engrandecido y desarrollado en estos 25 años; no es éste, no es el del regla-

mentarismo, no es el del «Santiago y cierra España», al contrario, es una visión abierta y constructiva de nuestro país, España, un país que para serlo de todos, lo hemos de construir entre todos; ustedes lo quieren hacer solos y en esta votación tan importante también se van a quedar solos.

Veo a un senador catalán que seguramente tendrá que pedirle a su grupo parlamentario —no a su candidato porque aún no es parlamentario del Parlament de Catalunya— que vote a favor del dictamen de petición de inconstitucionalidad, que con toda seguridad se tramitará allí. Tendrán ustedes servida la paradoja: viene con la unanimidad del Parlament de Catalunya, incluido el Grupo Popular, aquí es desfigurado y transformado, y el Parlament de Catalunya seguro que va a plantear el conflicto constitucional que ustedes han encendido con su cerrazón y con su espíritu de cerrar España a cal y canto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espasa.

Pasamos al turno de portavoces del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*, y en su nombre el senador Cardona tiene la palabra.

El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.

En este turno de portavoces voy a hacer sólo alguna reflexión para someter a la consideración de sus señorías. Para comprender mejor los objetivos y la finalidad que se pretendía con esta ley, es necesario recordar una y otra vez la génesis y el origen de la misma, no aquí, sino en el Parlament de Catalunya.

A finales de los años noventa y en pleno debate social por la legalización de la eutanasia en Holanda —recuérdese que aquí creamos una comisión de estudios sobre el testamento vital y el derecho a una muerte digna—, todos los grupos del Parlament de Catalunya con la Consellería de Sanidad, su Comité de Ética y el «*Consell General de Col·legis de Metges de Catalunya*», juntamente con un grupo de expertos en estos temas, preparan esta proposición de ley sobre los derechos de los enfermos, derechos consustanciales del paciente en situaciones vitales críticas.

Se trata de poner en negro sobre blanco y dar rango de ley a aquellos derechos sustanciales —y no quiero utilizar la palabra fundamentales— en situaciones críticas vitales, de manera que se contemplen aquellas normas éticas y deontológicas que reflejan una buena y correcta práctica médica. Estos derechos son en concreto el tener una correcta información sobre el estado de salud —de su salud— y, sobre esta base, disponer de la autonomía suficiente para adoptar decisiones sobre las actuaciones en relación con ella. Puntualizando más: se trata de dar rango de ley al documento del consentimiento informado, para garantizar al paciente que no se le aplicará ningún tratamiento sin su consentimiento expreso. Con eso tranquilizábamos a la población respecto a que no habría encarnizamiento o ensañamiento terapéutico, y con eso ya se ganaba mucho. Si se desea que se desee que no se aplique una acción terapéutica determinada, de forma anticipada podría expresarse

mediante un documento al efecto para que, en el supuesto de que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no se sea capaz de expresarlo personalmente, se pueda hacer por medio de eso que se llamó —y yo creo que no tenemos que utilizar— documento vital, instrucciones previas, voluntades anticipadas; llámese como se quiera.

Por cierto, que en su afán de modificar cuanto más y mejor, se ha cambiado lo de «voluntades anticipadas» por «instrucciones previas». El otro día, el senador Espasa nos hizo algún comentario sobre por qué se había cambiado, por una razón de literalidad o por lo que fuera. ¿Y por qué no voluntades previas o instrucciones anticipadas? ¡Ganas de cambiar por cambiar, señorías! En Cataluña costó tres días al Comité de Bioética lo de «voluntades anticipadas». Aquí, para cambiarlo a «instrucciones previas», se ha tardado un año.

Finalmente, para poder tener una información más completa, el paciente tendrá derecho al acceso a su historia clínica, la cual tendrá que respetar, naturalmente, la confidencialidad y la intimidad necesarias e imprescindibles.

En definitiva, señor Presidente, señorías, se trata de impulsar —ésta es la filosofía real, el origen de la proposición de ley del Parlament de Catalunya— una nueva cultura en la relación médico-enfermo. Tradicionalmente, el médico tomaba las grandes decisiones sobre la salud de sus enfermos, la familia participaba de ella, y el enfermo se mantenía al margen, sobre todo en los casos graves, incluso sin conocer su estado de salud. Lo que se pretende con esta proposición de ley es que el enfermo, tras ser correctamente informado sobre su estado de salud —como es natural, si no quiere también se respetará este derecho—, en aras de su derecho de autonomía tome la decisión sobre las actuaciones que hay que llevar a cabo respecto a su salud y, por lo tanto, con su cuerpo. Incluso diría más. Si se quiere, permite una toma de decisión más democrática entre el paciente, la familia y el médico, pero, en definitiva, no se pierde ese derecho a la autonomía por el cual el paciente decide sobre su salud, la familia participa en la medida en que el paciente lo desea, y el médico lleva a cabo la decisión que se ha determinado.

¿Qué es lo que sucedió en el trámite parlamentario del Congreso? Lamentablemente, me parece que han entendido poco o no han querido entender, y se han aplicado en añadirle derechos que nada tienen de sustanciales y de rango moral, me atrevería a decir, sobre todo en aquellos apartados de la historia clínica, la elección del médico y del centro o los trámites para el alta voluntaria o forzosa. La figura es, por tanto, desordenada, inconsistente y diría que deforme, con una cabeza y un cuerpo bien configurado pero con unas extremidades excesivas.

A todo ello se le ha dado la consideración y el rango de ley de bases. Tal vez en su afán de centralización e involución autonómica el árbol no les ha dejado ver el bosque, o quizá se trate de ambas cosas a la vez. No han entendido nada y han dado gusto al cuerpo limitando las competencias autonómicas y dándole carácter de ley de bases.

La reflexión final es para hacernos meditar, sobre todo, como ha dicho el senador Espasa, al subgrupo que tuvimos

el atrevimiento de llevar a la toma en consideración esta proposición de ley a esta Cámara.

Con la mejor voluntad se presenta una iniciativa en el Senado, Cámara de representación territorial, que es una ley ya vigente en varias comunidades autónomas, pero procedente de Cataluña en este caso, con traducción literal, y se trata por tanto de una iniciativa autonómica. En el largo trámite parlamentario en el Congreso, y al amparo de la mayoría absoluta del Grupo Popular, se desarrolla hasta extremos más propios del desarrollo reglamentario legal y se le da el carácter de ley de bases, es decir, sustrayendo competencias propias de las comunidades autónomas. Es una lástima que una ley como ésta, que tendría que ser de consenso, termine en el Tribunal Constitucional por la falta de flexibilidad y cintura parlamentaria del Grupo Popular, por la utilización prepotente de esta mayoría y por la concepción centralista y jacobina de este Estado de las Autonomías.

Con esto termino, pero como lo cortés no quita lo valiente, sí quiero reconocer el trabajo que han hecho los letrados y felicitar a los ponentes del Grupo Parlamentario Popular.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (*Aplausos.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Cardona.

A continuación pasamos al turno del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. En su nombre tiene la palabra el senador López Carvajal.

El señor LÓPEZ CARVAJAL: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, quiero utilizar este turno de portavoces para hacer una serie de reflexiones de carácter más bien filosófico sobre el contenido de la proposición de ley que vamos a aprobar, toda vez que mi grupo va a apoyarla de forma decidida y convincente, y toda vez que de las dos enmiendas que hemos presentado prácticamente se asumió una y media. Por lo tanto, entendemos que es lo que procede en cuanto al discurso de esta parte.

El contenido de la presente proposición de ley nos remite ineludiblemente a los derechos de los pacientes y los usuarios de la sanidad española. Es un tema que tiene su origen en la Ley General de Sanidad, la Ley 14/1986, y a pesar de que supuso un notable avance, no cabe la menor duda de que el transcurso del tiempo, las modificaciones que se han ido incorporando, con carácter legal unas, otras con carácter de disposiciones de diferente rango, han hecho necesario que se revisen algunos de sus preceptos.

Una de las disposiciones que más importancia ha tenido en el tema que nos ocupa fue el llamado Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina; en definitiva, el llamado Convenio de Oviedo, que fue firmado en abril de 1997 y que entró en vigor en nuestro país el uno de enero del año 2000.

La proposición de ley que en su día se presentó en esta Cámara recoge una parte de esa filosofía, que tiene como

punto de referencia fundamentalmente unos derechos derivados de la asistencia sanitaria que descansan, por un lado, en el principio de libre autodeterminación; por otro, parten de la configuración del derecho a la intimidad y, por otro, tienen su sede —podría decirse así— en el derecho a la información como derecho autónomo.

En primer lugar voy a referirme a los derechos en materia de información, que se reflejan fundamentalmente en la relación médico-paciente. Desde un punto de vista tradicional esta relación ha estado presidida por el principio ético de la beneficencia, es decir, por un principio en virtud del cual el norte era el bienestar del paciente, y la única persona capacitada para discernir sobre él, porque se consideraba que era un benefactor integral, era el médico. La ley que aprobamos construye la relación médico-paciente sobre otro principio, el de autonomía del paciente, quien en virtud de una información que le es suministrada de forma comprensible tiene la capacidad de decidir, evidentemente de forma coordinada con el médico, aquello que considera más importante para su salud.

En el primer supuesto, en el tradicional o antiguo, la información seguía un modelo vertical y estaba inspirada por unos fines estrictamente terapéuticos. En el segundo modelo la información, evidentemente, es horizontal, y tiene como finalidad que el paciente posea una serie de datos que le posibiliten tomar una decisión en consonancia con sus propios deseos. Es obvio que este segundo principio que vamos a aprobar exige, como anteriormente he dicho, una información comprensible, porque en el supuesto de no hacerse así volveríamos al primer principio, que es el que se trata de superar.

Asimismo, la presente proposición de ley consagra algo fundamental, el derecho de la información del paciente, un derecho que él mismo, en la medida en que así lo decida, puede transmitirse a los familiares. En caso contrario, es un derecho que queda en el ámbito de su intimidad.

El segundo gran principio que consagra la proposición de ley que hoy vamos a aprobar es el de la autonomía del paciente. Quiero reiterar aquí una frase que ya empleé en mi intervención con motivo de la defensa de la toma en consideración de la proposición de ley, allá por el mes de marzo del año 2001. Dije entonces que autonomía significa gobierno deliberado de sí mismo y que es, en definitiva, un atributo de los sujetos morales, todo lo cual está profundamente vinculado a una de las formulaciones del imperativo categórico de Kant, según el cual el respeto a la autonomía consiste en tratar a los demás como fines en sí mismos y nunca como medios. Esta filosofía es la que subyace en todos los principios que regula el Capítulo IV de esta ley, referido al consentimiento informado y a las instrucciones previas.

El consentimiento informado es un documento que tiene su origen histórico en los juicios de Nuremberg, cuando en la II Guerra Mundial quedaron al descubierto las atrocidades que cometieron algunos médicos nazis en los campos de concentración al experimentar con los prisioneros. Esta expresión de «consentimiento informado» fue utilizada por primera vez en el Estado de California, donde tuvo su propio desarrollo, y fue recogida de idéntica

forma conceptual, pero desde el punto de vista gramatical de otra manera, en la Ley General de Sanidad, que ya prescribía en su artículo 10 que la información debía ser confidencial en los casos de diagnóstico y de pronóstico, y que se exigía un consentimiento informado para determinadas actuaciones con respecto al paciente. La presente proposición de ley perfecciona este consentimiento regulando cuándo es verbal y en qué ocasiones debe estar escrito, por supuesto con los debidos límites, teniendo siempre como parámetro básico la voluntad del paciente, que en todo momento tiene derecho a no ser informado.

La inclusión del término «instrucciones previas» es, sin lugar a dudas, la gran novedad de esta ley, que parte —como anteriormente decía— del principio de autonomía, y la autonomía implica, entre otros, el derecho personal a la autodeterminación sobre el final de la propia vida. Como tal, debe entenderse la no interferencia de otros, es decir del Gobierno, de la sociedad o de terceras personas, en temas de intimidad personal.

Es obvio que este derecho, el de la autodeterminación, como todos los demás, tiene limitaciones. En este momento no quiero hablar de cuáles son esas limitaciones, que están perfectamente reguladas en el Código Penal; por el contrario, quiero resaltar aquí cuáles han sido los objetivos de la incorporación del testamento vital. En mi opinión son tres.

Primero, regular el principio de autonomía como corresponde a una sociedad democrática, plural y secularizada. Segundo, dar un respaldo seguro para el paciente al objeto de garantizar su deseo cuando llegue el momento que todos hemos establecido, es decir cuando se acerque el final de la vida como consecuencia de una enfermedad incurable e irreversible. Tercero, defender también —aquí no se ha dicho y yo quiero resaltarlo— al profesional de la medicina, porque la medicina defensiva crece a medida que crecen las denuncias por malas prácticas o por errores médicos. Algunas sociedades, como la de los Estados Unidos, lo saben muy bien; en España todavía no hemos llegado a ese nivel, pero hay que adelantarse porque la sociedad así lo demanda.

Termino, señorías, hablando de los derechos y obligaciones en materia de documentación, recogidos en los capítulos V y VI. La primera observación que procede referir es que el derecho a la documentación no recae solamente sobre la historia clínica, sino que hay otros elementos que se incorporan en la proposición de ley, como el informe de alta, la emisión de certificados o el cumplimiento de protocolos estadísticos y asistenciales. En cualquier caso, la historia clínica es el tronco más importante de estos capítulos y aborda temas de una gran conflictividad, como, por ejemplo, el acceso a las historias de estos pacientes por parte de las Fuerzas y Cuerpos y de Seguridad del Estado, de los jueces y tribunales y de los docentes que acuden a ellas por motivos de investigación o docencia. Entendemos que la respuesta que todos ellos han obtenido ha sido equilibrada, ya que está presidida por la reserva del principio fundamental a la intimidad, que consideramos que es un derecho inalienable y, por consiguiente, no transmisible a terceras personas.

Finalmente, conviene aclarar que estamos ante una proposición de ley demandada por la sociedad, una proposición de ley que nos adentra por un camino asistencial para el cual preservar la vida no es considerado como un ideal más elevado que contribuir a una muerte en paz. En definitiva, reitero que estamos ante una proposición que se adentra por un camino y que asume la filosofía defendida por algunos grupos políticos y personas. Esa filosofía nos advierte de que la muerte no es un fracaso, pero sí lo es la prolongación innecesaria del sufrimiento.

Entiendo que con ese espíritu se han abordado los capítulos más trascendentes de la proposición de ley que vamos a votar y a la que el Grupo Parlamentario Socialista va a dar su apoyo de forma decidida.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador López Carvajal.

Para finalizar el turno de portavoces, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Antón.

El señor ANTÓN RUEDA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, buenas tardes. Aunque alguno de ustedes me apunte lo del Constitucional, yo les voy a apuntar solamente con la cordialidad.

Presentamos hoy una proposición de ley básica que defiende y refuerza la autonomía de la persona enferma; una proposición de ley que trata, indirectamente, de mejorar la calidad de la relación médico-paciente estableciendo los derechos en los que ésta se debe inscribir. Como muy bien ha dicho el senador López Carvajal, esta proposición de ley viene a sustituir el principio de beneficencia, en cierto modo paternalista, por el de autonomía del paciente.

El trabajo de todos los grupos en la ponencia ha sido positivo, y creo que ésta es una opinión unánime. Se han retirado 14 enmiendas, se han aceptado ocho y se han transaccionado nueve. Por ello, de las 47 enmiendas que se presentaron, ahora sólo quedan realmente vivas 16, que en su mayoría se mantienen por una cuestión de procedimiento. Creemos sinceramente que el texto remitido por el Congreso de los Diputados ha sido perfeccionado y enriquecido con las modificaciones introducidas, y también les digo que es incluso posible que sea nuevamente mejorado en su nuevo paso por el Congreso.

Esta proposición de ley trata de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, pero curiosamente el tema de fondo, el que ha dado lugar a mayor controversia en la ponencia, en la Comisión de Sanidad y en este Pleno, no ha sido el contenido de la proposición de ley propiamente dicho. Como ha dicho el Senador Espasa, ha sido el tema competencial. Este asunto es el que ha dado lugar a las enmiendas números 25, del Grupo Entesa, y 41, del Grupo Catalán en el Senado.

Señorías, es lógico que exista siempre una cierta disparidad de criterios en lo que a competencias se refiere, pues —como ya dije en mi intervención en la Comisión de Sa-

nidad el pasado día 16 y ha sido repetido en esta tarde— el Tribunal Constitucional define las normas básicas como aquéllas que el legislador estatal considera como tales en un momento histórico —es decir, lo básico de hoy puede no serlo mañana y viceversa—, por ello es normal, e incluso saludable, la controversia sobre este tema. Pero he de decirles que, generalmente, son algunos grupos nacionalistas los únicos que cuestionan las competencias legislativas, y eso es porque tienen alergia a las leyes básicas; piensan que con ellas el Gobierno quiere restar competencias a las comunidades autónomas. Esto, evidentemente, no es verdad, incluso pudiera ser más cierto lo contrario, es decir, que los grupos nacionalistas deseen ir asumiendo cada vez mayores competencias en detrimento de las del Estado.

Desde nuestro grupo se ha intentado negociar la retirada de las enmiendas números 25 y 41 modificando la redacción de algunos artículos e incluso suprimiendo párrafos de los mismos —ustedes lo saben—. En un último esfuerzo, que incluso ha durado hasta esta mañana, se ha expresado la posibilidad de considerar como no totalmente básico algún punto, pero, señorías, el empeñamiento de ustedes —o seguramente el mandato recibido por los portavoces los grupos Entesa y Catalán— ha hecho imposible la transacción y la retirada de las enmiendas aludidas, ya que en estos grupos se ha seguido la ley del todo o el nada: o retirábamos todos los temas que ellos decían o no retiraban estas enmiendas.

En todo caso, señorías, consideramos que la presente proposición de ley deja margen suficiente para que las comunidades autónomas puedan legislar y desarrollar esta norma básica. Podrá discutirse si algún punto específico del texto legal llega más allá de lo básico, algún punto que, por otro lado, diga lo que diga la señora Loroño, es de escasa importancia. Creo que todos coincidimos en que una ley que regula y asegura la autonomía del paciente, o sea, de la persona enferma, debe ser básica. Reduciríamos la importancia de derechos fundamentales como la dignidad de la persona, la libertad y la intimidad si quitáramos la consideración de básica a la proposición de ley.

Esta proposición podría ser mejor, pero también podría ser mucho peor. Como humanos que somos, no hemos conseguido hacer la mejor ley, solamente hemos conseguido hacer una buena ley. Tendrá sus defectos, no lo niego, pero tiene muchas más virtudes.

El Senador Espasa, cuando trajo esta proposición de ley desde Cataluña al Senado, dijo que quería trasladar lo que era bueno para los ciudadanos de Cataluña a los ciudadanos del resto de España. Me parece impecable esa posición, señor Espasa; esta postura defiende la necesidad de potenciar la colaboración de las comunidades autónomas con el Estado.

Una buena lectura que se puede sacar del trabajo realizado a propósito de esta ley es la necesidad que existe de tener confianza de todos para con todos. Si logramos transmitir este principio de lealtad bidireccional, estoy seguro de que nuestra Cámara será un ejemplo de parlamentarismo constructivo y que las leyes que aquí se pro-

muevan contribuirán eficazmente al desarrollo de nuestra sociedad y a la estabilidad de nuestro sistema democrático.

Esta proposición de ley responde en parte a lo que con acierto el Senador Cardona defiende como necesario: un pacto de la Sanidad. Todos queremos una sanidad buena y justa, en la que se respeten escrupulosamente los derechos de todos los actores; una sanidad moderna y solidaria en la que se busque la equidad para todos los españoles. Y cuando digo equidad no hablo de uniformidad. La equidad se refiere fundamentalmente a una igualdad en las oportunidades, no a una igualdad en los modelos, que sería empobrecedora y traduciría una rigidez que, se lo aseguro a ustedes, nuestro grupo no desea.

Toda esta filosofía es la que nos ha guiado en nuestro trabajo. Esta proposición de ley es el resultado que hemos conseguido. Creo que el texto es suficientemente bueno y que merece ser votado afirmativamente por todos los grupos.

La ministra de Sanidad, en su intervención del lunes pasado en la Comisión, expuso las líneas fundamentales en las que va a basar la actividad de su Departamento, y de ellas hay dos que quiero ahora subrayar: la que trata de fortalecer los derechos de los pacientes y la que trata de prestigiar al personal sanitario. Esta ley es un primer paso en esa dirección.

En algunos foros sanitarios he oído decir que el refuerzo de los derechos de los pacientes que queremos establecer en esta ley puede provocar el olvido de los derechos del personal sanitario y una mayor burocratización de su trabajo asistencial. Desde esta tribuna quiero decir que esto no debe ser así y no tiene por qué ser así.

En primer lugar, la mayor corrección en la actividad sanitaria asegurando la libertad, la dignidad y la intimidad de la persona enferma va a aumentar la calidad del acto médico y va a mejorar el prestigio social de los que se dedican a cuidar la salud. Esto, sin duda alguna, llenará de razones al médico, reafirmando ante la sociedad y llegado el caso ante la justicia, los derechos de los profesionales sanitarios.

En segundo lugar, para evitar un exceso de burocratización asistencial y las consecuencias negativas que ello pudiera producir, los gestores sanitarios deben reordenar la actividad y deben mejorarla, estableciendo los tiempos necesarios no sólo para lograr una asistencia correcta sino también para propiciar la investigación y la docencia donde y cuando proceda.

Las administraciones sanitarias deben buscar las fórmulas de equilibrio que hagan compatible una eficaz gestión que optimice los recursos disponibles con la realización de esta medicina de calidad que todos queremos; una medicina altamente científica que para ser humana necesita ser realizada con el sosiego necesario.

Señor Presidente, termino agradeciendo su esfuerzo a todos los senadores que han colaborado en la redacción del texto que hoy se propone y especialmente, y creo que haciéndome eco del sentir de todos los ponentes, quiero hacer un personal, mínimo, pero sentido homenaje de gratitud a una persona capaz y cabal, más apreciada cuanto más

conocida, que ha aportado ahora a esta ley, como antes lo hizo a otras muchas, su capacidad parlamentaria y su humanidad. Muchas gracias, senador Cardona. Espero y deseo que sigamos contando con su presencia y hombría de bien en esta Cámara durante mucho tiempo por el bien de Cataluña, del Senado y de España.

Nada más. Muchas gracias. (*Aplausos.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Antón.

Finalizado el debate, vamos a votar las enmiendas de la proposición de ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

En primer lugar votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto en dos bloques. El primer bloque contiene las enmiendas números 12 a 15.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 19; en contra, 195; abstenciones, tres.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): En consecuencia, quedan rechazadas.

A continuación, votamos la enmienda número 27, también del Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 87; en contra, 130.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.

A continuación, señorías, votamos las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En primer lugar, la enmienda número 3.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 26; en contra, 130; abstenciones, 61.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos números 2, 8 y 9.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 30; en contra, 131; abstenciones, 56.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.

A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. En primer lugar, la enmienda número 25.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 87; en contra, 129; abstenciones, una.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 26.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 84; en contra, 130; abstenciones, tres.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.

Las enmiendas números 18 y 20 han sido retiradas.

En consecuencia, pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.

En un primer bloque votamos las enmiendas números 30, 31 y 36.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, 27; en contra, 130; abstenciones, 59.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.

Votamos ahora la enmienda número 41, del mismo grupo.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 86; en contra, 130; abstenciones, una.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.

Por último, votamos las enmiendas números 34 y 37, también del Grupo de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 31; en contra, 131; abstenciones, 56.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.

Votamos la única enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, número 29.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 86; en contra, 131; abstenciones, una.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.

A continuación, votamos el dictamen en dos bloques.

En primer lugar, votamos la disposición adicional primera.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 135; en contra, 27; abstenciones, 56.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobada.

Votamos el resto del dictamen.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 216; abstenciones, dos.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA (RTVE):

— ELECCIÓN DE UN MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA (RTVE) (729/000001).

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pasamos al punto cuarto del orden del día: Elección de miembros del Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión Española.

Elección de un miembro del Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión Española.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 186 del Reglamento del Senado, la Comisión de Nombramientos ha acordado por unanimidad informar sobre la plena idoneidad del candidato, don Jorge Bethencourt González.

Antes de iniciar la votación, que se hará por papeletas, recuerdo a sus señorías lo siguiente. Según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión, para ser elegido miembro del citado consejo los candidatos han de obtener una mayoría de dos tercios de la Cámara, es decir, 173 senadores. Cada papeleta podrá contener un solo nombre, y los votos en blanco deberán expresarse sin figurar ningún nombre en la papeleta.

Por otro lado, de forma previa se ha sorteado el nombre del senador por el que ha de empezar la votación.

Señorías, les ruego que, para realizar ordenadamente la votación, se acerquen a votar por la izquierda de la tribuna de oradores, faciliten su nombre a los letrados, depositen su papeleta en la urna y salgan por la derecha de dicha tribuna.

Tal y como decía anteriormente, se ha sorteado previamente el nombre del senador por el que ha de comenzar la votación, que ha correspondido a la senadora Montes Contreras, María del Carmen.

Comienza la votación.

(Por la señora Secretaria Primera, Martín Mendizábal; el señor Secretario Segundo, Caneda Morales; la señora Secretaria Tercera, Nóvoa Carcacia, y el señor Secretario Cuarto, Cardona i Vila, se procede al llamamiento de las señoras y señores senadores a partir de la citada.)

Terminado el llamamiento, dijo

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Antes de comenzar el recuento, pueden abrir las puertas, por favor, por si queda pendiente de votar algún señor senador.

¿Queda por votar algún señor senador? (*Pausa.*)

Vamos a proceder al escrutinio de las papeletas. (*El señor Presidente ocupa la Presidencia.*)

Terminado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: Efectuado el escrutinio, el resultado es el siguiente: a favor de don Jorge Bethencourt González, 213 votos; votos en blanco, ninguno; votos nulos, dos.

Habiendo alcanzado el candidato un número de votos superior a los dos tercios de la Cámara, como es preceptivo según el artículo 7 de la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión, queda elegido miembro del Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión Española.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación):

— DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO (S. 621/000086) (C. D. 121/000069).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.

De la Comisión de Economía, Comercio y Turismo en relación con el proyecto de ley de medidas de reforma del sistema financiero.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante designado por la Comisión, senador Seguí.

El señor SEGUÍ DÍAZ: Señor Presidente, señorías, me cabe el honor, como presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Turismo, de presentar ante el Pleno el

dictamen emitido por la referida comisión en relación con el proyecto de ley de medidas de reforma del sistema financiero.

La tramitación en el Senado se inició tras la remisión, por el Congreso de los Diputados, del proyecto de ley el día 24 de junio de 2002. El plazo de presentación de enmiendas, que inicialmente debía prolongarse hasta el día 6 de septiembre de 2002, fue ampliado hasta el día 12 de septiembre de 2002. Fueron presentadas tres propuestas de veto, la primera formulada por los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto; la segunda, por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés; y la tercera, propugnada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Se presentaron 280 enmiendas, 58 de ellas por el Grupo Parlamentario Mixto; 6, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; 9, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; 56, por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés; 21, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; 68, por el Grupo Parlamentario Socialista y 61, por el Grupo Parlamentario Popular.

La Comisión se reunió para nombrar a los miembros de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley el día 23 de septiembre de 2002. Formaron parte de dicha ponencia los senadores don Damián Caneda y don Juan Pablo Sánchez por el Grupo Popular; don Francisco Javier Albistur por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; don Horaci Simó por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; don Manuel Cámara por el Grupo Parlamentario Mixto; don Segundo Bru y don Carlos Chivite por el Grupo Parlamentario Socialista, y doña Mercedes Aroz por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

En fecha 2 de octubre de 2002 se reunió la ponencia y emitió su informe, incorporando modificaciones al texto remitido. El informe fue publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» número 86, Serie II, de 7 de octubre de 2002. La Comisión se reunió para dictaminar el proyecto de ley el 7 de octubre de 2002, incorporando modificaciones al texto remitido por el Congreso de los Diputados. El dictamen fue publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» número 86, Serie II, de 11 de octubre de 2002.

Tras la tramitación en Comisión, procede ahora la discusión en Pleno del dictamen sobre el proyecto de ley que se somete a su consideración.

Muchas gracias, señor Presidente, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Al proyecto de ley se han presentado tres propuestas de veto. La primera corresponde a don Manuel Cámara Fernández y don José Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el señor Cámara.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Gracias, señor Presidente.

Vayan mis primeras palabras para felicitarle por su elección y hacer una rectificación. Hoy he leído sobre di-

cha elección en un medio de comunicación social de amplia difusión que el Grupo Mixto había emitido voto nulo en su elección. Quiero rectificar, porque el voto emitido por el Grupo Mixto fue en blanco. Aunque el voto es secreto, como ha habido un periódico que ha dicho eso, quiero rectificar para decirles que ha sido en blanco y no nulo. Decía el periódico que el Grupo Parlamentario Socialista había votado en blanco y los Grupos de Senadores Nacionalistas Vascos y Mixto habíamos votado de otra manera, irregularmente, y por tanto era nulo el voto. Es falso y quería aclararlo.

En todo caso, vaya por delante la felicitación por su designación como Presidente de esta Cámara y voy a pasar a defender el veto de Izquierda Unida.

Señorías, esta ley sobre la reforma del sistema financiero que se nos presenta tiene, de forma indiscutible, avances que nosotros, de verdad, no queremos negar. Esos avances se concretan en algunas cuestiones, como un mayor control de los auditores, regula la información privilegiada con medidas de prevención y de sanción, con este proyecto hay que reconocer que los inversores tendrán seguramente más información en tiempo real, etcétera. Además, subsana lagunas que consideramos importantes, como decía antes, relativas al incumplimiento de los requisitos de información privilegiada y también las ideas referidas a la manipulación de los precios y la no publicación de hechos relevantes, a los que califica como infracciones muy graves.

Estos aspectos, señorías, y algunos otros, creemos que en términos globales son positivos. Pero no podemos ocultar que esta ley está obligada y tiene que ver de una forma profunda y seria con la famosa llamada Comisión Gescartera, por lo que cabe decir que este tipo de comisiones, en primer lugar, tienen sus resultados. Nosotros nos queremos felicitar por ello porque de una u otra manera nos alegramos, ya que viene a corregir algunas deficiencias que se pusieron de manifiesto de forma clara y públicamente ante la sociedad en aquella Comisión.

El caso Gescartera o el caso del BBV demuestra que la fragilidad y vulnerabilidad del sistema financiero en España es una realidad incuestionable, y por tanto es conveniente corregirlo de forma clara. Efectivamente, los hechos acaecidos en relación con estos tremendos escándalos financieros, y también políticos, lo subrayo, ponen de relieve que algunos órganos reguladores, y muy especialmente la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pese a ser los vigilantes de la transparencia, de la libre competencia, de los derechos de los usuarios dejan mucho que desear, y deja mucho que desear fundamentalmente la garantía necesaria del estricto cumplimiento de sus obligaciones.

Señorías, cosas como las referidas y sus consecuencias demuestran que los actuales mecanismos de garantía de independencia de los reguladores, esto es, nombramiento y cese de sus responsables, vinculación orgánica con el Ministerio o independencia funcional en el resto de sus actividades no son suficientes para garantizar los derechos de los ciudadanos, la salud y transparencia del sector financiero y la libre competencia.

Pero, señorías, aunque me puedan responder desde la dialéctica política para oponerse a este veto diciendo que utilizó por mi parte aspectos formales para justificar su posición o la mía, que es la del veto, tengo que decirles que las formas que ustedes han empleado, como suele ocurrir en democracia muchas veces, afectan a los contenidos, y por eso les decimos que nuestro veto está más que justificado. Señorías, estamos tratando un tema esencial para la economía del Estado, pero ustedes, y en su momento el Gobierno, nos proponen un único proyecto —luego diré algo a este respecto en el trámite parlamentario de la ley—. Se van a sustanciar, por tanto, cambios importantísimos en distintas leyes. Ésta es una práctica muy habitual en el Partido Popular que ustedes saben que no compartimos. Es lo que se puede llamar el «barullo» de esta ley y de otras, haciendo un símil con esos barullos de los que hablan algunos políticos. Pues ese «barullo» es impresionante en todo el trámite parlamentario.

En Izquierda Unida pensamos que este proyecto de tanta envergadura se debería tratar de manera separada para una mayor garantía democrática y de participación y aportación de los diferentes grupos parlamentarios. Trece leyes, tres reales decretos legislativos y un decreto. Esta ley deroga disposiciones contenidas también en seis leyes y un decreto-ley. Tres reales decretos y una orden ministerial. Todo ello forma parte de este cajón de sastre en lo que es en sí el proyecto de ley. Señorías, aunque no quiero cansarles, debo decir que en el trámite parlamentario este proyecto de ley se ha visto modificado de manera muy sustancial.

Tal y como advertía mi grupo en el Congreso de los Diputados, en el Senado esta actitud del grupo mayoritario, en mi opinión ha sido francamente escandalosa. Digo con todo el respeto, el cariño y el afecto que me es posible que algunos senadores han tenido que jugar un papel bastante difícil en ese ir y venir de enmiendas, y todavía no hemos terminado. Estas modificaciones por el método obligado, dadas las características del proceso parlamentario, no permiten que los grupos de oposición procedan a responder de forma adecuada, rigurosa y seria a este importante reto que representa esta ley. Es posible que un grupo mayoritario pueda hacerlo, pero a este senador le es muy difícil, en primer lugar porque no soy un sabio y en segundo lugar porque soy humano y tengo límites, con lo cual estudiarse todo lo que hasta aquí ha venido resulta una ardua tarea.

No sé si vendrán o no las cuotas participativas, y es posible que en este punto coincidan el Partido Socialista y el Partido Popular. Nosotros no estamos de acuerdo, ya sea con o sin cuota política, y, como hemos presentado alguna enmienda en esa dirección, no me voy a repetir. Pero quede claro que no estamos de acuerdo.

Hay que tener cuidado con que las formas en el discurso sirvan para la coyuntura pero no como principio. Por ejemplo, circula por ahí —no sé si con buen fin— que es posible que la cuota participativa de los trabajadores, que según el texto oscila entre el 5 y el 15 por ciento, pueda ser incrementada hasta el 20 por ciento. Con esta enmienda estaría de acuerdo el Partido Popular y yo mismo y, sin embargo, es difícil que salga adelante, a pesar de los compro-

misos —y lo digo públicamente aquí— adquiridos por todos los partidos políticos, sobre todos por los mayoritarios, y por personas como el señor Martínez Pujalte, del Partido Popular, y del señor Sevilla, que se comprometieron a ello en unas jornadas organizadas por un sindicato mayoritario de este país y que ahora dicen que no. No es posible asumir esto, a pesar de que los trabajadores son una pieza fundamental en cualquier proceso, máxime en un tema como el que estamos tratando. Con ello no pretendemos quitar, lógicamente, potestad ni carácter a otras partes intervinientes en los consejos y órganos de gobierno.

Hemos visto que en esta Cámara se han presentado de forma forzada y fuera de plazo un montón de enmiendas referidas al tema de las cajas. Sinceramente, es impresentable. No les voy a robar mucho tiempo, señorías, pero deberíamos cumplir ciertas reglas del juego para, entre otras cosas, hacer de la democracia algo más real, en donde esta Cámara tenga sentido; el Senado no puede ser el correve-dile del Congreso de los Diputados, sino que debe ser una Cámara que nos permita a todos trabajar a gusto y en condiciones.

Insisto en que resulta escandaloso la forma y manera en que ha sido tramitado este proyecto de ley. Si a ello añadimos la complejidad de la misma en lo que afecta a sus contenidos, a través de las enmiendas y de este veto, está más que justificada nuestra oposición a esta ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha presentado la propuesta de veto número 2. Para su defensa, tiene la palabra la senadora Aroz.

La señora AROZ IBÁÑEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a acumular los turnos de defensa del veto y de las enmiendas al articulado presentadas por mi grupo, en total 54. Al renunciar al turno de defensa de las enmiendas, para el que me corresponderían 54 minutos, solicito de la Presidencia más tiempo en este turno de defensa del veto, dado que no voy a hacer uso de todo el tiempo en el turno de defensa de las enmiendas al articulado. (*Asentimiento.*)

Gracias, señor Presidente.

Señorías, con este debate finaliza la tramitación en la Cámara de la ley de medidas de reforma del sistema financiero, llamada de forma simplificada ley financiera. Debate que viene precedido de una sesión, que calificamos de insólita, en la Comisión de Economía en la que se aprobó el dictamen del proyecto de ley sin antes debatir ni defender las enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. Sirva esto como protesta por el uso abusivo e inadecuado del Reglamento de la Cámara por parte de la Mesa de la Comisión, que, al servicio del Grupo Parlamentario Popular, admitió a trámite las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular presentadas fuera de plazo sin que los grupos hubieran aceptado por escrito su admisión.

En consecuencia, y en relación con estos hechos, debo señalar que a juicio de nuestro grupo el dictamen de la Comisión que hoy vamos a debatir conjuntamente con los ve-

tos ha sido aprobado con irregularidades importantes, y aunque la impugnación que presentamos en su momento ante la Mesa de la Cámara no prosperó, queríamos manifestar en este trámite que, insisto, a nuestro juicio el dictamen que hoy debatiremos contiene irregularidades que cuestionan el proyecto de ley que tramitamos. Y creo que no es casual que la mayoría de estas enmiendas que fueron incorporadas, a nuestro juicio irregularmente, correspondan a la regulación de las cajas de ahorro. La reforma estructural de estas entidades financieras es sin duda un aspecto relevante de la ley y una razón central en la presentación y mantenimiento de nuestro veto a la misma.

Hay que destacar que las medidas de reforma de las cajas que la ley plantea no formaban parte del proyecto inicial presentado por el Gobierno y que fueron incorporadas a través de enmiendas presentadas en el Congreso. Una primera constatación es que se ha soslayado el dictamen del Consejo de Estado.

Señorías, desde aquellas primeras enmiendas iniciales ha habido todo un proceso de enmienda paulatino y sucesivo por el propio Grupo Popular, tanto en el Congreso como en el Senado; se ha ido enmendando en cada trámite en un goteo incesante que ha llegado hasta el día de hoy, en el que se nos han presentado dos nuevas enmiendas. Sin entrar en el contenido de las mismas, nuestro grupo no las ha firmado para su incorporación a trámite porque, señorías, entendemos que el procedimiento que se ha seguido —entre comillas, técnica legislativa— de enmiendas sucesivas, todas del Grupo Popular, no es adecuado. Quiero señalar esto porque nos parece muy relevante y expresa muy claramente que la reforma ha sido precipitada y que se ha ido improvisando sobre la marcha.

A pesar de todo, lo que sí ha estado claro en el proceso han sido los objetivos: me estoy refiriendo a la reforma de las cajas de ahorros. Los objetivos —que han sido más o menos matizados u oscurecidos a lo largo del proceso pero que no han sido desvirtuados hasta este momento— son dos: el primero, abrir o dejar entreabierto la posibilidad de la privatización de las cajas de ahorros, y el segundo, utilizar la reforma de la normativa general para conseguir determinados objetivos en cajas concretas.

Con la reforma se modifica la regulación sobre las cuotas participativas para aumentar sus recursos propios. Coincidimos en este objetivo porque consideramos que hay que posibilitar que las cajas de ahorros puedan aumentar sus recursos propios. Actualmente disponen de instrumentos que han sido adecuados, como son la deuda subordinada y las participaciones preferentes, pero en cambio el instrumento de las cuotas participativas no ha estado operativo por problemas que se mantienen y parecía necesaria la definición de un nuevo instrumento. Sin embargo discrepamos de la normativa que se propone, que significa un cambio en el actual régimen jurídico y abre las puertas a una posterior privatización.

Nuestro grupo parlamentario ha presentado una propuesta, contenida en la enmienda número 94, de un instrumento alternativo que denominamos certificados de capital primario, que es homologable en su definición y principales características al de otras legislaciones euro-

peas —como es el caso de Noruega— y que resulta fundamentalmente coincidente con la propuesta del Grupo Socialista de deuda participativa. Se concibe este instrumento como de remuneración variable, vinculado al beneficio y negociable en los mercados secundarios, con una limitación en su volumen del 50 por ciento de los recursos propios y de un 2,5 por ciento en la tenencia por parte de una persona y sin derechos políticos ni representación. Nuestra propuesta mantiene por tanto diferencias fundamentales con la regulación que se ha incorporado en el proyecto de ley, ya que respetamos la actual naturaleza jurídica y fundacional de las cajas de ahorro.

Como he dicho, la regulación abre el paso a la privatización de las cajas porque, señorías, a pesar de los cambios introducidos respecto a la propuesta inicial en el Congreso de los Diputados en la que se concedían derechos políticos a los cuota-partícipes, hay tres aspectos esenciales: se mantiene el sindicato de los tenedores de cuota participativos, de los cuota-partícipes; la proporción que puede tener una persona en este instrumento es muy significativa, el 2,5 por ciento del patrimonio de la entidad, el 5 por ciento del volumen de cuotas en circulación, que es el 50 por ciento del patrimonio; por tanto, el 2,5 por ciento del patrimonio de la entidad. Y con esto y la existencia del sindicato, señorías, 10 personas podrían controlar el 25 por ciento del patrimonio de la entidad. Se mantiene la cautela de la cláusula de amortización automática en el caso de modificación del régimen jurídico de los derechos políticos de los cuota-partícipes.

Por consiguiente, señorías, constatamos que la normativa que se ha ido desarrollando y que se contiene hasta este momento en el proyecto de ley supone un cambio de modelo, un cambio de régimen jurídico en las cajas de ahorro y que deja la puerta abierta a una próxima privatización. A lo largo de esta tarde se nos ha indicado que todavía está abierta la posibilidad de que el Grupo Parlamentario Popular rectifique esta regulación y desde luego nuestro grupo está dispuesto a llegar a un acuerdo, siempre que se respete el actual régimen jurídico.

Pero hay otras modificaciones en la normativa que afecta a las cajas de ahorro. Se han introducido también diversas modificaciones de las normas que rigen la elección y composición de los órganos de gobierno mediante la reforma de la ley de sus órganos rectores que afectan a su funcionamiento, entre las que destaca la introducción del límite de edad de 70 años para ser elegido miembro del Consejo de Administración.

Pues bien, señorías, hay que considerar estas modificaciones, porque lo son, inconstitucionales, ya que invaden competencias autonómicas, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional que en dos sentencias concretas, las números 48 y 49 de 1988, establecen de forma rotunda que la reforma del régimen jurídico de los órganos rectores de las cajas de ahorro y la representación del grupo de impositores tiene carácter básico, al igual que las normas que se refieren a la reelección de los vocales y la limitación de la representación de las administraciones públicas. Lo mismo sucede con la edad de jubilación, que en la sentencia se refiere a los directores generales y cuyos argumentos

son todavía mucho más válidos para presidentes y consejeros, es decir, para cargos no ejecutivos.

Pues bien, se ha acabado de perfilar una reacción a lo largo del proceso que con el contenido actual significa que la norma de la limitación de la edad es básica y, por tanto, inconstitucional, pero a la vez deja de ser básica si las comunidades autónomas legislan. Es un básico degradable, un término que han acuñado los juristas para referirse a esta incongruencia porque, señorías, todo esto es una gran incongruencia y abre un proceso que va a generar incertidumbres, algo totalmente indeseable para el sistema financiero.

Antes he dicho y quiero subrayarlo ahora que la normativa general va dirigida a cajas muy concretas, y en particular quiero referirme al límite de edad que apunta claramente a las cajas catalanas y muy especialmente a la tercera entidad financiera en España, que es La Caixa, lo que lamentablemente demuestra que la apetencia de control del poder financiero del Partido Popular no cesa, después de otras actuaciones anteriores que ustedes pueden tener en la cabeza, y además parece que esta vez es con el acuerdo de la coalición que gobierna en Cataluña. Pero las intromisiones políticas, señorías, sólo pueden tener consecuencias negativas.

En primer lugar, hay que decir que el establecimiento de un límite de edad es discutible. No existe límite de edad en las entidades bancarias, no lo hay en las empresas mercantiles, ¿por qué han de tenerlo las cajas de ahorro? Entendemos que los cambios que se quieren forzar son perjudiciales y, sin duda, van a producir inestabilidad, algo preocupante especialmente en Cataluña, porque no podemos olvidar que en esta Comunidad las cajas de ahorros ocupan el 70 por ciento del sistema financiero.

Señorías, la mejor manera de abordar esto es dejar que los cambios se hagan con las normativas propias de cada entidad. Este es el camino y lo que conviene en aras de la independencia y de la estabilidad de estas entidades financieras, que son hoy un activo importantísimo de la sociedad española y un elemento central de nuestro sistema financiero.

Por todo ello, mi grupo propone en la enmienda número 91 la supresión del artículo 8, que es el que recoge las modificaciones en el régimen de los órganos rectores de gobierno, de forma que sean las comunidades autónomas y las propias entidades las que acuerden los cambios necesarios.

Acabo con este aspecto de la ley, al que por su trascendencia hemos querido dedicarle una atención preferente, y paso a referirme a otros distintos. En primer lugar quisiera valorar el conjunto de la ley y exponer otras razones que han motivado el veto de nuestro grupo parlamentario. A nuestro juicio, el principal problema de la ley financiera es que las medidas de reforma que contiene no dan respuesta a los objetivos que se plantea de reforzamiento institucional de los mercados financieros, de incentivar la eficiencia y competitividad del sistema, y de aumentar la protección de los inversores y clientes del sistema financiero.

Al mismo tiempo, y por haberse utilizado la técnica legislativa de ley horizontal, es decir, de legislar conjunta-

mente sobre todos los ámbitos en los que actúan los intermediarios financieros: la banca, seguros, sociedades de valores, el resultado es una ley de extraordinaria complejidad, sobre esto no tendríamos nada que decir, pero es que además de ser compleja, resulta sumamente confusa. Insisto, el resultado es una ley sin coherencia y sistematización, que responda a objetivos claros y concretos.

En términos generales más parece una ley dirigida a introducir retoques en la regulación financiera española, con el fin de trasponer algunas directivas comunitarias y dar respuesta a escándalos recientes, como el de Gescartera, al que ya se ha hecho referencia por el portavoz anterior, que una ley dirigida con coherencia, con eficacia, a los objetivos que se plantean.

Y sobre la necesidad de reforma del sistema financiero, sin duda hay una amplia coincidencia política y social. Es una exigencia planteada por la adaptación a directivas comunitarias y en la perspectiva del mercado financiero único en el año 2005. Por ello era deseable y posible un amplio consenso parlamentario que, además, hubiera permitido mejorar el proyecto de ley atendiendo a las propuestas de los grupos, pero se ha rechazado el consenso, se ha ido enmendando en exclusiva por el Grupo Parlamentario Popular, y el resultado es que al final del trámite la ley es mucho peor, si cabe, que al principio de su tramitación. No se consigue más transparencia, señorías, más garantía y flexibilidad en el mercado financiero español, porque no regula adecuadamente un tema fundamental: las empresas de auditoría que auditan el sector. El resultado en este ámbito tan importante es confuso. Se realiza una modificación encubierta de la Ley de Auditoría y los profesionales nos reclaman, en consecuencia, una nueva regulación mediante una ley específica.

Se ha presentado hoy una nueva enmienda del Grupo Parlamentario Popular con cuyo contenido estamos de acuerdo. Creíamos que no era el momento de tramitarla porque en realidad el proceso de regulación de este ámbito de auditoría también ha sido un proceso de improvisación similar al de las cajas de ahorros, pero atendiendo a la importancia de la propuesta que se hace, con la que estamos de acuerdo y que corrige algún problema, nuestro grupo ha facilitado su admisión a trámite y votaremos a favor de dicha propuesta.

En lo que se refiere a otros aspectos, también quiero significar que la ley no mejora el sistema de supervisión y que es intervencionista, concediendo una continua habilitación al Ministerio de Economía.

Respecto del objetivo de aumentar la protección de los inversores y clientes del sistema financiero, la principal reforma que se introduce, que es la figura de los comisionados como defensores de los clientes en los distintos ámbitos del sistema financiero, no parece que vaya a tener un efecto real, como se dice claramente en el dictamen del Consejo de Estado, que ha llegado incluso a indicar que debería sopesarse la conveniencia de no crear estos órganos a la vista de las dudas que suscita su eficacia.

En resumen, señorías —y voy acabando—, esta ley de medidas de reforma del sistema financiero no se corresponde con los objetivos planteados, no da respuesta a las

necesidades que los cambios en nuestra realidad económica y social requieren, introduce una confusión jurídica entre las normas que regulan el sistema financiero y no supone un avance para la convergencia normativa e institucional hacia el mercado único previsto en 2005.

Capítulo aparte es el cambio de modelo de las cajas de ahorro, es decir, el cambio en su régimen jurídico dirigido a su privatización, así como la invasión de competencias autonómicas, al regular la ley con carácter básico aspectos que pertenecen claramente al ámbito de las comunidades autónomas, como es el límite de edad de los consejeros.

Nuestro grupo contempla con preocupación esta ley financiera, una ley clave para nuestro sistema financiero y desarrollo económico, ya que va a suponer un retroceso en la calidad de nuestro ordenamiento jurídico.

Por todas estas razones, señorías, solicito de la Cámara el apoyo al veto que he defendido y al conjunto de enmiendas que hemos presentado al articulado, que en este momento doy por defendidas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría, por su intervención.

Existe una tercera propuesta de veto, presentada por el Grupo Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Bru.

El señor BRU PARRA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, comenzaré afirmando con total sinceridad que mi capacidad de sorpresa respecto de esta mera acumulación de disposiciones con vaga apariencia legislativa que debatimos hoy se ve superada por cada acontecimiento que va unido a ella. Empezaré por constatar, no ya con sorpresa, sino con verdadero asombro, que el señor Rato, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, responsable de esto, que, extremando la condescendencia, y aunque se me haga un poco dificultoso, denominaré proyecto de ley de reforma del sistema financiero, que tal es su pretencioso nombre, que el señor Rato, decía, inflija a esta Cámara el soberano desprecio que supone dejar sin presentación, sin una mínima defensa gubernamental, el posiblemente más ambicioso proyecto de ley que en estos años haya salido de su departamento. Resulta inconcebible e inadmisibles, aunque quizá la razón se encuentre en que la ambición del proyecto no haya acompañado a la bondad del resultado, y ante la magnitud del engendro legislativo en que se ha convertido haya preferido no ser testigo presencial de la culminación de este desaguisado.

En cualquier caso, vaya por delante, y lamento tener que expresarme en estos términos, mi censura a su actitud, a su incomprensible ausencia. Y no me vale el pretexto de que el proyecto ya se presentó ante el Congreso, porque si algo caracteriza y define el presente proyecto de ley es que ha sufrido tantos cambios, y de tal magnitud, que, por decirlo en términos coloquiales, se parece tanto al texto original aprobado por el Consejo de Ministros como un huevo a una castaña. Así pues, un texto radicalmente diferente exige justificada y sobradamente una nueva presentación, una nueva defensa, que hoy aquí no se ha producido.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo y defiende los principios que inspiran la liberalización de los mercados financieros, así como las mejoras necesarias en los sistemas de supervisión y control que deberían sustentar la necesaria reforma de los mismos para alcanzar el mercado único financiero antes del año 2005, de acuerdo con las conclusiones del llamado informe Lamfalussy y con los principios de la Comisión Europea sobre los que se fundamenta el plan de acción de servicios financieros aprobado por el Consejo de Lisboa en el año 2000. Sin embargo, este proyecto de ley no va en absoluto en esa dirección, comenzando por su engañoso título, puesto que para justificar que se trata en toda su amplitud —o se pretendía hacerlo— el sistema financiero, banca, crédito, mercados de valores y seguros, y en tanto en cuanto, por ejemplo, éstos últimos no aparecían por ninguna parte, se acude a la triquiñuela de trasponer en este proyecto unas directivas comunitarias sobre el seguro de responsabilidad civil de circulación de vehículos automóviles, sobre la libertad de servicios en seguros distintos al de vida y acerca del intercambio de información, cuyo encaje natural y lógico hubiera sido modificar directamente la ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, la ley sobre responsabilidad civil y seguro de la circulación de vehículos a motor y el estatuto legal del consorcio de compensación de seguros.

Pero había que revestir al santo con el debido boato y así, unas simples, mecánicas y obligadas trasposiciones de directivas comunitarias quedan recogidas como una sección con el ampuloso nombre de «Fomento de la eficiencia en el mercado de seguros» o dentro de un capítulo con el no menos pomposo título de «Protección de clientes de servicios financieros». Sin comentarios, señorías, por mor de no extenderme en el uso de calificativos, pero léanse el proyecto de ley y verán cómo la mayor parte de las denominaciones de los capítulos, secciones e incluso artículos del presente proyecto de ley incurren en los supuestos de la publicidad engañosa. No se corresponden con su contenido, son ficciones terminológicas, mera propaganda política, en definitiva, impropia de un texto legal.

Pero esto no afecta solamente a cuestiones nominales, sino a los propios objetivos que se plantean en la exposición de motivos. Y volveré luego sobre este aspecto, porque quisiera previamente resaltar un hecho clave que define la concepción de este proyecto y que asimismo condiciona lo que va a ser su efímera existencia. No podemos entender, ni siquiera concebir, ni el cómo ni el porqué en asunto tan delicado como éste, donde no hay cuestiones ideológicas enfrentadas ni diferencias técnicas graves o insalvables, donde objetivos comunes que no son ni pueden ser otros que los que inspiran el acuerdo del Consejo de Lisboa, al que antes me he referido, hayan buscado ustedes, en lugar del acuerdo posible y necesario, la confrontación. Resulta sorprendente que el Gobierno, en vez de infundir seguridad en los mercados y sectores afectados, en vez de fortalecer la confianza, pilar fundamental de todo sistema financiero, se empeñe en sacar adelante este proyecto exclusivamente con los votos del grupo gubernamental.

mental y con el apoyo de alguno de sus socios de gobierno en la sombra.

Como les decía, éste no es un buen augurio sobre la longevidad del texto legal que ustedes van a aprobar contra viento y marea, y sin habernos permitido cambiar ni una coma del mismo pese a nuestras 68 enmiendas, muchas de las cuales lo mejorarían sustancialmente. Repito que en este sentido nuestro mensaje es claro e inequívoco. Corta vida va a tener la ley que de este debate surja, concretamente, señorías, dos años, si es que a este ritmo de improvisaciones y de cambios súbitos no la modifican ya ustedes mismos en la próxima ley de acompañamiento o en la siguiente. Y es que, señoras y señores senadores, lo que mal empieza difícilmente puede acabar bien, y de un proyecto de ley acabado precipitadamente y mal redactado, a través de un trámite parlamentario caótico y utilizando una técnica legislativa no ya burda sino de una torpeza sin precedentes en los anales, ¿qué otra cosa cabría esperar si no este resultado? Un texto confuso, disperso, incompleto, fragmentario y fragmentado y que nace ya obsoleto en su concepción, puesto que no recoge las actuales tendencias sobre la necesidad, no la simple voluntariedad, de aplicar códigos éticos o de buen gobierno en las empresas, porque no establece un modelo de supervisión unificado y consolidado, que pueda adaptarse fácilmente a la previsible unificación de la supervisión dentro de un mercado financiero único en Europa. Porque los órganos de supervisión y regulación españoles, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que en la actualidad ya son poca cosa más que simples apéndices administrativos del Ministerio de Economía, aún pierden más competencias y facultades a favor, cómo no, de la cada vez más omnímoda potestad discrecional del señor Rato, que no pierde ocasión en cada disposición que emana de su departamento para acumular cada vez más poder personal.

Y ocurre como siempre con este Gobierno, que bajo prédicas liberalizadoras no hay más que intervencionismo creciente, señorías, intervencionismo descarnado y en este caso incluso descarado. Porque este proyecto de ley más allá de sus ínfulas propagandísticas no amplía sino que reduce la transparencia en los mercados, porque el grave problema de la información privilegiada y las operaciones vinculadas se despacha sin ninguna voluntad de control, remitiéndose siempre a operaciones «ex post» al final de los procesos, cuando poca cosa ya se puede hacer para prevenir y evitar daños, cuando todos los tratamientos de esta materia —ya sea en Inglaterra, en Estados Unidos o en Francia— se remiten siempre a actuaciones previas, a actuaciones «ex ante», tanto en el caso de operaciones vinculadas como en el de los poseedores de información privilegiada, de los directivos con capacidad para acceder siempre a la totalidad de la información de la empresa, de los «insiders» natos en suma, cuyo registro, cuyo conocimiento previo es obligatorio tanto en el modelo anglosajón como en el francés pero aquí no.

La creación de los comisionados para la defensa del cliente en servicios bancarios, inversores, asegurados y partícipes no es sino otro brindis al sol, de los que abundan

en el proyecto, puesto que su efectividad real será nula en tanto en cuanto carecen de facultades resolutorias y sólo puede ser una fuente de ineficiencias y duplicaciones burocráticas, y esto no lo afirmo solamente yo, esto lo dice rotunda y claramente el Consejo de Estado en su dictamen sobre lo poco que de este proyecto de ley ustedes le han consentido ver para pronunciarse, y luego volveré sobre este aspecto. Pero es evidente que este Gobierno no busca la efectividad, la eficacia de las normas sino la propaganda, y con estos comisionados ¿qué se intenta? Se intenta transmitir la imagen de que el ahorrador, el inversor estará más protegido y de que no se podrán volver a producir escándalos como el de Gescartera. Y esto es engañoso y es falso porque el caso Gescartera se produce no por ausencia de normativa, sino por incompetencia, por falta de rigor del organismo supervisor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no adopta las decisiones pertinentes a las que le obligaba taxativamente la normativa vigente, y se produce por la confraternización de todo un secretario de Estado de Hacienda con los estafadores. Y este caso, señorías, este tipo de situaciones y conductas no se impiden acumulando más normas, que no son sino cortinas de humo ineficaces.

Esto sólo se evita desde el rigor, la profesionalidad y la independencia de los organismos reguladores y desde la estricta moralidad de los servidores públicos, de los responsables políticos, desde el estricto cumplimiento de sus obligaciones, desde una firme voluntad de servicio al bien común y no al provecho personal.

Es precisamente el caso Gescartera —como ya se ha recordado— el que está en el origen de la precipitada, atropellada conclusión de este proyecto, puesto que en pleno fragor del escándalo, cuando el ministro de Economía anuncia —en una nueva cortina de humo— la inmediata remisión al Parlamento de un proyecto de ley financiera, comienza la andadura de este velo de Penélope legislativo que, mal redactado, incompleto, fragmentario, se remite, para su preceptivo dictamen, al Consejo de Estado, el cual se pronuncia por cierto en términos bastante duros sobre el mismo, no obstante lo cual el texto llega sin variaciones al Congreso de los Diputados, donde el Grupo Parlamentario Popular introduce, vía enmiendas, modificaciones sustanciales en el mismo, nada más y nada menos que una reforma absolutamente innecesaria, absolutamente dictada por los intereses partidistas del régimen jurídico de las cajas de ahorro. Mire, senador Cámara, lo repito dedicado especialmente a los oídos de su señoría, califico desde esta tribuna la reforma intentada del régimen jurídico de cajas de ahorro y todo lo que ello comporta como absolutamente innecesaria, repito, innecesaria y dictada por intereses partidistas, y mi grupo va a votar en contra de todo el proyecto de ley.

Por tanto, deje de hacer caso a cantos de sirena y atégase a los hechos concretos, que son la oposición frontal del Grupo Parlamentario Socialista a este proyecto de ley, y concretamente a todo lo referente a las cajas de ahorro. Lo demás, como mínimo, son simplemente o imprecisiones o —se lo diré cariñosamente— faltas a la verdad, señor Cámara.

Insisto en que las referidas modificaciones han sido sustraídas, mediante este procedimiento, al conocimiento del Consejo de Estado. Pero, no satisfechos con ello, al pasar el texto al Senado el Grupo Parlamentario Popular presenta la insignificante cantidad de 62 nuevas enmiendas —62—, muchas de las cuales vienen a enmendar las anteriores enmiendas de los diputados populares; pero, para acabar de rizar el rizo, aún presentan diez enmiendas más, fuera de plazo, que se incorporan, en un claro ejercicio reglamentario abusivo, en clara conculcación de los principios de seguridad y garantía de las minorías parlamentarias, y, como era de esperar, estas diez enmiendas vienen a enmendar a su vez básicamente sus anteriores enmiendas, que ya enmendaban las precedentes enmiendas del Congreso de los Diputados. Lo dicho: estamos ante una especie de velo de Penélope legislativo, tejido y destejido al compás marcado por los diferentes grupos de presión interesados en el proyecto (*La señora Martínez García: Sí, señor.*) o los intereses de los diferentes sectores del Partido Popular, sobre todo los de ámbito confesional.

Esta especie de comedia de enredo, este batiburrillo legislativo el señor Rato tuvo la deferencia de presentarlo ante el Congreso de los Diputados como una técnica legislativa moderna, novedosa y horizontal. ¿Moderna, cuando en lugar de estar en el año 2002, parecemos retrotraídos a la época isabelina, a la corte de los milagros? ¿Cuando en los entresijos y entretelas de alguno de los aspectos más polémicos de este proyecto, como es el de las mal llamadas cajas de la Iglesia, aparecen con toda nitidez figuras ensotanadas? Ciertamente muy moderno, señorías; muy moderno. ¿Novedosa? Bueno, por lo que he expuesto, más que novedosa, resulta insólita en los anales parlamentarios, y eso que aún no me he referido a la fragmentación del ordenamiento jurídico, fragmentación denunciada explícitamente por el Consejo de Estado, en su dictamen, que comporta un proyecto como el presente, que cambia, modifica o deroga disposiciones contenidas en treinta normas de rango legal.

Lo de horizontal sí que lo comparto, y lo entiendo; lo entiendo en el sentido de la absoluta laminación, del aplastamiento de las minorías parlamentarias en este proceso legislativo, comenzando por la mayoría que represento en esta tribuna, y a la que no se le ha permitido alterar ni una coma del texto, en un claro ejercicio de prepotencia gubernamental y de un estilo parlamentario que no se caracteriza precisamente por el diálogo amplio y abierto, sino por los acuerdos cuasi conspirativos hechos en la sombra...

El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.

El señor BRU PARRA: Si usted me lo permite, señor Presidente, acumularé el tiempo del turno posterior en la fracción que ahora consume.

Decía que el ausente señor Rato ha afirmado nítida y públicamente —y hay constancia de ello en la prensa— que el incomprensible límite de 70 años fijado para los consejeros en las cajas de ahorro se introduce a petición de Convergència i Unió. Y esto lo niegan. Y esta confusión

no es ni más ni menos que el fruto lógico y cotidiano de las maniobras de secretismo y de ocultación. Y algunos deberían explicar, y qué mejor sitio que en sede parlamentaria, qué interés tienen en tomar al asalto la presidencia de la tercera entidad financiera de España, cuáles son los móviles que justifican utilizar esta ley de forma abiertamente inconstitucional para sacar de su presidencia al hombre que durante los últimos 25 años, con una gestión profesional impecable y llena de aciertos, la ha llevado hasta su posición actual. Y creo que las respuestas son necesarias, aunque evidentemente las esperanzas de encontrarlas por mi parte son bien pocas.

En fin, señorías, la voracidad gubernamental en los sectores financieros, bancarios y mediáticos, como ya sabemos, es insaciable y su ambición, su vocación, sus ansias de controlarlo todo no parecen conocer límite ni frontera.

Señorías, creo que he fundamentado sobradamente nuestra posición contraria a este proyecto de ley en su totalidad. Textos como este no acreditan ni mucho menos nuestro quehacer parlamentario ni mucho menos tampoco la voluntad del Gobierno de servir al interés general.

En su mano estaba buscar el acuerdo y configurar un proyecto coherente, homologable en nuestro entorno europeo, un texto legal con credibilidad que, con el respaldo de una amplia mayoría parlamentaria, sirviese de clara referencia a mercados, entidades, clientes de servicios y ahorradores. No lo han querido así. En su mano estaba proteger los intereses de muchos y, como siempre, han preferido proteger y servir muchos intereses.

Es su opción y no diré que me sorprenda, pero nosotros, precisamente en nombre de los intereses generales, de los intereses de la mayoría, solicitamos de esta Cámara la evolución del texto al Gobierno.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

En turno en contra, tiene la palabra el senador Sánchez.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestra más sincera felicitación por su elección ayer tarde.

Efectivamente, voy a intervenir en el turno en contra de los vetos en representación del Grupo Parlamentario Popular.

Y al iniciar mi intervención en este turno en contra respecto a los vetos presentados por los grupos de Izquierda Unida, Entesa Catalana y Socialista, en primer lugar, quisiera recalcar la voluntad del Gobierno de ofrecer un amplio y pausado debate político sobre un asunto de la trascendencia e importancia del sistema financiero, en este caso del sistema financiero español en una economía mundial cada vez más globalizada, interdependiente e interconexiónada.

Ha sido una actitud permanente de diálogo, incluso hasta poco antes de iniciar este debate, con el único y encomiable fin de conseguir plasmar un texto con el más amplio consenso, que actúe de forma efectiva sobre el sistema

financiero español. Prueba de ello ha sido la inclusión de tres nuevas enmiendas poco antes de comenzar el debate y otra más que, ante la premura de tiempo, ha sido prácticamente imposible poderla incluir en este trámite.

Todos somos conscientes —y se hace uso de ello permanentemente en los últimos tiempos, incluso esta misma tarde lo hemos podido escuchar— de las importantes y trascendentes consecuencias que los casos Enron o Worldcom han supuesto para el conjunto de los sistemas económico-mercantiles, especialmente para los países más avanzados.

Aunque en nuestro país ya se habían iniciado los pasos para la reforma que hoy debatimos, estos dos casos fueron la voz de alarma para corroborar el necesario establecimiento de un conjunto de normas que nos permitan disponer de un ordenamiento jurídico lo suficientemente preparado para afrontar situaciones similares, de las que ninguna economía está exenta e inmunizada.

Por tanto, señorías, yo creo que es evidente que existe una práctica unanimidad en la necesidad de actualizar y modificar nuestro ordenamiento jurídico, la normativa que afecta al conjunto del sistema financiero español, estableciendo las normas, los mecanismos precisos que, por lo menos, traten de impedir que puedan producirse situaciones similares o parecidas a las que hacía referencia anteriormente.

Es lo que, en esencia, se pretende a través de este proyecto de ley de medidas de reforma del mercado financiero o ley financiera, como se la conoce popularmente.

El sistema financiero es un componente esencial para el funcionamiento y desarrollo de las economías puesto que, al facilitar la canalización de los recursos financieros hacia la economía real, está permitiendo su buen funcionamiento y, por tanto, dando lugar a mayores tasas de crecimiento y de empleo.

Por este motivo, es preciso disponer de un sistema financiero desarrollado y capaz de adaptarse a las nuevas situaciones en las que se mueven las economías más desarrolladas. Y el sistema financiero español se ha adaptado perfectamente a estas nuevas situaciones, caracterizadas por unos mercados cada vez más sofisticados y competitivos, con un mayor número y variedad de productos y ofertas de servicios financieros y la utilización de los más modernos y complejos sistemas tecnológicos.

Pero estas nuevas situaciones, estos nuevos productos, estas nuevas tecnologías requieren una regulación normativa y un control que, a la vez que nos permitan disponer de un sistema financiero ágil y competitivo frente a otros mercados más permisivos de nuestro entorno, también sea capaz de aumentar el nivel de protección de los clientes y usuarios de distintos servicios financieros. Para ello es preciso adoptar, actualizar, modificar, incluso establecer nuevas normas, que afectan a numerosas ramificaciones que, en general, abarca el conjunto del sistema financiero.

La mayoría de la actual normativa es anterior a la década de los años 90, habiendo quedado ya obsoleta y anticuada y siendo necesaria su modernización y actualización para adaptarse a la nueva realidad del mercado. Y esa normativa tan abundante y extensa, además de compleja y

complicada, es a la que se trata de dar solución con este proyecto de ley. Es una realidad incuestionable, que hace que nos encontremos con un texto muy denso, muy complejo, que afecta a muchas leyes, reales decretos, disposiciones, etcétera.

Por tanto, señorías, parece cuanto menos sorprendente que una de las principales críticas que se plantea por parte de los grupos que presentan los vetos sea precisamente la relativa al elevado número de leyes y disposiciones a que afecta este proyecto de ley. Evidentemente. Es una verdad de perogrullo. Yo lo decía el otro día en la Comisión de Economía y lo vuelvo a repetir hoy aquí: claro que afecta a numerosas normas. Es que es precisamente la finalidad de este proyecto de ley, como decía anteriormente, el modificar, actualizar y establecer un conjunto de disposiciones que afectan al sistema financiero y que se encuentran interconexionadas y relacionadas de forma que si se modifica una de ellas es preciso modificar y actualizar la complementaria. Se trata de un planteamiento que el propio Vicepresidente del Gobierno definió como un planteamiento integral u horizontal que actúa al mismo tiempo en los tres sectores tradicionales del sistema financiero, la banca, los seguros y las sociedades de valores, analizando y resolviendo los problemas desde un punto de vista global, que responde a la realidad de los mercados y no a una segmentación.

El Gobierno entiende, y nuestro grupo con él, que resulta más apropiado y lógico adecuar determinadas normas e instituciones que afectan a los distintos sectores del sistema financiero con un planteamiento homogéneo e integral, y eso es lo que se hace a través de este proyecto de ley.

Hacen mención en sus vetos, tanto el Grupo Entesa como el Partido Socialista, al dictamen del Consejo de Estado, especialmente el senador Bru, con una interpretación un tanto malévola de este dictamen. Es cierto que el informe del Consejo de Estado hace algunas puntualizaciones al texto del anteproyecto de ley que no pasan de ser meras anotaciones formales, como suele ocurrir con la gran mayoría, incluso yo me atrevería a decir que con la práctica totalidad de los proyectos legislativos que pasan por sus manos.

Pero lo cierto y verdad es que el informe del Consejo de Estado afirma textualmente, por ejemplo en su página 32, que respecto de la tramitación del proyecto de ley se han atendido las exigencias de índole procedimental que deben seguirse para preparar con las necesarias garantías, repito, con las necesarias garantías un texto normativo como el ahora examinado, y añade más adelante —en la misma página 32— que se ha dado amplia audiencia a las entidades representativas de los sectores afectados y que la tramitación seguida puede considerarse ajustada a Derecho y revestida de las garantías necesarias, manifestando también que el proyecto de ley ha merecido, en líneas generales, una valoración positiva. No me extraña que el informe del Consejo de Estado diga todo esto, pues está claro que se ha dado audiencia y se han incorporado numerosas propuestas y observaciones al proyecto de ley de prácticamente todas las instituciones representativas y sectores afectados, incluidas

las organizaciones de clientes y usuarios. Es un proyecto de ley que, dentro de su complejidad y densidad, ha concitado un amplio y sólido consenso del conjunto del sector.

En cuanto al contenido del proyecto de ley, la verdad es que ninguno de los vetos presenta ninguna propuesta ni alternativa positiva y se limitan a realizar una serie de consideraciones vagas y, permítanmelo, sin ninguna enjundia; califican el texto de propagandístico y confuso porque hace referencia a múltiples sectores y servicios. Efectivamente, claro que recoge, como no podía ser de otra manera, multitud de modificaciones que permiten la actualización y adaptación de la normativa vigente a la nueva dinámica financiera globalizada que vivimos. Precisamente el Consejo de Estado ensalza también la coherencia y ordenación realizada del contenido del proyecto a través de los títulos, capítulos y secciones que la componen. (*El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.*)

Más que hablar de propagandístico, deberíamos hablar de realista, y así ha sido reconocido prácticamente por la opinión pública que, en general, ha valorado muy positivamente el proyecto de ley porque supone una ambiciosa revisión de la regulación financiera, una revisión que se concreta a través de diversas medidas que afectan tanto a instituciones financieras, como a organismos públicos y que van dirigidas a la mejora de los sistemas de supervisión, a la protección de los usuarios y clientes y al apoyo de las pequeñas y medianas empresas, incorporando las nuevas directivas comunitarias que afectan al sector.

Respecto a las primeras, se facilitan las condiciones que deben reunir los créditos hipotecarios para poder ser traspasados como participaciones hipotecarias a los fondos de titulación de activos; se amplía la posibilidad de financiación a través del «factoring»; se crea un nuevo instrumento financiero como son las cédulas territoriales; se flexibiliza el régimen aplicado a las inversiones de las cooperativas de crédito; se amplía la operativa de las instituciones de inversión colectiva; se reforma la regulación de las entidades de capital-riesgo, etcétera.

En cuanto a los organismos públicos, se proponen un conjunto de medidas que van desde la integración de los sistemas de compensación y liquidación de valores bursátiles y deuda pública a nivel nacional al refuerzo del papel de la central de información de riesgos del Banco de España o al incremento de funciones del Consorcio de Compensación de Seguros, abaratando costes y mejorando su gestión.

En definitiva, se completa con una serie de modificaciones que tratan de defender a los usuarios y a los clientes en todos los sentidos, creando nuevos instrumentos para posibilitar su defensa y su transparencia.

Dedica un capítulo especial, concretamente el V, a la protección de los usuarios y clientes de servicios financieros mediante la creación de las figuras de los comisionados para la defensa de los clientes de servicios bancarios, del inversor y del asegurado, que atenderán y resolverán sus quejas y reclamaciones a través de un servicio de ventanilla única, o la ampliación del servicio de atención a los ciudadanos españoles perjudicados por accidentes de circulación en países de la Unión Europea.

Mención especial merecen las medidas que se establecen, como decía antes, para el fomento de la transparencia de los mercados, reforzando la normativa para luchar contra el uso de información privilegiada, información relevante, filtraciones de información o murallas chinas, como se las ha denominado más popularmente, y manipulación de cotizaciones, incorporando ya en gran medida la propuesta de directiva comunitaria sobre abuso de mercado.

Todo esto, señorías, no es propaganda; son medidas concretas y efectivas para asegurar la transparencia de los mercados, la solvencia de las entidades y el fortalecimiento del sistema financiero como piezas esenciales para la competitividad, la estabilidad y el desarrollo económico de nuestro país.

En el trámite parlamentario del Congreso de los Diputados, y aquí, en el Senado, se han introducido diversas enmiendas que, evidentemente, han mejorado el proyecto de ley, y esto parece que no les ha gustado a los grupos que presentan los vetos, especialmente al Grupo Parlamentario Socialista y a Entesa Catalana de Progrés. Pues bien, como manifesté en la Comisión del pasado día 7, señorías, el hecho de que se introduzcan estas enmiendas en el Congreso o aquí, en el Senado, no viene más que a confirmar que son dos Cámaras vivas y en constante actividad, y la plena voluntad del Gobierno de ofrecer un amplio y pausado debate político sobre un asunto de tanta importancia y trascendencia, abierto a recoger todas aquellas propuestas positivas y eficaces para el sistema financiero.

No me negarán, señorías, que resulta cuando menos una contradicción que algunos grupos estén invocando permanentemente la pancarta de la reivindicación de funciones para esta Cámara, y cuando tienen la oportunidad de aportar, de debatir, de participar activamente en proyectos de la trascendencia del presente, lo único que se haga sea criticar vehementemente el ejercicio de estas funciones.

Respecto a las irregularidades en la tramitación que manifestaba la portavoz de la Entesa Catalana de Progrés, la senadora Aroz, tengo que decir clara y diáfana que no es cierto. La tramitación se ha realizado de forma totalmente acorde con lo que establece el Reglamento de la Cámara y, además, como siempre se ha procedido en otras normas que se han tramitado en esta misma Cámara.

Precisamente fruto de esa positiva aportación de propuestas e iniciativas en su trámite parlamentario, el proyecto ha incorporado un conjunto de medidas encaminadas a la actualización de la LORCA, que afecta a la organización y estructuras de las cajas de ahorro, respetando en todo momento su naturaleza jurídica y fundacional, pero reduciendo el peso de los representantes políticos para que en ningún caso superen el 50 por ciento de representación en sus órganos de gobierno, en consonancia con las exigencias de la nueva directiva de la Unión Europea, que considera ayuda pública aquella que, en forma de crédito, conceda una entidad cuyos órganos de gobierno cuenten con más de un 51 por ciento de representación de origen público.

Se trata, además, de llevar a cabo un ejercicio de autocontrol, de autorregulación, para que desde instituciones de representación política como es esta Cámara o el Congreso de los Diputados se dé ejemplo de limitación en su

representación en beneficio de una mayor participación de los clientes y los trabajadores, abogando, además, por una mayor profesionalización de estas entidades, que son una seña de identidad de nuestro sistema financiero, donde además de representar ya a más del 50 por ciento del sector realizan una importante labor social y de atención a zonas especialmente rurales que, sin su presencia, probablemente carecerían de la prestación de los mínimos servicios financieros.

Además, esta limitación supone volver al origen de lo que la propia LORCA, la propia Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro, establecía como criterio de equilibrio en la representación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro.

Recordemos que la LORCA es una ley aprobada en 1985 por un Gobierno socialista, hace 17 años, y que a lo largo de este tiempo se han aprobado numerosas leyes de ámbito regional que han venido a romper ese equilibrio establecido por aquella norma, por la LORCA, que otorgaba un 51 por ciento frente a un 49 por ciento en la representación de instituciones de carácter político frente a la representación de clientes o impositores y empleados de las propias cajas. En ese sentido fueron precisamente las enmiendas presentadas por nuestro Grupo y las que hoy también se proponían para incrementar incluso la representación del personal de los empleados de las cajas de ahorro hasta el 20 por ciento a la que se refería el senador Cámara.

Se trata con esta propuesta de volver a los orígenes en un tema tan importante y de tanta trascendencia como es éste que, además, está en consonancia con lo que el propio Partido Socialista proponía hasta hace muy poquito tiempo y que incluso todavía puede encontrarse en su página web. Es verdad que han tratado de esconder todo lo que han podido en dicha página el texto que hace referencia a estas propuestas, especialmente desde que el señor Martínez-Pujalte se refirió a él en el debate en el Congreso de los Diputados de este proyecto de ley, pero todavía se mantiene y se puede encontrar por cualquier internauta que navegue por la red.

En ese documento que aparece en su página web en la Secretaría de Política Económica y Ocupación y que lleva fecha de enero de este año, del año 2002, y del que tengo una copia, que lleva por título «El compromiso socialista con las cajas de ahorro. Las cajas de la ciudadanía», ustedes proponen textualmente en su página 6, dentro del apartado «El PSOE apuesta por una mejor gobernabilidad de las cajas de ahorro», que el PSOE apuesta por dar un mayor protagonismo a la sociedad civil en la conformación de la voluntad de los órganos de gestión de las cajas de ahorro. Y añaden que, tratando de alejar a estas entidades de los vaivenes políticos partidistas, la representación de las instituciones y corporaciones públicas no debería superar el 50 por ciento de la composición de los órganos de gobierno de las cajas.

Esto es lo que decía el documento elaborado y presentado por el señor Jordi Sevilla hace unos meses, en enero de 2002. Puede ser que ustedes, señorías, hayan cambiado de opinión y de criterio no sólo respecto a lo que opinaban en 1985, cuando se aprobó la LORCA por un Gobierno so-

cialista, sino de lo que decían hace varios meses cuando presentaron este documento a bombo y platillo en el mes de enero. Es muy posible que hayan cambiado de opinión, y tampoco sería muy extraño por lo que estamos viendo día tras día en otros muchos asuntos, como ayer mismo, sin ir más lejos, pudimos ver. Se batieron records porque cambiaban de opinión prácticamente en sólo unos segundos respecto de quién debía intervenir en el debate de los presupuestos (*Rumores.*); unas veces dicen que bajar impuestos es de izquierdas y otras veces dicen todo lo contrario, incluso presentan un recurso de inconstitucionalidad a la rebaja de impuestos que presenta el Gobierno del Partido Popular. (*Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

Tienen muchas contradicciones. Podemos hablar del Plan Hidrológico Nacional, que ha sido todo un poema y un calvario para ustedes, o del federalismo asimétrico o simétrico, o que si el Senado debe estar aquí o allí, no sabemos dónde tiene que estar el Senado. Esto ha sido con lo último con que nos ha sorprendido el Partido Socialista en estos últimos días. (*Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

En definitiva, lo que está claro es que lo que establece la LORCA, ley aprobada en 1985 por un Gobierno socialista, y lo que dice su propio documento de compromiso socialista con las cajas de ahorro, que propone buscar un equilibrio en la representación limitando el poder político y otorgando una mayor profesionalización del sector introduciendo, además, normas de buen gobierno, es lo que decían ustedes y lo que precisamente establece el proyecto de ley que ahora debatimos.

La senadora Aroz también ha insistido en que se legisla para una caja en concreto. No sé si lo dirá por un inciso del apartado del artículo 8 que dice: ... y uno más. Señoría, investigue a ver por qué emplea esa expresión. No ha protestado ningún presidente socialista de caja, y habría que preguntarse por qué. A lo mejor se ha legislado precisamente para esto. Reflexione sobre ello.

Pero también habría que ver lo que decía antes, su espíritu permanente de contradicción, porque se habla de despolitizar las cajas en este documento, y precisamente hace muy poco hemos visto cómo el propio secretario de economía del Partido Socialista catalán entraba en el consejo de la Caja de Cataluña. A lo mejor también iba por ahí el asunto.

La senadora Aroz y el senador Bru también se referían a la limitación de la edad a los 70 años para los consejeros de las cajas de ahorro. Como ya he dicho, ustedes son el espíritu de la contradicción, y les voy a dar algunos datos. El artículo 15 de la LORCA, repito que aprobada en 1985, hace 17 años, por un Gobierno socialista, establece que los consejeros de administración deben ser menores de 70 años. Y muy recientemente en la ley de cajas andaluzas —tampoco creo que haya que recordarles que el presidente de esa comunidad autónoma pertenece a su Partido— se ha establecido la limitación de los 70 años para ser consejero de las cajas de esa comunidad autónoma. Y el señor Bono, gran barón de su partido y aspirante frustrado a secretario general del mismo (*Rumores*

y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.), en el artículo 43.1 de la Ley de cajas de Castilla-La Mancha, la Ley 4/1997, publicada un 18 de julio, para más inri (*Rumores.*), establece la limitación de edad para ser miembro del consejo de administración de las cajas, no ya a los 70, sino a los 65 años.

Pues resulta que ahora el señor Maragall, don Pascual, se nos ha descolgado a bombo y platillo con otra propuesta. (*Rumores.*) Ahora no se trata de limitar la edad a los 65 años como el señor Bono en Castilla-La Mancha ni a los 70 como establece la LORCA o como hace el señor Chaves en Andalucía, no. (*Rumores.*) Ahora propone la limitación a los 77 años de edad. El señor Maragall propone limitar la edad para ser consejero de las cajas a los 77 años de edad. ¿Y por qué propone el señor Maragall concretamente esta cifra más aún considerando lo que decía la Senadora Aroz hace unos instantes respecto a que no debería haber limitación? Si quiere le enseño la información, señorita. Lo propuso concretamente en S'Agaró. Hizo una propuesta para limitar esa edad a los 77 años. No sé por qué el señor Maragall propone esto. ¡Vayan a saber! A lo mejor es que ha soñado con ese número mágico o es la terminación de lotería que más suerte le da.

Lo que está claro es que en las Cortes de Cataluña el señor Maragall va a proponer —me parece que ya lo ha hecho— a la Generalitat que la limitación de edad de los consejeros de las cajas sea, nada más y nada menos, que el número mágico de 77 años. (*El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.*) Senadora Aroz, estoy seguro de que ustedes lo defenderán porque el señor Maragall manda mucho, incluso el secretario general del partido a nivel nacional le obedece a pies juntillas. En fin, ya veremos cómo queda lo de los 77 años.

Por otra parte, se aumentan los plazos de representación de los consejeros hasta un máximo de doce años; por cierto, en consonancia también con su propio documento de cajas de ahorro. Se establece, asimismo, la irrevocabilidad de los nombramientos de los consejeros, de modo que provea a los órganos de gobierno de las cajas de la necesaria continuidad y estabilidad.

Pero, sobre todo, se recupera un nuevo instrumento de captación de recursos para estas entidades, como son las cuotas participativas; un instrumento que no es nuevo, ni mucho menos. Se creó en 1988 a través de la Ley 26/1988, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito —y tampoco creo que haga falta recordar quién gobernaba en nuestro país en aquellas fechas—, se desarrolló, posteriormente, a través del Real Decreto 664/1988 y necesitaba de una adecuada regulación como la que ahora se lleva a cabo a través de este proyecto de ley. Así se pidió, además, por el sector de las cajas de ahorro, prácticamente por unanimidad de todas las entidades, independientemente de cuál sea su mayoría representativa.

Por ello, todavía resulta más incomprensible la actitud del Grupo Parlamentario Socialista respecto a estos instrumentos de capitalización, al manifestar —y se lo hemos oído también a la senadora Aroz esta tarde— demagógicamente que puede llevar a las privatizaciones de las cajas de ahorro. Nada más lejos de la realidad, por lo menos por

parte del Partido Popular, que siempre ha manifestado su apoyo y respeto a estas entidades en su configuración y naturaleza jurídica actual. Quizá más bien sean los malos pensamientos de quién sí ha tenido, y parece que sigue teniendo, esas tentaciones, que es quien se opone precisamente a la limitación de la representación política en esas entidades y al incremento de la representación de los empleados en las mismas.

Estas cuotas participativas son títulos, sin derechos políticos, emitidos por las cajas de ahorro que podrán negociarse en los mercados secundarios y que van a permitir a estas entidades tener mayores posibilidades operativas y de expansión. Además, se establece una limitación para que no puedan superar el 50 por ciento del patrimonio de la caja, ni puedan ser adquiridos directa o indirectamente en más de un 5 por ciento por ninguna persona natural o jurídica ni grupo económico. A través de una enmienda presentada por nuestro grupo en esta Cámara, se ha introducido una nueva disposición que establece un período transitorio de 2 años durante el cual el volumen de estos títulos no podrá superar el 25 por ciento del patrimonio de la caja.

Por tanto, señorías, es evidente que lo que se pretende con las medidas que se incluyen en el proyecto de ley relativas a las cajas de ahorro es actualizar y recuperar la filosofía que se establecía en la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro, la LORCA, en cuanto al equilibrio en la representación de sus órganos de gobierno, establecer una mayor estabilidad, continuidad y profesionalidad en su gestión y, sobre todo, posibilitar un instrumento de captación de recursos propios que permita a estas entidades afrontar nuevos retos de futuro, de expansión y renovación tecnológica respetando, por su puesto, su naturaleza jurídica fundacional.

En definitiva —y termino, señorías—, nos encontramos ante un proyecto de ley muy complejo y denso —en eso estamos de acuerdo todos los grupos y así lo han manifestado los tres intervinientes que han hecho uso de la palabra— que necesitará, además, de una actualización y modernización continua y constante para poder seguir dando adecuada respuesta a los continuos avances del mercado financiero, pero que ahora contribuye de forma importante a aumentar la eficiencia del sistema, mejorar la protección de los clientes y usuarios de los servicios financieros, ayudar a la financiación de las pequeñas y medianas empresas y de las cajas de ahorro y actualizar la legislación que afecta al conjunto del sector financiero español.

Por tanto, por supuesto, nuestro grupo, como no podía ser de otra manera, votará en contra de los vetos presentados a este proyecto de ley.

Muchas gracias. (*Aplausos.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Sánchez Sánchez-Seco.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Cámara.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Gracias, señor Presidente.

Ha habido algunas regañinas entre unos y otros, pero espero que eso no afecte, al menos en la parte de la izquierda, para tener al menos algunos elementos de coincidencia más importantes, independientemente, repito, de los rifirrafes, porque algunos matices tenemos que tener entre fuerzas políticas autónomas y diferentes. Por tanto, tranquilo, Senador Bru, no pasa nada. De todas maneras adelanto una cuestión: efectivamente, tenemos alguna diferencia en el tema de la presencia de los trabajadores en las cajas. Yo he hecho mención aquí a esa cuestión porque así me lo han dicho. Si la credibilidad del señor Sevilla para usted es total y absoluta, para mí tiene mucha credibilidad un sindicato mayoritario y responsable como es Comisiones Obreras y su secretaria general María Jesús Paredes, que me comunica que se produjo en presencia de ella ese compromiso. Por lo tanto, no vamos a discutir eso porque usted y yo estamos de acuerdo en lo fundamental. ¡A fin de cuentas no sé por qué me ha regañado tanto! No pasa nada, es parte del debate político, insisto, entre no iguales, exactamente no iguales pero sí coincidentes en muchas cuestiones.

Señorías, efectivamente, ya hemos hablado sobre la importancia del sistema financiero y de que es indiscutible la necesidad de buscar esencialmente una ley o muchas leyes que lo regulen. ¿Un texto consensuado? Sinceramente, senadoras y senadores del Grupo Popular, es un texto vía ventanilla, no es un texto consensuado. Es un texto que viene dado por un inicio «a propuesta» y después por cantidad de modificaciones, de idas y venidas, como antes he planteado, en función de intereses, acuerdos o negociaciones en diferentes momentos.

Efectivamente, unos y otros hemos mencionado que los escándalos financieros —y políticos relacionados con escándalos financieros, añado yo— han sido el catalizador de la necesidad de regular y situar el sistema financiero español en la parte que le corresponde, y ya he mencionado que hay cuestiones de interés en esta ley.

Señorías, el mismo día del debate en el Congreso de los Diputados, el 25 de abril, se planteaban dos iniciativas del Grupo Socialista y de Izquierda Unida y PNV sobre la comisión de investigación del caso BBVA. Repasen ustedes lo que allí se discutió y verán cuál es básicamente el interés de remediar los escándalos político-financieros/financiero-políticos que han tenido lugar en nuestro país y como referencia de otros países en el mundo.

Voy a terminar diciéndoles que, al igual que me ha espetado el Senador Bru, yo voy a votar en contra, como hizo mi grupo en el Congreso de los Diputados. Yo tengo una posición cerrada de las cosas que me creo, independientemente de alguna diferencia con otra parte de la izquierda, pero voy a votar en contra, como votó mi grupo, lo cual no quiere decir que yo parcialmente no defienda aquí cosas que me interesan o que puedan representar partes de intereses.

A mí me hubiese gustado que hubiéramos discutido y hubiéramos eliminado cualquier referencia relativa a la presencia cierta o posible —es una posición— de los cuotaparticipes en los órganos de gobierno de las cajas —estas referencias, como ustedes saben, aparecen en los apartados

segundo y cuarto del artículo 7 bis—. Me hubiera gustado haber discutido más sobre la introducción de una mención al control de las actividades de las cajas de ahorro para establecer que la representación de las mismas en los consejos de administración de las empresas participadas sea ostentada por consejeros generales de la caja o por personal técnico de plantilla cualificado para este cometido.

Nos hubiera gustado que se discutiese que todos los impositores, y no sólo los compromisarios, deberían ser elegibles para consejeros generales. Los representantes de los impositores en el consejo de administración y la comisión de control deben ser elegidos por la asamblea general y no por los compromisarios, a lo que se refiere una de las enmiendas que he presentado. En fin, elección de representantes, de impositores, de compromisarios con el término —entre comillas— entre ellos, y así un sinfín de aspectos más.

La dificultad de discutir este texto por su complejidad, por los cambios en el proceso parlamentario vivido, hace muy difícil que logremos el nivel de consenso necesario; el consenso se hace en ocasiones fuera de los muros de las sedes parlamentarias y no en sede parlamentaria; desde luego en este Senado no ha habido consenso sino un intento del Grupo Parlamentario Popular de añadir un montón de enmiendas, algo a lo que lógicamente nos opusimos en su momento, tanto en ponencia como en comisión...

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Senador Cámara, vaya terminando.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Termino, señor Presidente.

Como ustedes han podido comprobar, nuestro grupo y otros grupos parlamentarios hemos firmado enmiendas razonables que mejoran el texto, pero no estamos de acuerdo con esa actitud —y permítanme la expresión, aunque suene dura— de carácter filibustero que lleva a que en un momento determinado aparezcan un montón de enmiendas que cambian sustancialmente la ley y nos dejan en una indefensión absoluta.

Por tanto, vaya por delante nuestro voto favorable a todos los vetos presentados, tanto al de mi grupo como a los de los Grupos Parlamentario Socialista y Entesa Catalana de Progrés. En su momento nos pronunciaremos con respecto a las enmiendas.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Cámara.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Morales.

La señora MORALES RODRÍGUEZ: Gracias, señor Presidente.

En este turno de portavoces únicamente voy a manifestar mi posición respecto a los vetos de los grupos parlamentarios Entesa Catalana de Progrés, Socialista y Mixto.

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria va a votar en contra de los vetos y en el próximo turno de porta-

voces explicaremos nuestra posición acerca del proyecto de ley y nuestro voto al mismo.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senadora Morales.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Albistur.

El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.

Ciertamente no se puede comenzar de otra manera que diciendo que esta es una ley compleja, si se quiere complicada en su tramitación y, además, de alguna forma uno se queda con la impresión de que pretendidamente complicada.

El texto original no tiene nada que ver con el texto saliente de este Senado. Son cosas completamente distintas, y lo que vamos a debatir y posiblemente a aprobar hoy, más que una ley es un compendio de legislación en retazos que afecta al sistema financiero español, mezclada, modificadora de otras leyes y transformadora del marco legal de dicho sistema financiero.

Se está produciendo una utilización privativa e interesada de una mayoría absoluta, y no solamente política sino que me atrevería a afirmar que existen intereses funcionariales, en los ministerios y en otros muchos grupos, para aprovechar esta mayoría absoluta con objeto de modificar leyes de forma rápida, urgente y además sin debate. Esta mayoría absoluta se utiliza para tramitar leyes por una vía rápida, evitando el debate y la participación, no sólo la participación de estas Cortes Generales sino también la del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social. Y sospechamos que detrás de todo esto hay una cesión ante los cada vez mayores grupos de interés o interesados amigos del poder.

Se está perdiendo —lamentablemente lo tenemos que decir— el ejercicio de un procedimiento correcto y responsable desde el punto de vista parlamentario y del ejercicio de la representación. Hay una modificación de leyes mediante otras leyes que se debaten en la Cámara. Se aprovecha que el Pisuega pasa por Valladolid para ir introduciendo leyes, que al final terminan siendo un tótem revolú-tum o un compendio de retazos, como anteriormente he dicho. Esta ley modifica nada más y nada menos que 19 leyes, 18 cuando entró en el Congreso y una más, si no son dos, se han modificado aprovechando el trámite del Senado.

La parte más controvertida del proyecto es la reforma de las cajas de ahorro, que por decisión del Gobierno se ha ido introduciendo, además, en forma de enmiendas. Las medidas se han ido conociendo por goteo, con enmiendas de quita y pon en función de la eficacia de los distintos grupos de presión y de las conversaciones con algunos grupos políticos, no con todos. La ausencia de consenso entre los principales partidos y las suspicacias despertadas en muchas comunidades autónomas por la inclusión de normas que podrían invadir sus competencias puede dejar en suspenso para el próximo futuro su aplicación práctica,

que dependerá en último término de la colaboración de los gobiernos autónomos para cambiar sus propias leyes de cajas. Éste es un hecho real y poco discutible. Hay ejemplos de otras modificaciones relativas a las responsabilidades, por ejemplo, de los auditores, que vamos a presentar aquí en una enmienda transaccionada, que debería haber sido presentada a esta Cámara para su modificación mediante una ley de auditoría. Lo dice también la enmienda número 218 de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, si la memoria no me falla.

Pero es que se siguen diciendo cosas como las que publicaba hoy mismo el periódico «Cinco Días», donde se anuncia que los empleados amplían hasta el 20 por ciento su peso en los consejos de las cajas. Además, se dice que el Grupo Parlamentario Popular ha esperado hasta el último momento para negociar posibles correcciones con los grupos políticos. Y que a última hora de ayer los negociadores seguían reunidos con el propósito de llegar al máximo acuerdo, pero se descartaban cambios de importancia. Esto es verdaderamente virtual, pues esta enmienda ni siquiera ha sido presentada porque no ha sido firmada por los grupos políticos. Esto no es serio, y se dice en un periódico de tirada nacional en todo el Estado; se está afirmando ya que hay un acuerdo, cuando ni siquiera se ha presentado para su debate real a los grupos políticos.

Desde esta segunda legislatura, la mayoría de las leyes son un conjunto más o menos ordenado, pero de retales legislativos. Se crea confusión en los legisladores y en los ciudadanos por la dispersión de temas e intereses que aparentemente deberían suponer una mejora para los ciudadanos pero que, por razón de todo este barullo y por querer atender a tantos intereses, acaba enfrentándolos.

Nuestro grupo no ha presentado enmienda a la totalidad, pero visto el debate de esta ley tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, no puede más que denunciar estas prácticas de modificaciones legislativas sustanciales, y en este caso de leyes orgánicas, sin seguir el cauce legislativo ordinario y sin procurar un acuerdo razonable en las leyes que afectan a instituciones parlamentarias y de gobierno con competencias legislativas, como es el caso de las comunidades autónomas. Se efectúa una completa modificación de una ley orgánica como la LORCA, la Ley Orgánica de Reforma de las Cajas de Ahorro, pero por la puerta de atrás. Pero lo que también es grave es que no se introduce modificación alguna para adaptar la citada ley orgánica a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

Termino diciéndoles, señores del Partido Popular, que rectifiquen, que adecuen sus leyes al cumplimiento y respeto de las disposiciones constitucionales y de los estatutos de autonomía, con lo que tanto se llenan la boca en pronunciamientos públicos. Y adecuen sus propuestas a las sentencias del Tribunal Constitucional, que es lo mínimo que se les puede pedir, ya que dudo mucho que vayan a aceptar las enmiendas de este grupo y las de la oposición.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Albistur.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra la senadora Aroz.

La señora AROZ IBÁÑEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ¿hay una mayor muestra de desprecio al consenso parlamentario que afirmar que no ha habido propuestas por parte de los grupos parlamentarios? Lo que sucede es que ustedes ya ni siquiera leen las enmiendas que presentamos el resto de los grupos. Y aunque no dispongo de mucho tiempo en este turno, voy a indicarle cuáles son las principales propuestas de nuestro grupo, coincidentes con las del Grupo Socialista.

En primer lugar, hemos presentado enmiendas en relación con el Mercado de Valores que tienen como objetivo la integración en un mercado único financiero en el año 2005, sin que para realizar este proceso de integración el sector tenga que afrontar costes de ajustes relevantes. Asimismo, a través de nuestras enmiendas proponemos articular el proceso de liberalización de los mercados con la mejora de la eficacia de las funciones de supervisión. Por otro lado, planteamos que la reforma del mercado comporte mejoras en la eficiencia para todos los participantes, y en particular para los inversionistas. (*El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.*) También defendemos reforzar la autonomía y la competencia de los órganos supervisores. Y enmendamos, en la línea del dictamen elaborado por el Consejo de Estado, las habilitaciones que se conceden al ministro de Economía y que afectan a la independencia de los órganos supervisores. Además, hemos presentado enmiendas para mejorar la transparencia de los mercados, proponiendo el establecimiento en nuestro país de las directrices de la Organización Internacional de Comisiones y Mercados de Valores. Hemos propuesto que la tipificación del uso de información privilegiada no esté asociada al beneficio monetario, como se recoge en el texto del Gobierno y en las enmiendas del Grupo Popular. Y hemos presentado enmiendas que defienden un modelo de supervisión basado en la independencia y autonomía de los órganos supervisores y en la liberalización y transparencia de los mercados.

Señorías, se trata de un conjunto de enmiendas que, en el caso de que ustedes se hubieran tomado el trabajo de leerlas y después dialogar con nosotros y con el resto de los grupos que han presentado propuestas similares, hubieran llevado a una situación muy distinta por lo que se refiere al apoyo a este proyecto de ley y a un resultado indudablemente mucho mejor.

En último lugar, quiero referirme a la regulación de las cajas de ahorro. Durante mi intervención anterior he tenido ocasión de explicar y defender las propuestas que hemos realizado en este sentido, en concreto, para la mejora de los recursos propios de estas entidades financieras y la defensa de las competencias de las comunidades autónomas. Señoría, cuando criticamos la regulación relativa a la limitación de edad de los consejeros de las cajas de ahorro estamos hablando de invasión de competencias, es decir, de que no se respeta el carácter básico de este aspecto, que corres-

ponde a las comunidades autónomas. Por tanto, si determinadas comunidades autónomas han legislado en esta materia, lo han hecho porque estaban en su derecho.

Y en cuanto a la propuesta que ha realizado Pascual Maragall públicamente, y que se ha concretado en una proposición no de ley en el Parlamento de Cataluña, he de decirle que usted no ha entendido nada. Precisamente lo que propone el señor Maragall es que la Comunidad Autónoma de Cataluña no legisle en este tema. Las comunidades autónomas tienen competencias para hacerlo, porque se las otorga la normativa, y la sentencia del Tribunal Constitucional es muy clara en este sentido, y a ella me he referido. Pero repito que lo que está proponiendo el «Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi» es que la comunidad autónoma no legisle y que sean las propias entidades financieras las que decidan la edad de jubilación de sus consejeros y presidentes. Y cuando se habla de la edad de 77 años no es que se esté proponiendo ese límite, sino que con la no regulación por parte de la comunidad autónoma en estos momentos regiría esa edad.

Por tanto, señoría, lea bien, porque el señor Maragall no está proponiendo nada de lo que usted ha dicho, sino todo lo contrario, es decir, que si él es Presidente de la Generalidad —y va a serlo muy pronto— no va a legislar y, por tanto, regirá la normativa que a este respecto decidan las propias cajas de ahorro.

Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, me ratifico en cuanto que la normativa que se aprueba abre la puerta a la privatización de las Cajas de Ahorros, y me remito a la argumentación que ya he expuesto. En definitiva, señoría, sus críticas a que los grupos parlamentarios no...

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senadora Aroz, le ruego que vaya concluyendo, por favor.

La señora AROZ IBÁÑEZ: Termino enseguida, señor Presidente.

Esas críticas a la falta de propuestas son, señoría, una excusa de mal pagador. La realidad es que ustedes han permanecido totalmente cerrados a las propuestas de los grupos parlamentarios. No dudamos de las buenas intenciones que usted ha manifestado, pero sabe que obras son amores y no buenas razones, y las obras son que el trámite de este proyecto de ley ha sido un nuevo ejercicio de prepotencia política y rodillo parlamentario de su mayoría absoluta, algo a lo que ya nos tienen acostumbrados.

Gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora Aroz.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Cambra.

El señor CAMBRA I SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Como es sabido, y al igual que hicimos en el Congreso de los Diputados, nuestro grupo va a votar en contra de los vetos que se han defendido en esta sesión plenaria. Tras escuchar las intervenciones de los señores senadores debo

decir que estamos fundamentalmente de acuerdo con casi todos los grandes objetivos que se persiguen a través de esta ley financiera. Es decir, estamos de acuerdo con mejorar e incrementar la competitividad y la eficiencia del sistema financiero español; con incrementar la protección a los usuarios del sistema financiero; incrementar la seguridad jurídica de los ahorradores e inversores; con incrementar y mejorar los canales de financiación para las pequeñas y medianas empresas o con incrementar las garantías de la actividad de las auditorías de cuentas. Son temas en los que todos coincidimos que es necesario regular y mejorar para que nuestras instituciones financieras tengan la competitividad necesaria respecto de las entidades financieras de la Unión Europea y para que nuestras normas estén acordes con las que allí rigen. Por otra parte, y en cuanto a la oportunidad, todos estamos también de acuerdo en que han sucedido hechos suficientemente relevantes (como el de Gescartera en nuestro país, o el caso Enron fuera de nuestras fronteras) como para que sea necesario regular estos temas durante este año.

Por lo que aquí se ha expresado, el motivo fundamental de discrepancia es una cuestión de forma, algo que entiendo nos debe llevar a reflexionar sobre la utilización de sistemas legislativos que suponen lo que en este caso se ha calificado de ley horizontal, es decir, una ley que modifica una importante cantidad de leyes y que lógicamente lleva aparejada una complejidad, en primer lugar, en lo que se refiere al propio proceso legislativo, pero, también, y más grave todavía, para los propios usuarios de los textos legales que deben acudir a los mismos para consultar sobre un único tema regulado; un tema regulado, por cierto, de una forma muy compleja y difícil que genera inseguridad legal, motivo por el que al final debemos cuestionarnos hasta qué punto se puede exigir aquello de que el no conocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, pues realmente éste se hace difícil con ese tipo de regulaciones. Así pues, como digo, deberíamos reflexionar quizá también sobre el tipo de tratamiento que se da en el Senado a esa segunda lectura de los textos legales, algo que también ha constituido un punto de controversia tanto respecto de este proyecto de ley como de otros.

Quiero asimismo mencionar el tema más relevante de este proyecto de ley: la reforma del régimen jurídico de las cajas de ahorro. Desearía aclarar algo que creo es muy conocido, y es que la preocupación fundamental de nuestro grupo en relación con esta regulación ha sido que se preservaran las competencias de las comunidades autónomas. Se ha hablado mucho de la regulación de la edad de los consejeros de las cajas de ahorro, y nosotros teníamos un objetivo muy claro en el Senado: las competencias de las comunidades autónomas debían respetarse y desaparecer su carácter básico. Por ello presentamos una enmienda en la que proponíamos que se contemplara en la disposición adicional correspondiente que esta disposición en concreto no tenía carácter básico. Este asunto se ha solucionado a través de una propuesta del Grupo Parlamentario Popular, distinta en cuanto a su forma, pero que conduce al mismo objetivo: se mantiene el carácter básico de esta disposición, pero se añade que sin perjuicio de lo que determine la

legislación de desarrollo, que es competencia de las comunidades autónomas.

Senadora Aroz, desde nuestro punto de vista no era la mejor técnica legislativa para hacerlo, pero el objetivo era resolverlo; quizá ha sido con una técnica legislativa distinta a la que hubiéramos preferido, pero se ha resuelto. Si hoy le es posible a su grupo presentar la iniciativa que está defendiendo es porque se ha llegado a este acuerdo y se ha eliminado el carácter básico y la no competencia que hubiera tenido en este caso el Parlamento de Cataluña para modificar esta normativa. Y ésta es quizá la diferencia cuando se actúa desde el grupo político que tiene responsabilidades de Gobierno como tiene Convergència i Unió en Cataluña. Hay que transaccionar para conseguir el objetivo, porque si no la ley entra en vigor el día 1 de noviembre y los problemas surgen a partir de este momento.

Senador Bru, esta no es una propuesta de Convergència i Unió. Se ha demostrado, después de más de 20 años de gobierno de Convergència i Unió, que si en una comunidad autónoma no ha habido intervencionismo en la gestión de las cajas de ahorro ha sido en la de Cataluña. Por tanto, no ha sido ésta una iniciativa de Convergència i Unió y la preocupación ha sido que no se perdiera esta competencia como las demás competencias que corresponden claramente a las comunidades autónomas para regular los órganos gestores de las comunidades autónomas.

Otros aspectos comentaré en el turno de defensa de enmiendas, ya que entendemos importante ponerlos de manifiesto por parte de mi grupo en un posicionamiento como este. No me queda más tiempo.

Resumiendo, diré que mi grupo votará contra los vetos que se han presentado, y lo hacemos porque compartimos globalmente los objetivos que se persiguen, aunque nos gustaría hacer una reflexión sobre el procedimiento legislativo que se utiliza en casos como este y globalmente sólo lamentamos que en las formas...

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Cambra, le ruego que vaya concluyendo, por favor.

El señor CAMBRA I SÁNCHEZ: Concluyo, señor Presidente.

... que en las formas se mantenga un enfoque centralista y de poco respeto a competencias de las comunidades autónomas —no en las fundamentales porque si no, no podríamos votar el proyecto de ley— que refleja una mentalidad excesivamente centralista en varios de los capítulos y artículos de este proyecto de ley.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Cambra.

Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el senador Bru.

El señor BRU PARRA: Muchas gracias, señor presidente.

En aras de la hora que es y del trabajo parlamentario de esta Cámara, voy a acumular el resto de turnos que todavía

le correspondían a mi grupo y, por tanto, comienzo por dar por defendidas todas las enmiendas y votos particulares que hemos presentado.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular se ha referido reiteradamente a la voluntad de ofrecer un amplio y pausado debate o a la voluntad de buscar el consenso. Yo aquí no veo ni el amplio ni el pausado debate cuando todavía hoy, a uña de caballo, han colado enmiendas que enmiendan y que modifican las modificaciones anteriores, cuando esto prácticamente ha sido un sobresalto legislativo, en el que cada día había una enmienda que modificaba la anterior, fuera en plazo o fuera de lo previsto reglamentariamente. Yo no calificaría esto como un proceso amplio y pausado, sino más bien como un sobresalto continuo y un atropello —insisto— de los derechos y garantías de las minorías parlamentarias.

Dice usted, señor Sánchez-Seco, que el mundo financiero y la ley que comporta es un mundo denso, complejo y que la complejidad de la ley va referida al mundo complejo que trata de resolver. Un gobernante no está para sentarse a contemplar la realidad y decir que es muy compleja, sino que está para resolverla. En el sueldo del ministro de Economía no se incluye el contemplar la complejidad del mundo actual, sino intentar resolverla y este proyecto de ley, lejos de solventar ninguna complejidad, viene a aumentar el desorden y la fragmentación del ordenamiento jurídico español.

Decía usted que he hecho un uso malévolo del dictamen del Consejo de Estado, porque al fin y al cabo el dictamen del trocito de ley sobre el que el Gobierno le ha permitido dictaminar prácticamente sólo contiene —y tengo aquí su cita literal— meras anotaciones formales. Si usted considera que es una mera anotación formal que sea el propio Consejo de Estado el que dispare la alarma sobre las excesivas habilitaciones que se concede el ministro de Economía, sobre el creciente aumento de la capacidad personal, discrecional, del ministro de Economía afirmando que esas excesivas habilitaciones que se le conceden —y cito literalmente— «constituyen una norma en blanco que no contiene ningún tipo de regulación sustantiva y que podría suscitar dudas de inconstitucionalidad»; si usted dice que simplemente es un mero apunte formal el hecho de calificar la asunción de competencias personales por parte del ministro de Economía como posible factor de inconstitucionalidad, que esto es algo anecdótico y que pasa en todos los procesos legislativos, francamente, señor Sánchez-Seco, está utilizando toda una serie de eufemismos que realmente le sitúan más como un autista político que en el mundo de lo real.

Habla usted, dentro de esa distorsión continua de la realidad, de que en el veto que hemos presentado no hay propuestas alternativas. ¡Pero, vamos a ver, senador Sánchez-Seco! ¡Si hemos presentado 62 enmiendas, la mayor parte de las cuales son muy parecidas a las que regulan el mundo financiero en el ámbito anglosajón o en el francés! ¡Si muchas de ellas son idénticas a las que están contempladas en la reciente Ley Sarbanes-Oxley, aprobada en los Estados Unidos de América del Norte para actualizar la supervisión y regulación del mercado financiero, y que ustedes no

han mirado ni por el forro! ¿Y usted me dice que esto no son propuestas alternativas serias? O sea, lo que se hace en todo el mundo está contenido en nuestras enmiendas, lo suyo está al margen de la realidad internacional, ¿y usted todavía viene aquí a decir que no hay propuestas alternativas serias? Otra vez eufemismos, por no hablar de otras cuestiones.

También habla usted de la página web y del cincuenta por ciento. ¿Quién se opone al cincuenta por ciento? Senador Sánchez-Seco, ¿de dónde saca usted que yo aquí me he opuesto a la limitación del mandato institucional? No sé si usted oye psicofonías, porque yo realmente no he dicho nada de eso, ni lo verá pronunciado por ningún portavoz de mi partido. Ustedes por lo visto se inventan moros muertos —con perdón— para dar después grandes lanzadas. ¡Pues no! Cíñase nuevamente a la realidad, que es, senador Sánchez-Seco, que estamos ante un debate muy serio. Por tanto, le rogaría algo más de rigor; es más, se lo voy a decir con toda claridad: ¡Deje las payasadas al señor Martínez-Pujalte, porque usted me defrauda en esta Cámara! Usted no puede venir aquí, en un debate serio, a empezar con anécdotas y chirigotas; esto no es serio, y esto, senador Sánchez-Seco —se lo digo con rubor—, no es propio de usted. Usted me ha defraudado porque le creía incapaz de venir a esta Cámara a hacer el número lamentable que ha hecho al final de su intervención, donde simplemente parecía que estaba buscando la revancha sobre el ridículo que el señor Montoro hizo ayer en el Congreso de los Diputados. (*Rumores.—Aplausos.*) Y no venga aquí con insidias y con patrañas, y no insinúe que hay intereses ocultos de tal o cual personaje o persona. Mire usted, senador Sánchez-Seco, si tiene algo que decir, lo dice aquí, claramente, y si no, por favor, por rigor, por ética, cállese.

Ha mencionado usted la palabra incoherencia, pero nosotros, incoherencia, ninguna. (*Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) Incoherencia —gracias al tendido del 7— la suya, porque usted viene aquí como si nosotros hiciéramos un mito de los 70 años; por cierto, me gustaría saber qué piensa don Manuel Fraga del límite de los 70 años. Ustedes no quieren que un consejero de caja de ahorros tenga 70 años, y en Galicia se puede gobernar con 84. ¡Magnífico, gran coherencia, señor Sánchez-Seco! ¡Gran coherencia!

Dice usted que en Andalucía el límite de edad está en 70 años. ¡Naturalmente que lo está! Y por eso ustedes lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional. ¡Eso es incoherencia! Nosotros no hacemos un mito de la edad. Nosotros defendemos el ámbito competencial de las comunidades autónomas, que son las únicas capacitadas para legislar en esta materia.

Por tanto, déjese de patrañas en cuanto a los años. Ustedes sí han recurrido la ley andaluza sobre cajas de ahorro ante el Tribunal Constitucional y, sin embargo, aquí meten la misma cláusula. Y eso es incoherencia, por no hablar en términos más serios.

Y, por favor, deje de venir aquí dando picotazos sobre el señor Bono. ¿Qué obsesión tiene usted con el señor Bono? ¿Que le gana siempre? Naturalmente que sí. Y le va a seguir ganando. Pero a usted no tenía que preocuparle, y más

siendo de Guadalajara, el señor Bono. Lo que tiene que preocuparle es el ridículo que va a hacer el señor Suárez Illana, que cada vez que habla hace el ridículo en toda España, y que les va a conducir a un nuevo fracaso rotundo en las urnas. Ésa debe ser su preocupación; no el señor Bono, quien está legitimado por el éxito social y, por ende, por sus triunfos políticos. (*Varios señores Senadores desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!*)

Habla usted de las cuotas participativas. Insisto en que este debate es muy serio, muy amplio y podría haber sido muy rico de no distorsionarlo con patrañas y con chirigotas. ¿Desde cuándo nos hemos opuesto a las cuotas participativas? Como instrumento para la captación de recursos propios para las cajas de ahorros, nunca, senador Sánchez-Seco; como caballo de Troya, para colar una futura privatización de las cajas de ahorro, siempre. Por tanto, no me diga eso. Mi grupo se opone a las cuotas participativas como instrumento financiero de captación de recursos. No se han atrevido a culminar esa maniobra de intentar utilizar las cuotas a modo de futuras acciones para colar de rondón una privatización de Cajas de Ahorro. Ha sido una maniobra que les ha salido rana, senador Sánchez-Seco, respecto de la cual han tenido que retroceder, han tenido que dar marcha atrás como en el «decretazo», porque ustedes simplemente aciertan cuando rectifican. Si ustedes querían utilizar ese instrumento para colar de rondón una privatización futura de las cajas de ahorro, han pinchado en hueso; si ustedes simplemente querían dejar las cuotas participativas como instrumento de captación de recursos propios, haberlo dicho con claridad y no haber dejado resquicios para las dudas razonables. Por tanto, nuestra oposición no es al instrumento financiero, en absoluto, sino a su utilización espuria para una posible y futura privatización de las cajas de ahorro.

Realmente, las cajas de ahorro no estaban contempladas en el texto inicial que aprueba el Consejo de Ministros. Pero ustedes como grupo parlamentario, en aras a su indudable autonomía, dicen que enmiendan al Gobierno y que van a incluir una reforma de las cajas de ahorro. Senador Sánchez-Seco, esto no es creíble. Y a mí no me venga con estas historias porque evidentemente lo que ha habido ha sido precipitaciones, improvisaciones, remiendos, parches y enmienda sobre enmienda.

Por último, decía usted que este proyecto de ley viene para actualizar, para modernizar, para poner a nuestro sistema financiero, en aras de la competencia, en un mercado globalizado. Y por eso se inventan algo llamado cajas de la Iglesia, algo muy moderno, muy actual, y tocan las llamadas cajas de la Iglesia, lo cual indudablemente va a mejorar la eficiencia del sistema financiero español. O sea, cuando consigan arrancar de las legítimas competencias autonómicas de la Junta de Andalucía a CajaSur y cumplan las aspiraciones del canónigo Castillejo de salir de ahí y depender directamente del señor Rato, en ese momento el sistema español será el más moderno del mundo.

Concretamente —para que se vea una pincelada de su tosca técnica legislativa—, dicen ustedes que esto se hace por el concordato del año 1979. Señorías, en la disposición

transitoria primera del concordato del año 1979 se dice que cualquier institución de la Iglesia debe estar inscrita en el correspondiente registro del Estado en el más breve plazo posible. Y ese correspondiente registro del Estado es el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, dependiente de la Dirección General de Asuntos Religiosos, donde no está inscrita CajaSur. En él no está inscrita ninguna caja de ahorros, senador Sánchez-Seco. Es más, no está inscrita CajaSur, aunque lo solicitó, por la oposición directa y frontal de la Conferencia Episcopal Española. Por tanto, hay que hablar con propiedad. Es más, para hablar de la Iglesia, es mejor hacerlo de su representante en la Tierra, como, por ejemplo, del Nuncio del Vaticano, del Nuncio apostólico en España, monseñor Kada, que en el año 1999 responde por escrito a un trabajador despedido de CajaSur, que reclamaba paro, en los siguientes términos: Lo lamento mucho, pero solamente ahora puedo comunicarle la respuesta recibida. El señor obispo de Córdoba me pide que le recuerde que CajaSur, aún teniendo como Presidente a un sacerdote, no es una institución de la Iglesia, sino una institución financiera sometida a todas las leyes civiles sobre la materia.

Senador Sánchez-Seco, de ello se deduce que ustedes, como se dice popularmente, son más papistas que el Papa, porque el Nuncio de Su Santidad no reconoce a CajaSur como entidad de la Iglesia y ustedes sí. Como este registro les perjudicaba, en una enmienda nueva, una enmienda sobre enmienda, se inventan un nuevo registro que depende, cómo no, de la absoluta y omnímoda capacidad discrecional del señor Rato de decir si una caja pertenece o no a la Iglesia. Sencillamente, es patético y ridículo. Que una entidad financiera moderna por su presunto, supuesto, hipotético origen fundacional sea excluida del régimen natural de las leyes civiles, en este caso de las competencias autonómicas, es ridículo, por no decir patético.

Senador Sánchez-Seco, hasta ahora he tenido siempre unas relaciones excelentes con usted y pienso seguir teniéndolas desde el rigor, la seriedad y el debate parlamentario. Por favor, recuperemos, sobre todo usted, en esta tribuna, ese tono, y espero que en el futuro no tengamos más situaciones como ésta.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Bru.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Sánchez Sánchez-Seco.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a ser muy breve. Creo que ya hemos debatido lo suficiente sobre algo que, evidentemente, lo merecía porque tiene una gran importancia.

En primer lugar, quiero responder al senador Cámara, que hablaba del consenso. Yo he dicho —lo reconoce el Consejo de Estado— que se ha dado amplia audiencia a entidades representativas y sectores afectados, asociaciones de clientes, usuarios y, evidentemente, se han recogido

las opiniones y los criterios de multitud de personas afectadas, dentro del sistema financiero. Además, fueron admitidas en el Congreso de los Diputados numerosas enmiendas, prácticamente de todos los grupos, lo mismo que en el Senado. De hecho, hemos visto cómo en el último minuto se han incluido algunas enmiendas más, y si alguna no se ha incorporado ha sido casi por falta de tiempo, lo cual demuestra que, efectivamente, como decía anteriormente, las Cámaras son vivas, activas, están en permanente debate y analizando todo lo que puede ser interesante, en este caso para el sistema financiero español. Es a esto lo que me refería cuando afirmaba que ha habido un amplio consenso y debate respecto a este proyecto de ley.

Todos hemos coincidido en que este proyecto es denso y complejo —lo ha confirmado el senador Albistur, y anteriormente ya lo habían recalcado los portavoces que han intervenido—, un proyecto de ley que afecta a un gran número de leyes y que probablemente dentro de poco habrá que seguir actualizando y modificando ante los grandes y continuos avances tecnológicos y de oferta de variedad de servicios financieros que surgen en en el día a día.

Pero eso es la forma. Desde nuestro punto de vista lo importante es el fondo, y yo creo que este proyecto de ley mejora de una forma importante el conjunto del ordenamiento jurídico del sistema financiero español al conseguir una mayor transparencia y protección para los clientes y usuarios de los servicios financieros.

La senadora Aroz me comentaba que ha presentado varias propuestas, y yo no lo dudo porque efectivamente ahí están las enmiendas, muchas de ellas coinciden prácticamente en su totalidad con las que se presentaron también en el Congreso de los Diputados.

Yo lo que he dicho, y repito, es que el gran argumento de su veto se basaba especialmente en formalismos y formulismos, en si se cambia o no muchas leyes o disposiciones o si se han introducido muchas o pocas enmiendas fuera de plazo o dentro de plazo en la comisión, en la ponencia, etcétera. Sin embargo, en su veto había poco contenido, y en ese sentido he recalcado que se ha basado más en la forma que en el fondo porque algunas de sus propuestas prácticamente se incluían con distintos matices en el contenido del proyecto de ley. Nosotros, por supuesto, leemos todas las enmiendas, tanto las que se incluyeron en el Congreso como las que se han presentado en el Senado.

Hablaba también de la limitación de los 70 años y siesto es una invasión de competencias de las comunidades autónomas. En el proyecto de ley queda claro que se establece la edad de 70 años, como se establecía en la LORCA hace 17 años también en el artículo 15, pero con la particularidad de que ahora se les deja a las comunidades autónomas plena capacidad para legislar y, dentro de la normativa de cada comunidad, poder modificar esta limitación, cosa que no se hacía en el año 1985 con la LORCA, y tuvo que dictarse una sentencia del Tribunal Constitucional que permitió esa modificación.

Respecto a lo que manifestaba el otro día el señor Maragall, yo he leído un periódico que no es sospechoso, concretamente, «El País», que se refería a la limitación de

establecer una edad de 77 años; usted me dice que no, que lo que decía era que fueran las cajas las que lo establecieran en sus propios estatutos. ¿Por qué se va a dejar a las cajas que libremente fijen la edad de sus consejeros? ¿Por qué se les va a dejar fijar la edad que puedan tener los consejeros de estas entidades y no se les deja que de forma autónoma fijen el tanto por ciento de representación de los distintos grupos? ¿Por qué no se les deja que fijen el número de miembros de las asambleas? Y así sucesivamente con una serie de cuestiones y criterios. Considero que si se establece una ley general, ésta es para todas las comunidades autónomas, para todas las entidades financieras y, en este caso, para todas las cajas de ahorro, y luego cada comunidad autónoma tendrá la capacidad de establecer aquello que crea conveniente. Lo que pasa es que el señor Maragall probablemente esté pensando en algún consejero, igual que hace muy poco tiempo, como digo, el secretario de Economía del Partido Socialista catalán entró en el Consejo de la tercera caja de España, Caja de Cataluña, y probablemente esté pensando en algún hecho concreto y en alguna persona en particular. Lo lógico es que la Comunidad Autónoma de Cataluña, gobierne quien gobierne, apruebe su ley y establezca lo que crea conveniente dentro de la legislación básica del Estado. Pero lo que está claro es que de entrada se ha acordado la edad de 77 años porque me imagino, como decía antes, que será el número de la suerte que tenga él, porque podía haber sido 85, 80 o 70, pero 77 parece un poco extraño, cuanto menos.

Efectivamente coincidimos con el senador Cambra en que en los objetivos perseguidos por el proyecto de ley estamos todos totalmente de acuerdo y además he incidido en algo que está muy claro, y es que todas las críticas de los grupos que han presentado los vetos se basan, como decía anteriormente, en formalismos más que en contenidos concretos.

El senador Bru comenzaba refiriéndose al amplio y pausado debate. Pues bien, como decía antes, está claro que ha habido un amplio y pausado debate, amplísimo y pausadísimo debate, diría yo. Es un proyecto de ley que lleva dos años gestándose, que pasó por el Consejo de Estado, que se dio audiencia a prácticamente todas las instituciones y sectores representativos, incluso a las organizaciones de clientes y usuarios, que pasó por el Congreso, donde se admitieron numerosas enmiendas, que ha pasado por el Senado, donde se han introducido también numerosas enmiendas y, como decía anteriormente, hasta hace unos minutos alguna que estaba consensuada con el propio Partido Socialista. Eso demuestra que ha sido amplio y pausado el debate.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Sánchez, le ruego que vaya terminando.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Sí, ya termino, señor Presidente.

Yo no he acumulado ningún tiempo. He visto que en este debate han acumulado tiempos todos los portavoces, y luego han seguido hablando lo que han querido.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señoría, a los portavoces que han solicitado acumular tiempo, que tienen tiempos superiores a los 30 minutos, se les ha concedido una acumulación de 5 minutos. Su señoría no ha pedido ningún tipo de acumulación y ha sobrepasado casi 2 minutos su turno de portavoces. Su señoría tendrá oportunidad de seguir hablando luego en relación con este proyecto de ley. (*Rumores.*)

Silencio, señorías, por favor.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Respecto al dictamen del Consejo de Estado, que lo calificaba de malévolo, ya le he citado numerosos párrafos ...

¿Me ha retirado la palabra, señor Presidente? (*Fuertes rumores.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Puede continuar, pero espere a que se calmen. No le he quitado la palabra, senador Sánchez Sánchez-Seco. (*Continúan los rumores.*)

Silencio, señorías.

Puede continuar, señoría.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Muchas gracias, señor Presidente.

Respecto al dictamen del Consejo de Estado, que lo calificaba de interpretación malévola, efectivamente, ya le he citado antes numerosos párrafos al respecto, y si quiere le puedo citar unos cuantos más, pero lo que está claro es que el Consejo de Estado se refería, con una valoración muy alta, a este proyecto, y de hecho lo informó favorablemente. Por tanto, no merece la pena que le vuelva a citar estos párrafos del Consejo de Estado.

En cuanto a que usted no se opone al 50 por ciento, no le he oído decir en la Cámara que usted esté a favor de la limitación de la representación del 50 por ciento. Me gustaría oírsele decir y que dijese clarísimamente que la quiere y que votaría a favor de la limitación del 50 por ciento de la representación de los órganos políticos. Me gustaría oírsele decir, porque demostraría ser coherente con el texto que elaboró su propio partido y que se encuentra en la página web.

Respecto del ridículo de ayer, creo que no fue el señor Montoro el que lo hizo, sino aquel que hizo un paripé de teatro y que luego fue incapaz de presentar ni una sola alternativa coherente. (*Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) Se limitó a manifestar que él decía que la economía española iba a crecer el año que viene el 2,5 por ciento. (*Continúan las protestas.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Sánchez Sánchez-Seco, le ruego que concluya ahora.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Ya termino, señor Presidente.

Respecto al señor Bono, con independencia de que aprobase una ley en las Cortes de Castilla-La Mancha,

dijo: Yo soy más que el señor Aznar; yo no lo prometo, yo apruebo una ley en las Cortes de Castilla-La Mancha para no estar más de ocho años. Y lleva veinte, y usted ha dicho que se va a volver a presentar. (*Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Aplausos en los escaños el Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Sánchez Sánchez-Seco, concluya, por favor, señoría.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Ésas son las promesas y las leyes que aprueba el señor Bono, que aprueba una ley para no estar más de ocho años, lleva veinte y anuncia usted que se va a volver a presentar. (*Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Aplausos prolongados en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Silencio, señorías, por favor.

Gracias, señoría.

Finalizado el debate, llamamos a votación.

Vamos a proceder a votar las propuestas de veto. En primer lugar, la número 1, formulada por los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 62; en contra, 135; abstenciones, siete.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.

Les recuerdo que la aprobación de una propuesta de veto exige la mayoría absoluta.

Señorías, llevamos más de cinco horas de sesión y, en consecuencia, necesito autorización de la Cámara para poder continuar. (*Pausa.*)

Muchas gracias, señorías. Entiende esta Presidencia que se le autoriza a continuar.

Acto seguido votamos la propuesta de veto número 2, presentada por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 61; en contra, 136; abstenciones, ocho.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.

Finalmente votamos la propuesta de veto número 3, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a favor, 61; en contra, 137; abstenciones, ocho.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.

Pasamos a continuación a la defensa de las enmiendas. En primer lugar, las enmiendas números 4 a 50 de los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto. (*Rumores.*)

Para su defensa tiene la palabra el senador Cámara, al que le ruego que espere treinta segundos. Por favor, señorías, si abandonan el hemiciclo háganlo en silencio para poder continuar el debate.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Intervengo solamente para, a efectos de votación, retirar las enmiendas números 9, 13, 19, 27, 32, 41, 49 y 50. Se trata de ocho enmiendas que quedan retiradas.

El resto las doy por defendidas.

Gracias. (*Aplausos.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Cámara.

Por el Grupo Parlamentario Mixto corresponde la defensa de las enmiendas números 1 a 3, originalmente formuladas por la senadora De Boneta y Piedra, y supongo que también las enmiendas números 66 a 73, formuladas inicialmente por el senador Quintana.

Tiene la palabra la senadora De Boneta.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.

Doy por defendidas las enmiendas formuladas por mi compañero de Grupo, el senador Quintana.

A la vez indico, a efectos de la defensa de las enmiendas que he presentado en nombre de Eusko Alkartasuna, que pretendían mejorar de alguna manera la ley con la introducción de una figura de defensa de los beneficiarios de planes de pensiones y en relación con la necesaria defensa del cliente de servicios bancarios y cómo debiera constituirse.

Doy por defendidas estas cuestiones porque ya se ha debatido suficientemente la ley, pero no quiero acabar sin decir que el pequeño número de enmiendas que se mantienen vivas por parte de Eusko Alkartasuna no responde en absoluto a la conformidad con el recorrido y el procedimiento que se ha llevado a cabo en la aprobación de esta ley, porque si hubiéramos conocido las enmiendas que la mayoría parlamentaria introdujo durante el debate quizá hubiéramos tenido que plantear otro tipo de cuestiones. No creo que con estas prácticas debamos llegar a una presentación de veto por si acaso, porque mal llevaríamos las cosas si para defendernos de estas actuaciones procedimentales tuviéramos que plantear, por si acaso, ese veto.

Nada más. Quedan defendidas estas enmiendas con estas palabras.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora De Boneta.

Pasamos a las enmiendas números 51 a 56, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.

La senadora Morales tiene la palabra.

La señora MORALES RODRÍGUEZ: Gracias, Presidente. Intervendré brevemente.

Las enmiendas números 51 y 52 hacen referencia a las cooperativas. En la enmienda número 51 pretendemos que cuando las cooperativas necesiten recurrir a la aportación de capitales tengan todas las garantías, ya que no es lo mismo tener garantías patrimoniales que estar sin ellas para recurrir a créditos hipotecarios. Entendemos que esto reforzaría el papel de las cooperativas dentro de un esquema de financiación.

La enmienda número 52 trata de la modificación de la Ley 27/1999, de Cooperativas, que tienen dificultades para llegar a créditos hipotecarios o a cualquier otro instrumento financiero. Se trata de dar más agilidad y evitar las dificultades con que se pudieran encontrar las cooperativas de cualquier grado para llegar a disponer de estos recursos financieros.

La número 53 propone establecer el carácter representativo del sector asegurador que siempre tuvo el Consorcio de Compensación de Seguros desde su creación por la Ley de 16 de diciembre de 1954.

En cuanto a la enmienda número 54, relativa al nombramiento de los comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros, entendemos que tienen que ser oídas las organizaciones empresariales representativas de los sectores financieros respectivos buscando un equilibrio que consideramos necesario.

La número 55, de modificación, pretende tipificar con precisión la infracción grave descrita en el artículo 35 de acuerdo con lo recomendado en su dictamen por el Consejo de Estado.

Por último, en la enmienda número 56, también de modificación, planteamos que es conveniente que se precisen aquellos supuestos, siempre excepcionales, en que la autoridad de supervisión puede acceder a un documento, en principio secreto, como son los papeles de trabajo del auditor. No puede olvidarse que el auditor está sujeto a un deber de secreto profesional con su cliente, por lo que el levantamiento de tal deber de secreto sólo puede justificarse en aquellos supuestos en que estén en peligro la viabilidad o la solvencia de una entidad financiera.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Morales.

Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos números 57 a 65.

Para su defensa tiene la palabra el senador Albistur.

El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente. Nuestro grupo ha presentado ocho enmiendas que mantiene vivas, y que precisamente están justificadas en el Título I del Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Voy a leerlo, porque aquí muchos hacen referencia a él pero pocos lo conocen, porque en los apartados 26, 28 y 29 de su artículo 10 se cita lo siguiente: La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencias exclusivas en las siguientes materias. Apartado 26: Instituciones de crédito corporativo público y territorial y cajas de ahorro

en el marco de las bases que sobre ordenación del crédito y la banca dicte el Estado, y de la política monetaria en general. Apartado 28: Defensa del consumidor y del usuario en los términos del apartado anterior, que se refiere precisamente a la colaboración con el Estado. Apartado 29: El establecimiento y regulación de bolsas de comercio y demás centros de contratación de mercancías y de valores conforme a la legislación mercantil.

Si avanzamos, en el apartado 2 del artículo 11, se dice lo siguiente: Es también competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución, dentro de su territorio, de las bases en los términos que en las mismas se señalen en las siguientes materias: A) ordenación del crédito, banca y seguros.

Éste es el motivo fundamental de nuestras ocho enmiendas, en las que ya desde la número 57, con la participación de los nuevos apartados para competencias del Mercado de Valores, se propicia una mayor transparencia de los mercados y de la actividad que en los mismos se desarrolla gracias a la mayor involucración de todos los poderes públicos de manera coordinada. En coherencia con la creación y régimen de funcionamiento de los sistemas organizados de negociación referentes al sistema financiero, se plantea precisamente que en el caso de los mercados de ámbito autonómico, esto sea realizado por la comunidad autónoma con competencias en la materia, y que se dictarán por ella las normas reglamentarias a que se refiere este precepto, todo ello en coherencia con el respeto a las competencias asumidas por algunas comunidades autónomas en sus estatutos, como el caso del País Vasco que he leído al principio de mi intervención en materias de centros de contratación de valores.

Podemos hablar del dinero electrónico y del artículo 21, al que formulamos la enmienda número 59. Se trata, fundamentalmente, de respetar las competencias asumidas por las comunidades autónomas en sus estatutos de autonomía, teniendo en cuenta —y a esto me he referido en la intervención correspondiente al turno de portavoces en el debate de los vetos— que las entidades de dinero electrónico son entidades de crédito y, por lo tanto, que el Tribunal Constitucional ha dejado claro en las sentencias 96/1996 y 235/1999, entre otras, que el legislador estatal debe acomodar la regulación del ejercicio de las competencias de ejecución como las aquí implicadas a la realidad autonómica vigente; cosa a la que no se presta atención ni parece que haya interés en hacerlo. En el caso de la autorización de creación, debe contemplarse el punto de conexión del domicilio de la entidad a efectos, precisamente, de que la competencia resida en la comunidad autónoma correspondiente. Y en cuanto a las facultades de inspección y control —y estamos hablando del dinero electrónico—, se regula el concurso de la intervención autonómica, algo que contribuirá a hacer más transparente y plural la intervención ordinaria del Banco de España sin merma alguna de sus funciones; es más, potenciándolas.

Cuando hablamos en la enmienda 60, referente al artículo 22, de la creación de órganos para la defensa del cliente de servicios bancarios, del inversor, del asegurado y del partícipe en planes de pensiones, estamos hablando

también de tener en cuenta el domicilio en el ámbito territorial autonómico respectivo. Bajo cualquiera de las ópticas posibles de interpretación de las normas constitucionales y estatutarias, las funciones que la ley asigna a los llamados comisionados corresponden a las comunidades autónomas, bien desde los títulos competenciales relativos a la protección de los consumidores y usuarios —cita que he planteado, precisamente, en el apartado 28 del artículo 10 del Estatuto de Autonomía—, bien desde los títulos competenciales relativos a la ejecución de la normativa estatal en materia de crédito y banca, que corresponde precisamente al apartado 2 del artículo 11 del Estatuto de Autonomía. Por otra parte, puede resultar perfectamente compatible la presencia concurrente de múltiples órganos que realicen estas mismas funciones, pues ello —como he dicho anteriormente— redundará en una mayor transparencia del mercado.

Si nos referimos al régimen de los establecimientos de cambio de moneda, o lo que es lo mismo a la enmienda número 62, formulada al artículo 36 del Capítulo V, también estamos hablando del ámbito competencial, porque, en coherencia y respeto a las competencias autonómicas, se plantea el diseño de un esquema de intervención pública plenamente factible y que no impide, sino que enriquece, el principio de unidad de acción del Banco de España, que es la autoridad en esta materia.

Continúo con la enmienda número 63, formulada al artículo 41, Capítulo V, Sección 3ª, que se refiere a la modificación del régimen jurídico de las instituciones de inversión colectiva. A este respecto también planteamos que debe posibilitarse...

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Albistur, le ruego concluya.

El señor ALBISTUR MARIN: Termino en seguida, señor Presidente.

Debe posibilitarse una intervención autonómica que permita una mayor pluralidad y transparencia y que, sobre todo, incorpore la mayor garantía que supone enriquecer el control público sobre los nuevos agentes financieros con la aportación de las administraciones autonómicas.

Lo mismo podemos decir de las enmiendas números 64 y 65. En coherencia con la Constitución y los estatutos de autonomía, las administraciones autonómicas competentes en la materia deben participar en el diseño, desarrollo y aplicación del entramado público encargado de los procedimientos de supervisión del sistema financiero. Todo ello, precisamente, por lo que ha sido marcado por el Tribunal Constitucional, que informa el ejercicio de potestades públicas en la materia financiera con una consecuencia de exclusión y monopolio de determinados poderes públicos frente a otros, algo ajeno o contrario a las normas y principios superiores, como son la Constitución y el Estatuto, que basamentan todo el sistema político.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Albistur.

Las enmiendas del Grupo Entesa están todas defendidas y le queda el turno de portavoces.

Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*, números 198 a 204 y 206 a 218. Para su defensa, tiene la palabra el senador Sixte Cambra.

El señor CAMBRA I SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, nuestro grupo presentó originariamente 21 enmiendas; el voto particular para este Pleno contenía 20; y a efectos de cuadrar con la Mesa, la enmienda número 201 soporta una transacción, al igual que la número 213; asimismo, anuncio la retirada de la enmienda número 207. Por tanto, quedan vivas 17 enmiendas que defenderé muy brevemente y que se agrupan en dos partes más una serie de nuevas iniciativas que hemos planteado en este trámite del Senado.

La primera parte de las enmiendas, las números 198, 199, 200, 203, 206, 208, 209, 210 y 211, van todas dirigidas a mejorar el tratamiento que en el texto del proyecto de ley se da a las competencias autonómicas. Estamos hablando fundamentalmente de sensibilidad por las competencias autonómicas en su redacción, no estamos hablando de situaciones que generan una pérdida de competencias ya existentes porque ello significaría por nuestra parte la imposibilidad de votar el proyecto de ley, pero sí entendemos que en distintas medidas que se contemplan en el proyecto de ley y que afectan a distintos textos legales no se tiene el trato que a nosotros nos gustaría respecto a las competencias que tienen las comunidades autónomas en muchos aspectos incluidos en la regulación del sistema financiero.

Otra cuestión que contemplan nuestras enmiendas, y que ha sido resuelta parcialmente a través de la transacción a la que hemos llegado sobre la enmienda número 213, hace referencia al tratamiento de los institutos oficiales de crédito de las comunidades autónomas. Concretamente mantenemos vivas dos enmiendas, las números 202 y 214. La enmienda 202, de una forma más amplia y genérica que lo contemplado en la transacción de la 213, pretende equiparar las funciones de estos institutos de crédito oficial de las comunidades autónomas a las funciones que tiene el Instituto de Crédito Oficial. Por su parte, la enmienda número 214 tiene exactamente el mismo objetivo pero de forma concreta en lo que hace referencia al tratamiento fiscal que tienen estas instituciones.

La enmienda número 204 está basada en una propuesta que ya hizo nuestro grupo en el Congreso de los Diputados, concretamente en la comisión de investigación que se creó con motivo del caso Gescartera. En ella, y de acuerdo con estos planteamientos, se recoge la necesidad de establecer que la propuesta de nombramiento del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores se realice previa comparecencia del Gobierno ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados para informar sobre el candidato propuesto. Es importante que se cumpla el acuerdo que se tomó en esta comisión, pues en esta modificación que se

está haciendo del reglamento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores no se ha tenido en cuenta.

Por último, me quedan por defender cuatro enmiendas respecto de las que nuestro grupo está proponiendo nuevas iniciativas que no se incluían en las enmiendas que presentamos en el Congreso de los Diputados. En concreto, la enmienda número 212 tiene por objeto clarificar en mayor medida la regulación ya existente de la instalación y el funcionamiento de los carteles informativos de precios de los carburantes en autopistas y carreteras estatales. Se trata de una cuestión que deberá regularse y, aunque es posible que el Grupo Parlamentario Popular me responda que no es éste el proyecto de ley donde deben contemplarse estas medidas, quizá en la ley de acompañamiento que tramitaremos próximamente en esta Cámara deberíamos regular y modificar este asunto que está generando muchos problemas al sector afectado.

La enmienda número 216 tiene una trascendencia importante para nuestro grupo parlamentario. Esperamos que si su objetivo no se resuelve con la tramitación de este proyecto de ley —como es probable— se podrá hacer próximamente en otro proyecto de ley, concretamente a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. Con ella se pretende garantizar a las comunidades autónomas la suficiencia necesaria para afrontar sus obligaciones, teniendo en cuenta que la autorización de la figura de los anticipos a cuenta no permite disponer de la totalidad de la recaudación líquida prevista. Evidentemente, ésta es una situación que con la entrada en vigor de un nuevo sistema de financiación autonómica se ha agravado para las comunidades autónomas.

La enmienda número 217 pretende permitir la exteriorización de los premios de jubilación, ya que consideramos que esta obligación puede causar importantes problemas a las pequeñas y medianas empresas, siempre y cuando se trate de incentivos de naturaleza indemnizatoria.

El senador Albistur ha citado la enmienda número 218 en su posicionamiento en el debate a la totalidad; enmienda que consideramos muy coherente por las características ya citadas de ley horizontal y de modificación de otras leyes que hace este proyecto de ley, en concreto me refiero a las modificaciones que se están introduciendo en la Ley de Auditoría de Cuentas. Queremos que se introduzca una disposición final en la cual se diga que el Gobierno presentará a las Cortes un proyecto de ley de reforma de la Ley 14/1988, de 12 de julio, de Auditorías de Cuentas, antes de finalizar el ejercicio del próximo año 2003, lo que creemos necesario para dar mayor seguridad y garantías a un sector cada vez más sensible como es el sector de la auditoría de cuentas.

Nada más. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Cambra.

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista están defendidas. En consecuencia, procede ahora el turno en contra.

Tiene la palabra el senador Sánchez Sánchez-Seco.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, hemos tenido un debate muy denso como es la ley y quizá no procede extenderme mucho.

Se han introducido en ponencia y en comisión distintas enmiendas de nuestro grupo parlamentario que han enriquecido de forma importante el proyecto de ley y han quedado vivas una serie de enmiendas que son las que hoy se debaten en esta Cámara.

Respecto a las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios a este proyecto de ley debe significarse que la gran mayoría ya fueron presentadas y debatidas en el trámite parlamentario del Congreso de los Diputados y allí, como he dicho anteriormente, fueron incorporadas muchas enmiendas de los diferentes grupos, aunque otras evidentemente quedaron descolgadas por distintos motivos, que se presentan de nuevo al Senado, pero la motivación y la argumentación que nuestro grupo daba para no admitirse sigue en gran parte vigente.

Entre el grupo de enmiendas ya analizadas y debatidas en el Congreso están las que ha presentado la senadora De Boneta y Piedra, las números 1 a 3, y que modifican algunos aspectos referidos a los comisionados que consideramos que se encuentran perfectamente definidos en el proyecto de ley.

Tampoco presenta ninguna enmienda nueva respecto al trámite del Congreso de los Diputados el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En la Cámara Baja presentaron 12 enmiendas, de las que fueron aceptadas e incorporadas 3, y ahora vuelven a presentarse en esta Cámara las 9 restantes, que en su conjunto se refieren a tratar de incluir en el proyecto de ley algunas especificidades competenciales de las comunidades autónomas, algunas respecto a las facultades de suspensión e inspección de entidades de inversión que tengan domicilio en su territorio; posibilidad de establecer atribuciones para autorizar la creación de entidades de dinero electrónico; órganos de defensa del cliente de servicios financieros; competencias sancionadoras, etcétera. Realmente estas competencias son exclusivas, en unos casos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o del Estado, y en otros las comunidades autónomas ya tiene competencias en la materia, como es el caso, por ejemplo, del defensor del cliente, por lo que no parece necesario que la ley los habilite para crear órganos de protección similares a los regulados en este proyecto de ley.

Igualmente, Coalición Canaria presenta seis enmiendas, que ya fueron presentadas también en el Congreso, y que se refieren a puntualizaciones y aspectos siempre muy positivos que, de hecho, supuso que ya en la Cámara Baja se incorporaran al proyecto de ley algunas de las cuestiones planteadas por este grupo. Las seis enmiendas presentadas se refieren a cuestiones tan interesantes como la posible creación de los bonos cooperativos, que siendo positivo necesitaría una regulación más completa y clara que la que a través de esta ley se pudiese establecer. Por otra parte, se propone que la mitad de los vocales del Consorcio de Compensación de Seguros sean en representación de la Administración y el resto de las entidades asegurado-

ras, pero tanto la propia naturaleza jurídica de dicho órgano como los fines que le atribuye su régimen patrimonial, le otorgan una independencia en su actuación que no hace necesaria la previsión legal de una presencia predefinida en sus consejos de administración de las entidades aseguradoras, independientemente de que en la práctica puedan contar con la representación del sector que sea pertinente.

Se ha presentado también un conjunto de enmiendas, concretamente ocho, números 66 a 73 inclusive, del Bloque Nacionalista Galego, cuyo portavoz no se encuentra aquí, que son nuevas y que se refieren a la supresión de todo lo que afecta a la modificación y reforma de la LORCA y a la regulación de las cuotas participativas. Creo que ya ha habido un intenso debate a este respecto y ha quedado clara la posición de nuestro grupo.

Por otra parte, Izquierda Unida presentó 47 enmiendas al proyecto de ley, de las cuales doce han sido nuevas respecto al trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, algunas se han retirado en ponencia y en comisión, y otras afectan a cuestiones ya modificadas en la ponencia como, por ejemplo, la número 12 relativa al endurecimiento de los requisitos de representación de los impositores. En fin, un conjunto de enmiendas para las que ha quedado bastante clara nuestra posición en el debate del veto.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió presenta un conjunto de enmiendas que van de la número 198 a la 218, de las cuales dieciséis ya se presentaron en el Congreso y cinco son nuevas. Como he dicho en numerosas ocasiones y constatamos y corroboramos habitualmente en cada debate, son propuestas siempre muy interesantes y, de hecho, en el Congreso ya se incorporaron varias de ellas. Hoy precisamente se han incluido dos nuevas colgadas de las enmiendas números 213 y 201, que afectan a la capacidad de las comunidades autónomas para poder incluir nuevos grupos de representación en las Cajas de Ahorro y, por otra parte, a la posibilidad de que se regule por las comunidades autónomas todo lo referente al arrendamiento financiero de las instituciones por ellas creadas.

Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios de la Entesa y Socialista, que prácticamente coinciden en su totalidad con las presentadas en el Congreso de los Diputados, solamente existen algunas pequeñas variaciones en cuanto al concepto y denominación de las cuotas participativas, que realmente tampoco tiene mucha trascendencia al haberse modificado de forma importante a través de la enmienda 234 que presentó el Grupo Parlamentario Popular y se incluyó en ponencia. Además, respecto a estas cuotas creo que ya hemos debatido suficiente en los vetos.

En cuanto a las nuevas enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, números 162 a 168, todas ellas se refieren a la posibilidad de habilitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que regule, desarrolle o establezca sus propias obligaciones, cuando con carácter general este tipo de actuaciones se han venido realizando desde el Ministerio de Economía y su modificación supondría

una seria limitación a la propia capacidad normativa del Ministerio.

En relación con la enmienda número 163, que se refiere al Código Olivencia, debe considerarse que está siendo revisado en la actualidad, por lo que quizá sería más conveniente esperar a su actualización definitiva antes de iniciar cualquier reforma legislativa, sabiendo que esta ley tendrá que ir actualizándose y modificándose constantemente.

Se presenta también un conjunto de enmiendas relativas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, algunas de ellas sorprendentes, que han sido rechazadas por el propio Instituto en sus informes. Por otro lado, las enmiendas correspondientes a la LORCA, la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro, han sido ampliamente debatidas, por lo que incidir en ellas supondría repetirnos innecesariamente.

Por tanto, desde una perspectiva nacional es nuestra responsabilidad tratar de establecer el equilibrio de la representación —al que me referí en el debate de los vetos— en cuanto a los impositores y empleados y a los órganos políticos se refiere. Por ello, nuestro grupo está totalmente de acuerdo con el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno para recuperar ese equilibrio, que se ha roto en muchos casos y en muchas comunidades autónomas a través del desarrollo de sus leyes autonómicas.

No me voy a extender más, señorías. Consideramos que este proyecto de ley que nos llegó del Congreso se ha mejorado amplia y profundamente en este trámite parlamentario, habiéndose conseguido definir una ley que, como hemos dicho reiteradamente, es compleja, árida, densa, pero que mejora de forma importante el conjunto del ordenamiento jurídico del sistema financiero.

Independientemente de la vehemencia que se ponga en los debates de los distintos proyectos y propuestas que presentemos, la relación siempre tiene que ser positiva, por lo que estoy seguro de que nos seguirá uniendo una muy buena relación con el senador Bru, a pesar de que seguro seguiremos manteniendo muchísimos debates en esta Cámara, tanto por parte del Grupo Socialista como del Grupo Popular.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Sánchez Sánchez-Seco.

Abrimos turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Pausa.)

Por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria tiene la palabra la senadora Morales.

La señora MORALES RODRÍGUEZ: Gracias, señor Presidente.

Aprovecho este turno de portavoces para mostrar el apoyo del Grupo de Senadores de Coalición Canaria a este proyecto de ley.

Me gustaría empezar esta intervención resaltando aquello en lo que todos los grupos coincidimos, como es reconocer que nuestro sistema financiero tiene una serie de deficiencias —puestas de manifiesto en su forma más clara en los últimos tiempos con el caso de Gescartera— que de-

bemos enmendar por el bien de su funcionamiento y por salud democrática. Y en ese sentido tenemos una responsabilidad desde las instituciones a las que representamos.

Desde Coalición Canaria valoramos positivamente esta iniciativa legislativa —independientemente de las formas, que ya se han criticado por parte de diversos grupos—, porque el contenido de este proyecto de ley que trae el Gobierno a esta Cámara supone un avance importante y significativo para la mejora del sistema financiero.

Me gustaría resaltar la necesidad de que nos adaptemos a la dinámica de la economía de mercado, en constante evolución, con innovaciones importantes en las fórmulas de gestión, de transferencia de capital, electrónicas, etcétera, innovaciones que hacen imprescindible realizar constantes cambios a través de leyes de tipo horizontal dado el carácter del sistema financiero, en el que confluyen muchos factores interrelacionados entre sí. Por otro lado, es necesario que nos adaptemos a las directrices comunitarias, por tanto, adaptar nuestra legislación, garantizando que a todos los usuarios, personas físicas o jurídicas, se les aplique la misma legislación en todo el ámbito de la Unión Europea.

Así pues, valoramos positivamente y de forma global la mayoría de los aspectos de este proyecto de ley al considerar que supondrá un avance importante, favoreciendo la liberalización y las formas de control de los sistemas financieros. Por ejemplo, el proyecto de ley permitirá actualizar el marco jurídico de la actividad financiera favoreciendo la competitividad de nuestro sistema financiero en el contexto de Europa y el mundo.

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria comparte el hecho de que, por ejemplo, la integración de los sistemas de compensación y la liquidación de valores es un pilar básico para el correcto funcionamiento de los mercados de valores que evitará tener pérdidas en el sistema financiero español que le restarán eficacia, eficiencia y competitividad respecto de otros competidores financieros. La creación de las llamadas células territoriales, que permitirán un abaratamiento en la financiación del sector público, o las denominadas entidades de contrapartida central, que permitirán intercambios de información en el ámbito de los seguros, valores e instituciones de inversión colectiva, son aspectos importantes que mejoran la competitividad del sistema financiero español.

Otro aspecto muy importante del proyecto de ley es dotar de herramientas concretas para la protección de los clientes de los sistemas financieros. Compartimos la necesidad de establecer la potenciación de las entidades supervisoras, como es el caso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de todas aquellas medidas tendentes a poner fin a la información privilegiada, a la manipulación de datos, y otros hechos relevantes desde el punto de vista de la prevención y también de la sanción.

Por último, cabe resaltar como positivo la creación de dos nuevos órganos administrativos, el Comisionado y el Defensor del Cliente. Coalición Canaria hace una valoración positiva del proyecto de ley de medidas de reforma del sistema financiero. Consideramos que es importante y urgente que nos doten de una serie de instrumentos que

permitan, por un lado, la garantía, el control y la fiabilidad del sistema financiero, por otro, potenciar su productividad y competitividad, y por último, garantizar la protección de los inversores. Lamentamos que no se incorporen algunas de las enmiendas que han presentado diversos grupos y que entendemos habrían mejorado de forma significativa el proyecto de ley, pero por las anteriores razones el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria votará a favor del proyecto de ley de reforma del sistema financiero.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Morales.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Albistur.

El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.

No me parece de recibo, e incluso lamentablemente debo calificarlo hasta de frívolo, que se nos responda a las enmiendas presentadas y a su defensa con la frase «no parece necesario». ¿Pero quién es el atrevido, el osado que fundamenta toda su contestación en este argumento? ¿Quién? ¿Desde qué Ministerio o desde qué cátedra se ha dicho que no parece necesario incorporar aquello que la ley establece, y sobre lo que la Constitución y el Estatuto reconocen la autoridad de una comunidad autónoma? Considero que el asunto no es que parezca o no necesario, sino que se trata de que verdaderamente hay que cumplir la legalidad, y esa afirmación de que «no parece necesario» no es legal, el hecho de que no se incorporen verdaderas competencias de las comunidades autónomas no es legal, y lo que sí es necesario es el cumplimiento de la ley, sancionada, además, por sentencias del Tribunal Constitucional en materia de defensa del consumidor, de Cajas de Ahorro y de ordenación del crédito, banca y seguros.

Hay algo que nos preocupa de verdad, y lo digo muy seriamente, y es el que no sólo ustedes no aplican las estipulaciones de la Constitución y del Estatuto sancionadas a su vez por el Tribunal Constitucional, sino que, además, no les preocupa encima el hecho de que éstas no se cumplan. Parece que de alguna forma no se exigen responsabilidades a nadie, y ello es verdaderamente preocupante.

No estoy de acuerdo con que el proyecto haya sido mejorado, porque ciertamente este proyecto solamente se ha debatido aquí con las enmiendas presentadas por ustedes. No han hecho sino admitir alguna enmienda transaccionada con el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y en todo caso, las enmiendas que han sido incorporadas durante el debate en Pleno lo han sido gracias a que la oposición ha demostrado un talante flexible y una aceptación de las transaccionales, pues si no hubiéramos aportado nuestra firma hoy no se admitirían las mismas aquí.

Pondré únicamente un ejemplo, el de las responsabilidades de los auditores. Nuestro grupo ha firmado esa enmienda porque fundamentalmente el texto establece finalmente un equilibrio entre los auditores pertenecientes a sociedades y aquéllos individuales. Existe un equilibrio, las responsabili-

dades se reparten, en el caso de las sociedades, entre el auditor y la sociedad, con lo cual quedan equiparados en el mercado y no existe diferenciación y discriminación con los auditores individuales no amparados por una sociedad.

No es cierto que realmente el texto ha sido mejorado sólo con sus enmiendas, sino que se ha mejorado precisamente porque la oposición ha tenido, como digo, flexibilidad para aceptar y firmar unas enmiendas que verdaderamente contribuían a introducir algunos cambios sustanciales importantes en el texto.

Ustedes no son los únicos inteligentes, señores del Partido Popular, ni sólo ustedes tienen la razón. Aquí quedan muchas propuestas en las numerosas enmiendas que no van a ser aceptadas, que son inteligentes y que contribuían a mejorar este texto. Esto es lo lamentable de este hecho, porque el texto que ahora vamos a aprobar es, como hemos dicho todos los grupos, muy diferente al que entró en el Congreso. Debíamos haber tenido un debate amplio, un debate sustantivo, un debate verdaderamente conciliador para llegar a acuerdos, cosa que no se ha producido. Eso es lo lamentable de esta ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Albistur.

¿Grupo Parlamentario Entesa de Progrés? (*Pausa.*) No utiliza el turno. Gracias.

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (*Pausa.*) Tampoco utiliza el turno. Gracias.

¿Grupo Parlamentario Socialista? (*Pausa.*) Tampoco. Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Sánchez Sánchez-Seco tiene la palabra.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Gracias.

Para terminar, quiero agradecer el apoyo de Coalición Canaria. Es reiterativo volver a incidir en la complejidad y la densidad de la ley, pero con la aportación de Coalición Canaria se ha contribuido a mejorar —repito— este proyecto de ley que afecta a muchas leyes, a muchos reales decretos, pero que va a mejorar el texto —y se lo recalco al senador Albistur—, yo pienso que se mejora y con alguna enmienda también incorporada en el Congreso de los Diputados de su propio grupo.

El debate de las enmiendas ha sido un poco más sosegado. Ya he dicho, y no estaba antes el senador Bru, que la relación debe estar por encima del debate que haya aquí en esta Cámara o en cualquier otra y estoy seguro de que va a ser así, independientemente de lo encendido que sea.

Yo le quiero decir al senador Albistur que es mejor no hablar de incumplimientos de la ley, porque si hablásemos de incumplimientos de la ley todos tendríamos que mirar para el Norte de España y nos fijaríamos en algún Gobierno concretamente y, por tanto, es mejor no hablar de incumplimientos, de lo que hay que hablar es de leyes que van a mejorar el sistema financiero español y eso es lo que estamos aprobando hoy y sin duda con esto vamos a contribuir a que el sistema financiero español esté mucho más

ordenado, sea mucho mejor para todos los clientes y usuarios y más transparente en sus inversiones.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Sánchez Sánchez-Seco.

Finalizado el debate, llamamos a votación.

Procedemos a votar el proyecto de ley de medidas de reforma del sistema financiero. En primer lugar, las enmiendas de los senadores Cámara y Cabrero. Enmienda número 12.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, diez; en contra, 184; abstenciones, diez.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.

Pasamos a votar las enmiendas números 14, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 37, 46 y 48.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, nueve; en contra, 127; abstenciones, 68.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.

Votamos a continuación el resto de las enmiendas de los senadores Cámara y Cabrero.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 67; en contra, 126; abstenciones, diez.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.

Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, formuladas por la senadora De Boneta, enmiendas números 1 a 3.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, nueve; en contra, 124; abstenciones, 70.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, formuladas por el senador Quintana, enmiendas números 66 a 73.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 69; en contra, 125; abstenciones, diez.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.

Pasamos a votar las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, en tres bloques. En primer lugar, las enmiendas números 57, 59 a 63 y 65.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 78; en contra, 125; abstenciones, una.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa) Quedan rechazadas.

Votamos ahora la enmienda número 64, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 79; en contra, 124.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.

Votamos ahora el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 79; en contra, 125.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés números 74 a 92, 94 a 123 y 125 a 129, en un solo bloque.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 69; en contra, 125; abstenciones, 10.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas correspondientes al Grupo de Senadores de Coalición Canaria, las números 51 a 56.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a favor, 12; en contra, 122; abstenciones, 66.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.

Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

En primer lugar, votamos el bloque de enmiendas números 198 a 200, 202 a 204, 208 a 210, 216 y 218.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 79; en contra, 125.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 206, 211, 212 y 214. Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 15; en contra, 185; abstenciones, cuatro.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.

Por último, votamos las enmiendas números 215 y 217, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 15; en contra, 128; abstenciones, 61.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.

A continuación, pasamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.

En un primer bloque votamos las enmiendas números 130 a 197.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 69; en contra, 125; abstenciones, 10.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.

Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que solicita la vuelta al texto del Congreso en relación con la disposición transitoria undécima y en lo modificado por las enmiendas números 225, 228, 229, 251, 253, 264 y 279, del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 68; en contra, 125; abstenciones, 11.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.

A continuación, señorías, votamos las propuestas de modificación del dictamen.

En primer lugar, la propuesta con número de registro 42.528, relativa al artículo 11 de la Ley de Auditoría de Cuentas, que está firmada por todos los portavoces de todos los grupos parlamentarios.

¿Es preciso que se dé lectura a la misma? *(Denegaciones.)*

Muchas gracias, señorías.

¿Hay asentimiento en esta propuesta de modificación? *(Pausa.)*

Queda aprobada.

A continuación, pasamos a la propuesta de modificación del dictamen, con número de registro 42.529, sobre la enmienda número 201, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Sólo tiene cuatro firmas. ¿Necesitan sus señorías que le demos lectura? *(Denegaciones.)*

Muchas gracias, señorías.

¿Hay que someter a votación esta propuesta de modificación? *(Pausa.)*

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 203; abstenciones, una.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobada.

La siguiente propuesta de modificación, con número de registro 42.530, sobre la enmienda número 213, también del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Está firmada por cuatro portavoces. ¿Necesitan sus señorías que demos lectura a la misma? *(Denegaciones.)*

Muchas gracias, señorías.

Pasamos a su votación.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 200; en contra, uno; abstenciones, dos.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobada.

A continuación pasamos a la votación del dictamen en un solo bloque.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 135; en contra, 69.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

— DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY DE CREACIÓN DEL COLEGIO DE PRÁCTICOS DE PUERTO (S. 624/000006) (C. D. 122/000190).

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pasamos a la siguiente proposición de ley de la Comisión de Infraes-

estructuras en relación con la proposición de ley de creación del Colegio de Prácticos de Puerto.

No hay presentación del dictamen, dado que la Comisión no ha designado a ningún senador.

¿Desea algún grupo participar en el debate a la totalidad en turno en contra, a favor o de portavoces? (*Pausa.*)

Pasamos a la defensa de las enmiendas.

En primer lugar, el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a las enmiendas números 1 y 2.

Tiene la palabra el senador Ayllón para su defensa.

El señor AYLLÓN OLIVA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista mantiene una diferencia respecto a este proyecto de ley, que se sustancia en dos enmiendas. Mientras en el dictamen se dice que para ejercer libremente la profesión será requisito imprescindible estar incorporado al Colegio, nosotros mantenemos que en ningún caso lo será. Es la única diferencia y la que vamos a mantener y a votar con nuestras enmiendas.

Me voy a referir muy brevemente a la Constitución Española. En ella no se hace referencia ninguna a la obligatoriedad de pertenecer a un colegio profesional. Por parte del Grupo Parlamentario Popular se argumenta que un colegio profesional es una corporación de Derecho público, que tutela intereses de naturaleza pública y que, por tanto, necesita de la colegiación obligatoria. Serían, pues, los intereses de los destinatarios, los buques, las personas y los puertos, los que habría que garantizar, y ésa sería la razón de la obligatoriedad. La razón es muy poderosa, sin duda es esencial la seguridad de los bienes y de las personas, pero, señorías, la función del practicaje es de titularidad pública, y por eso está intervenida en favor de la administración portuaria, y por eso precisamente nosotros mantenemos que el servicio que desempeñan los prácticos de puertos ya está plenamente garantizado por la administración marítima, garantizado por la Ley 27/1992 y la 62/1997 de Prácticos de Puertos que la modifica, que adjudican en exclusiva a la autoridad portuaria tan importante misión.

En este marco, por tanto, opinamos que la colegiación obligatoria no añade nada y, en consecuencia y en este caso concreto, a nosotros nos parece que la colegiación obligatoria es innecesaria y, por lo tanto, sobra su referencia en el texto.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Ayllón.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor Presidente.

Con su permiso y al inicio de mi intervención en la proposición de ley de creación del colegio oficial de prácticos de puerto, quisiera saludar a don Emilio Martín-Bauzá, Presidente de la Federación Española que agrupa a las corporaciones de prácticos y que desde la tribuna de invitados

ha querido acompañarnos en este trámite tan importante en la íntima historia del practicaje español. Bienvenido a la Cámara.

Señorías, más de dos décadas después de los primeros pasos para la creación de un colegio oficial, los prácticos portuarios españoles ven culminada una de sus grandes aspiraciones. Estos capitanes de la marina mercante son garantes por su especialización y por sus grandes conocimientos de la seguridad en las infraestructuras de nuestros puertos y son una ayuda en la navegación que se realiza también en las costas, canales, ríos, rías y en cualquier lugar de tránsito o arribo de buques. Su labor se remonta muchísimos años atrás, vinculada a la creación de los puertos, con unas ordenanzas que datan de la primera mitad del siglo XVIII, en concreto 1737, y con unas corporaciones que nacen con el siglo XX.

Hoy el práctico del puerto desempeña un servicio crucial desde los aspectos de la seguridad, de la defensa del medio ambiente y también del económico, toda vez que interviene operaciones marítimas que facilitan la entrada, salida y movimientos interiores de buques, disminuyendo los costes. El práctico es asimismo observador de las condiciones de los barcos y de posibles anomalías; siendo una profesión bastante desconocida, su labor es esencial y reconocida en el ámbito de nuestros puertos.

De ahí que todos nos felicitemos de la culminación de esta proposición de ley de creación del colegio oficial de prácticos, aunque a tenor de las enmiendas presentadas y de las intervenciones de los portavoces parlamentarios de la Comisión de Infraestructuras del Senado haya discrepancias de fondo relacionadas con la voluntariedad y con el carácter obligatorio de la pertenencia al colegio para todos los prácticos. Esto no impedirá que haya un respaldo unánime a esta proposición y al fin, en cuanto supere el trámite en esta Cámara alta y posiblemente el trámite del Congreso, el practicaje español pueda contar con su colegio oficial.

En efecto, si bien han sido presentadas dos enmiendas por el Grupo Parlamentario Socialista, cabe subrayar que la propuesta final de esta proposición de ley impulsada por el Partido Popular va a contar con el respaldo unánime de la Cámara, tal y como se produjo en la votación de la Comisión de Infraestructuras celebrada a principios del mes de octubre.

En relación con las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista es conveniente reiterar que nuestro Grupo discrepa de la voluntariedad en la colegiación de los prácticos. Nosotros defendemos la obligatoriedad de pertenecer al colegio oficial para todos aquellos que quieran ejercer esta profesión. Es más, consideramos que es precisamente esta obligatoriedad lo que dará auténtico valor y un gran peso al colegio oficial de prácticos de puerto; esto es lo que va a distinguirlo de una mera asociación y, por eso, manifestamos ante el Pleno los mismos motivos que nos llevaron a rechazar en comisión estas dos enmiendas que también en este acto acaba de defender el senador Ayllón Oliva, de ahí que al hablar de las interpretaciones constitucionales y frente a la sentencia 330/1994, relativa a la colegiación voluntaria obligatoria que esgrime el Grupo Parlamentario Socialista, mi Grupo contrapone otra sentencia

del alto tribunal más reciente, la 194/1998, que concluye que la obligatoriedad de la colegiación como requisito exigido por la ley para el ejercicio de la profesión no constituye una vulneración de derecho y del principio de libertad asociativa, activa o pasiva, ni tampoco un obstáculo para la elección profesional, dada la habilitación concedida al legislador por el artículo 36.

Es conveniente indicar que esta afirmación fue realizada no sin antes recordar que los colegios profesionales constituyen una típica especie de corporación, reconocida por el Estado, dirigida no sólo a la consecución de fines estrictamente privados, lo que podría conseguirse con la simple asociación, sin esencialmente a garantizar que el ejercicio de la profesión, que constituye un servicio al común, se ajuste a las normas o reglas que aseguren tanto la eficacia como la eventual responsabilidad en tal ejercicio que, por otra parte, ya garantizaba el Estado con la expedición del título habilitante.

Según el criterio del Grupo Parlamentario Popular, la colegiación obligatoria se justifica por la atención a los intereses del practicante y por constituir una garantía de intereses públicos de extraordinaria importancia, singularmente en una materia tan relevante como es la seguridad, algo que los más de 2.000 prácticos españoles tienen como absoluta prioridad y que responde a la disciplina profesional en relación con el cumplimiento por todos ellos de las normas deontológicas, administrativas, sanciones penales, recursos procesales, etcétera.

Esto es, en nuestra opinión, lo que distinguirá al futuro colegio oficial de una asociación voluntaria de intereses específicos. Aquí entran en juego intereses públicos de excepcional importancia para los 54 puertos españoles, para su seguridad y, en definitiva, para toda la sociedad. Precisamente la seguridad de todas nuestras infraestructuras, no solamente las portuarias, sino también las viarias, ferroviarias y aeroportuarias, es uno de los grandes objetivos del propio Ministerio de Fomento, como manifestó en esta tribuna su titular, Francisco Álvarez-Cascos, y es objetivo también de la ponencia constituida en el Senado a principios del año 2001.

En el Grupo Parlamentario Popular consideramos que la colegiación obligatoria es un valor añadido a la defensa de los legítimos intereses corporativos y se constituye en un instrumento para la defensa de fines de indudable interés público. La colegiación acredita el compromiso en los principios del practicante portuario e implica a todos los profesionales por igual, sin ninguna excepción. Creemos que sería un contrasentido la existencia de una profesión colegiada que no obligue a colegiarse. De ser así, entraríamos en la equiparación y en la concepción de los colegios oficiales como simples asociaciones.

Es muy interesante al respecto releer en el «Diario de Sesiones» del Senado las intervenciones de los senadores que, en el verano de 1978, debatieron el texto constitucional, y concretamente los aspectos referidos a la colegiación. Su conclusión final fue excluir a los colegios profesionales del artículo en el que estaban, junto con los sindicatos y las asociaciones empresariales. De esa forma, propugnaron la colegiación como única manera de asegurar

eficazmente la deontología y como un principio para el ejercicio de determinadas profesiones.

Finalizo, señor Presidente, diciendo que, en consecuencia, el criterio de nuestro grupo es desfavorable a las dos enmiendas que ha defendido el senador Ayllón Oliva. Consideramos que la Constitución únicamente encomienda a la ley la regulación de las peculiaridades y características propias de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. En la actualidad, dicha ley, tratándose de un colegio nacional, es la ley 2/1974, de Colegios Profesionales, que en su artículo 3.2 establece el principio de colegiación obligatoria. En todo caso, y como decía al comienzo de mi intervención, lo más importante, con independencia de esta cuestión, es que los prácticos de puerto van a tener su propio colegio profesional, y eso, siendo una magnífica noticia para ellos, es también una magnífica noticia para toda la sociedad, que verá impulsada, más aún si cabe, la seguridad, la operatividad y la funcionalidad de nuestros puertos, que avanzan firmes hacia la modernización y el desarrollo que demandan los tiempos.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

¿Turno de portavoces?

En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora De Boneta.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.

Voy a intervenir muy brevemente para manifestar el apoyo del Grupo Parlamentario Mixto y de esta senadora de Eusko Alkartasuna a la creación del colegio profesional de prácticos de puerto, así como nuestro apoyo por una cuestión muy elemental, y es que consideramos una cuestión de principio para la existencia de colegios oficiales el deseo de las personas que ejercen determinada profesión de constituirse en esos colegios profesionales, tanto como una cobertura para el ejercicio de su profesión como para una garantía para los destinatarios de su ejercicio.

En este caso, ante una profesión tan ligada a las actividades de mi país, al País Vasco, como ésta, tan ligada al mar, debo decir que con todo gusto vamos a apoyar esta proposición de ley a la que no hemos presentado ninguna enmienda.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora De Boneta.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Froilán Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ DÍAZ: Gracias, señor Presidente.

Intervendré muy brevemente para fijar nuestra posición en el sentido del propio dictamen de la comisión, cuyo debate, aparte de enriquecer, fue de amplio consenso. Incluso alguna propuesta no ha llegado a este Pleno por el acuerdo que allí se consiguió.

Reitero nuestro apoyo y manifiesto nuestra comprensión ante las reticencias del Grupo Parlamentario Socialista y sus enmiendas porque este debate se ha suscitado en numerosos colegios profesionales. Nosotros creemos que esas reticencias y situaciones específicas de otro tipo de profesiones sobre todo se ha suscitado en el debate de la colegiación obligatoria de las profesiones sanitarias, y pensamos que no es de aplicación al caso del colegio de prácticos de puerto y, en consecuencia, vamos a votar el dictamen de la Comisión tal y como se aprobó por la misma, manifestando nuestro apoyo a dicha ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Froilán Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Gatzagaetxebarría.

El señor GATZAGAETXEBARRÍA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.

Nuestro Grupo Parlamentario va a apoyar esta proposición de ley, e inicialmente quería dar la bienvenida al señor Martín-Bauzá, antiguo conocedor, buen compañero y relaciones públicas con nuestro Grupo Parlamentario.

Me gustaría hacer cuatro consideraciones. En primer lugar, el ámbito en el que estamos a través de una proposición de ley estatal creando un colegio de ámbito estatal. Si vemos la Ley de colegios profesionales, la de 1974, y la Ley del proceso autonómico, surge una duda conceptual importante, y es hasta dónde las Cortes pueden elaborar una normativa legislativa estatal cuando la Ley del proceso autonómico está hablando de que las Cortes dictarán normativas en materia de colegios profesionales en relación con consejos superiores o consejos generales. Hay una discrepancia doctrinal sobre este asunto, porque la cuestión tiene su importancia en la medida en que si es un colegio único y de ámbito estatal se traslada la competencia a las Cortes o dudamos de ese traslado de la competencia, porque hay algún sector que también duda de esa competencia en la medida en que la Ley del proceso autonómico, la antigua LOAPA —convertida en LPA— decía que la configuración del artículo 36 de la Constitución, de la reserva legal de creación de colegios por ley se haría por leyes autonómicas. Existe ese planteamiento doctrinal, sin perjuicio de que, siendo un colegio único, pueda inspirarse también en la Ley de 1974 y que sea una ley estatal.

Pero queríamos hacer una primera consideración en el sentido de que la Ley del proceso autonómico no prevé ese mecanismo. Simplemente habla de colegios territoriales y consejos superiores y generales, los primeros por ley autonómica y los segundos por ley estatal, pero admitida la posibilidad de la constitucionalidad del texto legal hay una discrepancia entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular cuando apelan a diferentes sentencias del Tribunal Constitucional. El tema de la colegiación obligatoria es de política legislativa, es una cuestión en la que tiene que optar el legislador, y las sentencias que ustedes han dicho, señores Ay-

llón y Martínez, en nada se contradicen. Van en la misma línea argumental y atribuyen a las Cortes Generales, al legislador, en definitiva, a la potestad legislativa, la determinación y la apreciación de si existe una justificación objetiva, razonable y constatada para exigir una colegiación obligatoria o no en función del interés general. Y las Cortes, en este caso, como ustedes tienen la mayoría, van a apreciar que hay una suficiente fundamentación para exigir una adscripción forzosa, pero las Cortes, en otros proyectos legislativos —y entiéndanse y ustedes lo han aprobado en el tema de los corredores de seguros— crearon consejos de colegios estatales sin adscripción obligatoria. Por tanto, es una cuestión de política legislativa. Es perfectamente constitucional el modelo que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista, que nosotros vamos a apoyar, y también el que plantea usted, pero nosotros coincidimos más con el del Grupo Parlamentario Socialista. Pero como ustedes tienen la mayoría en esta Cámara —creo que la constatación de esa justificación de la adscripción forzosa usted la ha expresado en la protección y en el carácter tuitivo hacia la seguridad marítima—, podemos dar por válida esa cuestión ante una posible impugnación.

Segunda consideración, señor Presidente. El tema del practicaje tiene un carácter dual. ¿De qué estamos hablando? De una operación náutica dirigida a otorgar seguridad marítima al acceso y a la entrada en los puertos españoles fundamentalmente. Es una operación náutica configurada por las Cortes como un servicio de carácter doble o dual. Es decir, es un servicio portuario, primera cuestión que hemos de tener en cuenta. ¿Servicio portuario de las autoridades portuarias del Estado, o de las autoridades portuarias de las comunidades autónomas? Porque estas autoridades de las comunidades autónomas o las del Estado —depende de en qué puertos se preste el servicio— son las que regulan las condiciones de prestación del mismo, las tarifas, el ejercicio de la potestad inspectora y el ejercicio de la potestad sancionadora. Pero el segundo carácter del practicaje es que es un servicio, no determinado por la autoridad portuaria sino por la autoridad marítima, que es la que determina en qué puertos se presta, qué características y qué condiciones profesionales y académicas deben tener las personas que han de prestar el servicio de practicaje y en qué puertos se ha de prestar. Por tanto, tiene un doble carácter.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Gatzagaetxebarría, le ruego concluya, por favor.

El señor GATZAGAETXEBARRÍA BASTIDA: Concluyo enseguida, señor Presidente. Pero, señor Presidente, llevo sólo tres o cuatro minutos de intervención. El turno de portavoces es de diez minutos. Le pido que atienda bien al tiempo porque tiene usted como práctica interrumpirme. (*Rumores.*) El turno de portavoces son diez minutos y en este momento llevo cuatro minutos, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Lleva exactamente cinco minutos y veinte segundos.

El señor GATZAGAETXEBARRÍA BASTIDA: Los turnos de portavoces son diez minutos, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): El turno de portavoces se ha reducido a cinco minutos dada la...

El señor GATZAGAETXEBARRÍA BASTIDA: Usted lo reduce cuando le da gana. (*Fuertes rumores.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Perdone, señor Gatzagaetxebarría. (*Rumores.*) Es facultad de la Presidencia establecer los tiempos en función de los debates según va correspondiendo.

El señor GATZAGAETXEBARRÍA BASTIDA: El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha hablado mucho más tiempo.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señor Gatzagaetxebarría, le ruego vaya terminando, por favor, señoría.

El señor GATZAGAETXEBARRÍA BASTIDA: Le ruego que tenga más benevolencia incluso para posteriores ocasiones. (*Fuertes rumores.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Continúe, señoría, por favor.

El señor GATZAGAETXEBARRÍA BASTIDA: Decía que tenía el carácter dual respecto de sus funciones dependientes de la autoridad portuaria y de la autoridad marítima.

Tercera cuestión a la que quería hacer referencia. Hay un aspecto esencial para entender el practicaje, y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de junio de 1998, determina y admite que los Estados puedan disciplinar la actividad del practicaje como un servicio exclusivo de los poderes públicos y de prestación obligatoria. Por tanto, eso es lo que en este momento da amparo fundamentalmente a la regulación del practicaje en España.

Y entro en la última consideración, señor Presidente. En este momento el Parlamento Europeo y la Comisión, mediante el procedimiento de codecisión, están debatiendo y tramitando la directiva de liberalización de los servicios portuarios. Y ahí se ha producido un cambio sustancial. Mientras se iba a una modificación profundísima del esquema que el practicaje tenía en la Ley de Puertos, se va a admitir ese carácter obligatorio y de afianzamiento de la seguridad marítima que tiene el practicaje en España. Por tanto, nuestro Grupo Parlamentario, en el ámbito de estas cuatro consideraciones, está de acuerdo con el planteamiento que hace el Grupo Parlamentario Popular, pero entiende también la filosofía, y por tanto no hay discrepancia en cuanto al uso de la diferente jurisprudencia que han hecho. Entendemos que es más acorde con los principios que inspiran nuestro que-hacer político el planteamiento que realiza el Grupo Par-

lamentario Socialista, y por tanto vamos a apoyar sus enmiendas sin perjuicio de la aprobación positiva del texto definitivo de la proposición de ley.

Nada más y muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Bonet.

El señor BONET I REVÉS: Muchas gracias, señor Presidente.

Sólo quiero anunciar que, independientemente de la suerte que puedan correr las enmiendas a las que daremos nuestro apoyo, también se lo daremos a esta ley.

Muchas gracias, señor Presidente. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Beguer.

El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestro grupo, al igual que ha hecho en la creación de otros colegios profesionales, da su apoyo total a la ley.

En la mayoría de los casos de creación de otros colegios, por lo menos en los que se han formulado recientemente en los últimos años, no hemos presentado enmiendas. Nos parece, en general y concretamente en este caso, correcto que la colegiación sea obligatoria. Entendemos que, por la profesionalidad que se requiere en el caso de los prácticos de puerto, las características de la profesión y el número de profesionales, es más acertado que la colegiación sea obligatoria.

Nos congratulamos de que se cree este colegio que hoy en día ya consideramos necesario y que agrupará a este importante colectivo. Por tanto, vamos a dar nuestro apoyo al proyecto de ley y el voto en contra a las enmiendas presentadas.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Beguer.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Ayllón.

El señor AYLLÓN OLIVA: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo brevemente para agradecer a los portavoces de los grupos que han expresado su apoyo a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, especialmente la argumentación del portavoz del Partido Nacionalista Vasco, porque, en efecto, nosotros no hemos querido contraponer la sentencia del 94 del Constitucional a la sentencia del 98 del Constitucional. La propia Constitución, en su artículo 36, establece que son las Cortes las que deben decidir, a través del proyecto de ley, qué hacer, si colegiar obligatoriamente o no.

Entendemos, también, que la ley citada por el portavoz del Partido Popular, la Ley 2/74, que establece la colegiación obligatoria, ha quedado superada de hecho por el artículo 36 de la propia Constitución y, por lo tanto, no debe ser un argumento válido en este momento.

De todas formas estas dos enmiendas no serán obstáculo para que nuestro grupo apoye el dictamen de la Comisión, porque este proyecto es necesario para dotar a los profesionales de un instrumento que garantice el ejercicio de sus derechos como colectivo y porque la Administración necesita contar con una entidad representativa de un colectivo esencial para la seguridad de los bienes, de los buques, de los puertos y de las personas.

Por eso, votaremos a favor del dictamen, aunque no estemos de acuerdo con la colegiación obligatoria. Lo repetimos porque entendemos que ya es de titularidad pública y, por ende, ya está asegurada por la propia Administración.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Ayllón.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el senador Martínez Oblanca tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor Presidente.

Está todo dicho y creo que no cabe reiterar una argumentación que responde, tal y como señalaba el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, a una concepción diferenciada de lo que debe ser un colegio oficial.

Nosotros creemos que la obligatoriedad de la colegiación, en este caso, va a revalorizar muchísimo el ejercicio de la profesión del practicante portuario, va a permitir que estos capitanes de la marina mercante, grandes especialistas y grandes de la seguridad portuaria, puedan defender, más aún si cabe, sus intereses corporativos y, sobre todo, va a preservar los grandes fines relacionados con el interés público. Quede claro que cuando hablamos de puertos del Estado nos referimos a un interés público de extraordinaria

importancia: la disciplina profesional, la deontología y el cumplimiento por todos los colegiados de las normas deontológicas.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Martínez Oblanca.

Finalizado el debate, llamamos a votación. *(Pausa.)*

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señorías, vamos a votar la proposición de ley de creación del colegio de prácticos de puerto.

En primer lugar, votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, números 1 y 2.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 193; a favor, 67; en contra, 126.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.

A continuación votamos los artículos 1 a 3, disposiciones transitorias primera y segunda, disposiciones finales primera y segunda y la exposición de motivos, es decir, todo el dictamen en un solo bloque.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 191; en contra, uno; abstenciones, dos.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado y, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve y media.

Eran las veintidós horas y cuarenta minutos.